

Ciudad sin fronteras

Multilocalidad urbano rural en Bolivia

Ciudad sin fronteras

Multilocalidad urbano rural en Bolivia

Nelson Antequera Durán

Cristina Cielo

Editores

RITU BOLIVIA

Seminario Permanente de Reflexión Interdisciplinar en Temas Urbanos



Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz



CIDES - UMSA



Programa de Investigación
Estratégica en Bolivia



Fondo Editorial Abigail Hodgen División de Ciencias Sociales
Universidad de California, Berkeley

La Paz - 2011

Esta publicación fue realizada con el apoyo de RITU Bolivia (Seminario Permanente de Reflexión Interdisciplinar en Temas Urbanos), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, Oxfam GB y Abigail Reynolds Hodgen Publication Fund, Universidad de California, Berkeley. Los datos y opiniones de los artículos de esta publicación son de entera responsabilidad de sus autores.

Antequera Durán, Nelson; Cielo, Cristina

Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia / Nelson Antequera Durán; Cristina Cielo (editores). -- La Paz: RITU Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, CIDES-UMSA, Fundación PIEB, Oxfam GB y Universidad de California Berkeley, 2011.

344 p.; grafs.; cuads.; maps. : 23 cm. -- (Investigaciones Coeditadas)

D.L. : 4-1-2546-10

ISBN: 978-99954-32-96-6 : Encuadernado

URBANISMO / URBANIZACIÓN / GESTIÓN DEL ESPACIO / CIUDAD / ZONA URBANA / ZONA SUBURBANA / ZONA URBANA DESFAVORECIDA / PISOS ECOLÓGICOS / MIGRACIÓN / MIGRACIÓN RURAL URBANA / DINÁMICA SOCIAL / DINÁMICA ECONÓMICA / PROPIEDAD DE LA TIERRA / ECOLOGÍA / DESARROLLO LOCAL / INTERCULTURALIDAD / MODERNIDAD / INDIGENISMO / DEMOCRACIA / POLÍTICA / ASENTAMIENTOS URBANOS / ESTUDIOS URBANOS / MOVILIDAD / POLÍTICAS PÚBLICAS /

1. título 2. serie

D.R. © Seminario Permanente de Reflexión Interdisciplinar en Temas Urbanos (RITU), enero 2011

© Cristina Cielo

© Nelson Antequera Durán

Teléfono: 2798445 - 71466608

Correo electrónico: ciudadesmultilocales@gmail.com;

nelsonantequera@yahoo.com;

mccielo@berkeley.edu

Casilla postal: 2706

La Paz, Bolivia

D.R. © Fundación PIEB

Edificio Fortaleza, Piso 6, Oficina 601

Avenida Arce 2799, esquina calle Cordero

Teléfonos: 2432582 – 2431866

Fax: 2435235

Correo electrónico: fundacion@pieb.org

Servicio Informativo: www.pieb.org

Casilla postal: 12668

La Paz - Bolivia

Edición: Mónica Navia

Diseño gráfico de cubierta: PIEB

Diagramación: PIEB

Fotografías de portada: PIEB, Flickr

Impresión:

Impreso en Bolivia

Printed in Bolivia

Índice

PRESENTACIÓN	7
 INTRODUCCIÓN La multilocalidad urbano rural en Bolivia <i>Cristina Cielo y Francisco Vásquez</i>	 11
 PRIMERA PARTE URBANIZACIÓN EN BOLIVIA. MOVILIDAD Y MULTILocalIDAD	 21
 Itinerarios urbanos. Continuidades y rupturas urbano rurales <i>Nelson Antequera Durán</i>	 23
 La localización de las ciudades de Bolivia y el crecimiento acelerado de la aglomeración urbana paceña <i>Javier Nuñez-Villalba</i>	 41
 El “archipiélago vertical” andino. El control vertical de pisos ecológicos y dinámicas contemporáneas de migración <i>Kaylen Jorgensen</i>	 71
 De la contradicción al <i>continuum</i> urbano rural. La urbanización, el legado colonial y la cultura de la democracia <i>Charles Dolph</i>	 93
 SEGUNDA PARTE DELIMITACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO.....	 109
 Función social de la propiedad y ciudadanía en la frontera urbana-rural <i>Amonab Achi.....</i>	 111
 Ecología de barrio miseria en la ciudad de La Paz <i>Víctor Hugo Perales Miranda.....</i>	 133
 Caranavi: diferenciación social y génesis urbana en la colonización campesina del Alto Beni <i>Alberto A. Zalles.....</i>	 147

La acción colectiva territorial de la Media Luna.
Entrela reacción sucrense y la ruralización del voto
Bruno Fornillo..... 173

TERCERA PARTE

RUPTURAS Y CONTINUIDADES ENTRE LO RURAL Y LO URBANO ... 197

En las puertas de la gran metrópoli. Desarrollo local
y relaciones interculturales rural-urbanas en Viacha
Fernando Galindo..... 199

Desplazamientos urbanos. Modernidad e indigenismo
de las mujeres del comercio informal en Cochabamba
Isabel Scarborough 225

Los espacios múltiples de una comunidad periurbana.
Migraciones, pluriactividad y desarrollo en Cochabamba
Acción Andina-Bolivia..... 243

Ciudadanía política callejera. Articulación de múltiples
espacios y tiempos políticos en La Ceja de El Alto
Juan Manuel Arbona 261

CUARTA PARTE

RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 287

La transformación de Medellín como laboratorio urbano para la ciudad
boliviana. Experiencias y desafíos para Santa Cruz de la Sierra
Francisco Alejandro Vásquez Rodríguez 289

La continuidad urbano rural y el uso de suelo urbano en Tarija
Verónica Aranda Montecinos..... 315

AUTORES 339

Presentación

En el mundo rural andino, en el momento del *apthapi* se ponen en común los alimentos en una gran mesa colectiva; es un momento en el que no solo comemos juntos, sino que es un momento de convivencia, de fraternización, de intercambio, de hacer comunidad. De modo que el *apthapi* no solo nutre el cuerpo, sino también el *ajayu* propio y comunitario. Este libro es una especie de *apthapi* de conocimientos en torno a una preocupación común: el estudio de la realidad urbana de Bolivia y de sus estrechas relaciones con el campo. Es un *apthapi* de esfuerzos, de experiencias, de reflexiones y de preocupaciones de todos quienes hicieron posible esta publicación.

Este esfuerzo nació en principio como un espacio de encuentro en el Seminario Permanente de Reflexión Interdisciplinar en Temas Urbanos (RITU). Éste fue un primer intento de compartir investigaciones y experiencias de conocimiento y discusión sobre la temática urbana en nuestro país. En las sesiones del RITU, llevadas a cabo en Cochabamba con el apoyo de Hábitat para la Humanidad y en particular de Alejandra Domínguez, fuimos descubriendo que el tema urbano en nuestro país se había constituido en prioritario y particularmente complejo. Pero al mismo tiempo, la investigación al respecto es todavía insuficiente. Muchas investigaciones han sido realizadas desde contextos académicos foráneos o como esfuerzos puntuales de investigadores nacionales y extranjeros; pero con demasiada frecuencia, sus resultados no son suficientemente difundidos. Consideramos que este libro puede llevar algunas de estas investigaciones al público y ser un aporte que permita abrir la discusión sobre el tema urbano desde distintas disciplinas y, en particular, desde las ciencias sociales.

Otro aspecto que fuimos discutiendo en RITU fue que el crecimiento urbano en Bolivia había sido acelerado y caótico debido a que se había

dado por la masiva migración del campo o de otros centros urbanos hacia las grandes metrópolis del eje central de nuestro país. Este hecho nos llevó a considerar que las ciudades en Bolivia tienen una dinámica social y económica marcada por la estrecha y estructural relación entre las comunidades rurales, los nuevos espacios de colonización como el Chapare o los Yungas y los asentamientos urbanos y, en particular, los asentamientos periurbanos. De ahí que el enfoque central de la convocatoria para esta publicación ha sido precisamente el de la multilocalidad como una característica esencial de los asentamientos urbanos. No podemos entender las ciudades y sus habitantes sin entender este constante flujo de personas, productos, servicios, capitales, etcétera entre el área urbana y rural. Los trabajos que aquí presentamos tienen precisamente este enfoque temático, en mayor o menor grado.

Queremos resaltar en primer lugar el esfuerzo y compromiso generoso de todos los autores que respondieron a la convocatoria y aportaron con sus artículos a este diálogo: Javier Nuñez Villalba, Kaylen Jorgensen, Charles Dolph, Amonah Achi, Víctor Hugo Perales, Alberto A. Zalles, Bruno Fornillo, Fernando Galindo, Isabel Scarborough, Equipo de investigación “Migración Internacional y Desarrollo Local” (Acción Andina), Juan Manuel Arbona, Francisco Vásquez y Verónica Aranda Montecinos. Queremos expresar nuestro reconocimiento a las instituciones y personas que apoyaron este emprendimiento. La presente publicación no hubiera sido posible sin el financiamiento del Fondo de Publicaciones Abigail Reynolds Hodgen de la Universidad de California Berkeley, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) y Oxfam GB. Agradecemos en particular el apoyo del señor Alcalde de La Paz, Dr. Luis Revilla H. y de don Pedro Susz, Director de Gobernabilidad del GAMLP. Nuestra gratitud también para la directora del CIDES UMSA, la doctora Ivone Farah, quien ha mostrado particular interés en el proyecto, para Simon Ticehurst, Director General de Oxfam GB y Patricia Flores, Coordinadora de Equidad Urbana y Género de Oxfam GB, por su apoyo a esta publicación. Agradecemos a la Fundación Mellon para la Sociología Latinoamericana, el Taller de Teoría y Crítica de Johannesburgo (JWTC) y el Departamento de Sociología de la Universidad de California Berkeley y en particular a Laura Enríquez, por el apoyo e intercambio académico para el desarrollo de nuestros análisis sobre temas urbanos y latinoamericanos. Nuestro agradecimiento también para el Ing. Alfredo

Durán, coordinador del Centro AGUA, quien nos brindó el respaldo institucional para el lanzamiento de la convocatoria y la realización del libro.

Ponemos a su disposición lo que cada uno de los autores pudo aportar al *apthapi*, para que cada uno de los lectores “se vaya recogiendo” lo que le sirva y le guste. Nuestra intención ha sido abrir el diálogo sobre las ciudades de Bolivia y sus habitantes. Esperamos lograrlo a partir de las críticas, comentarios y debates que este modesto aporte pueda generar. Provecho.

Cristina Cielo y Nelson Antequera Durán
Durban (Sudáfrica) y La Paz (Bolivia), julio de 2010

Introducción

La multilocalidad urbano rural en Bolivia

Cristina Cielo y Francisco Vásquez

Desde hace más de dos décadas, Bolivia está viviendo un proceso de rápida y creciente urbanización. El vertiginoso crecimiento de las ciudades y de la población urbana urge la implementación de políticas económicas y sociales adecuadas a esta realidad. Este fenómeno se explica, en gran medida, por el desplazamiento estacional o definitivo de personas y familias provenientes de las áreas rurales, tanto como la migración entre ciudades y a otros países. De este modo, los centros urbanos se caracterizan por una continua y estrecha relación con otros lugares, sobre todo con el campo, con las comunidades de origen y con los lugares de paso (como sucede con el Chapare, para muchas familias en Cochabamba).

Las ciudades bolivianas, entonces, se caracterizan por su multilocalidad; es decir, por los múltiples e importantes enlaces que residentes urbanos mantienen con familias y comunidades en otros lugares. El concepto de lo multilocal surge de estudios rurales recientes que describen nuevas formas de economía y organización social rural. La disminución de ingresos agrícolas les ha obligado a familias campesinas a involucrarse en múltiples actividades alternativas. La multilocalidad es un intento de mantener alguna medida de “capital” (tanto económico como social) en diferentes ámbitos en los cuales sus posiciones están sumamente inseguras.

Las dinámicas demográficas en Bolivia muestran un desplazamiento de la pobreza a las ciudades, puesto que los expulsados de sus lugares de origen van a poblar los precarios asentamientos periurbanos. Esta colección de estudios supone que para mejorar la calidad de vida de las poblaciones marginadas, las características de las ciudades han de entenderse en sus propios términos. Si bien las áreas marginales urbanas se han ido estableciendo en el contexto de inequidades arraigadas,

no se las puede definir solamente por sus carencias, tal como se suele hacer en estudios y políticas urbanas. Lo multilocal es un rasgo fundamental de las ciudades bolivianas y sus zonas marginales.

La compleja realidad urbana de nuestro país es un desafío y una tarea pendiente para la investigación social. La discusión teórica sobre la urbanización suele suponer la centralidad de la ciudad y la importancia de su impacto en sus periferias. Tal acercamiento reproduce modelos desarrollistas de centro-periferia que reinscriben inequidades en vez de enfrentarlas. Recientemente se ha empezado a reconocer la importancia de las redes que componen una ciudad. El caso de las ciudades bolivianas puede contribuir con importantes elementos a esta última línea de análisis, puesto que pobladores de ciudades bolivianas mantienen múltiples e importantes enlaces con familias y comunidades en otras zonas urbanas, en áreas rurales y más allá de las fronteras nacionales.

El objetivo de esta colección de investigaciones es indagar en los contornos e implicaciones de las múltiples localidades que componen la ciudad, es contribuir a una comprensión mejor de las realidades urbanas en el país. Además de abrir un espacio de diálogo sobre temas urbanos en el país, también busca proveer una orientación empírica y teórica para la política urbana. Asimismo, esta colección de investigaciones apunta a la exploración de una contribución particularmente boliviana a los estudios urbanos, de tal manera que pueda brindar pautas para la política urbana local y regional.

Lo urbano no tiene quien le escriba en la ciudad boliviana

Si se mira la producción académica en torno al urbanismo o al estudio de las ciudades en Bolivia, la situación es preocupante, ya que son muy escasos los análisis sobre las principales problemáticas en las urbes, y menos las investigaciones respecto a cómo darles solución según la compleja realidad social del país. Tal situación no solo atenta contra la producción de conocimiento en un campo más que dinámico y que sin duda requiere una constante actualización, sino que también es causa de la imposibilidad de elaborar e implementar políticas públicas urbano territoriales. Asimismo, nos imposibilita concebir el futuro de las ciudades bolivianas en tiempos de “glocalización” (término que hace referencia a la relación intrínseca entre lo global y lo local, relación que caracteriza nuestro tiempo).

Los estudios urbanos son una suerte de náufragos en medio del océano rural boliviano, lo cual es bastante particular, puesto que

en la región latinoamericana la situación es diametralmente distinta, en tanto que predomina lo urbano. En Bolivia hay todavía una importante referencia a la tierra rural, producto del alto porcentaje de población indígena y campesina que históricamente ha existido, aun cuando en la actualidad se desenvuelve en contextos urbanos.

El caso de la ciudad boliviana¹, por tanto, muestra otros procesos de ocupación, otra manera de comprender cómo la urbanización ha ido ganando terreno, sin olvidar que el país sigue siendo predominantemente indígena, por más que quienes se identifican como tales habiten espacios urbanos y ocupen el entorno de la ciudad configurando importantes espacios periurbanos. Las principales aglomeraciones urbanas presentan procesos de acelerada expansión sobre territorios rurales que cada vez más cobijan imaginarios urbanos para sus habitantes; son inmigrantes que mantienen una fuerte referencia a lo rural, pero habitando espacios periurbanos. De ahí el denominativo de población rural metropolitana.

En ese sentido, el estudio de las ciudades en Bolivia requiere, como condición ineludible, hacer referencia al mundo rural, pero entendiendo que éste ya no es solo el residuo de lo que aún no es urbano, tal como se lo ha entendido hasta ahora, y que a su vez lo urbano ya no se encuentra únicamente en las ciudades. De hecho, según Barros (1999), un análisis más detallado muestra que a menudo resulta sumamente difícil caracterizar inequívocamente a un área como urbana o rural, especialmente si en esa área predomina la población rural, pero que se encuentra rodeando a una gran metrópoli, con una clara influencia de ésta.

Las tres metrópolis bolivianas responden a tal patrón, a un *continuum* entre lo urbano y lo rural. Si hablamos de lo que pasa en La Paz-El Alto, Cochabamba o Santa Cruz, no podemos tratar a lo rural y a lo urbano de manera separada, puesto que se trata de una escisión que a todas luces es errónea e incluso ingenua, ya que “la distinción rural-urbana, no podemos entenderla como dos polos constitutivos de realidades diferentes y opuestas. En la actualidad, lo rural y lo urbano no son comportamientos estancos ni constituyen dinámicas independientes, sino una relación recíproca y bidireccional, en la cual los procesos de distinción se han alterado o coincidido con los de interpenetración e influencia mutua” (Rodríguez y Salas 2004).

1 Nos referimos a la ciudad boliviana como una tipología, entendiendo que existen profundas diferencias entre las metrópolis, las ciudades intermedias y las pequeñas. Para este ensayo, la ciudad boliviana se refiere a las tres principales aglomeraciones urbanas: La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

En este escenario de un sostenido aumento de zonas periurbanas impregnadas de marginalidad, de procesos emergentes de urbanización que no se sostienen en investigaciones ni ocupan un lugar de importancia entre quienes se dedican a la planeación de la ciudad boliviana y, en medio de una migración de población que plantea muchos desafíos para los territorios receptores, la situación de los temas urbanos requiere un mayor nivel de protagonismo y la necesidad de estudiar nuevos enfoques acordes a las problemáticas específicas, aunque no exclusivas, de un país tan complejo como Bolivia.

Se trata de que alguien le escriba a lo urbano, entendiendo por eso que el conocimiento académico aterrice y se ponga a disposición de quienes toman decisiones y gestionan la ciudad desde el aparato estatal buscando una sintonía entre los proyectos e intervenciones urbanas, e investigaciones críticas y analíticas sobre los principales temas y problemáticas de ciudad. Es así que entre los principales temas que reclaman una reflexión en torno a las principales urbes bolivianas encontramos procesos acelerados de urbanización y la configuración de espacios periurbanos en el entorno de ellas.

Urgen nuevas formas de entender lo urbano que no reinscriben el poder de la ciudad con paradigmas del centro y la periferia. Para entender la ciudad contemporánea y sus inequidades, debemos empezar con el reconocimiento de que las transformaciones nacionales políticas y económicas son también la reestructuración de las experiencias de la vida urbana, sus dimensiones más básicas del tiempo, el espacio y la sociabilidad. Enfoques en las nuevas formas de actividad urbana se reflejan en la literatura actual (tanto en lo técnico-urbano como en lo político-social) sobre lo periurbano. Escribete Arteaga que, por ser la parte más inestable con rápidos cambios de usos de suelo, la periferia tiene una función específica de dar lugar a “nuevos trazados, nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, nuevas formas de planificación, nuevas tipologías, nuevos conflictos sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad urbana” (2005: 103). Esta colección de artículos busca describir algunos de los nuevos trazados que constituyen la ciudad multilocal de hoy.

Plan del libro

Para explorar las dinámicas mencionadas, el libro se divide en cuatro partes, cuyos enfoques son los siguientes: (1) el contexto y los antecedentes de la urbanización y de la movilidad en Bolivia; (2) las

instituciones y dinámicas sociales y políticas que delimitan el territorio urbano; (3) las prácticas actuales que retan la institucionalización de la frontera urbana-rural; y (4) algunas implicaciones de la multilocalidad para las políticas públicas urbanas y estatales. Los autores se acercan a estas temáticas con marcos metodológicos y teóricos variados, estudiando ciudades distintas a lo largo de Bolivia. Esperamos que esta conversación multidisciplinaria pueda contribuir a una mejor comprensión de las ciudades bolivianas y contribuir con una perspectiva boliviana a los estudios urbanos.

Los artículos de la primera parte nos dan un panorama de la urbanización en Bolivia, enfatizando el rol de la movilidad en la producción de las ciudades. En esta primera parte, se describen los contextos empíricos e históricos de las múltiples localidades de lo urbano en Bolivia. Para empezar, Nelson Antequera identifica el contexto de esta movilidad, trazando las dinámicas migratorias que han constituido las áreas urbanas y periurbanas bolivianas. Esta primera indagación en la urbanización boliviana muestra empíricamente la necesidad de atender a la realidad de una gran parte de la población urbana, cuyos vínculos productivos y sociales —y la identificación misma— no se limitan al espacio urbano. A partir del análisis histórico de la urbanización contemporánea, Javier Nuñez-Villalba nota la importancia de los recursos naturales en la localización de ciudades bolivianas. Muestra al mismo tiempo que La Paz, sin embargo, creció por otras razones, vinculadas a sus redes productivas y sociales entre áreas de extracción y áreas de exportación. Enfatizando el rol de la migración y el establecimiento de la ciudad colindante de El Alto, Nuñez-Villalba nos da luces sobre las causas de la hegemonía nacional de la ciudad paceña. Kaylen Jorgensen estudia las implicaciones actuales de la conceptualización antropológica que identificó a la multilocalidad productiva y organizativa como aspecto fundamental de las sociedades andinas. Asimismo examina la teoría del “archipiélago vertical” de John Murra. El autor concluye que esta teoría nos puede ayudar a desestabilizar concepciones occidentales del espacio, caracterizadas por su énfasis en unidades territoriales enmarcadas por fronteras. El trabajo de Murra también da pistas para entender mejor las comunidades dispersas y diaspóricas de Bolivia. Finalmente, con una mirada a largo plazo, Charles Dolph nos da otra perspectiva de las ciudades bolivianas. Su atención al rol de las ciudades en las transformaciones políticas y económicas nacionales desde la colonia hasta el presente muestra los vínculos sociopolíticos entre los espacios urbanos y los espacios regionales

y de la nación. Asimismo, nos ayuda a entender la importancia de la urbanización en la historia boliviana.

Los capítulos de la primera parte del libro identifican (tanto empírica como teóricamente) la producción multilocal de las ciudades bolivianas. Sin embargo, a pesar de los diversos sitios donde se desarrollan las dinámicas urbanas, las concepciones teóricas, políticas y cotidianas sobre la ciudad suelen delimitar su enfoque al territorio unificado dentro de los bordes urbanos o municipales. ¿Cuáles son los mecanismos que nos llevan a concebir a la ciudad como una unidad discreta y cuáles son las implicaciones de esta concepción? Los capítulos de la segunda parte del libro responden a esta pregunta con investigaciones sobre instituciones que incorporan, reinscriben y transforman la frontera urbana-rural.

La primera de las investigaciones de la segunda parte del libro analiza las funciones de la propiedad de tierras en una zona periférica de Cochabamba, donde el espacio rural se encuentra en vías de conversión rápida al uso urbano. Amonah Achi muestra cómo los asentamientos informales utilizan la ambigüedad entre lo urbano y lo rural para reclamar su derecho a la tierra, señalando las implicaciones de estas dinámicas en las formas emergentes de ciudadanía nacional. Paradójicamente, sin embargo, la incorporación de estos colectivos periurbanos en las instituciones formales de regularización debilita la legitimidad de la función social de la propiedad. En el capítulo que sigue, Víctor Hugo Perales identifica las consecuencias graves de no atender a concepciones alternativas del espacio de la ciudad. Las instituciones públicas (incluso las que gestionan el agua) difícilmente reconocen la importancia del manejo integral de las cuencas, en parte, por las fronteras institucionalizadas de la ciudad que se imponen sobre el entorno natural dispersado territorialmente. Perales muestra cómo el manejo no integral de dos microcuencas de la ladera oeste de la ciudad de La Paz produce el *barrio miseria*.

Además de las instituciones públicas para el manejo de tierras y agua, existen múltiples instituciones menos formales que crean y delimitan la ciudad. Dos de éstas son las clases sociales y la política partidaria, objetos de análisis en los dos siguientes capítulos de la segunda parte del libro. Ambas investigaciones tratan de la producción de la ciudad en el contexto de dinámicas regionales. En su capítulo sobre la génesis urbana en la colonización campesina de la región de Caranavi-Alto Beni, Alberto A. Zalles identifica el proceso histórico de la diferenciación y estratificación social en el establecimiento de la ciudad de Caranavi. Su trabajo muestra la relación de estas

dinámicas con la posición de la ciudad en el desarrollo regional. La mirada regional también enmarca el análisis de Bruno Fornillo sobre las dinámicas territoriales y las estrategias político partidarias que se han ido desarrollando a nivel regional y nacional en la política actual boliviana. Enfocándose en el caso de Sucre y su demanda de capitalía, el análisis de Fornillo describe interacciones entre oposiciones antagónicas que reafirman la frontera entre lo urbano y lo rural, sobre todo en el ámbito electoral. Es decir, las dinámicas institucionales —en este caso partidarias— dependen de y reinscriben la diferenciación entre la ciudad y el campo. Los análisis sociopolíticos de Zalles y Fornillo cierran la segunda parte del libro con una demostración clara de la importancia de las dinámicas espaciales en las relaciones sociales y políticas.

La tercera parte del libro trata de las prácticas cotidianas que siguen articulando a los espacios urbanos y a los espacios ajenos a pesar de las delimitaciones institucionalizadas examinadas en la segunda parte. Las investigaciones en esta parte del libro se enfocan particularmente en las redes que son parte integral de la ciudad, aunque estas redes se constituyen por espacios y mundos no-urbanos. En la primera de estas investigaciones, Isabel Scarborough identifica las estrategias sociales, políticas y productivas de las mujeres indígenas que trabajan en el comercio informal en Cochabamba. La autora usa el lente analítico del centro-periferia para describir la marginalización múltiple de estas mujeres por la municipalidad con claras aspiraciones de modernidad. Sin embargo, es en sus desplazamientos geográficos, identitarios y organizativos donde subyace su fuerza política y económica en la ciudad. También considerando relaciones interculturales y productivas rurales-urbanas, Fernando Galindo provee un caso de estudio importante de la ciudad intermedia de Viacha, en La Paz. Usando como eje las iniciativas de desarrollo rural desde la reforma agraria hasta el presente, Galindo identifica los procesos de reapropiación de la población rural de los espacios rurales y urbanos, tanto en el ámbito económico-productivo como en la toma de decisiones políticas.

Asimismo, el autor muestra la importancia de la interfase rural-urbana y de las relaciones entre la ciudad intermedia y la ciudad capital, destacando la imposibilidad de entender al desarrollo urbano sin la consideración de éstas.

En ciudades capitales, la interfase rural-urbana se materializa con claridad concreta en las zonas periurbanas pobladas en gran parte por migrantes recientes a la ciudad. El equipo de investigación

sobre migración y desarrollo de Acción Andina-Bolivia examina las implicaciones de los vínculos importantes que vecinos periurbanos mantienen con lo rural. La investigación muestra cómo los espacios múltiples que fundamentan al barrio contribuyen a la formación de su visión colectiva de desarrollo local y a su manera de incorporar y vivir con la migración internacional. La tercera parte del libro sobre las articulaciones entre lo rural y lo urbano concluye con el trabajo de Juan Manuel Arbona, cuyo enfoque es la ciudadanía callejera que articula no solamente múltiples espacios, sino múltiples historias y tiempos políticos. A partir de su análisis, que entreteje la calle actual de la Ceja en el Alto con la historia política de la nación, Arbona nos recuerda que el presente urbano no solamente se construye en la recreación cotidiana de las memorias y experiencias indígenas y mineras; el dinamismo de El Alto y de la coyuntura política boliviana contemporánea también depende de las posibilidades políticas colectivamente imaginadas hacia el futuro.

La última parte del libro reúne dos capítulos que buscan plasmar las posibilidades de ciudades más incluyentes en políticas públicas urbanas. Todos los capítulos del libro tienen como trasfondo —implícito o explícito— las inequidades que persisten en Bolivia y en sus ciudades. Como conjunto, insisten en la importancia de entender mejor las realidades y contornos de la ciudad para así interactuar con sus dinámicas con cierta claridad. Sin embargo, los dos últimos capítulos van más allá de la ciudad para sugerir algunas herramientas para orientar en la formulación de las políticas públicas en relación con su reconocimiento y con la incorporación de las realidades multilocales de las ciudades actuales.

Francisco Vásquez Rodríguez emplea una metodología comparativa identificando características paralelas de Santa Cruz de la Sierra y de la ciudad de Medellín. La primera de éstas tiene altas tasas de inmigración reciente por el crecimiento económico de las tierras bajas bolivianas y la segunda por el desplazamiento debido a la guerra civil colombiana. Vásquez Rodríguez propone que el enfoque de urbanismo social aplicado en Medellín podría dar pistas para el tratamiento cruceño de las segregaciones y carencias de las poblaciones urbanas marginadas. Desde su experiencia con la planificación a nivel prefectural, Véronica Aranda Montecinos muestra la importancia de la coordinación de las políticas territoriales de diferentes escalas en el departamento de Tarija. Aranda Montecinos enfatiza la categoría de uso de suelo urbano en planes de ordenamiento territorial para el reconocimiento y la integración de la continuidad urbano-rural.

Estos dos últimos trabajos reflejan el propósito de la colección entera de investigaciones y propuestas del libro: promover el diálogo para fomentar análisis más fieles a las realidades urbanas en Bolivia y políticas públicas más adecuadas a estas realidades.

Bibliografía

- Arteaga, Isabel (2005) “De periferia a ciudad consolidada: Estrategias para la transformación de zonas urbanas marginales” en *Revista Bitácora Urbano Territorial*, vol.1, no.9: 98-111.
- Barros, Claudia (1999) “De rural a rururbano: Transformaciones territoriales y construcción de lugares al sudoeste del área metropolitana de Buenos Aires” en *Revista Scripta Nova*, Universidad de Barcelona, N° 45 (51), 1 de agosto de 1999, disponible en <http://www.ub.es/geocrit/sn-45-52.htm>
- Rodríguez, Juan Carlos y Salas, Hernán (2004) “Lecturas antropológicas para la ruralidad latinoamericana: diagnóstico del mundo rural” en *Revista Digital erural*, V°2, disponible en <http://www.revistaerural.cl/indice2.htm> (consultada 04 de mayo de 2009)

Primera parte

Urbanización en Bolivia

Movilidad y multilocalidad

Itinerarios urbanos

Continuidades y rupturas urbano rurales

Nelson Antequera Durán

Introducción

La categoría de “lo urbano” implica al mismo tiempo la categoría de “lo rural”, como opuestas una de la otra. En ambos casos, hacemos referencia a dos tipos de ocupación espacial o territorialización. A estos dos tipos de ocupación del espacio y sus recursos les corresponden también diversas formas de manifestación cultural, organización social, económica, productiva, etcétera.

Es evidente que existen sustanciales diferencias entre lo rural y lo urbano como realidades sociales. Sin embargo, no es tan evidente que éstas sean contrapuestas y dicotómicas como aparece en el imaginario común, o al menos en el imaginario urbano. En nuestro caso, el de Bolivia, la oposición urbano-rural arrastra consigo una larga cadena de equivalencias donde intervienen la dimensión territorial, la dimensión étnico-cultural, económica, social e incluso política.

Lo urbano y lo rural se han convertido en un “par categorial”, en términos de Tilly (2000), del que se derivan muchos otros “pares” dicotómicos. El trabajo de categorización implica atribuir cualidades distintivas a los actores de uno y otro lado de los límites. La mayoría de las categorías son el resultado de la incorporación de conjuntos categoriales que ya actúan visiblemente en otros lugares (Tilly 2000: 61-85).

Estas categorías y sus equivalencias no son conjuntos de personas o atributos de las mismas sino que implican relaciones sociales estandarizadas y móviles. De este modo, la dicotomía urbano/rural, en nuestro caso, arrastra consigo otros pares categoriales respectivos tales como progreso/atraso, civilizado/bárbaro, prosperidad/pobreza, limpio/sucio, bello/feo, no indio/indio, educado/ignorante, trabajador/flojo, etcétera. Las relaciones sociales marcadas por este tipo de

construcciones categoriales no solo entre el campo y la ciudad, sino al interior de la ciudad misma se han ido naturalizando.

Sin embargo, diversos trabajos de investigación en base a los cuales se presenta este artículo muestran que estas dicotomías son en gran parte construcciones sociales y que en la realidad es precisamente la continuidad y no la oposición entre el campo y la ciudad, entre lo rural y lo urbano uno de los elementos constitutivos de los centros urbanos en Bolivia. Consideramos que la circulación de bienes, productos, personas y servicios entre el área urbana y rural y entre áreas urbanas de mayor o menor dimensión responde a un proceso de “urbanización” de la dinámica territorial y económica andina, en la que son fundamentales los principios de control vertical de un máximo de pisos ecológicos y el doble domicilio.

Podemos decir que en cierto sentido las ciudades de Bolivia se han “andinizado” no solo en cuanto a manifestaciones culturales sino en cuanto a su estructura económica, territorial y social profunda. Podemos decir también que lo andino se ha urbanizado, puesto que a la lógica del control vertical de un máximo de pisos ecológicos se le ha introducido el elemento urbano; con ello, sostenemos que se ha adecuado este modo de control territorial a un modo de control socioeconómico. De ahí que podemos hablar de un control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos y ya no solo ecológicos.

Esta aproximación pretende también romper con los enfoques “urbanistas” del tema urbano (valga la redundancia), enfoques centrados en la infraestructura urbana, en la vivienda, en el municipalismo, o en manifestaciones culturales urbanas, entre otros. Pretende plantear el tema como parte de nuestra configuración sociocultural nacional e insertar la problemática urbana en un contexto más amplio. De este modo, se pretende dar algunas pautas conceptuales y metodológicas para pensar la política pública en una dimensión territorial, económica y social que, superando concepciones dicotómicas sesgadas, puedan plantearse de manera más adecuada a nuestra realidad.

Lo urbano y lo periurbano

Entenderemos las categorías de lo urbano y lo rural como formas distintas de territorialización. Esto quiere decir formas de actuar sobre el espacio y formas de apropiarse del mismo. Una determinada forma de apropiación del espacio implica al mismo tiempo un determinado tipo de organización social, dinámica económica y política. Es así que lo urbano y lo rural pueden entenderse no solo como tipos de ocupación

espacial o de territorialización sino como tipos de relación social en sí; al mismo tiempo, la relación entre lo urbano y lo rural se puede entender como un tipo de relación social. De este modo, las categorías de lo urbano, de lo rural y de lo periurbano no son solo categorías territoriales sino también categorías sociales. En este apartado, intentaremos una aproximación conceptual a la ciudad, a lo urbano y a lo periurbano como categorías sociales para entrar posteriormente en el análisis de la relación entre lo urbano, lo periurbano y lo rural.

Centelles afirma que podemos identificar con el término *ciudad* a aquel territorio de base urbana donde existe “una cierta *unidad económica, cultural y social* que puede o no coincidir con las demarcaciones administrativas” (2006: 23). De esta manera, la ciudad se debe comprender no solo como aglomeración física sino también en relación a su *hinterland* o territorios bajo su influencia/dependencia socioeconómica. De aquí que la ciudad, para ser tal, tiene dos elementos principales: la unidad económica, social y cultural al interior de un territorio y su base urbana. Por tanto, no todo lo urbano es ciudad, pero sí toda ciudad, para ser tal, debe tener un carácter urbano.

Para Nel-lo, las características que hacen a la ciudad son la convivencia de usos y personas: “La separación de las dos cosas hace que el espacio se convierta en urbanización pero no en ciudad” (Nel-lo, citado en Boira 2001). La urbanización estaría definida más bien en términos de aglomeración física. Desde el punto de vista demográfico, el Instituto Nacional de Estadística define, con fines censales, la zona urbana como aquella que tiene más de dos mil habitantes. Por tanto, no todo centro urbano es una ciudad.

Con estos elementos podemos definir la ciudad como aquel territorio de base urbana, con cierta unidad económica, cultural y social que se constituye en un centro de convivencia de usos y personas a la vez que posee un *hinterland* o territorios bajo su dependencia o influencia y lo urbano en términos de aglomeración física. Sin embargo, el concepto de *hinterland* no es del todo adecuado para definir las ciudades en Bolivia, puesto que presupone que la ciudad “influye” sobre una determinada área contigua que se constituye en uno de sus elementos constitutivos. Afirmamos más bien que en nuestro caso la ciudad y las zonas periurbanas no solo “influyen” sobre determinada área sino que más bien son un punto más en una dinámica socioeconómica itinerante.

Desde esta perspectiva, retomamos el punto de vista de Nel-lo según el cual se debe entender la ciudad atendiendo a la dinámica social más que a los límites espaciales, en términos de redes:

La ciudad actual es pues una red... Ahora bien, cada actividad, cada tipo de relación, teje su propia red, que se superpone a las demás. La ciudad es pues una red de redes.

Pero la extensión y la intensidad de estas redes varía en diversos momentos del día, de la semana, o del año: son de geometría variable. La ciudad es pues una red de redes de geometría variable (citado en Centelles 2006: 73).

Este concepto de la ciudad y de lo urbano en términos de “redes” es retomado por Centelles para caracterizar la ciudad como un “nodo” más en un mundo globalizado:

en un mundo globalizado, las ciudades se constituyen en centros neurálgicos de redes de flujos, como nodos de enlace. Las ciudades sostienen y alimentan la red mundial de flujo de mercancías, capitales, información y personas (2006: 49).

Desde este punto de vista, no basta definir la ciudad desde sus características intrínsecas solamente, sino que hay que hacerlo desde sus relaciones con otros puntos del mundo globalizado; sin embargo, entendemos con otros puntos “globalizados” una visión que cuestionaremos un poco más adelante.

Hecha esta aproximación a la definición de ciudad, pasemos al suburbio.

Partamos de la contundente afirmación de Lomnitz en su clásico estudio sobre la marginalidad urbana:

En los lodazales suburbanos, allá donde terminan los servicios y las facilidades que asociamos normalmente con una ciudad moderna, viven millones de seres humanos al margen de la sociedad dominante (1978: 15).

El acelerado crecimiento de las ciudades ha traído aparejado el surgimiento de barriadas, chabolas, favelas, etcétera donde habitan quienes llegan a las ciudades en busca de mejores opciones de vida y trabajo. Las características de estas zonas son la situación de pobreza, la carencia de servicios básicos, de ingresos fijos, de vivienda adecuada, etcétera.

Las zonas suburbanas han sido estudiadas normalmente como unidades residenciales desde el enfoque estrictamente urbanístico. Desde este punto de vista, se trata de lugares situados a las orillas de las

ciudades, “carentes de equipamiento y deficitario en servicios e infraestructura” (Cáceres 2002: 152). Estos estudios llevan a la suposición de que el problema de la marginalidad se eliminaría al reemplazar las barriadas por complejos habitacionales modernos. Este punto de vista se ha abandonado, puesto que la residencia en barriadas no basta para definir la marginalidad.

Otros autores han intentado describir las barriadas como campamentos de transición entre lo urbano y lo rural, como un mero incidente del proceso migratorio. Lamentablemente, la evidencia de que varias generaciones de migrantes siguen viviendo en barriadas desmiente esta visión de lo suburbano como un momento transitorio. Sin embargo, la pobreza, el origen rural y la residencia en suburbios son rasgos concomitantes al hecho estructural de la marginalidad (Lomnitz 1978: 23).

En términos generales, el suburbio es aquella parte que se encuentra junto a la ciudad pero que está fuera de la ciudad, es decir, fuera de aquella unidad económica social o cultural que define la ciudad. Desde el concepto de ciudad de Nel-lo, lo suburbano sería aquella parte; si bien puede encontrarse en el mismo territorio que la ciudad, o próximo a ella, se encuentra fuera del tejido de redes que la conforman y, por tanto, fuera de la “red mundial” de la que habla Centelles.

Lo suburbano no es una categoría meramente espacial, sino una categoría que denota exclusión física, social, económica y política.

Vimos líneas arriba que, según Centelles y los teóricos de la globalización, las ciudades adquieren importancia por ser “nodos” o centros de tránsito de capitales financieros, personas, mercancías, etcétera. En el contexto actual de la globalización, la marginación ya no puede ser entendida como lo hacía Lomnitz solamente en términos de integración o no a la producción industrial, sino en términos de mayor o menor conexión con esta “red” global. Ante el optimismo de los autores que conciben la ciudad en términos de “redes”, como lo vimos antes, Bauman afirma que los beneficios del mundo globalizado no llegan a todos: “No importa lo que crean los académicos, que son miembros de la nueva élite global: la Internet y la Red no son para todos, y difícilmente serán algún día de uso universal” (Bauman 2001: 72).

Lo que ha generado la globalización es mayor exclusión, a la vez que la exclusión se ha hecho más profunda. Son cada vez más quienes se han quedado al margen del goce de las nuevas tecnologías y los beneficios económicos del mundo globalizado. Antes bien, la globalización ha acrecentado la brecha material y simbólica entre los pocos que se benefician de ella y las masas que quedan marginadas.

Otra de las ideas planteadas por Centelles es que se concibe a la ciudad como el lugar de la oportunidad: oportunidad de trabajo, de mercado, de estudio. El concepto de calidad de vida en las ciudades se basa más en el “acceder” que en el “poseer”. El “acceso” a esta gama de oportunidades que ofrece la ciudad no depende solo de su existencia u oferta, es necesario que dentro del espacio urbano existan los medios que permitan a los pobladores el acceso a la educación, al trabajo, a la cultura o al ocio, etcétera (Centelles 2006: 64). No basta vivir en la ciudad para ser parte de ella, es necesario también tener la posibilidad de acceder a aquellas oportunidades que puede ofrecer. La exclusión en la ciudad se puede entender también como la imposibilidad de acceso a estas oportunidades que ofrece el medio urbano.

En definitiva, lo urbano y las ciudades pueden ser concebidos en la actualidad bajo la figura de “puntos nodales” de un sistema de “redes”. Sin embargo, no toda la población urbana es parte del “mundo globalizado”; al contrario, la mayoría de la población que vive en las zonas periurbanas está excluida de esta red global. De todos modos, en la periurbe es donde se evidencia que las ciudades o esta parte que podríamos denominar las “no ciudades”, en el caso de las concentraciones urbanas de Bolivia, están vinculadas más bien con otros puntos nodales que pueden ser otras zonas urbanas, zonas rurales, zonas de colonización, etcétera. La dinámica de estas redes debe entenderse a través de dos conceptos clave en el manejo territorial del mundo andino: el doble domicilio y el control vertical de los pisos ecológicos. Estos conceptos clásicos que han sido desarrollados por destacados estudiosos del mundo andino (Condarco y Murra), hoy en día, cuando nuestro país ha pasado a ser un país con población predominantemente urbana, tienen todavía sorprendente vigencia no solo para entender las actuales sociedades rurales andinas, sino para entender las nuevas concentraciones urbanas bolivianas.

El doble domicilio y el control vertical de los pisos ecológicos

Para comprender las ciudades bolivianas es necesario referirnos a los principales rasgos de la cultura andina en cuanto a los patrones de ocupación territorial. Éstos son el doble domicilio y el control vertical de los pisos ecológicos.

Para comprender la realidad de los indígenas que habitan en la ciudad, es necesario aproximarnos a los distintos itinerarios que se dan en el recorrido desde la comunidad indígena hasta la ciudad. Los

itinerarios son muy variados, pues responden al contexto económico y social del lugar de origen y de destino, dependen de las redes sociales con las que cuentan los migrantes, de la posición que ocupan en el ciclo de vida, del estado civil, etcétera.

Como lo adelantamos, es impensable la vida en la comunidad campesina sin su relación con otros espacios, en particular, con los espacios urbanos. La economía agropecuaria local necesariamente se complementa con el comercio eventual o con el intercambio y el trabajo asalariado. La migración estacional, el intercambio y el trabajo asalariado forman parte esencial de la cultura y de la economía andinas. En este sentido, podemos hablar de un ciclo agrícola-laboral-comercial.

El control territorial está estrechamente ligado a la producción agrícola y pecuaria. De este modo, otra de las características fundamentales en la cultura andina ha sido el manejo discontinuo del territorio, el archipiélago territorial o el control vertical de los pisos ecológicos. En el norte de Potosí, donde están vigentes los niveles de *ayllu* mayor, se mantiene esta forma de control territorial. Los *ayllus* poseen tierras tanto en áreas de puna como en los valles, en los yungas, e incluso se reconoce un espacio intermedio, con lo que sigue viva la imagen del archipiélago territorial o la discontinuidad territorial (Rivera *et al.* 1992: 83)¹. En el caso de los *ayllus* de Oruro y La Paz, la mayor distancia entre la puna y los valles así como la existencia de prósperas haciendas en éstos han hecho que el esquema del *ayllu* solo se conserve en la puna y que el contacto con los valles sea solo en viajes de trueque y trabajo temporal (Carter y Albó 1988: 16).

En la época incaica y colonial, entre la cosecha y la siembra en la puna (aproximadamente entre fines de junio y principios de septiembre), la gente se desplazaba a sus tierras en los valles a realizar también labores agrícolas (Platt 1986). Sin embargo, por las políticas territoriales impuestas desde la Colonia, muchos *ayllus* han perdido la posibilidad de acceder a tierras de valles o yungas y se han quedado arrinconados en las tierras de puna. De todas maneras, los miembros de los *ayllus*, pese a no tener acceso directamente a las tierras de los valles, tienen una relación muy estrecha con la economía y producción de estas zonas.

1 Silvia Rivera *et al.* (1992: 84) dan cuenta de cómo los *ayllus* del norte de Potosí, en particular los *ayllus* de la Provincia Bustillos, conservan el tipo de control vertical de los pisos ecológicos bajo el modelo de archipiélago territorial, donde los *ayllus* poseen tierras en las alturas (región que localmente denominan *sumi*), en los valles (región localmente denominada *likina*) e incluso se reconoce un territorio intermedio denominado *taypirana* o *chawpirana*.

Entre julio y septiembre es común que los hombres hagan viajes largos hacia los valles llevando productos de la puna como sal, cueros de oveja y llama, lana y principalmente *chuno*. Hasta hace pocos años se realizaban estos viajes con grandes caravanas de llamas. Un viaje de tres o cuatro días a pie duraba tres semanas con llamas. En la actualidad, la mayoría se traslada en camiones o colectivos. Los productos llevados a los valles se intercambian principalmente con maíz (Cfr. Platt 1986: 231).

Otra estrategia que han desarrollado los *ayllus* para acceder a distintos pisos ecológicos ha sido el desarrollo del control de nuevos pisos ecológicos en las regiones como el Chapare o el Alto Beni. Estas regiones que se encuentran en zonas tropicales han sido ocupadas gradualmente por los miembros de los *ayllus* que tienen su residencia en las alturas. En estos asentamientos prima la lógica del control espacial del *ayllu*, y en muchos casos están sujetos al control de los *ayllus* centrales ubicados en la puna (Conde y Santos 1987: 117).

Es necesario recalcar que en ningún caso los campesinos controlan toda la variedad de pisos ecológicos, pero sí acceden a la mayor variedad posible, por lo cual muchos campesinos tienen doble domicilio: uno en el valle o en los nuevos asentamientos mencionados y otro en la puna.

Quienes no tienen productos para intercambiarlos en los valles optan por irse a trabajar en las ciudades durante los meses en que no hay labores en el campo. Los trabajos en la ciudad normalmente son: ayudantes en la construcción, cargadores en los mercados y, algunos más afortunados, en el comercio minorista. Después de las labores de cultivo, especialmente en el mes de diciembre, que es cuando hay mayor movimiento económico en las ciudades, también se desplazan las mujeres, niños y ancianos a las ciudades en gran cantidad para pedir limosna en las calles.

La insuficiencia de la producción agrícola, las condiciones climáticas adversas, así como la cada vez menor disponibilidad de tierras están ocasionando desde hace más de veinte años el sistemático abandono del campo y la migración a las ciudades. Si bien antiguamente la economía doméstica rural se complementaba con viajes a los valles, donde también tenían acceso a tierras, poco a poco estos viajes de intercambio fueron reemplazados por la migración estacional a las ciudades y posteriormente la migración estacional fue dando paso a la migración definitiva. Además, la posibilidad de que los hijos accedan a mejores condiciones educativas y laborales que garanticen su subsistencia es otro de los incentivos para la migración (Madrid 1998: 90-94).

Así, podemos decir que el trabajo temporal en las ciudades ha sido incorporado dentro de esta lógica del control de pisos ecológicos, en una lógica de complementariedad ya no solo ecológica en cuanto al acceso a productos, sino en una lógica de complementariedad económica. Y en la medida en que el trabajo asalariado, en vez de ser complementario, se vaya convirtiendo en la principal fuente de sustento de la familia, la producción agrícola pasa a un segundo lugar, convirtiéndose en complementaria.

Doble domicilio

Así, entra otro elemento que es el de la migración definitiva. Sin embargo, debemos comprender la migración no como un proceso lineal según el cual la familia traslada su residencia definitivamente de un lugar a otro, sino en la lógica del doble domicilio. De esta manera, podemos decir que la migración a las ciudades debe ser entendida como un cambio de la residencia principal, que implica un vínculo distinto con la comunidad de origen. Este vínculo tiene razones tanto culturales como económicas.

Una de las explicaciones que ofrecen los entrevistados para la migración de las familias a las ciudades es la escasez de tierras y/o la insuficiente producción de las mismas. Sin embargo, las condiciones de vida de los migrantes en las ciudades son mucho más duras que en el campo, como veremos más abajo. La explicación de la migración debe buscarse más bien en las oportunidades a futuro que ofrece la vida en las ciudades. Para las familias que tienen hijos pequeños, el factor que define el cambio de residencia es la educación. En las comunidades, los niños no pueden hacer más que tres o cuatro cursos de primaria y luego se quedan sin estudiar. Cuando pueden elegir, los padres prefieren establecerse en las ciudades para que sus hijos puedan asistir a la escuela.

Para los jóvenes, la ciudad ofrece mayores oportunidades laborales. Los jóvenes trabajan como jornaleros y las muchachas normalmente se emplean en alguna casa para el servicio doméstico. Sin embargo, normalmente son las familias y no los jóvenes quienes se establecen en la ciudad. Los jóvenes tienen una etapa de trabajo por tiempos largos en las ciudades, pero a la hora de establecer una familia regresan a la comunidad, reciben tierras para trabajarlas y recién en pareja pueden tomar la decisión de establecerse en la ciudad. Incluso cuando el joven encuentra su pareja fuera de la comunidad o el *ayllu* regresa a la comunidad donde tiene tierras para trabajar, aunque sean parcelas pequeñas. El trabajo de los jóvenes en las ciudades

es un complemento para la economía familiar. La juventud es la etapa en la que los hombres pueden trabajar en lugares que están fuera del circuito comercial laboral tradicional, pues no tienen obligaciones familiares en la comunidad. De esta manera, se van a la región del Chapare, a ciudades alejadas como Santa Cruz o incluso a Buenos Aires (Argentina) o a ciudades de Chile.

Las parejas que se establecen en la ciudad se dedican principalmente al trabajo eventual como jornaleros en una primera etapa y luego al comercio. El comercio implica también el desplazamiento del jefe o jefa de familia hacia varias ciudades o poblaciones intermedias. Por tanto, lo que determina el lugar de residencia no son tanto las condiciones laborales sino el lugar donde los hijos estudian. Es el caso de una persona que tiene tierras en una comunidad de Bolívar, pero vive en Oruro. En las ciudades trabaja como comerciante; lleva relojes o pan a Santa Cruz, donde se aloja en la casa de un “conocido” cerca del mercado La Ramada; allí vende su mercadería en forma ambulante, así como en otros mercados. En Oruro tiene un hijo que estudia informática en una universidad privada y otro que está en el colegio.

La economía familiar de quienes están establecidos en las ciudades es complementada por el trabajo agrícola en la comunidad. Durante la época de siembra y de cosecha, la familia o parte de ella se traslada a la comunidad para realizar las labores agrícolas. De esta manera se aseguran la provisión de alimentos, especialmente de papa y *chuño*, durante varios meses.

En caso de que el propietario de la tierra no pueda realizar personalmente las labores agrícolas, las mismas se delegan a los parientes que residen en la comunidad, quienes deberán entregar parte de la cosecha al propietario, ya sea en papa o en *chuño*. Es importante que las tierras se cultiven y no se abandonen para mantener el derecho sobre las mismas. En las comunidades de Kirkyawi, la propiedad de la tierra es colectiva, y si las tierras permanecen ociosas pueden ser reclamadas por otros miembros de la comunidad.

El cambio de residencia a la ciudad implica la movilización del capital social tanto para establecerse en la ciudad como para mantener los vínculos con la comunidad. Es el caso de un entrevistado que se iba a trabajar a Oruro, a una empresa minera donde trabaja su tío, quien le consiguió el trabajo. Esta misma persona anteriormente trabajó en Santa Cruz, donde está su hermano. De esta forma, las redes familiares no solo funcionan al interior de la comunidad, sino fuera de ésta, en los procesos de migración temporal o definitiva.

Otra de las condiciones para mantener el derecho sobre la tierra es asumir los cargos. Quienes tienen tierras en la comunidad tienen la obligación de pasar los cargos así vivan en las ciudades. Cuando a una persona (sería más apropiado decir a una familia, porque los cargos recaen sobre el varón y la mujer) le toca pasar el cargo, debe asumirlo y retornar a la comunidad mientras dure el cargo. En algunos casos deben retornar de ciudades lejanas como Santa Cruz o Buenos Aires a cumplir con esta responsabilidad. Esto implica cambiar temporalmente de domicilio. Sin embargo, cuando los hijos están en la escuela en la ciudad, es solo el varón quien retorna a la comunidad a cumplir el cargo.

El patrón de doble domicilio incide sobre la distribución de la fuerza de trabajo y los insumos productivos al interior de la unidad doméstica de producción. La combinación de los diversos insumos en el proceso productivo se facilita por el acceso directo a una gama variada de los nichos diferenciados. El desfase en los calendarios agrícolas de puna y valle o trópico permite aumentar la intensidad del uso de la fuerza de trabajo doméstica, y es posible que la familia entera se desplace estacionalmente entre la puna y el valle o el trópico (Platt 1981: 676-678)².

El vínculo con la comunidad

Los indígenas migrantes mantienen sus tierras y sus derechos comunitarios. La economía familiar de quienes están establecidos en las ciudades es complementada por el trabajo agrícola en la comunidad. Durante la época de siembra y de cosecha, la familia, o parte de ella, se traslada a la comunidad para realizar las labores agrícolas. De esta manera se aseguran la provisión de alimentos durante varios meses, especialmente de papa y *chuño*, en el caso de los migrantes del altiplano, que son la mayoría.

En caso de que el propietario de la tierra no pueda realizar personalmente las labores agrícolas, éstas son delegadas a los parientes que residen en la comunidad, quienes deberán entregar parte de la cosecha al propietario. Es importante que las tierras se cultiven y no se abandonen para mantener el derecho sobre las mismas. En

2 Platt (1981) menciona solo dos regiones, la puna y el valle. El control de tierras del trópico es posterior a 1981, tiene lugar principalmente a partir de 1985, cuando se dio el desplazamiento masivo al trópico cochabambino y paceño donde el cultivo principal es la coca. Los cultivos o intercambios de productos de los valles estaban destinados principalmente al consumo familiar. En cambio, la producción de la coca está destinada al mercado, lo cual permite complementar la producción de la puna.

las comunidades altiplánicas normalmente la tenencia de la tierra es colectiva, y si las tierras permanecen ociosas pueden ser reclamadas por otros miembros de la comunidad (Antequera 2006).

El vínculo con la comunidad, además de las razones económicas, se debe fundamentalmente a preservar la identidad de la persona. En las ciudades, los migrantes no tienen referentes sociales, no tienen vínculos sino los laborales o vecinales. Sin embargo, en la comunidad tienen una identidad, son reconocidos en su pertenencia al grupo, en su jerarquía. El hombre anónimo que carga las bolsas en la ciudad es *bilanco* en su comunidad. La señora que pide limosna en las calles es secretaria de actas o tesorera en su organización comunitaria. En la comunidad se tiene el sentido de pertenencia y de identidad. Uno de los entrevistados expresa cómo en las ciudades se sufre esta crisis de identidad:

en algunos casos [...] tenemos hijos pero cuando se van a la ciudad, ese hijo sin preparación mental, sin ideología, sin decir quién es él, quién soy yo, de dónde he nacido, se siente avergonzado [...] pero esa gente a veces de aquí va y trabaja de empleada, o de empleado pero no tiene su conocimiento de dónde es, y le dicen “indio” y se avergüenza de su propia gente, no tiene su autoestima... otros papás dicen váyanse de aquí, váyanse donde sea, pero salen sin formación sin moral sin ética, entonces esa gente se avergüenza de nosotros, [...] en las ciudades también entre primos se discriminan, no quieren saludar a su propia gente en la calle, no quieren dar la mano... pero la gente siempre retorna, no se olvida, siempre vienen, pese que hay algunos que han nacido en la ciudad, vienen para las fiestas, hablan quechua [...] (entrevista a NT, diciembre, 2005) (Antequera 2006).

Control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos

En muchos casos podemos hablar incluso de residencia múltiple y no solo doble. Migrantes orureños establecidos en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, conservan derechos sobre sus tierras en las comunidades altiplánicas de origen, pero también tienen derechos sobre tierras en zonas tropicales del Chapare. Entonces, una parte de la familia (normalmente los ancianos) vive en el altiplano, otra parte en la ciudad (los hijos, que están estudiando) y otra parte en el Chapare (los padres).

De este modo, la familia extendida controla no solo una diversidad de pisos ecológicos y económicos sino que tiene acceso a distintos

espacios sociales. Del ejemplo anterior, los más ancianos resguardan las tierras en su lugar de origen en calidad de pastores o agricultores; incluso en los *ayllus* pasan los cargos originarios, entre otras tareas. La siguiente generación, los hijos, ha migrado al Chapare; allí poseen tierras en calidad de colonizadores, dirigentes sindicales, transportistas, comerciantes, etcétera. La tercera generación, los hijos de éstos, estudian en la ciudad o en Oruro, o si terminaron los estudios a lo mejor tienen algún tipo de empleo (maestros, policías, secretarías, etcétera); también se dedican al comercio o han emprendido la migración a España. De esta manera, una sola familia extendida, sin contar a los hermanos, los cuñados, etcétera, tiene acceso a una diversidad de espacios sociales, económicos y ecológicos. Podemos hablar así de un “control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos” (además de ecológicos), que responde perfectamente a la antigua lógica andina del control vertical.

Esta dinámica del “control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos y ecológicos” tiene que ser considerada seriamente para una mayor y mejor comprensión de la dinámica social en nuestro país.

Por ejemplo, en el contexto de la municipalización, el esquema de planificación municipal está concebido en base al censo de población, el cual contabiliza a las personas presentes y no a los ausentes, pues las asignaciones presupuestarias a los municipios se hacen de acuerdo a los censos. Muchos de los miembros de las comunidades optan por quedarse a vivir en las ciudades y dejar encargadas sus tierras a sus parientes y no pierden ni quieren perder sus derechos y obligaciones comunitarias. Si el municipio proyecta un sistema de riego u otro tipo de proyectos en el área rural, debe tomar en cuenta a los ausentes, quienes reclaman los derechos no solo sobre las tierras sino sobre los proyectos que se desarrollen a nivel local. Esto provoca que el municipio reciba una asignación determinada por el censo, pero debe atender a una población mucho mayor que fue censada en otro lugar. Lo mismo sucede en las ciudades: si una familia fue censada en el Chapare pero tiene casa en un barrio de Cochabamba u Oruro, demandará al municipio el arreglo de sus calles, la provisión de servicios básicos, etcétera.

Lo periurbano como ruptura y articulación

Hasta aquí hemos analizado la relación “campo-ciudad” desde la perspectiva de las categorías andinas de ocupación espacial y cómo “desde

el campo” se ha ido integrando a la ciudad a estos patrones de territorialización. Ahora analizaremos la categoría de lo “periurbano”, como espacio constituyente de la ciudad y también como categoría social.

Hemos sentido al principio que lo rural y lo urbano son, además de categorías territoriales, categorías sociales. Un determinado segmento de la sociedad que se autoidentifica como urbano elaborará una serie de pares categoriales a partir de la contraposición de esta categoría con la categoría de lo rural. Lo urbano es signo de “meztraje”, civilización, educación, orden, limpieza, belleza, progreso, desarrollo, confort, etcétera. Lo rural será signo de “indio”, incivilizado, retraso, desorden, suciedad, aburrimiento, etcétera. El transitar de lo rural a lo urbano significa, también en la mentalidad rural, un tránsito hacia un “mundo mejor”. La ciudad se presenta como un mundo de oportunidades, de progreso, de bienestar, de acceso a la educación y al dinero.

Pero lo periurbano es una categoría negativa por excelencia. Lo periurbano es lo “no urbano”, allá donde no funcionan las categorías que se le asignan a lo urbano. Lo periurbano no es signo de belleza, orden, progreso, desarrollo, etcétera, sino la negación de todo aquello. Y es paradójicamente en las zonas periurbanas donde habita la mayoría de la gente “urbanizada”.

La categoría de lo “periurbano” es la que nos ayuda a romper precisamente con estas falsas dicotomías entre lo urbano y lo rural. Es en las zonas periurbanas donde se asientan los “migrantes”, a donde llegan los migrantes temporales, donde compran lotes quienes llegan de otras ciudades o del campo y que viven al mismo tiempo en el Chapare o en Alto Beni y que tienen sus padres en el altiplano potosino, orureño o paceño.

La periurbe en Bolivia es la continuación de la ruralidad a la vez que su negación. Es, al mismo tiempo, la negación de lo urbano; es la no ciudad, pero junto a la ciudad. Es por eso que para la comprensión de nuestras ciudades es imprescindible comprender los barrios periurbanos desde las categorías de doble domicilio o residencia múltiple y control vertical.

Es precisamente aquí donde se construye lo urbano desde su negación. Los nuevos asentamientos se caracterizan porque no cuentan por lo general con papeles de los predios. Los dueños de los lotes no viven en la zona, son lotes baldíos y otros con construcciones precarias. No se cuenta con ningún tipo de servicio como el agua y el alcantarillado; en muchos casos no llega la luz, y tampoco las vías de acceso son adecuadas. Su organización está en función

al proceso de asentamiento y las necesidades básicas del mismo: apertura de calles, edificación de viviendas, conformación como junta vecinal, etcétera.

En estas zonas, los vecinos deben autogestionar sus servicios; abrir sus calles; comprar agua de los aguateros hasta que se organicen en un comité e instalen su infraestructura para la provisión de agua, lo que puede durar varios años; deben pelear por tener áreas “verdes”, que no son sino lotes baldíos donde la gente echa basura mientras sueñan con que algún día allí habrá un “parque” como en otras zonas de la ciudad. No hay alumbrado público ni servicio de transporte, ni escuelas ni atención médica. Todo debe ser hecho por los vecinos, porque como los papeles no están regularizados todavía no son Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y el municipio no puede asignarles recursos. Es así como se van construyendo los barrios de la futura “ciudad”. Después de varios años, estas zonas se van consolidando. En la etapa de consolidación, los barrios se caracterizan porque cuentan con servicios autogestionados, están en trámite avanzado de consolidación de la propiedad de tierra o, en algunos casos, ya ha sido concluido. Una vez formalizada la propiedad, pueden acceder a constituirse como OTB y hacer requerimientos al municipio. En esta etapa la organización es fuerte, pues está en torno a la consecución de servicios y de obras, entre otros beneficios. Hasta llegar a esta etapa, pueden pasar fácilmente quince o veinte años. No se podría haber construido esta parte de la ciudad sin la relación de la gente con sus comunidades de origen, con otras zonas de comercio o producción como el Chapare, en el caso de Cochabamba, o Alto Beni o los Yungas, en el caso de La Paz, por ejemplo.

Las zonas perirurbanas, así, son parte de un circuito económico y social mucho más amplio que los conecta con las zonas rurales, con otros centros urbanos, con zonas de producción como el Chapare, con el altiplano, entre otros. En las zonas periurbanas se juegan las rupturas, las transiciones y las continuidades entre lo rural y lo urbano. Comprenderlas desde esta perspectiva permitirá superar las dicotomías urbano-rural y las relaciones sociales que éstas determinan.

Conclusión

El crecimiento urbano en Bolivia, producto principalmente de la migración del campo a la ciudad ha transformado completamente el panorama social y territorial de nuestro país. Al haberse producido un crecimiento urbano sin industrialización, como en otros contextos,

no se explica el crecimiento de las ciudades sin su intrínseca relación con el campo, de donde vienen los migrantes que han engrosado las zonas periurbanas de Bolivia.

Desde esta perspectiva, es necesario, en primer lugar, cuestionar profundamente la dicotomía entre lo urbano y lo rural y las demás categorías que vienen asociadas. Antes bien, es necesario buscar en los principales patrones de ocupación territorial de la cultura andina una explicación acerca de la dinámica social y económica de las urbes bolivianas.

Estos dos rasgos principales son, a nuestro entender, el doble domicilio y el control vertical de un máximo de pisos ecológicos.

Los centros urbanos se han incorporado en la dinámica económica andina. En principio, y desde hace mucho, como un destino temporal y recientemente como un destino definitivo de las familias campesinas; asimismo se han incorporado otras nuevas zonas como el Chapare, Alto Beni y Santa Cruz. Sin embargo, la migración en nuestro contexto no debe entenderse como un movimiento lineal, sino como un itinerario según el cual las familias no renuncian definitivamente al control sobre las tierras de origen o sobre otras zonas de producción. De esta manera, las zonas periurbanas son una estación más del peregrinaje continuo de las familias que van trashumando en busca de mejores condiciones de vida.

En el aspecto territorial, podemos decir que las ciudades se han integrado a antiguos circuitos migratorios y laborales. Pero en el plano social, podemos decir que las sociedades andinas han desarrollado, a partir de la lógica del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, el control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos además de ecológicos, que les permita su supervivencia.

Dentro de los centros urbanos, es precisamente en las zonas periurbanas donde se evidencian las rupturas o continuidades entre lo rural y lo urbano.

El estudio de “lo urbano” en Bolivia debe atender a una perspectiva amplia según la cual las ciudades están articuladas precisamente a territorios más amplios, que definitivamente trascienden las divisiones políticas impuestas. En el plano del análisis social es necesario superar las dicotomías urbano rural, de modo que una concepción menos polarizada de lo urbano y lo rural permita a la vez un cambio no solo en el conocimiento de la realidad urbana, sino en las relaciones sociales que están determinadas por las categorías territoriales, étnicas y sociales construidas en nuestra sociedad.

Bibliografía

- Antequera, Nelson (2006) “El sistema de organización originario y el ciclo agrícola-comercial-laboral como estrategia económica de resistencia a los fenómenos de pobreza en las comunidades indígenas del ayllu Kirkyawi (Bolivia)”, *Estudios sobre la pobreza*, CLACSO CROP, Buenos Aires.
- Antequera, Nelson (2007) *Territorios urbanos*, Plural, CEDIB, La Paz.
- Bauman, Zygmunt (2001) *La Globalización: Consecuencias humanas*, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- Boira, Josep Vincent (2001) “La dispersión de la ciudad implica la no ciudad” en http://www.uv.es/metode/anuario2001/160_2001.html, consultado en octubre de 2007.
- Cáceres, Gonzalo (2002) “Suburbanización y Suburbio en el Chile: Una mirada al gran Valparaíso decimonónico (1820-1870)”, *Revista Archivum*, año iii N° 4, Valparaíso.
- Carter, William y Xavier Albó (1988) “La comunidad aymara: mini estado en conflicto” en Xavier Albó (compilador), *Raíces de América. El mundo aymara*, Alianza Editorial.
- Centelles, Joseph y Portella (2006) *El buen gobierno de la ciudad: Estrategias urbanas y política relacional*, Plural editores, La Paz.
- Condarco, Ramiro y John Murra (1987) *La teoría de la complementariedad vertical eco simbiótica*, HISBOL, La Paz.
- Conde Mamani, Ramón y Felipe Santos Quispe (1987) “Ayllu y sindicato en el norte de Potosí (Provincia Bustillos)”, Manuscrito, Simposio ayllu y sindicato, 11 pp.
- Lomnitz, Larissa (1978) *Cómo sobreviven los marginados*, Siglo Veintiuno Editores, México D.F.
- Madrid, Emilio (1998) “La tierra es de quien pasa cargos. Relación de los ‘residentes’ con su pueblo (Huayllamarca y Llanquera)”, en *Eco andino*, 6, Bolivia, Cepa, Oruro, pp. 83-120
- Murra, N.Wachtel y J.Revel, *Anthropological History of Andean Politics*, Cambridge University Press, Londres.
- Pérez Ruiz, Maya Lorena (1997) “Del comunismo a las megaciudades. El nuevo rostro de los indígenas urbanos”, ms. La Paz.
- Platt, Tristan (1981) “El papel del *ayllu* andino en la reproducción del régimen mercantil simple en el norte de Potosí” en *América Indígena*, Vol. 41, Octubre-Diciembre, 1981, México D.F.
- Platt, Tristan (1986) “Mirrors and maize: the concept of yanantin among the Macha of Bolivia” en J. Murra, N. Wachtel y J. Revel, *Anthropological History of Andean Politics*, Cambridge University Press, Londres, pp. 228-259.

Prats, Joan (2000) “Las ciudades latinoamericanas en el umbral de una nueva época, La dimensión local de la gobernabilidad democrática y el Desarrollo Humano”, en www.iigov.org

Rivera Cusicanqui, Silvia y equipo THOA (1992) *Ayllus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí, Aruwiyiri*, La Paz.

Tilly, Charles (2000) *La desigualdad persistente*, Manantial, Buenos Aires.

La localización de las ciudades de Bolivia y el crecimiento acelerado de la aglomeración urbana paceña

Javier Nuñez-Villalba

Desde el siglo XVI hasta la actualidad es posible observar que la localización de las áreas urbanas de Bolivia obedecía al desarrollo de las distintas actividades económicas de orden primario (figura 1). Muchas ciudades importantes han surgido y desaparecido. Otras han perdido su hegemonía en la región Occidental del país como resultado de la decadencia de la explotación minera, por ejemplo. Por otra parte, en la región Oriental del país han surgido nuevas ciudades y otras están en pleno crecimiento como resultado de la también creciente actividad agrícola, forestal y ganadera. Este proceso dinámico muestra que la evolución del sistema urbano sigue una dirección Occidente-Oriente (Mazurek 2006).

La explicación del proceso dinámico en la localización de las ciudades reside en su relación con los procesos económicos de actividades primarias o terciarias. Por ejemplo, el desplazamiento de las actividades primarias de Occidente hacia Oriente ha impulsado la creación y el crecimiento de las ciudades en esta región. Pero, a diferencia de las ciudades que siguen la dirección de las actividades primarias, se puede observar que la aglomeración en La Paz ha crecido a consecuencia de las actividades terciarias. Estas actividades permitieron que la aglomeración urbana paceña soporte las peores crisis económicas de la minería que afectaron sobre todo a las ciudades del Occidente. El crecimiento de la aglomeración urbana en La Paz fue imparable desde su misma fundación, al punto que logró concentrar el poder político y económico del país (figura 2). Explicar cuáles fueron las posibles causas que mantuvieron la hegemonía de la aglomeración urbana paceña y cuáles fueron sus efectos será el propósito de este análisis.

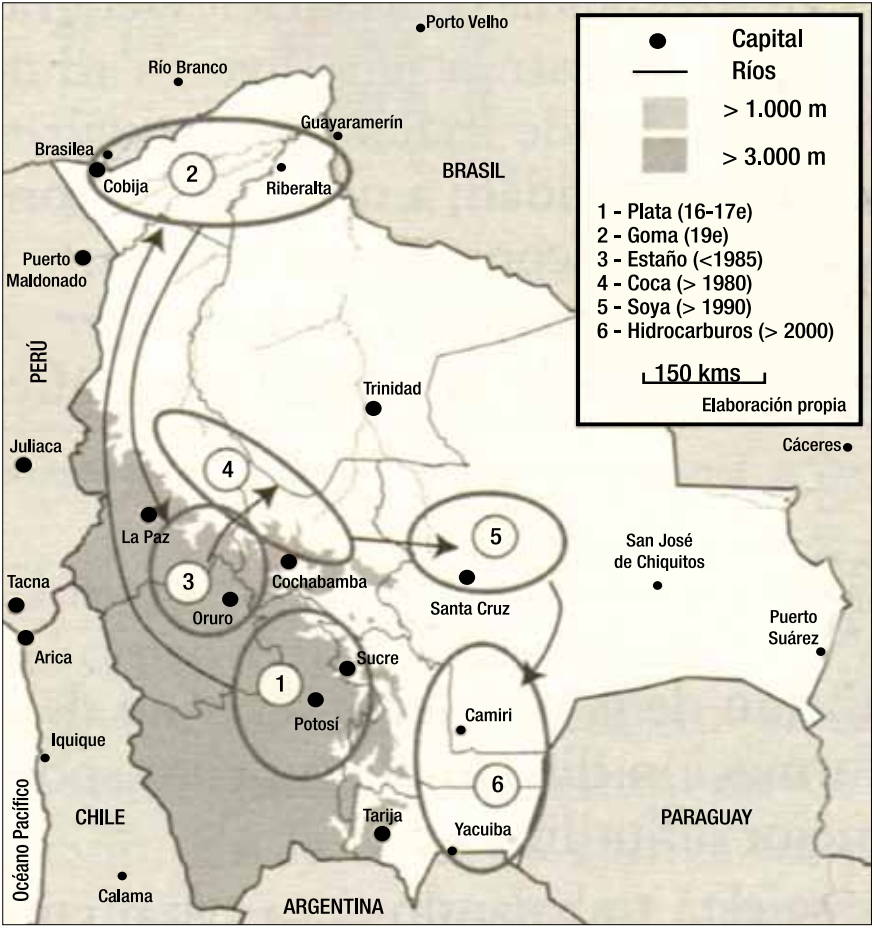


Figura 1A: Enfoque de la dinámica territorial de Bolivia
Fuente: Mazurek (2006).

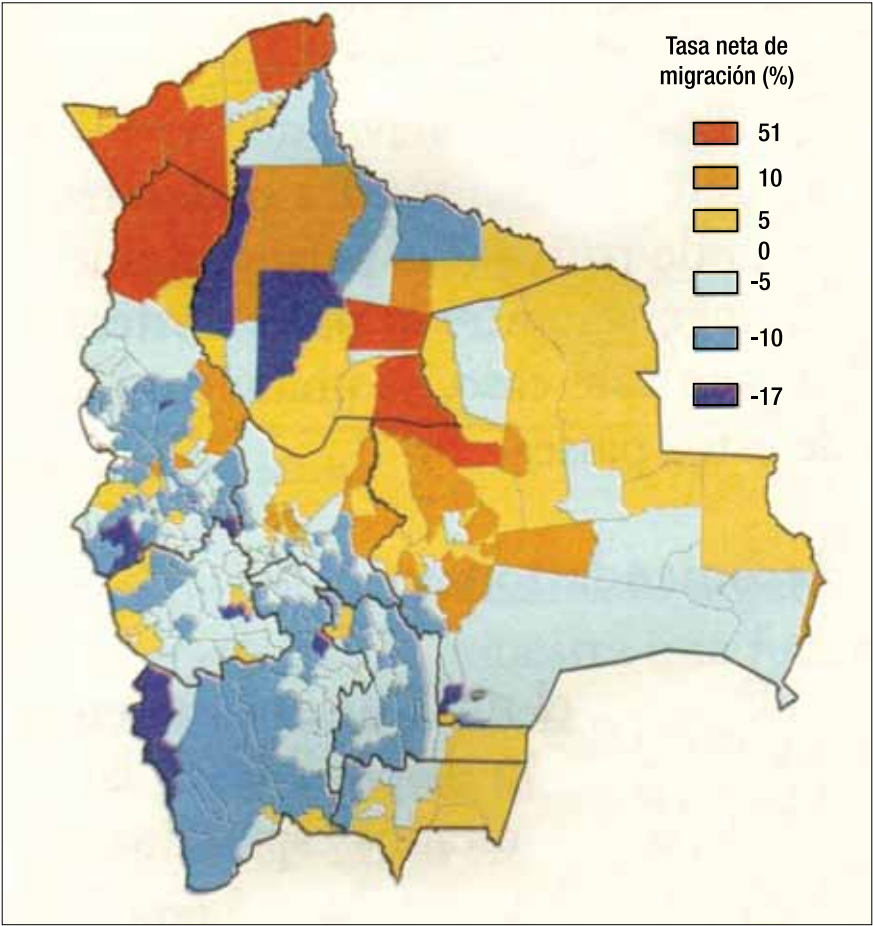


Figura 1B: Enfoque de la dinámica territorial de Bolivia
Fuente: Mazurek (2006).

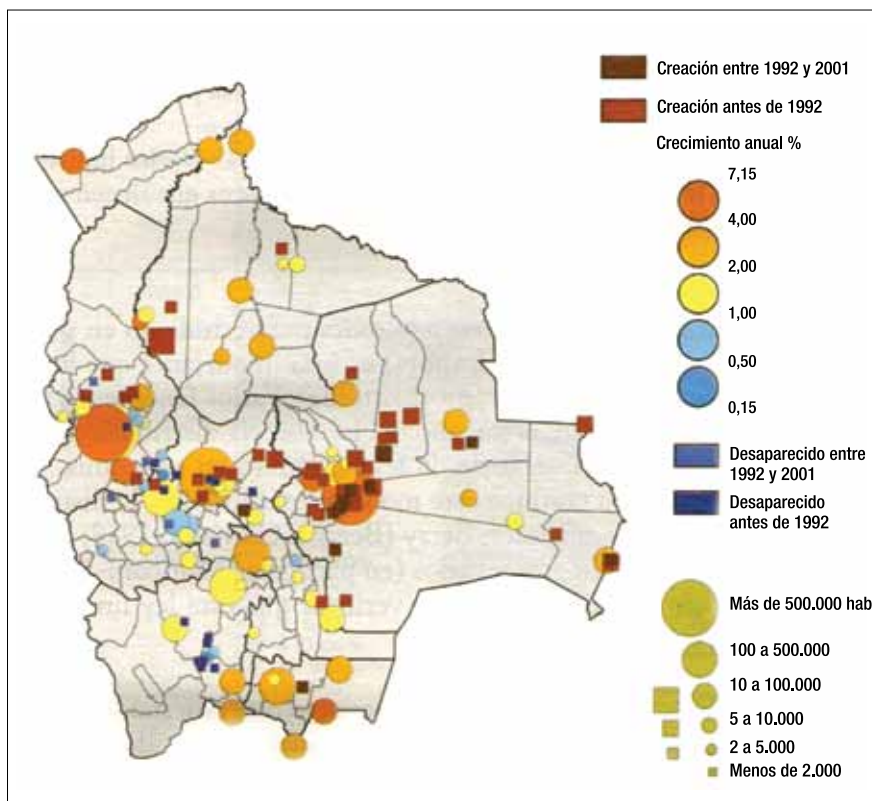


Figura 2: Evolución del sistema urbano boliviano entre 1976 y 2001

Fuente: Mazurek (2006).

Actividad económica y configuración urbana

Una breve descripción histórica muestra que las principales ciudades del país se desarrollaron gracias al aprovechamiento y a la explotación de los recursos naturales, es decir, donde se desarrollaron las actividades económicas primarias. Los principales recursos que determinaron el desarrollo de las ciudades, entre la época de la Colonia y principios de la República, fueron la minería de la plata, la explotación de la goma y la minería del estaño.

Minería de la plata

La Villa Imperial de Potosí, la ciudad hispana más grande del siglo XVI, es un ejemplo claro del proceso de urbanización que se inició tempranamente en Bolivia como resultado de la explotación de la plata. En esa época, Potosí fue una de las ciudades más habitadas del

mundo. Primero se fundó como un asiento minero dependiente de la ciudad de La Plata (hoy Sucre), y adquirió el rango de ciudad el 21 de noviembre de 1561 mediante capitulación expedida por el Virrey del Perú Diego Lopez de Zúñiga y Velazco. Mediante esa capitulación, la ciudad recibió el nombre de “Villa Imperial de Potosí”. La inmensa riqueza del Cerro Rico¹ y su explotación hicieron que la ciudad creciera de manera asombrosa.

Para el año 1570, apenas 25 años después del inicio de las actividades mineras, su población alcanzó los 50.000 habitantes. Para ese año también, el valor de la plata excedió al del oro. Así, Potosí se convirtió rápidamente en la ciudad más rica y esplendorosa del mundo hispano, con una población, el año 1600, de 120.00 habitantes y de más de 160.000 habitantes en 1650, por encima de Sevilla, y mayor aún que París y Londres (Fisher 1977: 23; Herrera 1997).

La producción de la plata llegó a su punto máximo alrededor del año 1650, momento en el cual la producción empezó a bajar y la ciudad de Potosí inició su decadencia. En 1719, una epidemia de tifoides mató a cerca de 22.000 personas, y otras tantas abandonaron la ciudad. Para 1750 la población se redujo a 70.000 habitantes, y treinta años después cayó a 35.000 habitantes. Al estallar el movimiento de la Independencia, la población había descendido a tan solo 8.000 habitantes (Salazar-Soler y Boccara 2002).

La explotación de la goma

A partir de la década de 1880, se llevaron a cabo una serie de exploraciones geográficas en el Oriente boliviano. Destacó en estas empresas Eduardo Heath, quien impulsó la llegada de compañías y casas comerciales². Se dio inicio así a la explotación de la goma (Medrano 2009a: 98). Gracias a esta actividad surgieron centros poblados como Riberalta, Cachuela Esperanza y Cobija, que más tarde se constituirían en verdaderas capitales regionales en el Oriente.

El Estado boliviano, en la región Nororiental, creó nuevas entidades administrativas como el “Territorio Nacional de Colonias del

1 Su riqueza fue tan grande que en su monumental obra *Don Quijote de la Mancha* Miguel de Cervantes acuñó el dicho español “vale un Potosí”, que luego fue reconocido por la Real Academia Española refiriéndose a una extraordinaria riqueza.

La producción de la plata, que explotaba la Corona española en el famoso Cerro Rico de Potosí, fue de trascendental importancia en la época de la Colonia. En el lapso de los años 1556 a 1799 se estima que la producción de la plata controlada por la Real Caja de Potosí, representó un 20% de la producción mundial (Arduz 1985).

2 The Benin Gum C.A., registrada en Nueva York, la casa francesa de Brailard y Ca. The Orthon Rubber Co. Limited registrada en Londres.

Noroeste”³. De esta manera reconocía y oficializaba una ocupación que hacía pocos años parecía imposible en ese territorio. Atraídos por el caucho para la producción de goma, el territorio pasa de tener cero habitantes censados en 1881 a más de 7.000 habitantes el año 1900, entre los cuales se contaban migrantes nacionales de la región andina y extranjeros (alemanes, franceses, italianos, suizos, brasileños, peruanos, turcos y japoneses). La población de esa parte de la amazonía boliviana había alcanzado una cifra récord de 54.200 habitantes aproximadamente para el año 1910 (Oviedo 1994: 66). Fue la primera ola migratoria hacia el Oriente. A partir de 1910, la cotización de la goma se vino abajo con el consiguiente declive de esta actividad (Gamarra-Téllez 1977).

Minería del estaño

Al mismo tiempo del auge de la goma, a fines del siglo XIX, los precios de la minería de la plata cayeron en el mercado mundial. Simultáneamente, se incrementó la demanda mundial del estaño para usos industriales. Este mineral se encontraba en la misma región de explotación de la plata. El metal se convirtió en el “Rey de los minerales bolivianos”, porque representó entre el 55 y el 75% de las exportaciones mineras en ese periodo (Medrano 2009b: 35).

Esa época consolidó aún más la región andino-altiplánica, donde se fortaleció la ciudad de Oruro, que concentraba los recursos mineros. Esta actividad fortaleció también la configuración de centros urbanos en el país a través de medios de transporte, manteniéndose hasta aproximadamente la mitad del siglo XX. En esa época, la sobreproducción de estaño hizo que los precios internacionales del metal cayeran, por lo que la región (Oruro y Potosí) volvió a perder su población y su crecimiento se debilitó (Fisher 1977). Sin embargo, la construcción del ferrocarril que vinculó a gran parte de la región andina del país pese a su montañoso relieve, convirtió esta región en un centro de comercio, empleo y de subsistencia.

Hasta mediados del siglo XX, la influencia de las actividades mineras en la región andino-altiplánica determinó la localización de los centros urbanos más importantes del país (La Paz, Oruro, Potosí y Sucre). Esta zona denominada el “cinturón minero” tiene un ancho promedio de 90 kilómetros con una longitud de alrededor 750

3 Más tarde, el “Territorio Nacional de Colonias del Noreste” se convirtió en el departamento de Pando con su capital, Cobija, el año 1938.

kilómetros, extendiéndose hasta la frontera con Argentina⁴ (Medrano 2009b: 37) (figura 3). A diferencia de las ciudades mineras, La Paz se constituyó en un área de intercambio comercial entre las zonas mineras y el Pacífico.

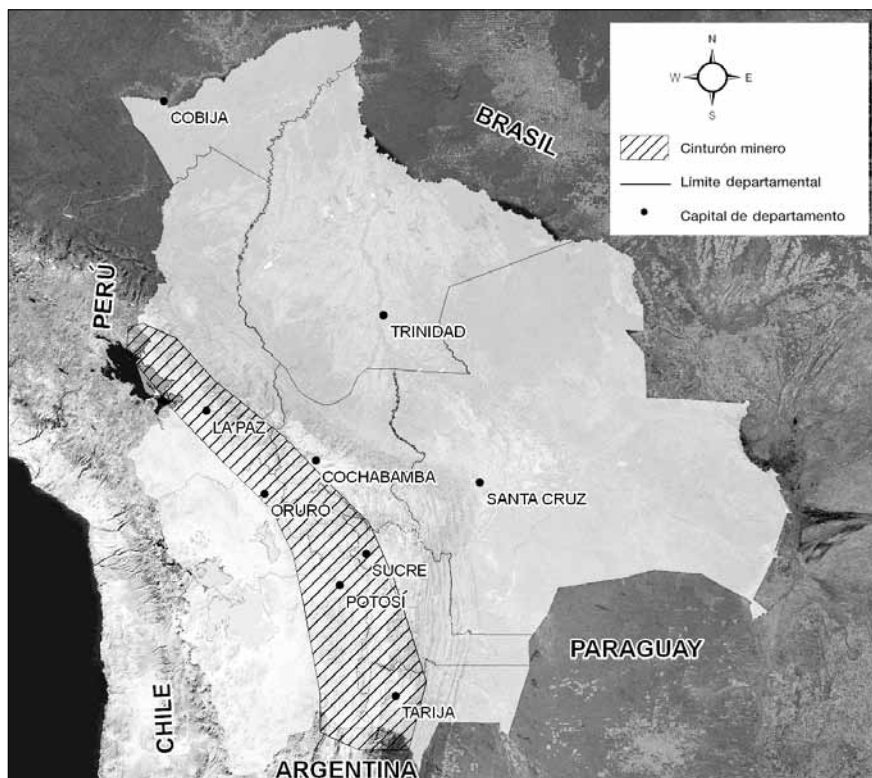


Figura 3: Cinturón minero

Fuente: Gómez D'Angelo (1978).

Distribución de la población urbana a partir del siglo XX

En la región del “cinturón minero”, se concentró la mayor cantidad de habitantes a principios del siglo XX. Las ciudades más habitadas en esa época fueron La Paz, Oruro y Potosí (90.610 habitantes para el año 1900), en la zona andino-altiplánica. En segundo lugar, se ubicó la población de los Valles (Cochabamba, Tarija, Chuquisaca), y en tercer lugar los Llanos (Beni, Santa Cruz, y el Territorio Nacional de Colonias) para el año 1900 (cuadro 1).

4 También denominado el “cinturón polimetálico” (Montes de Oca, 2004).

Cuadro 1: Población por zona, departamento y ciudad, año 1900

Zona	Población	Departamento 1900*	Departamento 1900**	Ciudad 1900***
Altiplano	La Paz	573.750	426.930	54.700
	Oruro	230.600	86.081	15.000
	Potosí	365.500	325.615	20.910
		<i>1.169.850</i>	<i>838.626</i>	<i>90.610</i>
Valles	Cochabamba	485.900	326.163	21.800
	Tarija	94.900	67.887	19.000
	Chuquisaca	250.000	196.434	(Sucre)
		<i>830.800</i>	<i>590.484</i>	<i>40.800</i>
Llanos	Beni	38.700	5.680	
	Santa Cruz	210.800	171.592	
	Territorio Nal. de	63.600	7.228	
	Colonias	<i>313.100</i>	<i>184.500</i>	
Total		2.313.750	1.613.610	131.410

* Fuente: M.V. Ballivian, (1900; 2-3), (Medrano, 2009b).

** Fuente: Medrano (2009a).

*** Fuente: Medrano (2009^a); Tapia (1992: 98).

La población de los llanos orientales, alrededor del año 1900, representaba aproximadamente el 12% del total del país. La baja densidad poblacional en los llanos orientales se debía particularmente al aislamiento por la falta de accesibilidad que existía hacia el lugar. Un simple viaje a Santa Cruz, primera ciudad del Oriente, representaba una odisea para cualquier viajero, pues debía soportar los caudalosos ríos, los caminos sumergidos, las emboscadas de los indios sirionós, etcétera. Esta situación desventajosa promovió que los gobiernos de turno, aumentaran la población del Oriente como estrategia nacional para el manejo territorial (Roux 1994: 7).

En esa época, la producción agrícola en los valles de Cochabamba y del norte de Potosí fue próspera. En los valles se localizaron centros productivos de maíz, trigo y harina, cuyos excedentes se comercializaban en los mercados de La Paz y Oruro. Esta producción llegó incluso a Tarapacá y Antofagasta (Medrano 2009b). A partir de la revolución agraria de 1952, los procesos de colonización se intensificaron hacia los valles para el cultivo de coca llegando a consolidarse por la década de 1980. Asimismo, la producción agrícola se inició en el Oriente del país con el cultivo de soja a partir de 1990.

Entre los años 1976 y 1992, las áreas urbanas llegaron a tener mayor población que las áreas rurales. En ese periodo, casi todos los departamentos presentaron una mayor tendencia a la urbanización

creciente, excepto Oruro y Potosí. Santa Cruz, Beni y La Paz fueron los de mayor tendencia a la urbanización para el año 2001. A partir de esa época, el 62% de la población total reside en ciudades y un poco más de un tercio en contextos rurales (Pereira y Montaña 2004: 8).

La localización de la aglomeración urbana paceña

La ciudad de La Paz, a diferencia de las ciudades occidentales del país, consolidó su hegemonía debido al crecimiento acelerado de su espacio urbano. Las actividades terciarias jugaron un papel importante para el desarrollo constante de esta ciudad. Su localización fue una característica que impulsó esta actividad. El intercambio de servicios y el comercio generaron un centro articulado que concentró el poder político del país. Así, el análisis multitemporal de la aglomeración urbana paceña, desde estos puntos de vista, permite entender el constante crecimiento que modificó su espacio urbano.

Localización de la ciudad de La Paz

La ciudad de La Paz está estratégicamente localizada con respecto al Océano Pacífico, a la región del Amazonas y al resto del país. Esta ubicación estratégica es parte de su historia, que ha estructurado la vida social y económica de Bolivia como producto de actos políticos y movimientos sociales desde su fundación el año 1548. La localización de la ciudad estuvo determinada a una serie de ajustes relacionados con la accesibilidad a recursos humanos y naturales.

La ciudad fue fundada originalmente en la localidad de Laja, en el altiplano. Pero, los constantes ataques de los indígenas a los colonizadores obligaron su traslado, casi inmediatamente, al valle del río Choqueyapu. Este lugar era menos accesible debido a su topografía, pero con un clima más cálido, una buena disponibilidad de agua y otros recursos como el oro (Benavides 2004). Después de su fundación, la ciudad de “Nuestra Señora de La Paz” se convirtió en el área más importante de intercambio comercial y en el punto de convergencia entre dos regiones agrícolas, los Yungas y el altiplano.

A partir del siglo XVII, la ciudad de La Paz se convirtió en un centro de paso obligatorio y de actividades económicas. La conexión, la cercanía y el acceso hacia los puertos del Océano Pacífico de Perú y Chile convirtieron a la ciudad de La Paz en un centro estratégico de intercambio comercial (Gobierno Municipal de La Paz-GMLP 2007).

El intercambio comercial en La Paz fortaleció su posición geográfica al final del siglo XIX. Esta actividad impulsó la construcción

de una red de comunicaciones como el ferrocarril que conectaba a Oruro y Potosí con los puertos del Pacífico. De esta manera, la ciudad de La Paz tuvo una época de auge económico y comercial por su privilegiada localización. Pese a las abruptas montañas que le rodean, existían servicios de transporte urbano modernos como el tranvía (GMLP 2007).

La Paz como centro articulador del poder político y social de Bolivia

Antes de la República, la Real Audiencia de Charcas regionalizó el espacio colonial y modificó la administración. En esa época se concedió a la ciudad de La Paz el poder administrativo y estratégico de la región por ser el punto de contacto comercial más importante entre las zonas de Larecaja, Omasuyos, Pacajes y Caracollo-Sica Sica. Este acontecimiento estimuló el desarrollo de la ciudad y la consolidó como centro político y de gestión de la Colonia española por su estratégica localización entre los territorios costeros del Pacífico y los valles interandinos (GMLP 2007). Así, la ciudad de La Paz, entre los años 1594 y 1595, dependió de su localización estratégica a partir de sus rutas coloniales que se estructuraron constituyéndose como vías vitales de acceso y de tráfico comercial (Mendoza 2006: 1).

Por su localización estratégica, la ciudad de La Paz desarrolló una actividad política febril, a tal punto que llegó a concentrar centros de poder en la época colonial. Muestra de ello fue el primer levantamiento y el más importante del siglo XVIII. En este acontecimiento, denominado “El Cerco a La Paz”⁵ más de ocho mil campesinos sitiaron la ciudad por tres meses. Nadie podía entrar o salir de la ciudad, el comercio estaba paralizado y el poder de la Colonia estaba subyugado (Del Valle de Siles 1994). La influencia de este enfrentamiento cobró fuerza en la región hasta la independencia de la República⁶. Los movimientos políticos identificaron a La Paz como estratégica para el poder territorial. Así, el año 1899, en la época de la República, se produjo la Guerra Federal⁷. Esta guerra otorgó a la ciudad de La Paz el título de

5 El Cerco a La Paz de 1781 fue liderado por Túpac Katari. La rebelión bloqueó las actividades en la región ocasionando muertes y epidemias por falta de agua y alimentos. Un aumento en los tributos indígenas y el abuso de los corregidores fueron los factores detonantes (*La Prensa*, 2005).

6 En este acápite es necesario hacer notar que aproximadamente 200 años después y por el mismo método, un cerco a la ciudad de La Paz, se modificó la vida política del país con la expulsión del último presidente liberal elegido constitucionalmente, Gonzalo Sánchez de Lozada, en la denominada Guerra del gas, el año 2003.

7 La Guerra Federal de 1899, que enfrentó a paceños y chuquisaqueños por móviles económicos, concluyó con el traslado de la sede de gobierno a La Paz. Uno de los líderes de esa rebelión fue el general liberal José Manuel Pando (*La Prensa*, 2005).

sede de gobierno de la República de Bolivia, fortaleciendo aún más su desarrollo urbano y el control sobre el territorio.

Análisis del crecimiento poblacional de la aglomeración urbana paceña

El constituirse en sede definitiva de los poderes del Estado a partir del año 1900 estimuló el crecimiento de la población y la modificación de la trama urbana paceña. Junto a este hecho, fueron las reformas políticas y económicas del país de la segunda mitad del siglo XX las que estimularon el crecimiento urbano. Estas reformas produjeron dos oleadas masivas de migración hacia La Paz.

La primera oleada de migración masiva ocurrió después de la revolución agraria de 1953, la cual aceleró la migración del campo a las ciudades. Este proceso provocó que la ciudad de La Paz sea receptora de la población migrante del área rural. Esta migración configuró un nuevo fenómeno urbano estableciendo cinturones periféricos en la ciudad de La Paz. El asentamiento en zonas marginales produjo barrios en extrema pobreza (GMLP 2007: 47). Así también, el proceso iniciado por la revolución agraria del año 1953 significó la incorporación de la zona de El Alto como un apéndice de la ciudad de La Paz y su posterior consolidación como barrio urbano-marginal (Sandoval y Sostres 1989: 23). La primera oleada de migración inició la ocupación masiva y acelerada de El Alto. Donde solo se instalaban depósitos, oficinas de aeronáutica y el servicio de red de ferrocarriles⁸, luego se asentaron zonas residenciales con altas densidades de población entre los años 1956 y 2006 (figura 4).

La segunda oleada de migración hacia la aglomeración urbana paceña se inició a partir de los años setenta. Para 1970, la zona de El Alto constituía el 10,6% de la población urbana paceña. El crecimiento más fuerte de población se registró entre 1976 y 1986 (9% anual) como consecuencia de varios factores, externos e internos (Garfias y Mazurek 2005: 14). El factor más importante fue la crisis minera a finales de los años setenta, que tuvo como consecuencia la relocalización o despido de miles de trabajadores mineros de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) (Rossell 1999: 9). Otros factores

8 La necesidad de conexión entre La Paz y El Alto fue cada vez más dinámica. Este dinamismo aumentó con la fundación de la Escuela de Aviación el año 1923 en El Alto, localizada en este lugar por la topografía plana del terreno y la disponibilidad de espacio. Años más tarde, en ese mismo lugar se instalaron las primeras oficinas del LAB (Lloyd Aéreo Boliviano), una empresa de transporte aéreo. Luego se construyó un pequeño aeródromo, que actualmente es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.



Figura 4: Fotografías aéreas de La Ceja de El Alto de los años 1956 y 2006
Fuente: Imágenes de satélite 2006 (Google Earth) y Fotografía Aéreas 1956 (IGM).

fueron las sequías e inundaciones por el efecto de El Niño en 1982. Estos fenómenos estuvieron fuertemente relacionados con el incremento de flujos migratorios, particularmente del área rural del departamento de La Paz (Sandoval y Sostres 1989: 24). Los factores internos que aportaron al acelerado crecimiento de la nueva ciudad de El Alto fueron: la construcción de la autopista La Paz-El Alto en los años setenta⁹

9 Esta autopista fortaleció la conexión vial facilitando y mejorando los desplazamientos entre las ciudades de La Paz y El Alto.

así como la alta tasa de natalidad de la población y el elevado índice de fecundidad de las mujeres (Baby 1995)¹⁰.

En la segunda oleada de migración es importante destacar el estudio del Plan de Desarrollo Urbano (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM, y Bureau Central d'Études pour es Équipements d'Outre-Mer, BCEOM 1977). Este estudio realizó proyecciones del crecimiento de la población en la aglomeración paceña hasta el año 2010. Sin embargo, los datos se vieron desfasados por el contexto político y económico que atravesaba el país. La población de la aglomeración urbana paceña (La Paz y El Alto) en 1990 se proyectó a 1.000.000 de habitantes. El año 2010, esa cifra debería incrementarse a 1.600.000 habitantes. La superficie requerida para albergar a la población en 1990 debería ser de 11.000 ha y en el año 2010 de 24.000 ha. El Plan de Desarrollo Urbano del año 1977 proyectaba que El Alto llegaría a una población de 405.000 habitantes recién el año 2010. Pero, en la realidad, el número de habitantes proyectado para el año 2010 fue alcanzado prematuramente el año 1992.

En un nuevo análisis de los datos de los censos de población de los años 1992 y 2001, se pudo observar que los índices de crecimiento fueron de 1,1 para La Paz y 5,1 para El Alto. Estos datos permitieron hacer una nueva proyección para los años 2007 y 2010 (figura 5). Según estos datos, la población para el año 2010 será de 840.209 habitantes para La Paz y 960.767 para El Alto, con una población acumulada de 1.800.976 habitantes para La Paz y El Alto (cuadro 2).

Cuadro 2: Crecimiento de la población de las ciudades de La Paz y El Alto

Ciudad \ Año	1950	1976	1992*	2001*	2007**	2010**
La Paz	256.000	539.800	713.378	789.585	839.718	840.209
El Alto	11.000	95.450	405.492	647.350	864.575	960.767
Total	267.000	635.250	1.118.870	1.436.935	1.704.293	1.800.976

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

* Se tomó en cuenta solo la población urbana.

** Proyecciones de población según el INE.

10 Cada familia tenía un promedio de cinco a seis hijos, y la tasa de mortalidad estaba bajando (Baby, 1995).

La aglomeración urbana (La Paz-El Alto) está en un proceso de conurbación con centros poblados satélites (Laja, Achochalla, Mecapaca, Palca, Pucarani y Viacha). La población acumulada con los poblados satélites alcanza a aproximadamente 1.436.935 habitantes (cuadro 3). Esta cifra representaba el 29% de la población urbana total del país según el censo 2001 (Pereira y Montaña 2004: 29), considerándose el primer polo urbano del país (Garfias y Mazurek 2005: 23).

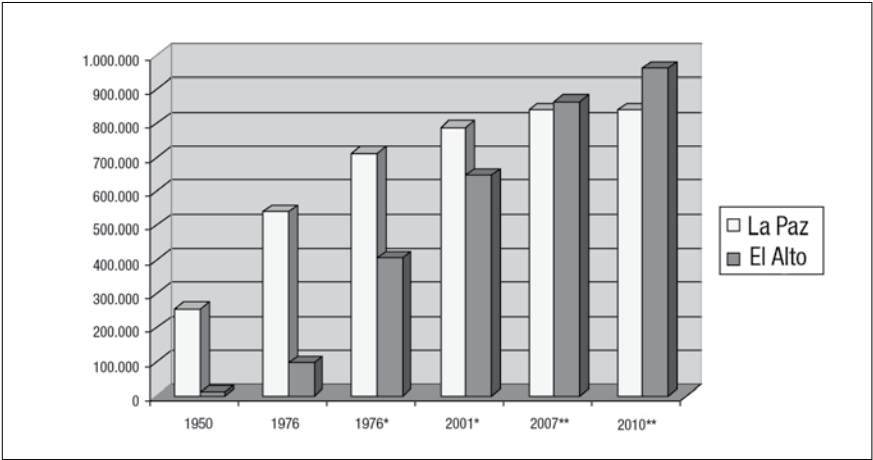


Figura 5: Crecimiento de la población de La Paz y El Alto

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

*Se tomó en cuenta solo la población urbana.

** Proyecciones de población según el INE.

Cuadro 3: Población de los municipios del área urbana de La Paz

Municipio	1976		1992		2001	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Capital La Paz	539.828		713.378	2.522	789.585	3.708
Palca	Sin datos	Sin datos	No tiene	12.360	No tiene	14.185
Mecapaca	Sin datos	Sin datos	No tiene	9.566	No tiene	11.782
Achocalla	Sin datos	Sin datos	No tiene	13.105	10.369	4.741
El Alto	95.455	Sin datos	405.492	No tiene	647.350	2.608
Laja	Sin datos	Sin datos	0	14.653	0	16.311
Pucarani	Sin datos	Sin datos	0	22.799	0	26.802
Viacha	9.878		19.036		29.108	37.034

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales del INE.

Los municipios con mayor población urbana en la región, según las proyecciones del INE para el año 2007, son El Alto y La Paz. El Alto, con las tasas más altas de crecimiento intercensal, y La Paz, con bajas tasas de crecimiento, han hecho que la ciudad de La Paz pase a ocupar el segundo lugar a partir del año 2007 (cuadro 4). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que La Paz y El Alto conforman espacialmente una sola ciudad que fue dividida repentinamente por límites políticos administrativos, y que no está dividida espacialmente por sus redes de funcionamiento. Los datos por separado de La Paz y El Alto ocasionan que a nivel nacional muestren una falsa sensación de Santa Cruz como la ciudad más poblada de Bolivia¹¹.

Cuadro 4: Datos de población y superficie de los municipios de la metrópoli paceña

Municipio	Población (2001)*	Pobl. 2007**	Pobl. 2010**	Superf. km ²	% Pobl. urbana	Densidad hab./km ²	TGF	TMI
El Alto	649.958	864.575	960.767	350,4	99,6	1.855	4,2	64,1
La Paz	793.293	839.718	840.209	2.022,3	99,5	392	2,7	53,5
Viacha	66.142	75.021	77.668	3.342,9	44,0	19,8	4,4	57,1
Achocalla	15.110	16.379	16.481	187,0	68,6	80,8	5,5	67,3
Palca	14.185	15.326	15.411	750,3	0	18,9	5,2	67,3
Mecapaca	11.782	13.311	13.688	512,8	0	23	5,3	73,2
Pucarani	26.802	29.881	30.656	1.182,4	0	22,6	5,6	73,8
Laja	16.311	17.574	17.716	727,4	0	22,4	4,7	61,9

*CNPV 2001: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

**Población 2007 y 2010: Proyecciones de población calculadas con datos del INE.

TGF: Tasa Global de Fecundidad (hijos por mujer)

TMI: Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ST-CODEPO, CNPV-INE, Red Hábitat.

11 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 2001 la población urbana de La Paz y El Alto sumó un total de 1.436.936 habitantes mientras que Santa Cruz sumó un total de 1.116.059 habitantes (Pereira y Montaña, 2004: 17).

Análisis multitemporal del crecimiento espacial de la aglomeración urbana paceña

Los altos índices de crecimiento de la población se traducen en la expansión espacial de la mancha urbana. Esta expansión sigue ciertas tendencias determinadas por la accesibilidad a zonas de trabajo, vivienda, de recreación y de servicios. Según varios estudios realizados, la dirección de la expansión urbana siempre siguió la red vial principal de conexión nacional e internacional (Demoraes 1998; Baby 1995; Garfias & Mazurek 2005; Saravia *et al.* 1976). En este sentido se observará la dirección que siguió la aglomeración urbana paceña en su crecimiento.

Para este breve análisis se recurre a la secuencia retrospectiva que expresa la forma de cómo la aglomeración urbana paceña se adaptó en el tiempo. El crecimiento de la mancha urbana (figura 6) se inicia con la fundación de La Paz el año 1548 expresada en un núcleo matriz, típico de las ciudades coloniales, localizado en la actual Plaza Murillo.

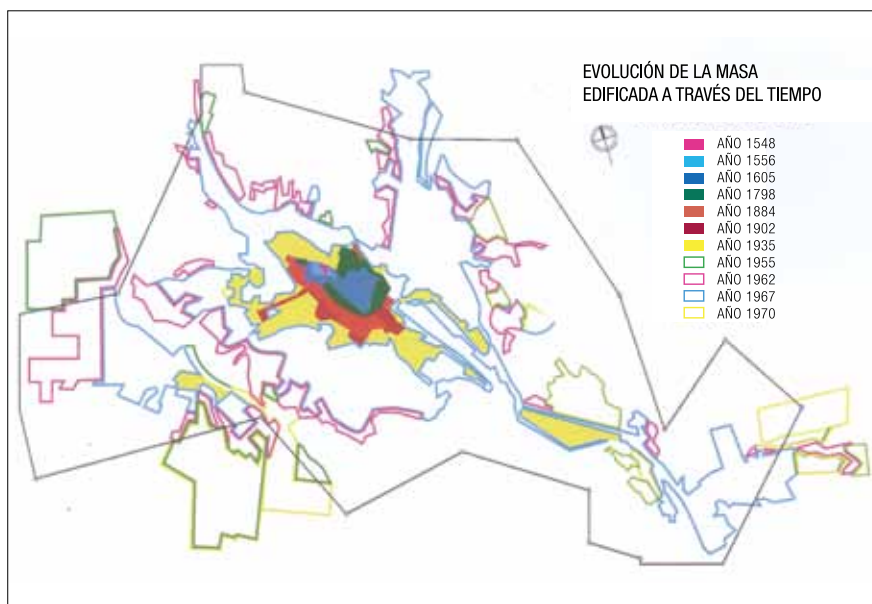


Figura 6: Crecimiento histórico del asentamiento de la población hasta el año 1970
Fuente: GMLP (2010).

El año 1902 la ciudad se extiende sobre algo más de 230 ha, en el siglo XIX el crecimiento de la ciudad se reflejó en áreas ya ocupadas y no así en la extensión de sus límites (Saravia *et al.* 1976: 13).

La posterior expansión de la ciudad hasta el siglo XX siempre siguió el curso del río principal, el río Choqueyapu. Sus vías principales fueron construidas paralelas a éste, ganando otros espacios a través de vías que siguen los varios afluentes del río (figura 7). Según Saravia,



Figura 7: Fotografía aérea del centro de la ciudad de La Paz del año 1930

...durante la década 1930-40, se inicia un desarrollo hacia los lados de la hoyada y al abrirse algunas avenidas principales como la Av. Germán Busch en la zona de Miraflores y la vía El Alto-Calacoto, éstas constituyen en verdaderos ejes de urbanización que posteriormente dan origen a un proceso de relleno de áreas, llegando a consolidarse las áreas urbanas... En 1950, el área sur (Calacoto-Florida) y el área oeste (El Alto), inician un crecimiento vertiginoso en comparación a otras direcciones. Es indudable que la fisiografía del sitio constituye una traba al patrón de desarrollo del núcleo, la ciudad se extiende irregularmente siguiendo los accidentes geográficos... (Saravia *et al.* 1976: 15).

Otras investigaciones indican que:

en 1910 la ciudad de La Paz tenía una superficie urbana de 800 hectáreas. Después de 65 años, es decir en 1975, esa superficie se había multiplicado en más de siete veces hasta alcanzar a 5.800 hectáreas. Desde 1975 hasta 1997, la superficie urbanizada se estima que alcanzó alrededor de 12.000 hectáreas, duplicándose en solo 22 años (GMLP 2007: 6).

Según los datos revisados, la superficie calculada incluye la ciudad de El Alto.

Para la década de 1980, la concentración de población en las laderas Este y sobre todo Oeste tenía densidades de 150 a 600 habitantes por hectárea. El resto de la ciudad tenía densidades por debajo de los 150 habitantes por hectárea. Esta situación muestra que el crecimiento de la mancha urbana invadió los cerros y las quebradas sobre áreas amenazadas por deslizamientos e inundaciones. Un ejemplo de las áreas amenazadas puede apreciarse en el único Mapa de Constructibilidad de la ciudad de La Paz (BRGM y BCEOM 1977). Al presente, las construcciones han llegado a ocupar todas las cuencas de la ciudad. La configuración de la mancha urbana de esta ciudad se divide en cinco subcuencas: la cuenca del río Choqueyapu, la cuenca del río Orkojahuirá y las cuencas de los ríos Irpavi, Achumani, Huañajahuira (GMLP 2007: 29), hoy invadidas por urbanizaciones.

Desde finales de los años setenta, la zona central de la ciudad va perdiendo su función habitacional para consolidar una función de carácter administrativo, financiero, de servicios privados y de comercio especializado. Durante este periodo también se inicia el fenómeno del comercio y del transporte informal.

Este breve análisis del proceso histórico de expansión revela que existe una tendencia inmediata a ocupar el suelo en forma de nuevos asentamientos periféricos, es decir, en aquellas zonas que poseen cierto grado de accesibilidad en la periferia.

Para el año 1997, el área urbana de La Paz vence la barrera natural del río Orkhajahuira, trepa la ladera Este hacia Villa Fátima, y conforma las Villas Copacabana y San Antonio. Luego, se instala en la meseta de Pampahasi, y avanza sobre los valles aledaños. Se manifiesta también una tendencia de vinculación con la zona de Ovejuyo y los valles al norte de la zona Sur. Se consolida la mancha urbana de El Alto que se expande siguiendo las redes viales principales alrededor del Aeropuerto (figura 8). Para este mismo año la superficie de la mancha urbana de El Alto (6.600 ha) sobrepasa la superficie de la ciudad de La Paz (6.400 ha) (Demoraes 1998).

En un análisis actual de la evolución de la aglomeración urbana paceña, en base a la interpretación multitemporal¹² de imágenes de

12 El análisis multitemporal es una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial en su capacidad de seguir procesos dinámicos. Al tratarse de información adquirida por un sensor situado a una órbita estable y repetitiva, las imágenes de satélite constituyen una fuente valiosísima para estudiar los cambios que se producen en la superficie terrestre, ya sean debidos al ciclo estacional de las cubiertas, y a catástrofes naturales o alteraciones de origen humano (Chuviero, 2002: 424).

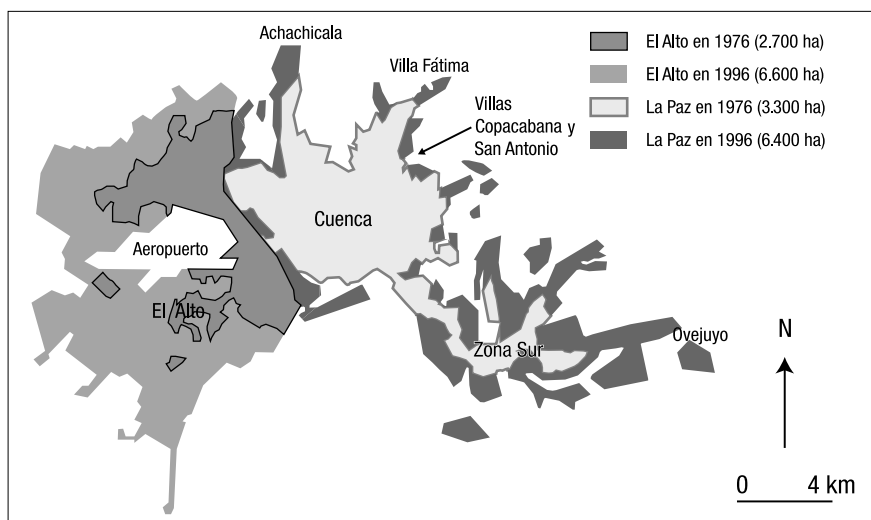


Figura 8: Crecimiento del asentamiento urbano entre los años 1976 y 1996
Fuente: (Demoraes, 1998).

satélite¹³ de los años 1990 y 2006, se calculó la superficie aproximada en 21.727,6 ha para el año 2006. Este breve análisis multitemporal de las imágenes de satélite muestra el crecimiento de la superficie de la mancha urbana en el límite de que se aprecia en la figura 9.

El crecimiento es más evidente en la ciudad de El Alto, porque su superficie el año 2006 llegó a ser el doble del año 1990 (figura 10).

La ciudad de El Alto, para el año 1990, tenía una superficie de 4.334,4 ha y la ciudad de La Paz 4.379 ha. Estas cifras se han duplicado para la ciudad de La Paz a 7.316,6 ha, y se han triplicado para la ciudad de El Alto a 14.411 ha. En total, la mancha urbana, para el año 2006, era de 21.727,6 ha.

En base a los datos de la superficie de la mancha urbana de los años 1990 y 2006, se proyectó el índice de crecimiento de la superficie del área metropolitana para el año 2010. Los resultados de esta proyección mostraron un índice de proyección (r) para La Paz de 1,4 y para El Alto de 8,4. Las variables para la proyección fueron las siguientes:

$$r = 1/t * \ln(N_t/N_o) * 100$$

r = índice de crecimiento

¹³ Las imágenes de satélite que permitieron hacer el análisis fueron tomadas por el satélite Landsat 5 del año 1990 y Landsat 7 del año 2006.

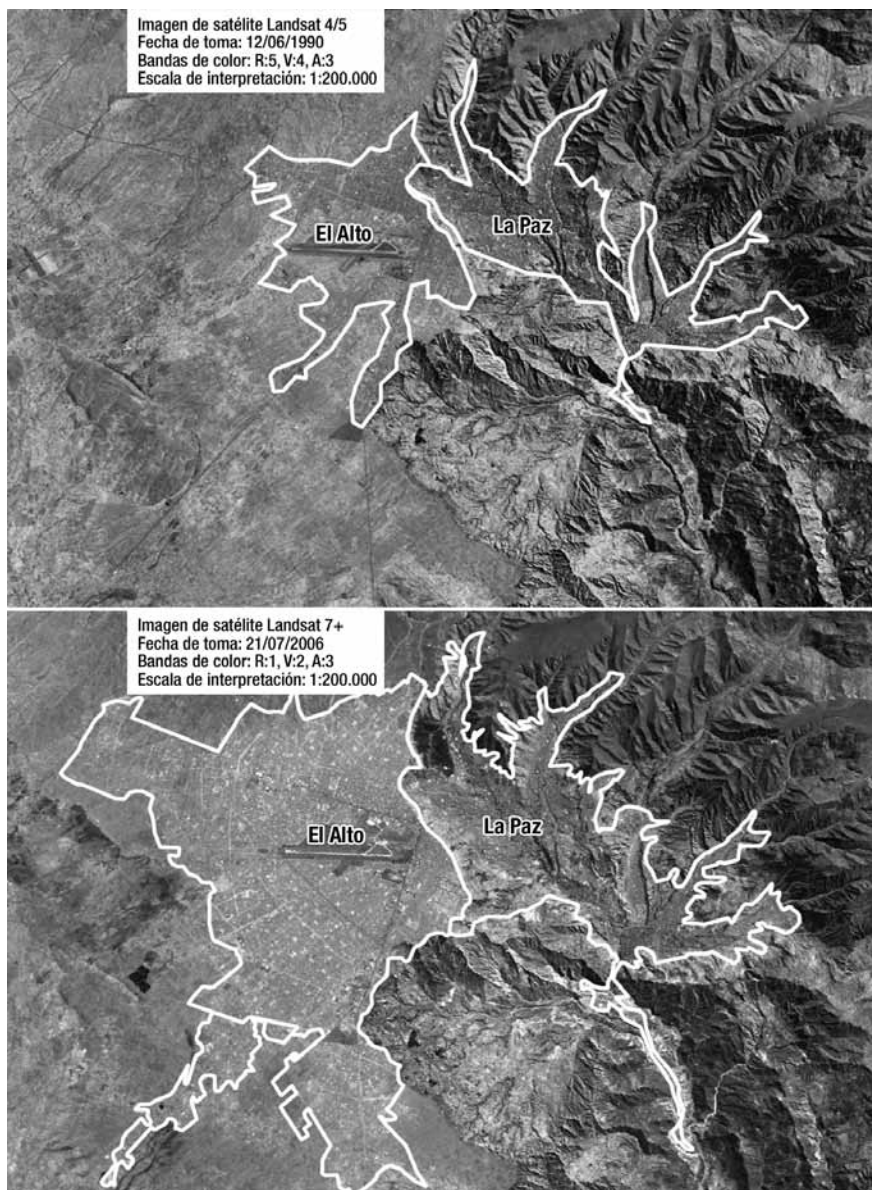


Figura 9: Interpretación de la aglomeración urbana puneña sobre imágenes de satélite 1990 y 2006

Fuente: Elaboración propia.

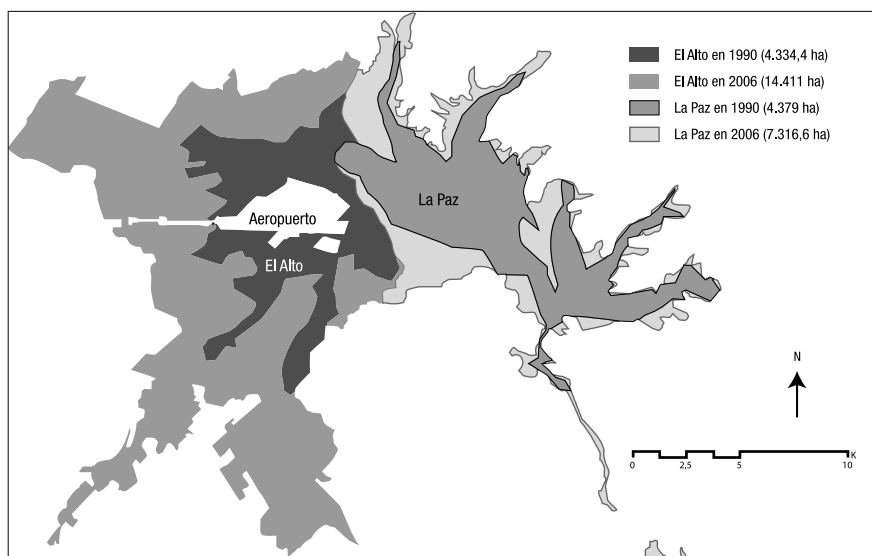


Figura 10: Crecimiento del asentamiento urbano entre los años 1990 y 2006

Fuente: Elaboración propia.

t = tiempo

LN = Logaritmo Neperiano

N_t = Superficie Final (2006)

N_o = Superficie Inicial (1990)

Los índices de crecimientos calculados permiten hacer una proyección de la expansión de la mancha urbana para el año 2010, tomando en cuenta que el índice promedio anual de crecimiento (r) es constante y que no cambiará por el periodo estimado. El algoritmo utilizado para la estimación de la población el año 2010 fue el siguiente:

$$P = P_o * \text{Exp}(r * t)$$

P = Superficie estimada

P_o = Superficie Inicial (1990)

Exp = Exponencial

r = índice promedio anual de crecimiento

t = años calendario para estimar la superficie

De esta forma se pudo proyectar la superficie de la mancha urbana paceña para el año 2010 (figura 11 y cuadro 5).

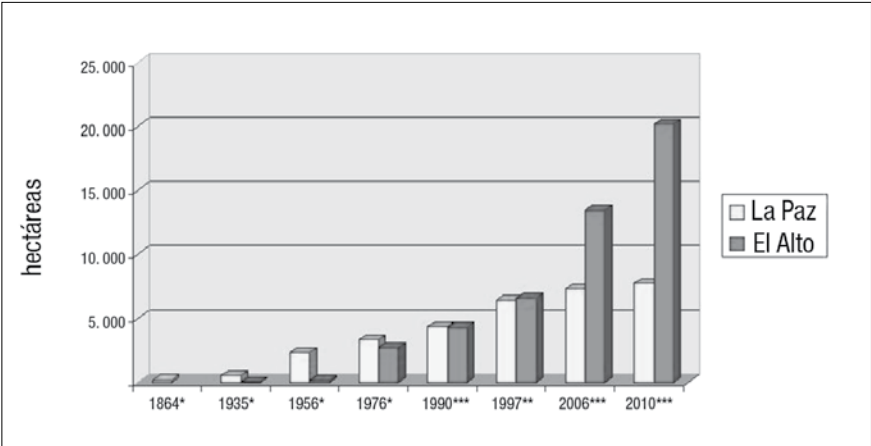


Figura 11: Proyección del crecimiento de la mancha urbana de las ciudades de La Paz y El Alto

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes datos:

*Datos del modelo de crecimiento urbano de La Paz. (Saravia, 1976).

** Datos del estudio de la evolución de la aglomeración de La Paz-El Alto después de los últimos 20 años (Demoraes, 1998).

*** Datos de elaboración propia en base al análisis multitemporal de imágenes de satélite Landsat y Quick Bird.

Cuadro 5: Proyección del crecimiento de la superficie de la mancha urbana de La Paz y El Alto, por hectáreas entre los años 1548 y 2010

Año Ciudad	1548*	1795*	1864*	1935*	1956*	1976**	1990***	1997**	2006***	2010***
La Paz	4,5	112	184	518,7	2.297	3.300	4.379	6.400	7.316,6	7.752,6
El Alto				14	132,9	2.700	4.334,4	6.600	13.411	20.200
Total	4,5	112	184	532,7	2.429,9	6.000	8.713,4	13.000	20.727,6	27.952,6

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes datos:

* Datos del modelo de crecimiento urbano de La Paz, Saravia.

** Datos del estudio de la evolución de la aglomeración de La Paz-El Alto después de los últimos 20 años, Demoraes.

*** Datos de elaboración propia en base al análisis multitemporal de imágenes de satélite Landsat y Quick Bird.

La figura 11 y el cuadro 5 muestran que recién el año 1935 aparecen los primeros asentamientos en la ciudad de El Alto. El Alto alcanza el mismo tamaño en superficie que la ciudad de La Paz en la década de 1990. El año 2006 la extensión urbana de El Alto era el doble a la de La Paz. Según la estimación realizada para el año 2010, El Alto crecerá aproximadamente 5.789 ha más, mientras que en la ciudad de La Paz el incremento solo será de 436 ha. En la estimación de la ciudad de El Alto se incluyó las áreas urbanas de rebalse sobre otros municipios, particularmente al sur con Viacha y Achocalla (figura 12).

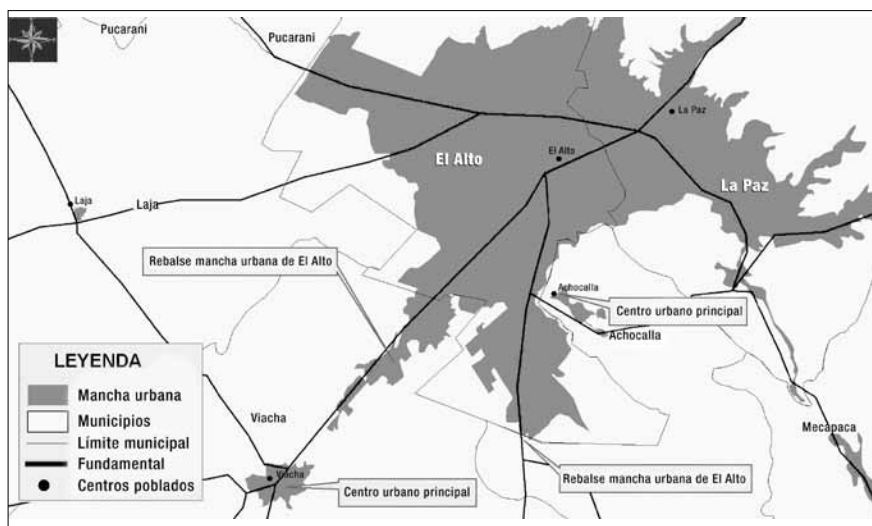


Figura 12: Rebalse de la mancha urbana de El Alto sobre los municipios de Achocalla y Viacha

Fuente: Elaboración propia.

La superficie de la mancha urbana estimada para las ciudades de La Paz y El Alto fue de 20.727,6 ha. La superficie de la mancha urbana estimada incluyendo las ciudades vecinas (Viacha, Mecapaca, Achocalla, Laja y Palca) era de 22.837,3 ha para el año 2006.

- El Alto con 13.441 ha
- La Paz con 7.316 ha
- Viacha con 1.116 ha
- Mecapaca con 533 ha
- Achocalla con 146 ha
- Laja con 28 ha
- y Palca con 10 ha

Efectos del crecimiento acelerado de la aglomeración urbana paceña

El área de expansión de la ciudad de La Paz, a finales del siglo XX, tuvo como asiento principal la ruta hacia el altiplano boliviano, donde se asentaron poco a poco urbanizaciones marginales de la ciudad. Así, lo que fue en sus inicios un barrio marginal de La Paz, la zona de El Alto, se constituye como ciudad el año 1988. La nueva ciudad ocupa el abundante espacio habitable sobre el altiplano¹⁴ expandiéndose a través de sus vías de conexión al interior del país (figura 12).

Un efecto notable en el crecimiento de la aglomeración urbana paceña fue la división de la ciudad de El Alto con La Paz. Los hechos políticos sociales han dividido esta aglomeración urbana dando la impresión de ser dos ciudades. Las versiones que indican la conurbación de La Paz y El Alto son falsas, porque El Alto nunca se separó espacialmente de La Paz. El Alto nació como una zona periférica y fue el área de mayor expansión de la urbe paceña. Sin embargo, las diferencias deterministas resaltaron en el contexto geográfico que dividieron a esta ciudad.

La división administrativa entre las ciudades de La Paz y El Alto se produjo por la influencia de su diferente contexto geográfico. Mientras, la ciudad de El Alto se asienta en una superficie casi plana sobre la meseta del altiplano, la ciudad de La Paz está sobre un valle fluvial con fuertes cambios de pendiente. En el tema social también existen disimilitudes entre ambas ciudades. El Alto es una ciudad joven¹⁵, es el resultado de la inmigración de las provincias más pobres del altiplano (Sandoval y Sotres 1989), mientras que La Paz es una ciudad históricamente colonial, constituida el siglo XVI asimismo es la Sede de Gobierno nacional que concentra la población de clase media y alta en la región.

Así, la configuración urbana de ambas ciudades se distingue por sus características espaciales. La ciudad de La Paz tiene una forma lineal que sigue la dirección del río Choqueyapu (figura 13). La ciudad de El Alto tiene una forma semicircular, característica de las ciudades en superficies planas, que rodea el nodo de la Ceja de El Alto¹⁶ (figura 14).

14 El Alto fue reconocido oficialmente como ciudad el primero de octubre de 1988 a través de la Ley 651, a pesar de que desde el año 1985 era un municipio independiente, separándose definitivamente de la jurisdicción de La Paz.

15 A través de la promulgación de la Ley del 6 de marzo de 1985 se dispone la creación de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto en el departamento de La Paz.

16 La convergencia de ambas ciudades se concentra en un punto vital de conexión en el lugar denominado "la Ceja de El Alto". Este lugar es un punto de acceso vial que conecta a las dos ciudades. Si bien existen otras alternativas de conexión vial entre ambas ciudades, "la Ceja de El Alto" es la más concurrida por su enlace con la Autopista.

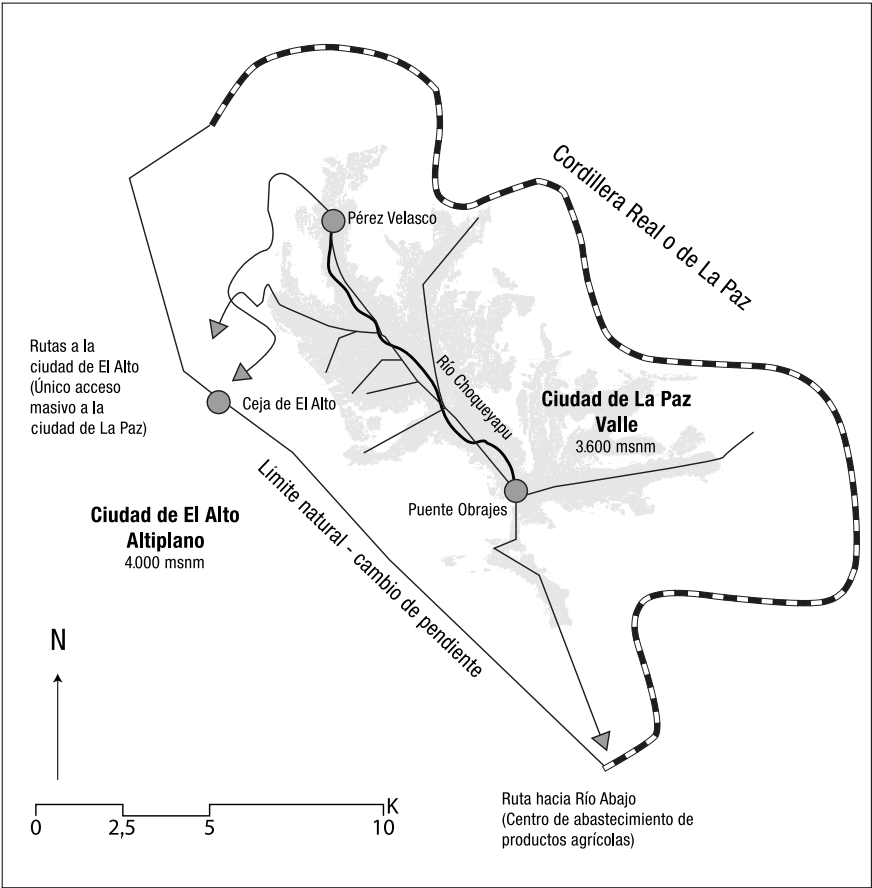


Figura 13: Forma lineal de la ciudad de La Paz siguiendo el río Choqueyapu
Fuente: Elaboración propia.



Figura 14: Forma semicircular de la ciudad de El Alto

Fuente: Baby (1995).

Las ciudades de La Paz y El Alto, diferentes en su contexto, están ligadas por el flujo e intercambio de sus servicios. Uno de los principales lazos que tienen en común son las redes viales y el transporte. Además, el desarrollo de la región urbana se dio justamente a través de sus vías principales de acceso (Saravia *et al.* 1976). Sin embargo, pese a los flujos e intercambios de servicios en la región urbana aún es difícil definir y proyectar un área metropolitana.

La división territorial de la región urbana en dos ciudades, que está claramente integrada por sus redes de servicios (transporte, electricidad, agua, vías, etcétera), y por la falta de una administración a la escala de la región metropolitana impide el análisis conjunto de estas ciudades.

Es importante tomar en cuenta que otro efecto del crecimiento acelerado en la aglomeración urbana paceña fue el desarrollo de las actividades informales de comercio y transporte que modificaron el funcionamiento de la ciudad. Este funcionamiento, a pesar de las divisiones político-administrativas, sigue teniendo en su esencia el rol de las actividades terciarias.

Conclusiones

Las actividades primarias fomentaron la instauración de nuevas ciudades y fortalecieron sobre todo las ciudades del Occidente de Bolivia en una determinada época. En una dimensión temporal más amplia se pudo observar que el desarrollo de las ciudades en esa región no fue constante. Al contrario, las ciudades de Occidente se debilitaron y la ocupación urbana siguió el desarrollo de las actividades primarias hacia el Oriente del país. La explotación de los recursos naturales definió la dinámica territorial de Bolivia. Las aglomeraciones urbanas siguieron las actividades económicas primarias que dependieron de los mercados internacionales, la oferta y la demanda de los recursos y la accesibilidad a la materia prima. Un ejemplo claro son las ciudades del Occidente como Potosí y Oruro, que sufrieron una decadencia después de la crisis de la economía minera. Estas ciudades de actividades principalmente primarias (materia prima para la minería) tenían una fuerte dependencia hacia esta actividad.

Por otro lado, se pudo comprobar que las actividades terciarias (comercio y servicios) otorgaron a la aglomeración urbana paceña una posición fundamental para su desarrollo y un constante crecimiento. Es a partir de estas funciones que la aglomeración urbana paceña fue capaz de soportar las peores crisis económicas, políticas y sociales del país. La localización y su conexión vial le otorgó a la ciudad una función comercial que fue clave como ciudad intermedia entre las partes bajas, los valles, los centros mineros y los puertos del pacífico. Esta función le dio el poder político y administrativo de la región. También se constituyó en un lugar estratégico para el control territorial desde la época de la Colonia hasta la actualidad.

La comparación entre las ciudades que siguieron una dinámica territorial que definió su localización y crecimiento con la aglomeración urbana paceña, demuestra que existen alternativas de planificación y desarrollo de los espacios urbanos que no siempre dependen de los recursos naturales. Las actividades terciarias, como el comercio, el turismo, las actividades financieras, entre otras, que no producen un bien tangible, son alternativas para el surgimiento o desarrollo de una ciudad. De la misma forma, su localización y su accesibilidad son elementos importantes para poder planificar estratégicamente el proceso de urbanización en el territorio nacional. En Bolivia, la localización y el desarrollo de las ciudades ha seguido un proceso espontáneo que dependió más de la explotación de sus recursos. En comparación, la aglomeración urbana paceña es un ejemplo imprevisto para el constante crecimiento de una ciudad.

Actualmente el crecimiento de la aglomeración urbana paceña sigue en expansión por las vías principales de conexión hacia Oruro, Desaguadero, Copacabana y Viacha. El principal impulso de este crecimiento siguen siendo las actividades terciarias como el comercio y la administración que constituyen un elemento clave para la subsistencia y el desarrollo de esta ciudad. Sin embargo, los efectos del crecimiento acelerado de la aglomeración urbana se deben tomar en cuenta. El funcionamiento, el orden, la administración territorial y la prevención de los riesgos en la ciudad son efectos directos que pueden producir cambios en la calidad y en el modo de vida de sus habitantes.

Las distancias a los servicios básicos de salud, de educación, etcétera son cada vez más largas. La administración territorial dividida en dos ciudades no permite proponer gestiones políticas a la escala urbana de la aglomeración paceña. Las diferencias económico-sociales y la concentración de actividades motivan la ocupación sobre lugares expuestos a amenazas naturales y humanas que están generando, cada vez más, una alta vulnerabilidad urbana.

El análisis de las consecuencias y los efectos del crecimiento de la aglomeración urbana paceña, producto de su localización y de sus actividades terciarias, servirán de base para proponer nuevas reflexiones que permitan estudiar la decadencia o el desarrollo de las ciudades. De esta forma, este análisis permitirá planificar las futuras ciudades. La explotación de nuevos recursos como el litio, el hierro y los hidrocarburos en el país configurará los espacios urbanos. Los desastres naturales y los cambios sociales modificarán los procesos político-territoriales; provocarán también el traslado y la creación de centros urbanos en el futuro. Por tanto, se debe tomar en cuenta los aspectos analizados para una adecuada configuración urbana territorial.

Bibliografía

- Ardúz, Gastón (1985) *Ensayos sobre la historia de la minería alto peruana*, Ed. Paraninfo S.A. Madrid.
- Baby, Virginie (1995) *El Alto de La Paz: Un bidonville d'altitude au coeur de l'amerique latine*, Tesis de Geografía de la Université de Paris X, Nanterre, Paris-Francia.
- Ballivian, Manuel Vicente (1900) *Noticia política, geográfica, industrial, y estadística de Bolivia*. Ed. Taller Tipo-Litográfico. La Paz-Bolivia.
- Benavides, Edgar (2004) *Metropolización*, UNFPA-CODEPO, La Paz-Bolivia.

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) y Bureau Central d'Études pour es Équipements d'Outre-Mer (BCEEO) (1977) *Plan de desarrollo urbano: Ciudad de La Paz*, HMLP, La Paz-Bolivia.
- Chuvienco, Emilio (2002) *Teledetección ambiental. La observación de la Tierra desde el Espacio*, Ed. Ariel. Barcelona-España.
- Del Valle Siles, María Eugenia (1994) *El cerco de La Paz en 1781*, Ed. Don Bosco, La Paz-Bolivia.
- Demoraes, Florent (1998) *Etude de l'évolution de l'agglomération de La Paz-El Alto depuis les vingt dernières années, compte tenu des contraintes environnementales du site*, Tesis de Maestría en Geografía, Université de Savoie, Savoie.
- Fisher, John (1977) *Minas y mineros en el Perú colonial: 1776-1824*, IEP, Lima.
- Gamarra Téllez, María del Pilar (1977) *Haciendas y peones en el régimen hacendario gomero boliviano, las bases económicas de un poder regional: la casa Suárez, 1880-1940*, Tesis de licenciatura, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA, La Paz.
- Garfias, Sandra y Hubert Mazurek (2005) *El Alto desde una perspectiva poblacional*, CODEPO, La Paz.
- Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (2010) *10 años de transformación*, GMLP, La Paz.
- GMLP (2007) *Plan de Desarrollo Municipal (PDM-JAYMA), 2007-2011*, Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), La Paz.
- Gomez D"Angelo, Wálter (1978) *La minería en el desarrollo económico de Bolivia 1900-1970*, Ed. Los Amigos del Libro. La Paz-Bolivia.
- Herrera, Juan Alberto (1997) *El amanecer de Arica y Tarapacá, s. XVI-XVIII*, IECTA, Iquique.
- La Prensa (2005) "La Paz, la ciudad del eterno cerco" en *La Prensa*, Anuario del 23 de diciembre de 2005, La Paz.
- Mazurek, Hubert (2006) *Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social*, PIEB, La Paz.
- Medrano, Guillermo (2009a) *La oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda geográfica 1896-1926*, Tesis de Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales, Carrera de Geografía, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.
- Medrano, Guillermo (2009b) *Historia del comercio exterior de Bolivia en el Liberalismo 1900-1920*, Ed. CIMA, Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia, La Paz.
- Mendoza, Germán (2006) "La red de tráfico comercial en la ciudad de La Paz, 1594-1595" en *Reunión Anual de Etnología*, MUSEF, La Paz.

- Oviedo, Fernando (1994) "Crecimiento poblacional del Oriente boliviano. Análisis de demografía histórica y su distribución geográfica" en *Hombre, sociedad y espacio*, Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés, No. II, La Paz.
- Pereira, René y Montaña, Jaime (2004) *El proceso de urbanización en Bolivia, 1992-2001*, CODEPO-INE, La Paz.
- Rossell, Pablo (1999) *Diagnóstico socio-económico de El Alto: distritos 5 y 6*, CEDLA, La Paz.
- Roux, Jean Claude (1994) "Los espacios de los orientes bolivianos" en *Hombre, sociedad y espacio*, Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés, No. II, La Paz.
- Salazar-Soler, Carmen y Guillaume Boccara (editores) (2002) "La Villa Imperial de Potosí cuna del mestizaje siglos XVI y XVII" en *Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (Siglos XVI-XX)*, Ed. Abya Ayala.
- Sandoval, Godofredo y María Fernanda Sostres (1989) *La ciudad prometida: pobladores y organizaciones sociales en El Alto*, ILDIS, La Paz.
- Saravia, Jorge, Jorge Otero y Grover Villegas (1976) *Modelo de crecimiento-Ciudad de La Paz*, Honorable Alcaldía de La Paz, La Paz.
- Tapia, Alfredo (1992) *Geografía del Departamento de Potosí*, Ed. El Siglo, Potosí.

El “archipiélago vertical” andino

El control vertical de pisos ecológicos y dinámicas contemporáneas de migración

Kaylen Jorgensen

... el estudio del entorno presente no es suficiente: la historia de la gente, la influencia de las regiones por las que ha pasado en sus migraciones, y las personas con las que estuvo en contacto, deben ser consideradas.

Franz Boas

La Etnología, así como la historia, no pierde en el pasado cuanto gana en el presente. De revisión en revisión, de perfeccionamiento en perfeccionamiento, su ámbito de aplicación se está extendiendo.

Jacques Meunier

Introducción

Mientras viajaba en un minibús por los mercados que se extienden por Cochabamba advertí cómo una mujer de pollera sentada a mi lado desenvolvía cuidadosamente un paquete. Sujetaba cada artículo y lo giraba una y otra vez en sus ásperas manos. Se secó las lágrimas y sacó del paquete una carta de su hija. La carta decía que los chocolates del paquete eran para sus hermanos, pero que se asegurara de que los compartieran y que el trabajo de la hija iba bien, pero que echaba de menos a su familia y que esperaba poder visitarlos pronto. La mujer entonces puso la carta sobre su regazo y le alisó las arrugas. Pude ver que sentía un gran orgullo y amor por su lejana hija.

Momentos como éste son comunes en Bolivia, donde la mayor parte de la gente con la que he hablado tiene parientes dispersos entre su lugar de origen y su ubicación actual. Muchas personas se han

trasladado en busca de trabajo de las zonas rurales altiplánicas hacia los grandes centros urbanos de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Por ejemplo, en Cochabamba la población urbana ha crecido de 80.000 personas en 1950 a casi un millón en la actualidad. Los migrantes andinos también viajan con frecuencia a países vecinos o a lugares tan lejanos como Europa y EE.UU. Los movimientos migratorios son una característica de la sociedad andina, de modo que el espacio entre lo rural y lo urbano puede ser entendido como una frontera ecológica cambiante a medida que cada vez más personas se mudan hacia la periferia de las zonas urbanas, expandiendo sus límites.

Quienes se trasladan de zonas rurales hacia áreas urbanas han aprendido a distanciarse de sus estructuras tradicionales de conocimiento para crear un sentido de pertenencia a las fronteras urbanas (Jones y de la Torre 2008). Estos autores se refieren a este mecanismo de adaptación como una “reducción cultural” por la cual los valores tradicionales se mantienen y refuerzan de manera que, aunque los miembros de la familia están separados, mantienen fuertes vínculos con sus comunidades de origen. El investigador andino Leonith Hinojosa (2007) explica este fenómeno como “cultura de la movilidad”, donde las redes comunitarias trascienden al espacio, vinculando individuos y lugares distantes permitiendo así un uso mejor y más sostenible de los recursos económicos, humanos o naturales, no solo para la supervivencia de la familia sino para la comunidad entera. Arminda Soliz, como boliviana que vive en España, afirma: “soy boliviana y siempre lo seré. Incluso si tuviera que estar cien años aquí en España, jamás pertenecería a ella. Yo siempre seré boliviana y mi país siempre será mi país” (Shultz y Draper 2008: 278).

Aunque la migración masiva hacia las ciudades de rápida expansión es un fenómeno relativamente reciente en Bolivia; la movilidad de largo alcance entre comunidades andinas ha demostrado ser un hecho frecuente desde tiempos prehispánicos (Murra 1972). El modelo del “archipiélago vertical” del antropólogo John Murra (1972) muestra cómo largas migraciones de población entre zonas ecológicas muy separadas entre sí han permitido a las comunidades andinas satisfacer las necesidades básicas de subsistencia manteniendo conexiones complejas y progresivas con sus comunidades de origen. El modelo refleja las formas en las que las poblaciones de las tierras altas centrales establecieron archipiélagos de asentamientos “insulares” diseminados, denominados por los incas *mitmaquna* (colonias) en una variedad de zonas ecológicas y productivas. Este modelo, aceptado ampliamente y enseñado por muchos, también ha sido revisado

minuciosamente (Pillsbury 2008). En conjunto, ha contribuido al debate vivo y ha reorientado la dirección de los estudios de migración andina desafiando la primacía de la noción occidental de crear comunidades en núcleo con territorios contiguos.

La revisión de los procesos históricos puede ser un valioso recurso para abrir nuevos terrenos que nos permitan comprender la migración contemporánea en Bolivia y para ver más allá de la tendencia cultural de las nociones occidentales de ubicación. Cambiando el enfoque de las comprensiones occidentales sobre migración y en una lectura de un contexto específico, este capítulo examina las prácticas de las comunidades dispersas que se desarrollan en el modelo de “archipiélago vertical” de Murra, mostrando cómo las estructuras ya establecidas de la organización siguen afectando a la identificación de la comunidad de hoy, aunque de manera fragmentada.

Como Brush y Guillet señalan, aún queda mucho por aprender y reflexionar sobre “los modelos de pensamiento y organización anteriores a la conquista, así como sobre las vicisitudes de la incorporación de sistemas locales en el sistema mundial” (1985: 29). Al mirar hacia atrás y tratando de entender el contexto de la movilidad de Bolivia a través del tiempo y del espacio, los andinistas continúan desafiando y difundiendo los asuntos sobre migración relevantes para las sociedades contemporáneas (Warren 2005).

La ubicación y el panorama andino

En un estudio sobre Bolivia, el geógrafo Harley P. Milstead (1928) observó que “en ninguna otra parte de la tierra había mayores contrastes físicos condensados dentro de espacios tan pequeños” (citado en Brush 1976: 149). Según Blom *et al.* “no hay nada tan esencial para las teorías de la formación del estado andino prehispánico como la relación entre las zonas nucleares de las mesetas altas y las regiones periféricas ecológicamente distintas” (1998: 240). Caracterizada como una de las grandes maravillas del mundo por su amplia gama de climas y variaciones de altitud, la impresionante diversidad ecológica de los Andes surgió como resultado de los continuos intercambios climáticos (Brush y Guillet 1985). La altitud (o cinturones climáticos verticales) afecta directamente a fenómenos ambientales tales como la temperatura, el viento, las precipitaciones, los tipos de suelo y la canalización del agua de la lluvia. Los hábitats naturales abarcan tanto bosques tropicales como tundra alpina y se pueden dividir en tres regiones diferentes: las mesetas altas, la región del valle y las llanuras

bajas. La región de la meseta montañosa azotada por el viento incluye La Paz y las zonas mineras más importantes como Potosí y Oruro. En la región del valle se encuentran los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Y las cuencas escasamente pobladas del Amazonas y Paraná pertenecientes a las tierras bajas del este, constituyen los tres departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

La morfología característica de Bolivia no solo ha fomentado un contraste de paisaje físico, sino también un paisaje político, social y económico dividido entre las zonas montañosas densamente pobladas y las zonas bajas escasamente pobladas. Según Kohl,

...desde la invasión española efectivamente ha habido dos Bolivias: una ligada a los mercados globales a través de la plata, el caucho, el estaño o el gas y la segunda, en gran parte indígena, enraizada localmente en una combinación de subsistencia y producción de mercado. Históricamente, esta segunda Bolivia ha recibido poca atención y asistencia por parte del gobierno (2002: 110).

Sin embargo, las comunidades andinas han logrado prosperar y florecer a pesar o gracias a su medio ambiente mediante la gestión de diferentes zonas ecológicas a través de pautas de uso comunal, donde el mundo natural no está ni previamente fijado. Tales estrategias han servido a la población de los Andes durante el dominio del Imperio Inca, durante la conquista española y, recientemente, durante los regímenes neoliberales de la globalización, y les han ayudado a retener su sentido de pertenencia en la medida en que se han adaptado ocupando nuevos terrenos, tanto físicos como imaginados (Salomon 1982).

Nociones de espacio

Hay muchas intencionalidades, teleologías, historias en funcionamiento y metáforas de lugares que viven en la estructura y los espacios públicos a pesar de que muchos de nosotros no tenemos referencias de ellos; sin embargo, el discurso occidental sobre la migración ha sido parcial en lo que respecta a la investigación académica.

Un ejemplo de ello es el argumento de Hardt y Negri (2000), quienes presentan una visión modernista de un concepto de “espacio” donde los conceptos de lugar y pertenencia existen únicamente en el ámbito de fronteras fijas. Estas nociones occidentales como la de la “limitación

de la ubicación” resultan divisivas cuando la concepción no occidental de lugar y de pertenencia se percibe con frecuencia como un retraso para las oportunidades de progreso y de desarrollo de la subsistencia (Daskon y Binns 2009). Bhabha (1994: 129) explica que la sociedad andina ha sido históricamente representada por Occidente como “objetos propios de una sucesión de dominio colonialista, versiones autorizadas de alteridad” siendo sus estructuras de conocimiento menospreciadas en gran medida. De hecho, las nociones occidentales de ubicación han llevado a los sacerdotes católicos a formar misiones con el principal objetivo de restringir la movilidad de los indígenas y aglomerarlos en terrenos confinados. La función de estas misiones fue descrita en 1946 por Weeks (1946: 552) quien escribió que las “misiones aún se mantienen en los puestos fronterizos para capturar, convertir, y someter a algunos de los indígenas menos salvajes a la civilización, que como neófitos aprenden la religión y las costumbres del hombre blanco”.

Una comprensión específica del contexto histórico de las sociedades y de las relaciones sociales es crucial para comprender los vínculos entre la migración y otras relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. No se podría concebir una imagen completa de la migración en Bolivia sin antes comprender su historia de colonialismo y racismo. Por ejemplo, en la primera conferencia conjunta peruano-boliviana en 1945, los ministros citaron que el último objetivo de la creación de una escuela rural indígena era “arraigar a los indígenas en su ambiente natural, la transmisión de la moral y la enseñanza orientada con el fin de evitar la despoblación del campo y la congestión demográfica de las ciudades” (citado en Gotkowitz 2003: 178).

La extensión de la autoridad del Estado usurpó inicialmente el control de las tierras comunales andinas durante el periodo Inca (Larson 1988). Si bien parte de la tierra de algunas regiones se reorientó con fines estatales, el control comunal *de facto* sobre el resto continuó. En el siglo XVI, las políticas coloniales españolas obligaron a la población indígena a vivir en asentamientos de nueva creación (reducciones), lo que constituyó la base de la destrucción del sistema de movilidad circular analizada por Murra. La imposición de los ideales cristianos y de la urbe española contribuyó a la extinción de ciertas instituciones y prácticas andinas antiguas (Murra 1972; Wachtel 1977). En este gran experimento de ingeniería social, 1,5 millones de indígenas andinos que se habían dispersado por territorios distantes se vieron obligados a aglomerarse en los pueblos de estilo europeo que se emplazaron en los paisajes andinos. El archipiélago fue reemplazado por el intercambio y por otras formas de circulación que significaban

largas caminatas, pero éstas fundamentalmente se diferenciaban en que el acceso directo ya no era un factor a tener en cuenta.

La expansión de los grandes estados, que se aceleró desde la segunda mitad del siglo XIX, efectivamente los despojó de la mayor parte de las mejores tierras de las comunidades indígenas, dejándolos con las tierras más pobres y más altas —esta apropiación de la tierra continúa deteriorando los modelos regionales del sistema indígena andino. Por ejemplo, la legislación en torno a quién tiene acceso a la tierra ha demostrado ser un mecanismo eficaz para garantizar cierta lealtad al Estado-nación y para enfatizar la racionalidad de los mecanismos del Estado contemporáneo. Bebbington señala que “las posesiones de una persona, tales como la tierra, no son simplemente el medio con el que uno se gana la vida. Éstas también le dan sentido al mundo de esa persona” (1999: 2022). Así, el progresivo deterioro de las tierras indígenas y su limitación gradual a los climas más altos ha sido un factor clave para la migración contemporánea, aunque hubo variaciones regionales relevantes debido a factores demográficos, ecológicos y de localización (Skeldon 1997).

Sarah Lund Skar (1982), basándose en el modelo de Murra en su investigación con los mapucheños demuestra que los grupos de las zonas altas entienden más el movimiento en términos de ampliación de relaciones con la comunidad a través de la colonización de nuevos ambientes. Sugiere que el concepto de “migración” debe de ser sustituido por el de “colonización” porque durante su investigación etnográfica ha encontrado que los andinos se ven a ellos mismos como colonizadores que mantienen vínculos con su comunidad de origen rindiendo homenaje a la zona que han colonizado, generalmente con la esperanza de que regresarán con el tiempo.

Portes (2007) ha señalado la dificultad de encontrar una teoría única que lo abarque todo sobre migración y que de todos los enfoques que existen ninguno examina si, de hecho, la migración solo se define y deriva de la necesidad del Estado para clasificar y repartir la movilidad espacial. Quizás la migración andina debería ser definida de otra manera, de modo que la modernidad podría desestabilizarse y reestructurarse de acuerdo a los términos andinos.

Negar las interpretaciones locales de movilidad encubre formas alternativas de ser y limita la capacidad de la persona para entender adecuadamente la dinámica de las migraciones contemporáneas en Bolivia. Para arrojar luz sobre el hecho global, es necesario un análisis del fenómeno histórico local. Con este fin, Murra (1985) abogó por una reconceptualización de la movilidad andina que hacía hincapié en la importancia de luchar contra las narrativas.

Imágenes del archipiélago vertical

El antropólogo Frank Salomon señaló que “antes de que [Murra] apareciera, la imagen de los Incas era de un esplendor bárbaro. El trabajo de Murra forjó una imagen radicalmente nueva de ese imperio” (*New York Times* 24 de octubre 2006). Salomon (2001) también se refiere al modelo del “archipiélago vertical” de Murra como la contribución más importante para explicar el éxito andino en los casos en los que la historiografía europea sirve de poca ayuda. De ella se deriva una comprensión de la naturaleza vertical de los sistemas de producción de los Andes centrales y el reconocimiento de la importancia de las soluciones de los Andes centrales a los problemas locales. Basándose en la evidencia etnohistórica y arqueológica, Murra dedicó su carrera a estimular la investigación y el debate sobre los Andes. Él explica que, “de todo mi trabajo, éste es el que ha provocado más polémica” (Murra citado en Rowe 1984: 336).

La investigación de Murra sobre la diversificación vertical y la autosuficiencia adaptativa abarcó las altas mesetas andinas, los valles de altitud media y las bajas laderas tropicales de la vertiente oriental (Murra y Rowe 1984). A partir de su investigación doctoral en 1956 sobre la organización económica de los incas, los hallazgos de Murra detallan cómo el modelo autónomo, aunque altamente interconectado, de asentamiento y de la organización amplió el alcance de los grupos étnicos a través de los pisos ecológicos del paisaje vertical. Murra revela la tradición cultural andina de control vertical a través del establecimiento de colonias semipermanentes en territorios distantes y con frecuencia multiétnicos.

Durante por lo menos dos mil años, las comunidades políticas multiétnicas, grandes y pequeñas, que caracterizaron el mundo andino presentaban ciertas características comunes de organización —fueran cuales fueran las lenguas habladas y fueran cuales fueran las montañas sagradas adoradas. Todos los grupos tenían una noción dispersa (o “esparcida”, según fuentes del siglo XVI) de territorialidad. Más allá de la íntima familiaridad con la agricultura del páramo y la gestión de las reservas, todos, incluidos individuos, unidades familiares, grupos de parentesco y reinos trataron de extender sus posesiones. Dependiendo del tamaño y de cambios de circunstancias del poder, los sistemas políticos de la meseta se esforzaron en mantener los valores permanentes de su propio pueblo en un máximo de pisos a fin de controlar directamente los territorios proporcionando los bienes que sus núcleos

no podían producir. Normalmente, la instalación periférica tenía que compartirse con otros grupos de la meseta (Murra 1984: 18).

Si bien el funcionamiento real de la verticalidad depende del paisaje, la clave fundamental en juego en la economía de estas comunidades es la reciprocidad y la redistribución. Herbert Klein (1992) evidencia las formas en las que la gente de la meseta mantuvo intactas las estructuras ecológicas verticales a través de siglos de expansión, cambio y conquista. Sin embargo, existen diferencias significativas entre el modelo vertical derivado de antiguos estudios etnohistóricos y los hallazgos de la investigación etnográfica contemporánea. Wachtel (1977) explica que el archipiélago vertical físico se ha modificado en un archipiélago estructural cuya hegemonía ha cambiado de naturaleza para que las cualidades autóctonas de las antiguas estructuras se transformen para producir nuevas configuraciones. De esta manera, las redes de la reciprocidad, el trabajo comunal y los rituales continúan informando a los emigrantes andinos contemporáneos a través de los modelos renovados de control económico y las transformaciones necesarias para la supervivencia.

A nivel comunal, ciertas estructuras tales como la organización ancestral, las costumbres, parte de las normas sociales y la estructuras de autoridad se han mantenido desde tiempos precoloniales (Larson 1988). Murra (1972) descubrió que históricamente el pueblo de los Andes Centrales había adquirido autosuficiencia a través de la articulación de las organizaciones de trueque, así como con la participación en el mercado en efectivo de las tierras bajas. Reconoció que esta circulación de mercancías producía y sostenía las redes de apoyo social (*ayllu*) que eran esenciales para su supervivencia en las vastas islas ecológicas (1985a, 1985b). En lo que sigue, consideraré algunos de los rasgos sociales y políticos característicos de los *ayllus* andinos, la no-territorialidad, el énfasis en la identidad basada en el parentesco y la jerarquía recursiva en el contexto de las comunidades andinas.

El papel del ayllu andino

Antes de la colonización española, la organización de la comunidad de los Andes Centrales se estructuraba en torno a grupos de familias extensas, ficticias y reales, los llamados “*ayllus*”, que no se limitaban a un solo territorio, sino que más bien se repartían a lo largo de decenas de kilómetros (Bebbington y Turner 1987). La incorporación de la movilidad generalizada, mientras mantenía las comunidades satélite, abarcaba los aspectos culturales, las características políticas y económicas de la vida cotidiana. Las comunidades se difundieron espacialmente

para que los miembros pudieran tener varias tierras en zonas diversas ecológicamente, desde la costa hasta los valles orientales. Este modelo de territorialidad del archipiélago contrastaba vivamente con las aldeas nucleadas de Europa y con el inmediato control territorial del Mediterráneo, característica distintiva de la cultura española. “Una visión panorámica de la cordillera oriental y de las cuencas intermontanas revelaría un mosaico de múltiples aldehuelas (normalmente disputadas), aisladas de sus vecinos, aunque atadas fuertemente a través de lazos de parentesco y a la ideología de sus “autoridades” étnicas lejanas” (1988: 20 Larson). Según Klein el sistema del archipiélago vertical basado en este “parentesco elaborado, intercambio y obligaciones laborales, fue fundamental para mantener una sociedad poderosa y económicamente vital en la meseta” (1992: 18). Como tal, los *ayllus* se han descrito como poseedores de estructuras “nidificadas” (Platt 1986), “de cajas chinas” (Astvaldsson 2000), y de “fracciones” (Goldstein 2005: 30).

Si bien esta forma de vida sufrió mucho debido a la poderosa destrucción del sistema administrativo andino por parte de los invasores españoles, la introducción de enfermedades y el maltrato de personas no quita el hecho de que después de 400 años de influencia europea actualmente haya grupos en los Andes Centrales cuya economía dominante, aún alterada por necesidad, se organiza a lo largo de las líneas del control vertical propuesta por Murra (1972).

Si bien no está claro cómo los *ayllus* se formaron inicialmente, Klein sostiene que: “los registros de los Andes sugieren que en un principio las motivaciones religiosas y/o técnicas fueron las que llevaron a la formación de complejos gobiernos intercomunitarios. La existencia de centros ceremoniales aislados de los asentamientos agrícolas y la creación de sistemas complejos de regadío parecen reforzar esta interpretación” (1992: 12). Los principios de asociacionismo del *ayllu* podrían referirse a colectividades de varias escalas ligadas con la descendencia de antepasados remotos. Éstos iban desde el cadáver real momificado de un ancestro fallecido más o menos recientemente hasta las parejas ancestrales que surgieron de un lugar de origen mítico para fundar grupos étnicos enteros (Salomon 1991: 22-24).

Las estrategias coloniales tanto de los incas como los españoles utilizaron la organización del *ayllu* en su propio beneficio aplicando nuevos ideales de ordenación del estado de la comunidad en el panorama social local (Silliman 2001). Estos invasores impusieron sus ideales de jerarquía y, a su vez, se enfrentaron a las interpretaciones y respuestas locales. Este proceso revela cómo se formó la representación local y cómo surgieron las nuevas disposiciones de la comunidad y del paisaje.

El arqueólogo William Isbell (1997) considera que el *ayllu* se originó a partir de las estrategias innovadoras de las comunidades locales en sus esfuerzos por resistir el avance de los estados expansionistas, como el Inca. Sin embargo, otros estudiosos han sugerido que la organización del *ayllu* formaba parte o bien de una estructura de mando centralizada y jerárquica (Kolata 1993) o bien de confederaciones segmentarias pero integradas (Goldstein 2005; Janusek 2004). La medida en que la movilidad y la identidad están interconectadas en la persistencia de *ayllu* puede explicarse, hasta cierto punto, como producto de la interacción con el Estado colonial (Murra 1975; Platt 1982; Albó 1995). Murra (1984) cree que la resistencia tenaz de los pueblos a las presiones alienantes indica una organización social de gran vitalidad y de gran importancia para el futuro del país.

A pesar de notables cambios, las ideologías y prácticas que tejieron los miembros de la comunidad en conjunto, como el trabajo en grupo y la ayuda recíproca, continúa ayudándolos en sus vidas cotidianas. Según Leinaweaver, “La migración, tanto de zonas rurales a urbanas como la transnacional, parecía presagiar la desintegración del *ayllu*, como un sistema de parentesco que en el fondo se basa en función del lugar. Sin embargo, incluso con la dispersión de los familiares y la integración de los *ayllus* en el espacio urbano, la gente ha encontrado formas creativas de utilizar su residencia para continuar haciendo y recapitulando fuertes lazos familiares” (2009: 779). La investigación ha demostrado la multiplicidad de formas en las cuales las prácticas cotidianas tales como compartir la comida, el trabajo, los espacios de vida y la compra de bienes materiales recrean continuamente el parentesco en los Andes (Van Vleet 2002). Como tal, la tradición no solo se representa con las “cicatrices del pasado”, sino también con “los presagios del futuro” (Daskon y Binns 2009). Esta forma de entender la tradición pone de relieve la multiplicidad de perspectivas consagradas en los valores humanos como inseparable de la producción de esperanzas e ilusiones para el futuro.

Críticas

El modelo de Murra ha generado mucho debate desde que presentó por primera vez su idea del “archipiélago vertical” y ha sido, asimismo, acusado de esencialismo, de exceso de generalización y de hacer una caricatura de procesos complejos variables en el espacio y en el tiempo. Goldstein señala que se ha puesto de moda desacreditar el concepto de “verticalidad” como “reduccionista, determinista,

y demasiado particular para los Andes” (2000: 189). La caricatura de una verticalidad vista como una “perspectiva funcionalista fácilmente ligada con el concepto ecológico de adaptación” se ha vuelto tan popular que incluso se le ha dado un nombre: “Lo Andino” (Van Buren 1996: 340). Yo sostengo que a las críticas les falta la implicación estructural más interesante de la naturaleza extendida de comunidades de lejano alcance, no solo de los Andes, sino más allá. Los hallazgos de Murra nos permiten considerar las comunidades de migrantes que se dispersan por el espacio geográfico; sin embargo, siguen estando muy unidas por una identidad compartida.

De acuerdo con Van Buren (1996: 341), “la perspectiva esencialista de Murra ha inhibido la comprensión de la variabilidad geográfica, cultural e histórica en las formas en que las poblaciones andinas piensan y gestionan sus recursos”. El archipiélago vertical, tal y como lo propuso Murra, se ha visto como un rasgo esencialmente andino, porque fue pensado para generar un ideal dominante a llevar a cabo por las poblaciones de los Andes Centrales. Van Buren también sostiene que el modelo de la verticalidad se ha incorporado de forma acrítica a los estudios andinos y que “ocultaba la variabilidad” entre las sociedades andinas alegando “adaptaciones estables sustentadas por la persistencia de las tradiciones culturales” (1996: 345). De hecho, la cultura se suele malinterpretar como una estructura rígida en lugar de ser vista como un recurso flexible que denota múltiples perspectivas que reflejan los ideales, los valores, las creencias y los sistemas de conocimiento utilizados para experimentar el mundo de manera significativa (Daskon y Binns 2009). Esta objeción se refiere a la percepción de que el marco teórico de Murra implica que las identidades son fijas, arraigadas localmente e inmutables. Por el contrario, la teoría de Murra demuestra que la tradición andina no es inmutable, sino que cambia constantemente, que se adapta continuamente a terrenos en constante cambio.

Del mismo modo, Orin Starn (1991) considera que gran parte de la investigación sobre las sociedades andinas ha sido moldeada por la tendencia de contrastar las poblaciones andinas de las tierras altas con las culturas occidentales y de representar a la primera como inmutable. La visión de Starn sobre la continuidad histórica en las sociedades andinas nos ayuda a recordar la necesidad de buscar interrupciones entre el pasado y el presente con el fin de tener sentido común de ellos. Lejos de ser inmutable, esta visión del mundo permitió a la gente de los Andes sobrevivir a trastornos políticos y medioambientales a través de la movilidad estratégica y la adaptación. El modelo de la verticalidad

fue “un ideal que dio forma a las relaciones sociales de producción e intercambio” y “que formaba parte integrante de una ideología y visión del mundo” (Larson 1988: 20). Con la adopción de un análisis instrumental o elección racional, puede verse que los individuos tienen preferencias, están orientados hacia objetivos y actúan intencionalmente en determinadas circunstancias. Bajo esta lectura, el modelo de Murra solo se puede entender cuando se analiza en su contexto histórico cambiante como una construcción social y no inmutable.

La aparición de formas modernas de vinculación con las unidades familiares y con la sociedad mundial es aún muy característica del ideal del archipiélago vertical. Al eliminar nuestra forma de entender la migración desde la necesidad occidentalizada por contar todo en términos de tiempo y lugar específico, algunos aspectos de la sociedad podrían verse como un modo de abarcar espacios tanto físicos como virtuales y patrones que no se corresponden con el continente que el Estado moderno podría desear imponerles. De acuerdo con un documento IWGIA titulado, “La liberación de los indígenas y movimiento de los derechos sociales en el Kollasuyo, Bolivia “[los indígenas] retan a la sociedad afirmando su patrimonio social y cultural, enfatizando la significación histórica de sus sistemas de auto-gobierno, defensa del desarrollo, etc...” (1978: 7). Con este fin, Murra ha demostrado el ideal en el que los andinos negocian circunstancias difíciles y, al hacerlo, guía el estudio hacia la valoración de la sociedad, de percepciones y aspiraciones de los migrantes mediante la continuidad simultánea y la transformación de las sociedades andinas.

Recorriendo espacios

Las difíciles condiciones económicas y ambientales en Bolivia, junto con el problema endémico de la escasez de tierras en las mesetas altas y la falta de oportunidades económicas, han dado lugar a niveles de migración crecientes desde las zonas rurales hacia los centros urbanos. Al igual que Murra, Cortés (2001) halló que la migración temporal de Bolivia no es solo una alternativa económica para el empeoramiento de la producción agro-pastoral, sino también una estrategia de diversificación y extensión espacial de métodos de suministro de alimentos que se han convertido en esenciales para la supervivencia de las familias. Según Archibald, “los andinos se manejan mejor en la metrópolis que ellos han reconstruido que sus vecinos los criollos y, a menudo con la ayuda de las prácticas que anteriormente parecían ser incompatibles con la vida moderna” (2007: 92).

Los grupos rurales originarios de los Andes se basan en una amplia gama de diferentes localizaciones (Cortés 2001). Su multilocalidad se puede entender de dos maneras: en primer lugar, en términos de “geografías de vida” y movimientos a través de distintos espacios y, en segundo lugar, en un sentido espacial, donde las redes vinculan a los miembros de la familia cuando van en búsqueda de supervivencia en lugares dispares (Archibald 2007). De acuerdo con el modelo del archipiélago, la migración y los vínculos familiares inherentes a la movilidad de los Andes podrían verse como parte de una red regional e incluso transnacional que contribuye a ampliar y articular los territorios de Bolivia. Este hecho agudiza de alguna manera el problema sobre quién pertenece a dónde —quién es el emigrante y, por lo tanto, el problema o el residente y que, por lo tanto, pertenece a, en relación con territorios específicos y espacio. Tanto históricamente como en la actualidad, puede encontrarse una serie de posibles órdenes sociales (Sassen 2006).

La migración contemporánea es más compleja en un segundo examen, donde las formas tradicionales de movilidad se han modificado profundamente debido a los procesos de globalización y desarrollo que han conducido a masivos desplazamientos de áreas rurales a urbanas. Esta intensa migración, provocada por la reestructuración neoliberal, en gran medida está fuera del control gubernamental y, a menudo, opuesta a los gobiernos locales. En lugar de depender del estado para sus necesidades, los migrantes andinos tienden a basarse en las relaciones recíprocas, como en la estructura del *ayllu*, con el fin de mantener un grado de autosuficiencia. Más allá de ser pasivos en su lucha, continuamente demuestran técnicas innovadoras para hacer frente a sus desafíos.

A pesar de que los Andes se han visto muy afectados por potencias extranjeras desde la primera mitad del siglo XVI, los mayores cambios han ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX con la economía capitalista mundial, que luchó para controlar e incorporarse en las zonas eficaces del territorio nacional que habían estado hasta ahora bajo el único control del gobierno (Cameron 2009). El siglo XX ha provocado las mayores alteraciones de las comunidades andinas con el sistema de patrimonio, la penetración del capitalismo de mercado, y varias iniciativas legislativas nacionales destinadas a la población indígena. La modernización de la minería en la meseta andina y el desarrollo de las economías de plantación en las zonas bajas del Este con la consiguiente mejora del transporte, las comunicaciones y la educación también tuvieron una profunda influencia.

Mientras que algunos de los patrones principales de la cultura andina se vieron afectados profundamente por el colapso de la población y los cambios políticos después de la conquista española, otros modelos más tradicionales asociados a los sistemas de subsistencia y adaptación local y al control de los recursos locales sobreviven hoy en día.

Sociedad adaptativa

A partir de Titi y Singh (1994), el término “adaptación” que figura en este escrito se refiere a cualquier cosa que aumenta la probabilidad de supervivencia y los modos como las personas locales, las familias y las comunidades cambian sus actividades productivas y modifican las reglas e instituciones de su comunidad para garantizar la subsistencia. El “modelo de adaptación” de la migración ve la aparición de las unidades familiares y comunidades como unidades sociales primarias en los Andes Centrales como una respuesta adaptativa al entorno local y regional (Brush 1977; Guillet 1978). Desde este punto de vista, la gente define lo que es importante y relevante a través de estrategias que cambian continuamente para asegurar la supervivencia de los cambios ecológicos, sociales y económicos. Esta perspectiva pone de manifiesto dos aspectos importantes de las estrategias adaptativas que se utilizaron en los hogares y comunidades. En primer lugar, estas estrategias son variadas y, en segundo lugar, reconocen un conjunto complejo de signos y señales biofísicas, sociales y económicas.

Según de Haan *et al.*, “la migración no es una reacción atomista a la presión económica o medioambiental, sino que se incorpora a las reglas y normas sociales. Más bien, los sistemas de migración ligan personas, familias y comunidades” (2000: 1). Las estrategias de los grupos andinos implican ideas tales como el intercambio de trabajo recíproco, un acuerdo para intercambiar tierras por mano de obra, el trabajo en los cultivos, así como dinero en efectivo, y un intercambio recíproco no monetario de diferentes cultivos de zonas diversas. Stark (1982) orienta el comportamiento de las personas emigrantes en un contexto social más amplio, y considerando no solo el individuo, sino centrándose en la familia o comunidad como la influencia más importante en la toma de decisiones sobre migración. En este contexto, la migración puede verse como uno de los elementos principales de las estrategias comunales para diversificar, asegurar y mejorar potencialmente los medios de subsistencia de la familia (Bebbington 1987). Incluso los economistas se han vuelto cada vez más críticos sobre el énfasis en la elección racional individual dentro de la teoría neoclásica, y están investigando el papel

de las familias, de las comunidades y de otros factores sociales en los procesos migratorios mediante estudios cualitativos y encuestas en hogares para entender la complejidad de las decisiones sobre emigración y su relación con otros factores (Stark y Levhari 1982).

El análisis etnohistórico de Murra (1972) sobre la vida en los Andes Centrales revela que tanto las estrategias coloniales de los incas como las de los españoles se proyectaban sobre la organización comunitaria existente mientras que al mismo tiempo prendía ideales de comunidades de estados-ordenados nuevos sobre el paisaje local. La reconstrucción del reasentamiento relacionada con los patrones indígenas de la organización del *ayllu*, del asentamiento y del uso de la tierra se experimentó a nivel local como una intensificación de asociaciones locales formadas por el régimen cambiante de la comunidad y el paisaje derivados del procesos de negociación entre los grupos de interés local y dos estados coloniales muy distintos. Las ideologías colonialistas caen en la presunción de rehacer las sociedades indígenas a imagen de los colonizadores. Tanto si las políticas coloniales se vuelven activamente en contra de una “cultura de la resistencia” o no, la “resistencia de la cultura” (Sahlins 2005: 4) genera nuevos tipos de personas y lugares cuando los individuos locales se comprometen a realizar planes de acuerdo a sus propios postulados y prácticas culturales. Entendido de esta manera, un análisis de los procesos de la transformación social vinculado a las formas en que los andinos contemporáneos migran, basadas en los lazos de parentesco, podría ser la base para una nueva comprensión de los vínculos entre la movilidad humana y la transformación social en los Andes. Esto podría verse como un cambio fundamental en la manera en que la sociedad se organiza y en las que los patrones sociales existentes se cuestionan y reconfiguran.

Las transformaciones sociales han estado estrechamente ligadas a cambios importantes en las relaciones económicas, políticas y estratégicas dominantes como se ve en la Revolución Nacional boliviana de 1952. Hoy en día, la globalización económica y los nuevos patrones de poder político están formando una nueva transformación social mediante la conceptualización de la migración como una parte esencial e integrante del proceso. Re-pensar, re-imaginar y re-conceptualizar la ubicación y la movilidad significa que la investigación sobre cualquier fenómeno de migración específica siempre debe incluir la investigación del contexto social en el que se lleva a cabo. En este caso, significa considerar las complejas estructuras inherentes a la multilocalidad, donde pertenecer a un lugar puede significar pensar fuera del “recipiente o contenedor”.

Conclusión

Este escrito ha tratado de difundir la necesidad de vincular las experiencias migratorias a nivel local contemporáneo e histórico, mientras que se recurre a nuevas ideas y se aprovechan las antiguas con el fin de desarrollar una comprensión de las relaciones de la migración-transformación. Con el uso de la investigación etnohistórica, los antropólogos andinos han demostrado que la migración ha sido utilizada como una estrategia de supervivencia, tanto en tradiciones populares como en indígenas. Esto sucede a pesar de que la migración moderna difiere de la movilidad en el pasado, ya que en ésta se ha activado mediante Internet, fax, televisión vía satélite y teléfono móvil la posibilidad de que la gente que esté en diversos lugares sea capaz de mantener las relaciones con más facilidad que nunca. También es plausible que los migrantes bolivianos conserven sus derechos de la tierra y regresen con regularidad para participar en actividades como recolección, siembra y celebraciones comunitarias. Los niños pasan sus vacaciones con sus abuelos en el campo y siguen cumpliendo las obligaciones contraídas con los aldeanos.

Desde los días en que el estudio de Murra provocó tanto debate, los estudios actuales de andinistas occidentales para articular cambios en los patrones de etnicidad, ecología y economía han estado mucho más en sintonía con las valencias política de las prácticas culturales indígenas y con las formas en que las economías rurales se vinculan a los mercados mundiales. Los estudios actuales son mucho más propensos a señalar la diversificación adaptativa, como esbozó Murra, confirmando la espectacular demostración de la singularidad y la viabilidad de los pueblos andinos. Para entender las formas en que se imagina y promulga la nación boliviana, es crucial continuar con la investigación relativa a las adaptaciones contemporáneas al medio ambiente a través de la migración.

Propongo examinar con más detalle el proceso mismo por el cual las colectividades gestionan personas poniéndoles un nombre y contándolas para, con ello, distinguirlas de los “residentes”; esto es fundamental por cómo el estado y la sociedad se constituyen en el primer lugar. El movimiento físico a través del espacio es algo natural, considerado como un hecho normal de la vida social humana; tal vez lo que es anormal, cambiante y construido históricamente es la idea de que las sociedades humanas necesitan construir fronteras políticas para definir y limitar la movilidad espacial para que la inmovilidad se convierta en la norma.

La importancia de la pertenencia no se puede entender completamente desde la mera base de la adaptación, la supervivencia y el alivio de la pobreza, sino que es también la base de la sociedad y el desafío de las normas lo que rige el control y la transformación. Una cuestión cada vez más frecuente en Bolivia y en la región andina en general se plantea con respecto a la nueva migración hacia nuevos destinos lejanos y hacia condiciones restrictivas que trabajan contra la migración circular tradicional (Fundación Pasos 2008). Sin embargo, como vimos en la carta de la hija a su madre citada al principio de este ensayo, la pertenencia y la ubicación dan significado al mundo de una persona sin importar lo lejos que ésta pueda viajar.

Bibliografía

- Albó, Xavier (1995) “Our Identity Starting from Pluralism in the Base” en John Beverley, Michael Aronna y Jose Oviedo (editores) *The Postmodernism Debate in Latin America*, pp. 18-34, Duke University Press, Durham, NC.
- Archibald, Priscilla (2007) “Urban Transculturations”, en *Social Text*, 93 25(4):91.
- Astvaldsson, Astvaldur (2000) “The Dynamics of Aymara Duality: Change and Continuity in Sociopolitical Structures in the Bolivian Andes”, *Journal of Latin American Studies*, 32(1):145-174.
- Bebbington, Anthony J. and B. L. Turner II (1987) “Review: Andean Ecology and Civilization. by Shozo Masuda; Izumi Shimada; Craig Morris” en *Annals of the Association of American Geographers*, 77(4):663-666.
- Bebbington, Anthony J and L. Hinojosa (2007) “Conclusiones: Minería, neoliberalización y reterritorialización del desarrollo rural” en A. Bebbington, ed., *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales*, Centro Peruano de Estudios Sociales y Universidad de Manchester, Lima.
- Bhabha, H. K. (1994) “Interrogating identity: The postcolonial prerogative” en D.T. Goldberg (editor) *Anatomy of racism*, University of Minneapolis Press, Minneapolis, pp. 183-209.
- Blom, D. E., B. Hallgrímsson, L. Keng, M. C. Lozada C. y J. E. Buikstra (1998) “Tiwanaku “Colonization”: Bioarchaeological Implications for Migration in the Moquegua Valley, Peru” en *World Archaeology*, 30: 238-261.
- Boas, Franz (1887) *The Principles of Ethnological Classification*.
- Bray, Tamara L. (2005) “Multi-Ethnic Settlement and Interregional Exchange in Pimampiro, Ecuador” en *Journal of Field Archaeology*, 30(2):119-141.

- Brush, Stephen (1976) "Man's Use of an Andean Ecosystem" en *Human Ecology* 4(2): 147-166.
- Brush, Stephen (1977) *Adaptive strategies of the poor in arid and semi-arid lands: In search of sustainable livelihoods*, Working Paper, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Brush, Stephen y David W. Guillet (1985) "Small-Scale Agro-Pastoral Production in the Central Andes" en *Mountain Research and Development* 5(1): 19-30.
- Cameron, John D. (2009) "Hacia la Alcaldía: The Municipalization of Peasant Politics in the Andes" en *Latin American Perspectives*, 36(167): 64-82.
- Cortes, G. (2001) "Rooted migrants: Land and rural development in the Valle Alto of Cochabamba, Bolivia" en A. Zoomers (ed.), *Land and Sustainable Livelihood in Latin America*, Royal Tropical Institute, Amsterdam, pp. 59-70.
- Daskon, Chandima and Tony Binns (2009) "Culture, Tradition and Sustainable Rural Livelihoods: Exploring the Culture-Development Interface in Kandy, Sri Lanka" en *Community Development Journal*.
- Fundación Pasos (2008) *Migración transnacional de bolivianos y bolivianas a la Argentina y su impacto en comunidades de origen*, Fondo Mink" a de Chorlaví, ICCO, IDRC, Canadá.
- Goldstein, Paul (2000) "Communities without Borders: The Vertical Archipelago, and Diaspora Communities in the Southern Andes" en J.Y.a.M. Canuto (ed.), *The Archaeology of Communities: A New World Perspective*, Routledge Press, London, pp. 182-209.
- Goldstein, Paul (2005) *Andean Diaspora: The Tiwanaku Colonies and the Origins of South America Empire*, University of Florida Press, Gainesville.
- Gotkowitz, L. (2003) "Revisiting the Rural Roots of the Revolution. In Proclaiming Revolution: Bolivia" en M.G.a.P. Domingo (ed.) *Comparative Perspective. Institute of Latin American Studies*, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University Press, London, pp. 164 -182.
- Guillet, David W. (1978) "The Supra-Household Sphere of Production in the Andean Peasant Economy" en *Actes du XLII Congres Internationale des Americanistes*, Paris, 4: 89-106.
- Hardt, Michael and Antonio Negri (2000) *Empire*, Harvard University Press, Cambridge and London.
- Harris, Olivia (1978) "Kinship and the Vertical Economy of the Laymi Ayllu, Norte de Potosí" en *Actes du XLIIe Congres International des Americanistes* 4: 19-29.
- Harris, Olivia y Xavier Albó (1984) *Monteras y Guardatojos: campesinos y mineros en el Norte de Potosí*, CIPCA, La Paz.

- Hinojosa, Leonith (2007) "Livelihoods and resource accessing in the Andes: desencuentros in theory and practice" en I.G.a.J.A. McGregor (ed.), *Well-Being in Developing Countries: New Approaches and Research Strategies*, Cambridge University Press (with others), Cambridge.
- Isbell, William (1997) *Mummies and Mortuary Monuments: A Postprocessual Prehistory of Central Andean Social Organisation*, University of Texas Press, Austin.
- Janusek, John W. (2004) *Identity and Power in the Ancient Andes: Tiwanaku Cities through Time*, Routledge, New York.
- Jones, Richard and Leonardo de la Torre (2008) *Diminished or Revitalized Tradition of Return? Transnational Migration in Bolivia's Valle Alto*, The Center for Comparative Immigration Studies, University of California, San Diego.
- Klein, Herbert (1992) *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society*, Oxford University Press, New York.
- Kohl, Benjamin (2002) "Stabilizing Neoliberalism in Bolivia: Popular Participation and Privatization" en *Political Geography* 21(4): 449-472.
- Kolata, Alan L. (1993) *The Tiwanaku: Portrait of an Andean Civilization*, Blackwell, Cambridge.
- Kuhn, Thomas (1962) *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago, Chicago.
- Larson, Brooke (1988) *Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1550-1900*, Princeton University Press, New Jersey.
- Lauer, Wilhelm (1993) "Human Development and Environment in the Andes: A Geocological Overview" en *Mountain Research and Development*, 13(2): 157-166.
- Leinaweaver, Jessica B. (2009) "Raising the roof in the transnational Andes: building houses, forging kinship" en *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 15(4): 777-796.
- McDowell, Christopher y Arjan de Haan (1997) *Migration and Sustainable Livelihoods: A Critical Review of the Literature*, Institute of Development Studies, Sussex.
- Meunier, Jacques (1983) "Ethnologists Perturbed by Their Success" en *Current Anthropology* 24(5):656-663.
- Milstead, H. (1928) "Distribution of crops in Perú" en *Economic Geography*, 4: 88-106.
- Murra, John (1972) "El "control vertical" de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas" en Jhon Murra (ed.) *Visita de la Provincia de León de Huánuco en 1562*, Universidad Nacional Hermillo Valdizan, Huanuco, pp. 429-76.

- Murra, John (1975) "El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas" en *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, pp. 59-115.
- Murra, John (1980) [1956] *The Economic Organisation of the Inka State*, JAI Press, London.
- Murra, John (1984) "Andean Societies" en *Annual Review of Anthropology*, 13: 119-141.
- Murra, John (1985a) "'El archipiélago vertical' revisited" en I.S.a.C.M. S. Masuda (ed.), *Andean Ecology and Civilization*, University of Tokyo Press, Tokyo, pp. 3-14.
- Murra, John (1985b) "The limits and limitations of the 'vertical archipelago' in the Andes" en I.S.a.C.M. S. Masuda (ed.), *Andean Ecology and Civilization*, University of Tokyo Press, Tokyo, pp. 15-20.
- Murra, John y John Howland Rowe (1984) "An Interview with John V. Murra" en *The Hispanic American Historical Review*, 64(4): 633-653.
- Pillsbury, Joanne (2008) *Guide to Documentary Sources for Andean Studies, 1530-1900*, Volume 3, University of Oklahoma Press, Norman.
- Platt, Tristan (1982) *Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el Norte de Potosí*, Instituto Estudios Perú, Lima.
- Platt, Tristan (1986) "Mirrors and Maize: The Concept of Yanantin among the Macha of Bolivia" en J.V. Murra (ed.) *Anthropological History of Andean Politics*, Cambridge University Press, New York, pp. 228-259.
- Portes, A (2007) "Migration, development, and segmented assimilation: A conceptual review of the evidence" en *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, pp. 610: 73-97.
- Rowe, J.H. (1984) "An Interview with John V. Murra" en *Hispanic American Historical Review*, 64, pp. 633-653.
- Sahlins, Marshall D. (2005) "Preface" en *Ethnohistory*, 51(1): 3-6.
- Salomon, Frank (1982) "Andean Ethnology in the 1970s: A Retrospective" en *Latin American Research Review*, 17(2): 75-128.
- Salomon, Frank (1991) "Introductory Essay: The Huarochirí Manuscript" en G. Urioste (ed.) *The Huarochirí Manuscript*, Austin, University of Texas Press, pp. 1-38.
- Salomon, Frank (2001) "Review: To Make the Earth Bear Fruit: Ethnographic Essays on Fertility, Work and Gender in Highland Bolivia by Olivia Harris" en *Journal of Latin American Studies*, 33(3): 654-656.
- Sassen, Saskia (2006) *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton.

- Shultz, Jim y Melissa Draper (2008) *Dignity and defiance: stories from Bolivia's challenge to globalization*, University of California Press, Berkeley.
- Silliman, Stephen (2001) "Agency, Practical Politics and the Archaeology of Culture Contact" en *Journal of Social Archaeology*, 1(2): 190-209.
- Skar, Sarah Lund (1982) *The Warm Valley People: Duality and Land Reform among the Quechua Indians of Highland Peru*, Shimada, Oslo.
- Skeldon, R. (1997) *Migration and development: A global perspective*, Blackwell, Cambridge and Oxford.
- Stark, Oded y David Levhari (1982) "On Migration and Risk" en *Ldcs. Economic Development and Cultural Change*, 31: 191-196.
- Starn, Orin (1991) "Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Perú" en *Cultural Anthropology*, 6(1): 63-91.
- Titi, V y Singh N. (1994) *Adaptive strategies of the poor in arid and semi-arid lands: In search of sustainable livelihoods*, Working Paper, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg.
- Tumiri Apaza, Julio (1978) *The Indian Liberation and Social Rights Movement in Kollasuyo (Bolivia)*, IWGIA Document.
- Van Buren, Mary (1996) "Rethinking the Vertical Archipelago: Ethnicity, Exchange, and History in the South Central Andes" en *American Anthropologist* 98(2): 338-351.
- Van Vleet, K. (2002) "The Intimacies of Power: Rethinking Violence and Affinity in the Bolivian Andes" en *American Ethnologist*, 29(3): 1-35.
- Wachtel, Nathan (1977) *The Vision of the Vanquished: The Spanish Conquest of Peru through Indian Eyes, 1530-1570*, Barnes and Noble, New York.
- Warren, Kay B. (2005) "Repositioning without Capitulation" en *Critique of Anthropology* 25(3): 217-228.
- Weeks, D. (1946) "Bolivia's Agricultural Frontier" en *Geographical Review* 36(4): 546-567.

De la contradicción al *continuum* urbano rural

La urbanización, el legado colonial y la cultura de la democracia

Charles Dolph

Bolivia ha vivido importantes cambios relacionados con la urbanización y democratización desde las reformas neoliberales inauguradas con la Nueva Política Económica (NPE) de 1985. Mientras tanto, la población ha crecido en las áreas urbanas y periurbanas de El Alto, La Paz, Cochabamba, el Chapare, y Santa Cruz (para nombrar solo las más destacadas). Las prácticas políticas y sociales han sido reformuladas en nuevos contextos urbanos en respuesta al régimen neoliberal, forjando una convergencia entre distintas tradiciones de la democracia y la participación política. Argumento que esta convergencia está íntimamente ligada al proceso histórico y al conjunto de relaciones que caracterizan la urbanización y la trayectoria del Estado en el contexto boliviano. Los éxitos de los movimientos sociales de la última década reflejan esta convergencia a nivel estatal y en sus relaciones con la urbanización en Bolivia.

El artículo tiene dos objetivos: trazar la urbanización boliviana a largo plazo, primero, para contextualizar la importancia de “lo urbano” en Bolivia; segundo, como el campo de batalla y también de “las apuestas de lucha” (Lefebvre 1991: 386, mi traducción) para proyectos democráticos en la última década. Para ello, procuro mostrar las raíces coloniales de la urbanización boliviana y el legado liberal heredado por un Estado históricamente débil. Presento las olas de urbanización fomentadas en Bolivia por los cambios en los regímenes de acumulación y las reconfiguraciones de poder político que implican. Según Silvia Rivera Cusicanqui, hubo tres ciclos históricos que interactúan en la Bolivia contemporánea. Son el ciclo colonial, el ciclo liberal y el ciclo populista o pos-1952 (1990: 98-99). Rivera Cusicanqui sostiene que las reformas económicas y políticas impulsadas por el Estado boliviano, desde las reformas liberales de los fines del siglo XIX hasta la época neoliberal, han profundizado formas coloniales de opresión.

Según Rivera, hay “una fundamental contradicción colonial entre la manera de ver el mundo y las culturas de las élites urbanas mestizo/criollas y los *ayllus* indígenas (comunidades rurales). Esta contradicción ha sido un factor central en formar las acciones del Estado y el sector dominante *vis-à-vis* la mayoría indígena campesina del país y las acciones del campesinado indígena hacia sus opresores” (1990: 98, mi traducción). O sea, el encuentro colonial engendró una contradicción urbano/rural que ha tenido un impacto sumamente importante en la formación de la sociedad boliviana. El Estado boliviano, en los dos siguientes ciclos de reformas políticas y económicas (las reformas liberales al fin del siglo XIX y el ciclo populista después de 1952), profundizaba la situación colonial.

El Estado boliviano aparece aquí como la inversión de “el Estado mágico” propuesta por Fernando Coronil (1997) en el caso venezolano. No es hasta el siglo XX y especialmente la Revolución de 1952 (precipitada por la Guerra del Chaco) que el Estado procura incorporar la mayoría indígena en el proceso político, imponiendo la definición liberal de ciudadanía en contradicción con el concepto de democracia directa de los *ayllus* (Rivera 1990)¹. La Revolución de 1952 también resultó en la nacionalización del sector minero que impulsó el surgimiento del movimiento obrero (dominado por los mineros) como el principal actor político en contra del Estado. La Reforma Agraria de 1953 intentó parcelar las tierras comunales. La Revolución de 1952 movilizó vastos sectores de la población e inició una nueva ola de urbanización y democratización en el ciclo populista (Rivera 1990).

La Nueva Política Económica (NPE) de 1985 funciona como la bisagra entre la Revolución de 1952 y el escenario contemporáneo en Bolivia, consolidando el poder del Estado sobre la sociedad boliviana. Utilizando el concepto de “acumulación por desposesión” de David Harvey y sus argumentos sobre “el nuevo imperialismo” (2003), evalúo desde una perspectiva de economía-política los movimientos sociales desde la NPE y sus fuertes conexiones con el proceso de urbanización en Bolivia. Argumento, finalmente, que el proceso de urbanización boliviana desde la NPE ha puesto en primer plano, en el campo urbano de batalla, las diferencias que Bolivia lleva a la “cultura de la democracia” (2006), revelando las posibilidades aún incoadas para la nación-Estado como una forma política en Bolivia.

1 Los *ayllus* son el sistema precolonial de parentesco y etnicidad que persisten en el presente. Véase Rivera Cusicanqui (1990: 98-102) para una descripción más detallada del funcionamiento de los *ayllus*.

La urbanización: un proceso y un conjunto de relaciones

La definición de la urbanización que utilizo aquí sostiene que el proceso de urbanización capitalista comienza en el encuentro colonial. Este proceso político, violento e histórico engendra un conjunto de relaciones: entre el campo y la ciudad, nuevas clases sociales, *criollos* e *indios*, la política y la económica, el capital y la mano de obra. Tal como la distribución geográfica de recursos naturales es desigual, la urbanización capitalista procede en una manera geográficamente desigual, pero siempre con la misma necesidad de expansión.

Hay que considerar también las implicaciones de nuestra tesis que trata a la urbanización capitalista como un conjunto de relaciones. De acuerdo con Henri Lefebvre (1991) y Silvia Rivera Cusicanqui (1990), el proceso de urbanización capitalista dio paso a la relación entre el campo y la ciudad. Es necesario reconocer que en el proceso de la urbanización capitalista, el campo y la ciudad entran en una relación dialéctica, para que el campo, *en su relación con la ciudad*, sea espacio urbanizado. Entonces “lo urbano” aquí no es sinónimo de “la ciudad.” El proceso de extraer riqueza del campo y concentrarla en la ciudad engendra una relación de desigual poder político; en este sentido, se puede hablar de la formación de centros y periferias así como de las relaciones que surgen entre ellos. En el proceso, el espacio urbano concentra varias cosas: muchedumbres, bienes en el mercado, símbolos y prácticas sociales convirtiéndose así en el campo de batalla y en las “apuestas de lucha” (Lefebvre 1991: 101, 386) para proyectos democráticos.

Las raíces coloniales de la urbanización y el Estado en Bolivia

En la época colonial, la minería y el sistema agrario están históricamente ligados al proceso de la urbanización boliviana. La primera ola de la urbanización capitalista en Bolivia fue conducida por Francisco de Toledo (quien ascendió al virreinato en 1569) a través de la instauración de las Reducciones. Según Kohl y Farthing (2006: 38), 900 comunidades con un total de 129.000 personas fueron concentradas en 42 pueblos a fin de facilitar la *mita*, el cobro de tributos y la conversión de la población al cristianismo.

Las minas producían más de la mitad del oro y plata al nivel mundial entre mediados del siglo XVI y mediados del XVII (Kohl y Farthing 2006). No obstante, la conquista nunca fue completa. La

incapacidad de incorporar el sistema de *ayllus* al sistema colonial significa que solo una tercera parte de la población fue incorporada en el sistema de haciendas (Kohl y Farthing 2006: 39). Al mismo tiempo, Potosí (debido a la minería) se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XVII, con 160.000 habitantes (Kohl y Farthing 2006).

El régimen de acumulación que servía al poder político colonial (y en gran parte financió su expansión globalmente) significó lo que Marx denominó la “acumulación primitiva”: la plata del Cerro Rico tenía como principal destino las arcas de la corona española. Este régimen inauguró la producción de un nuevo espacio, el espacio colonial de la urbanización capitalista y de un nuevo conjunto de relaciones entre el campo y la ciudad, entre clases sociales, entre *criollos* e *indios*, entre política y economía.

En este contexto de urbanización violenta, los poderes coloniales comenzaron a establecer ciudades como La Paz y Potosí. La fundación de La Paz inscribió la política racista del colonialismo en el paisaje físico y social, “inmediatamente, dos plazas fueron establecidas —una española, donde Alonso de Mendoza tomó posesión, y otra para indios a un par de cuadras, donde posteriormente sería la Avenida de América... El río *Choqueyapu* funcionó como la frontera no oficial” (Guss 2006b: 296, mi traducción). *Chuquiago* es el nombre aymara para el valle que La Paz ocupa, mientras *Choqueyapu* refiere a la abundancia de oro en el área, una atracción principal para Alonso de Mendoza y los españoles.

Según los historiadores Randy Chávez y Carlos Gerl, la construcción de la plaza “obedeció a la ordenanza de las ciudades españolas delineadas en forma de damero con manzanas simétricas, rectangulares y de iguales dimensiones” (*La Razón* 2010). Las *Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias* decretadas por Felipe II en 1573 tenían el objetivo de implementar la jerárquica estructura social colonialista a través de la producción de su espacio urbano (Lefebvre 1991: 250-252; Kinsbruner 2005). Vemos que en la primera etapa de la urbanización capitalista en la región andina la imposición del poder político colonialista supuso la violación de un espacio ya existente.

El legado colonial en la época republicana

El Estado boliviano ha heredado el legado del colonialismo (Riviera 1990; Kohl y Farthing 2006), que se refleja en un conjunto de

dinámicas como: 1) la apropiación de los recursos naturales por una élite nacional e internacional; 2) la resistencia a esta apropiación por la población indígena; y 3) una tensión entre las regiones. El resultado ha sido un Estado crónicamente débil, dominado por los intereses de una élite, e incapaz de integrar vastos sectores de la población social, cultural o políticamente.

El legado colonial y el liberalismo

El segundo ciclo histórico en Bolivia es el de las reformas liberales del fin de siglo XIX. La Ley de Exvinculación de 1874 es el ejemplo paradigmático del legado colonial heredado por el Estado en este ciclo (Rivera 1990: 102-107; Kohl y Farthing 2006: 40-43)². Tenía el objetivo de abolir el *ayllu* (algo que no fue conseguido por la política reduccional), parcelar tierras comunales y reemplazar el tributo con un sistema de impuestos. Rivera Cusicanqui sostiene que la Ley de Exvinculación era “un ataque colonial renovado hacia los territorios y pueblos en los *ayllus*” que intentó restablecer formas “serviles-coloniales de organización laboral” y que “reproducía la contradicción colonial rural-urbano” (1990: 103, mi traducción).

El esfuerzo de otorgar títulos para tierras antes comunales era un ataque a las formas comunitarias de tenencia de la tierra y de producción agrícola. Hasta 1945, cada constitución de la República distinguía entre lo que significaba ser *boliviano* —una persona nacida en Bolivia o casado(a) con un boliviano(a), y ser *ciudadano*—un hombre alfabeto con propiedad privada (Kohl y Farthing 2006: 41). Es en este sentido que el antropólogo jesuita Xavier Albó nota que “con la República apenas cambió la situación colonial aymara anterior... salvo por un aumento de las haciendas, sobre todo desde que, tras la victoria de los liberales sobre los conservadores en 1899, la sede del gobierno y de los negocios mineros se trasladó a La Paz” (2006: 330).

Consolidación del Estado en la Revolución de 1952

La Revolución de 1952 representa una continuación de formas coloniales de opresión, basadas en el legado colonial y el liberalismo heredado por el Estado boliviano. La Reforma Agraria de 1953 y la nacionalización del sector minero fueron dos de las medidas económicas fundamentales del nuevo régimen.

2 Según Rivera Cusicanqui (1990: 102), esta ley era posible por el aumento en ingresos de la minería, facilitando la eliminación del tributo bajo el pretexto de “emancipar” la población rural y otorgarle una ciudadanía “igual.” Se ve aquí, otra vez, la interdependencia entre los sectores agrarios y minerales.

La Reforma Agraria alentó una “reforma urbana” en La Paz, pero también el traslado de la actividad agraria hacia el oriente del país y la creación de una nueva oligarquía de hacendados en esta región.

Había cambios de mayor importancia alrededor del sector minero también. A medida que Bolivia dependía económicamente cada vez más del sector minero en la primera mitad del siglo XX, la oligarquía también monopolizó el poder político en Bolivia en la época prerrevolucionaria (Ibáñez Rojo 1993, 2000).³ El MNR nacionalizó la minería después de la Revolución y surgió una nueva clase obrera compuesta principalmente por los mineros. El movimiento obrero (dominado por los mineros) surgió como el principal actor político que estaba fuera del control del Estado.

La COB actuó como un contrapeso al Estado... logrando los cambios más radicales de la revolución... A diferencia de los movimientos obreros en muchos países, el movimiento obrero en Bolivia extendió mucho más allá de asuntos relacionados solamente al trabajo... fue la oposición principal a la política gubernamental por más de cuarenta y cinco años. La COB servía para fusionar las demandas para derechos obreros en Bolivia con la lucha por los derechos sociales y civiles (Kohl y Farthing 2006: 48, mi traducción).

Comunidades de miles de mineros propiciaron situaciones de interdependencia mutua con las economías rurales en las regiones de minería, forjando una urbanización peculiar a estas regiones. No obstante, la persistencia de la contradicción urbano/rural profundizaba el legado colonial, la debilidad del Estado y la disyuntiva entre los conceptos liberales y populares de democracia y ciudadanía.

Consolidando el Estado: La Nueva Política Económica (NPE) de 1985

En 1985, el Decreto Supremo 21060 del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro dictaba el cierre de las minas (Nash 1992; Gill 1997). El estaño se había desplomado en los mercados internacionales y

3 Cuando la demanda global para el estaño cayó en los años treinta, debido a la Gran Depresión comenzada en 1929, el Presidente Daniel Salamanca atacó las tropas paraguayas en El Chaco, precipitando la Guerra del Chaco (1932-35) en la cual Bolivia perdió casi 20% de su territorio nacional (Kohl y Farthing 2006: 44). No obstante, la Guerra del Chaco tenía el efecto de movilizar los obreros, campesinos, y estudiantes con un nuevo sentimiento de nacionalismo (fuertemente dirigido hacia las oligarquías de la minería y la agricultura), produciendo las condiciones socio-políticas para la Revolución de 1952 (Kohl y Farthing 2006).

los controles de precios. 17.000 de los 27.000 mil mineros empleados por COMIBOL fueron despedidos hacia octubre de 1986 (Nash 1992: 289).

Sin embargo, la Nueva Política Económica (NPE) agenció el respaldo al gobierno de Paz Estenssoro (y luego Sánchez de Lozada), debido al control de la hiperinflación. Esta credibilidad representó una forma de capital político que los gobiernos convirtieron en el poder de imponer un régimen neoliberal de privatizaciones después de 1985.

Igual que en las reformas liberales al final del siglo XIX (La Ley de Exvinculación de 1874) y la Revolución de 1952 (la Reforma Agraria de 1953), Sánchez de Lozada promulgó mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la nueva ley de reforma agraria llamada Ley INRA, de 1996. A diferencia de la Reforma Agraria de 1953 que formalizaba las incursiones de campesinos/indígenas en las tierras de los hacendados, la ley INRA de 1996, al contrario, otorgaba tierras a los que pagasen impuestos. En este sentido, la reforma agraria de 1996 era un nuevo intento de abolir el *ayllu* a través de titular tierras a individuos.

La NPE actúa como la bisagra histórica entre la Revolución de 1952 y el escenario contemporáneo, logrando consolidar el poder del Estado sobre el movimiento obrero y el proceso de reforma agraria. Como lo explicó Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces Ministro de Planificación y él mismo elegido presidente dos veces, las reformas neoliberales eran un “plan político” implementado para “restablecer la autoridad del Estado sobre la sociedad” (Ibáñez Rojo 1993: 83; véase también Sanabria 2000: 63).

Las privatizaciones, los despedidos de miles de trabajadores, y la nueva ley agraria tuvieron un importante efecto en la urbanización boliviana. Vastos sectores de la población procuraban trabajo, pero con una nueva oligarquía de hacendados en el oriente del país, actividad agraria cada vez más orientada a la agroindustria y a la “capitalización”, obviamente incapaz de crear empleos. Miles de personas migraron a las ciudades, al Chapare (Cochabamba), a la emergente ciudad de El Alto y afuera del país para buscar empleo (Gill 1997; Mansilla 1996). La NPE y el régimen neoliberal, más allá de consolidar el poder político en el Estado, aceleraron la ola de urbanización que comenzó durante el ciclo populista después de la Revolución de 1952. El Alto, Santa Cruz, y el Chapare se constituyeron en los tres nuevos asentamientos urbanos (El Alto tenía aproximadamente 3.000 habitantes en 1950, y hoy en día tiene casi 900.000; Santa Cruz

era un pueblo rural de 42.000 habitantes en 1950, ahora tiene una población de aproximadamente 1.135.000 personas y es la ciudad más grande del país; el Chapare, a principios de los noventa tenía entre 350.000 y 400.000 habitantes, aproximadamente). También el crecimiento de las ciudades de La Paz y Cochabamba ha sido impresionante. David Guss (2006a: 259) anota que la población de La Paz se ha multiplicado por 300% desde 1950, mientras Cochabamba ha crecido de 80.000 a más de 800.000 habitantes (Albó 2006; Guss 2006a; Argañarás 1997).

Lo urbano y la cultura de la democracia en los 2000

Así, la ciudad y la esfera urbana son el sitio de lucha; son, también, las apuestas de lucha.

Henri Lefebvre (1991: 386, mi traducción)

Continuaremos profundizando la democracia, consolidaremos las políticas económicas, pues los tiempos de la Bolivia mendiga, indigna, se han terminado.

Evo Morales Ayma, en el discurso para su segunda investidura como presidente de Bolivia, 22 de enero 2010

Después del referéndum en agosto de 2008 para los nueve prefectos departamentales, el presidente y el vicepresidente, Evo Morales expulsó al embajador norteamericano bajo el pretexto de un complot para socavar su presidencia, diciendo que “no queremos personas aquí que conspiran en contra de la democracia”⁴. Esto subraya lo que Robert Albó (2006) identifica como la variación dentro de la “cultura de la democracia”, con una tradición democrática popular basada en protestas, en acción directa, en un sentimiento antipartidista e informado por diversos sectores como el movimiento obrero y campesino como los *ayllus*, chocando con la tradición liberal de la democracia que enfatiza el proceso democrático, basado en instituciones, urnas, partidos, y representación. El objetivo de esta parte del artículo es identificar el rol preponderante de la urbanización en poner estos conceptos de la democracia en primer plano y evaluar cómo “lo urbano” es más que nunca el campo de batalla y las apuestas de lucha para proyectos democráticos antagonistas.

⁴ *New York Times* (Romero 2008; mi traducción).

La urbanización y los movimientos sociales en Bolivia

La Plaza Murillo es el símbolo de cómo “lo urbano” se ha vuelto en el campo de batalla y apuestas de lucha entre conceptos antagónicos de la democracia. Como dijo Armando Urioste, entonces Oficial de Cultura de La Paz:

Ciudades no son simplemente la imposición física de edificios y calles. Son, más que todo, espacios de intercambio simbólico, por lo cual las culturas que comparten estos medioambientes manifiestan sus derechos al uso del espacio público (citado en Guss 2006b: 299; mi traducción).

Hasta 1952, la población indígena no solamente no podía votar sino que ni siquiera podía entrar a la Plaza Murillo. Así, la investidura de Evo Morales como presidente (ya dos veces) en la Plaza Murillo es un hecho históricamente simbólico, al punto que la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa propone cambiar el nombre de la Plaza Murillo y nombrarla “22 de Enero” para la fecha en cual Evo Morales tomó la presidencia⁵.

En realidad, los movimientos sociales han tenido un carácter especialmente urbano al menos desde 1781, cuando un grupo de aymaras y quechuas liderados por Tupa Katari y su esposa Bartolina Sisa sitiaron La Paz. Este acontecimiento, según Xavier Albó, es de importancia fundamental para el escenario contemporáneo en Bolivia:

La memoria de aquellos años ha quedado profundamente grabada en el subconsciente de todos, con un síndrome de culpa y miedo en los descendientes de los sitiados; y como un modelo y bandera de lucha en los aymaras, a pesar de que entonces salieron derrotados (2006: 330).

Los movimientos sociales en Bolivia desde 1985 tienen un carácter urbano con fuertes conexiones con el campo. Pero el momento en que cristalizó la época actual de movimientos sociales urbanos fue “la catarsis de 2003” (Albó 2006) que comenzó en El Alto. Según Xavier Albó (2006: 342), la catarsis comenzó con el “febrero negro” de 2003 sobre un nuevo impuesto en salarios, cuando las policías y el ejército intercambiaron balas, dejando 15 muertos y casi cien heridos.

5 Aunque hay poca chance de cambiar el nombre por varias razones (*La Razón* 18 de enero 2010), es una idea simbólica de la importancia del espacio urbano en la última década.

La catarsis culminó en octubre de 2003, cuando el plan de exportación de gas natural a los EE.UU. a través de Chile provocó un masivo rechazo del pueblo boliviano. Bajo el creciente liderazgo del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales, y con la participación clave de líderes campesinos como Felipe Quispe, el “octubre negro” agregó asuntos diversos y actores sociales en varios sectores de la sociedad civil, uniendo el campo y la ciudad a escala nacional:

Gas, impuestos, autonomía; juntas urbanas y dirigentes rurales; aplicación de la justicia e identidad; pugnas políticas y protesta generalizada. Todo conducía a todos para movilizarse tanto en la ciudad como en el campo. Si el Febrero Negro reflejó sobre todo la vinculación entre La Paz y El Alto y la frustración de sectores jóvenes de la metrópoli, el Octubre Negro expresó los fuertes lazos entre El Alto y el agro aymara y también con un amplio movimiento político nacional (Albó 2006: 344).

Según James Dunkerley (2007: 139), uno de los momentos más simbólicos de la catarsis de 2003 ocurrió en el pueblo de Patacamaya donde un minero y un coronel se abrazaron y el coronel dejó pasar 58 camiones de obreros que pedían la renuncia de Sánchez de Lozada.

Según David Harvey, los movimientos sociales de resistencia al “nuevo imperialismo” del neoliberalismo reflejan, en general, un “alejamiento en el terreno de organización política desde los partidos políticos tradicionales y movimientos obreros hacia lo que era en agregación necesariamente una dinámica política menos enfocada de acción social a través del espectro entero de la sociedad civil” (2003: 168; mi traducción). La situación boliviana refleja importantes conformaciones y diferencias con el marco de Harvey. En primer lugar, es obvio que los movimientos sociales en Bolivia en la última década han surgido en respuesta a las fuerzas del mercado y la nueva ronda de acumulación por desposesión implementada después de la NPE. La “catarsis de 2003” también refleja claramente una dinámica de acción social dispersa, desprovista de una ideología dogmática y a escala nacional (Albó 2006).

Para entender los éxitos de los movimientos sociales urbanos, sugiero que deben ser interpretados desde la nueva articulación entre clase y etnicidad, un proceso que Leslie Gill (1997) ha nombrado “relocalizando clase”. Rivera Cusicanqui (1990: 107-115) ha notado que aunque las estructuras organizacionales de los sindicatos obreros y los *ayllus* eran frecuentemente compatibles, esto no era verdad para sus metas y métodos políticos. En este contexto, el

vicepresidente actual, Álvaro García Linera, identifica que había un aislamiento entre intereses obreros e indígenas en la época neoliberal. Según García Linera, el éxito de los movimientos sociales desde el 2000 se debe a la rearticulación de clase con etnicidad: “Creo que estamos en un nuevo esfuerzo histórico después de casi cien años, de un diálogo mucho más fructífero entre los dos grandes entendimientos de la transformación de Bolivia, es decir Indianismo y Marxismo” (García Linera en Webber 2005, mi traducción). Así, la herencia colonial/liberal del Estado, impulsada con las reformas liberales de fin del siglo XIX, extendida con la Revolución de 1952, y consolidada con la NPE de 1985 fomentaba una creciente urbanización que ha tenido el efecto paradójico, pero a larga duración, de lograr una convergencia democrática entre indianismo y marxismo para socavar el proyecto liberal en Bolivia.

Proyectos estatales y la cultura de la democracia

Varios comentaristas han señalado la oportunidad para las ciencias sociales de acercar proyectos estatales y la democracia globalmente y en América Latina específicamente (Falk Moore 2005; Warren 2002; Ramos 2002; Van Cott 2000). Si bien la ola de urbanización fomentada por el Estado y su herencia del legado colonial/liberal ocasionó una nueva ola de movimientos sociales urbanos en Bolivia desde 1985, esta última década pone en relieve las diferencias que Bolivia lleva a la “cultura de la democracia” (Albro 2006). En este marco, las prácticas sociales y conceptos alternativos que llevan los movimientos sociales al nuevo escenario político son representativos de una modernidad alternativa (Whitten 2007), no dependiente de los discursos de gobiernos imperialistas o instituciones de capital transnacional (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial) para sus conceptos del progreso, del desarrollo, del “medioambiente” (un término muy nebuloso) o —el término clave del discurso político del neoliberalismo— la democracia.

Un efecto de la época neoliberal en Bolivia (y América Latina en general) ha sido la creciente viabilidad de la democracia representativa y la apertura correspondiente para la participación política de parte de la población indígena y socialmente marginalizada (Sanabria 2000; Albro 2006, 2009; Salman 2007; De Munter and Salman 2009; Kohl 2003; Van Cott 2000). La constitución multicultural promulgada durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada, y especialmente la Ley de Participación Popular (1994) eran un verdadero caballo de Troya que abrió un camino para formalizar, a nivel nacional, conceptos alternativos de la democracia. Según Albro, los últimos diez años de movimientos

sociales y el poder político del MAS representan una manifestación urbana de conceptos de la democracia y las posibilidades del Estado divergentes de la hegemónica definición liberal. Morales, otras autoridades de gobierno y líderes indígenas frecuentemente invocan el concepto del *Pachakuti* para explicar cómo conciben la refundación del Estado boliviano (Albro 2006). De Munter y Salman (2009: 447) notan que el concepto de *Pachakuti* está inserto en la vida cotidiana urbana en ciudades como El Alto. Esta inserción se encuentra íntimamente lazada a una práctica cotidiana de la democracia caracterizada por las “redes de solidaridad” de la vida asociacional alteña que articula una experiencia aymara rural-urbana” (Albro 2006: 396, mi traducción).

Estas “redes de solidaridad” agregan actores de diversos sectores de la sociedad civil en prácticas democráticas culturalmente distintas de las prácticas de la democracia formal. Sánchez de Lozada, en su huida a los EE.UU. en 2003 afirmaba que “la muchedumbre abrumó el respeto para los procesos democráticos bolivianos”; que los movimientos sociales en Bolivia son respaldados por el movimiento Sendero Luminoso de Perú, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de Colombia, Hugo Chávez, y Fidel Castro (o tal vez Raúl ahora); que el *colla* “rechaza la modernización y se adhiere a nociones arcaicas” y que Bolivia se estaría convirtiendo en un Afganistán (Albro 2006: 390-92; mis traducciones). Los comentarios de Sánchez de Lozada reflejan un concepto dogmático (y racista) de democracia que solamente considera la democracia como las urnas, las instituciones, y los partidos. La fuerza del MAS es la que ha ganado la confianza de las asociaciones, gremios, juntas vecinales y una serie de otros actores sociales en nuevos contextos urbanos de la democracia representativa. El MAS ha logrado dar los primeros pasos para superar “la tensión latente entre las formas de democracia directa de los *ayllus* y la democracia representativa implicada en el modelo unionista y la democracia parlamentaria y municipal” (Rivera 1990: 116). El MAS ha logrado incorporar las historias organizacionales de los movimientos obreros, cocaleros, indígenas, y otras para forjar un movimiento social amplio y urbano, así liderando con “un pie en la sociedad civil y el otro en el gobierno” (Albro 2009: 46, mi traducción).

Conclusiones: El *continuum* rural-urbano, la democracia, y “las dos Bolivias”

En el análisis del caso boliviano, existe la tentación de hablar de “dos Bolivias” (Rivera 1990; Albro 2006; Dunkerley 2007; Whitehead 2001). Para Silvia Rivera Cusicanqui, enfocada en el norte de Potosí, este

concepto de “dos Bolivias” se refleja en la co-existencia del “pasado” y el “presente” en una diacrónica paradoja de modernización (democracia liberal) y tradición (democracia del *ayllu*). Rivera sugiere que las reformas desde la época liberal “en realidad han profundizado formas coloniales de opresión” (1990: 97, mi traducción). El resultado de esta contradicción, según Laurence Whitehead, es que “desde los primeros días de la independencia, la vida política en Bolivia ha operado en al menos dos niveles distintos, con poca coordinación entre ellos” (2001: 10, mi traducción).

Encuentro sumamente útil el argumento de Rivera Cusicanqui sobre los tres ciclos históricos en Bolivia, y a manera de conclusión procuro extender ese marco. Sugiero tentativamente que Bolivia, desde las elecciones de 2005 en las que Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país, ha entrado a un cuarto ciclo. Rivera Cusicanqui nota que la contradicción colonial entre conceptos de la democracia era fundamentalmente una “contradicción urbana-rural” (1990: 103, mi traducción). Ella concluye que “una reforma auténticamente democrática tendrá que implicar alguna forma de articulación entre la democracia directa y la representativa, a la iniciativa de los mismos grupos interesados” (1990: 117, mi traducción). Esa observación parece hoy en día como una descripción de la convergencia democrática en los 2000. Según Pablo Solón (Tockman 2010), el embajador boliviano en las Naciones Unidas, hay dos mecanismos claves para seguir profundizando la democracia y la participación política desde hoy en día y en adelante: la fuerza de los movimientos sociales y el uso del referéndum, respectivamente indicativos de la tradición democrática directa y popular, y de la democracia representativa basada en las urnas.

Sugiero, finalmente, que los principios de un cuarto ciclo histórico que la Bolivia contemporánea está viviendo requieren un nuevo escrutinio en la aplicación del concepto de las “dos Bolivias”. Hablar de “dos Bolivias” puede oscurecer tanto que iluminar. El cuarto ciclo está siendo caracterizado por un movimiento de mayores articulaciones: entre lo urbano y la rural, clase y etnicidad (marxismo e indianismo, en los términos de García Linera), democracia liberal y democracia *ayllu*. Sugiero que la articulación fundamental se produce entre lo urbano y lo rural, y esa convergencia representa un movimiento desde la contradicción urbano/rural del colonialismo hacia la articulación rural-urbana, que facilita el proceso de rearticulaciones entre clase y etnicidad y conceptos de la democracia, aún incipientes. García Linera propone que el proceso actual de profundizar la democracia

puede tardar 30 años o más (Webber 2005) y requerirá estructuras estatales y discursos políticos que puedan incorporar los sectores urbanos aún desorganizados y promover la reconstitución del movimiento obrero. Estos desafíos implican un proceso y un conjunto de relaciones en transformación.

Bibliografía

- Albó, Xavier (2006) "El Alto, La vorágine de una ciudad única" en *Journal of Latin American Anthropology* 11(2):329-350.
- Albro, Robert (2006) "The Culture of Democracy and Bolivia's Indigenous Movements" en *Critique of Anthropology* 26(4):387-410.
- Albro, Robert (2009) "Democracy's Labor: Disjunctive Memory in a Bolivian Workers' Union" en *Latin American Perspectives* 36(5):39-57.
- Argañarás, Fernando García (1997) "The Drug War at the Supply End: The Case of Bolivia" en *Latin American Perspectives* 24(5):59-80.
- Coronil, Fernando (1997) *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*, University of Chicago Press, Chicago.
- De Munter, Koen y Ton Salman (2009) "Extending Political Participation and Citizenship: Pluricultural Civil Practices in Contemporary Bolivia" en *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 14(2):432-456.
- Dunkerley, James (2007) "Evo Morales, the "Two Bolivias" and the Third Bolivian Revolution" en *Journal of Latin American Studies* 39(1):133-166.
- Falk Moore, Sally (2005) "Comparisons: Possible and Impossible" en *Annual Review of Anthropology* 34:1-11.
- Gill, Leslie (1997) "Relocating Class: Ex-Miners and Neoliberalism in Bolivia" en *Critique of Anthropology* 17(3):293-312.
- Guss, David (2006a) "Introduction: Indigenous Peoples and New Urbanisms" en *Journal of Latin American Anthropology* 11(2):259-266.
- Guss, David (2006b) "The Gran Poder and the Reconquest of La Paz" en *Journal of Latin American Anthropology* 11(2):294-328.
- Harvey, David (1989) *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Blackwell, Oxford.
- Harvey, David (2003) *The New Imperialism*, Oxford University Press, Oxford.
- Ibáñez Rojo, Enrique (1993) "¿Democracia neoliberal en Bolivia? Sindicalismo, crisis social y estabilidad política" en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 4(2): 69-91.
- Ibáñez Rojo, Enrique (2000) "The UDP Government and the Crisis of the Bolivian Left (1982-1985)" en *Journal of Latin American Studies* 32(1):175-205.

- Kinsbruner, Jay (2005) *The Colonial Spanish-American City: Urban Life in the Age of Atlantic Capitalism*, University of Texas Press, Austin.
- Kohl, Benjamin (2003) "Restructuring Citizenship in Bolivia: El Plan de Todos" en *International Journal of Urban and Regional Research* 27(2):337-351.
- Kohl, Benjamin (2004) "Privatization Bolivian style: a cautionary tale" en *International Journal of Urban and Regional Research* 28(4):893-908.
- Kohl, Benjamin H y Linda C Farthing (2006) *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*. Zed Books, Londres.
- La Razón (2010) "Murillo, un nombre ligado a la historia de la plaza" *La Razón*, 17 de enero, http://www.la-razon.com/versiones/20100117_006975/nota_250_939147.htm (acceso 1 de febrero de 2010).
- Lefebvre, Henri (1991) *The Production of Space*, Blackwell, Oxford.
- Mansilla, H.C.F. (1996) "Las teorías y sus implicaciones socio-políticas: el caso de la economía informal boliviana" en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 7(1):5-22.
- Nash, June C (1992) "Interpreting Social Movements: Bolivian Resistance to Economic Conditions Imposed by the International Monetary Fund" en *American Ethnologist* 19(2):275-293.
- Ramos, Alcida Rita (2002) "Cutting Through State and Class: Sources and Strategies of Self-Representation in Latin America" en Kay B Warren y Jean E Jackson (editores) *Indigenous Movements, Self-Representation, and the State in Latin America*, University of Texas Press, Austin.
- Rivera, Silvia (1990) "Liberal Democracy and Ayllu Democracy in Bolivia: The Case of Northern Potosí" en *Journal of Development Studies* 26(4):97-121.
- Romero, Simón (2008) "Amid Growing Unrest, Bolivia Orders U.S. Ambassador to Leave." *The New York Times*, 11 de septiembre http://www.nytimes.com/2008/09/11/world/americas/11bolivia.html?_r=1 (acceso 5 de enero de 2010).
- Salman, Ton (2007) "Bolivia and the Paradoxes of Democratic Consolidation" en *Latin American Perspectives* 34(6):111-130.
- Sanabria, Harry (2000) "Resistance and the Arts of Domination: Miners and the Bolivian State" en *Latin American Perspectives* 27(1):56-81.
- Tarrow, Sidney G (2005) *The New Transnational Activism*. New York: Cambridge University Press.
- Tockman, Jason (2010) "Bolivia's New Political Space: An Interview With Ambassador Pablo Solón." *NACLA*. <https://nacla.org/node/6473> (Accessed April 11, 2010).
- Van Cott, Donna Lee (2000) "A Political Analysis of Legal Pluralism in Bolivia and Colombia." *Journal of Latin American Studies* 32(1):207-234.

- Warren, Kay B (2002) "Voting Against Indigenous Rights in Guatemala: Lessons from the 1999 Referendum." en Kay B Warren y Jean E Jackson (editores) *Indigenous Movements, Self-Representation, and the State in Latin America*, University of Texas Press, Austin.
- Webber, Jeffery R (2005) "Marxism and Indigenism in Bolivia: A Dialectic of Dialogue and Conflict by Álvaro García Linera" *ZNet*. <http://www.zcommunications.org/marxism-and-indigenism-in-bolivia-a-dialectic-of-dialogue-and-conflict-by-lvaro-garc-a-linera> (acceso 26 de abril de 2010).
- Whitehead, Laurence (2001) "Bolivia and the Viability of Democracy" en *Journal of Democracy* 12:6-16.
- Whitten, Norman E (2007) "The Longue Duree of Racial Fixity and the Transformative Conjectures of Racial Blending" en *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 12(2):356-383.

Segunda parte

Delimitación e
institucionalización del
espacio urbano

Función social de la propiedad y ciudadanía en la frontera urbana-rural

Amonah Achi

El gobierno socialista de Evo Morales no quiso olvidar la demanda habitacional¹ en su programa de “revolución democrática y cultural”. Desde el inicio, anunció un ambicioso Programa de Vivienda Social y Solidaria que en 2007 disponía de 90 millones de dólares americanos para la construcción de viviendas. Sin embargo, el 6 de agosto de ese mismo año, el presidente Morales señalaba que este programa estaba estancado por falta de terrenos adecuados para la construcción de las unidades habitacionales. A finales del 2009, el Plan seguía paralizado por problemas adicionales de corrupción al mismo tiempo que el derecho humano a la vivienda adecuada² se volvía por primera vez en Bolivia un derecho constitucional. Si bien el artículo 19 de la nueva Constitución contempla que el Estado debe “desarrollar planes de vivienda”, no se contempla la etapa del lote. Conforme a la agenda neoliberal en el sector, se otorga el financiamiento subsidiado o crediticio de la vivienda mientras que se deja el libre juego de los mecanismos de mercado para el suelo (Ramírez 2004).

- 1 En el país existen alrededor de dos millones de viviendas construidas, pero según datos del INE 2001 faltan 300.000 viviendas para cubrir la demanda total (déficit cuantitativo). Esta situación es más crítica en cuanto a calidad de la vivienda, porque el 43% de las viviendas existentes carecen de condiciones mínimas de habitabilidad (déficit cualitativo).
- 2 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 define el derecho a la vivienda adecuada con los siguientes componentes: *Seguridad jurídica de la tenencia* (en propiedad, alquiler, o anticrético), o protección contra el desalojo. *Accesibilidad económica*: implica que el Estado debe ayudar a las familias desfavorecidas. *Gastos soportables*: el sostenimiento de una vivienda no deben perjudicar el logro de otras necesidades. *Disponibilidad de servicios básicos e infraestructura* (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, recojo de basura) a un costo accesible. *Localización* en un lugar de fácil acceso a oportunidades de empleo y servicios sociales (educación, cultura, salud y recreación). *Habitabilidad, Seguridad y privacidad, Adecuación cultural*.

Paradójicamente, el acceso a la tierra de las clases populares se ha constituido en un problema político, una prioridad constitucional y un objeto de intervención del Estado social desde hace mucho tiempo. Las diferentes Constituciones desde 1938 han limitado el alcance del derecho de propiedad privada (sobre la tierra) y el libre juego de los mecanismos de mercado por la noción de “función social de la propiedad”³. Así, se ha ido construyendo la cuestión del acceso a la tierra de las clases populares (campesinas más que todo) como un derecho social constitutivo de la ciudadanía. Sin embargo, en el ámbito urbano solo se cuenta con la Ley de Reforma Urbana de 1956 pese a que actualmente más de dos tercios de la población boliviana viven en ciudades (INE 2001). Al parecer el fenómeno urbano sigue siendo marginal en la conciencia política boliviana.

La indeterminación que reina en el área urbana sobre el contenido de la función social de la propiedad es todavía más acentuada en la frontera urbana-rural, este espacio que ya no es realmente rural, pero que todavía no es oficialmente urbano. La frontera urbana-rural es donde crece la ciudad, donde se fabrica la nueva cara de las ciudades bolivianas en expansión acelerada desde los años ochenta, donde se forjan nuevos ciudadanos y ciudadanas, y donde por fin se produce la nueva sociedad boliviana.

Esta frontera urbana-rural se caracteriza por una superposición de órdenes institucionales en conflicto para controlar el espacio y legitimar sus representaciones colectivas: las organizaciones agrarias (en franco retroceso demográfico pero todavía con bastante fuerza política) y sus normas (bien establecidas por las leyes), frente a las organizaciones urbanas (cuya demografía les asegura la victoria, pero que están divididas y todavía en construcción política) y a sus normas. Estas normas están todavía en elaboración, buscando su legitimidad y sus principios en una variedad de fuentes, legales o no, e incluso hibridándose con las normas

3 La función social de la propiedad impone al propietario una serie de restricciones y obligaciones a su derecho de dominio en aras de la promoción/preservación de los intereses públicos y sociales. La afirmación de una función social de la propiedad implica que el Estado se da una misión de regulación del mercado y debe especificar mediante ley y normas su finalidad (los intereses públicos y sociales) y las modalidades (impuestos, cesión o reversión al Estado, bancos de tierras, etcétera) según las características de cada mercado y propiedad. El principio de función social de la propiedad nace del abandono paulatino de la concepción absolutista de la propiedad privada; fue forjado por un jurista francés, Léon Duguit, a comienzos del siglo XX como una vía transaccional entre la ideología liberal de la Revolución Francesa y la ideología marxista. En América Latina, la Constitución mexicana de 1917 le otorgó rango constitucional, originando el “Constitucionalismo de los Derechos Sociales”, superando el “Constitucionalismo Liberal” que configuraba solo un sistema de derechos y garantías individuales.

agrarias. Entonces, la inadecuación del marco legal y el déficit de “regulación formal” sobre el suelo no resulta en una autoregulación por un mercado puro y perfecto, sino en una “regulación social” del suelo en la frontera. Por el concepto de regulación social del suelo (van der Haar 2000), entendemos que los procesos de regulación (para el acceso, el uso y la gestión de la tierra) resultan de la interacción entre el sistema oficial y varias capas de organizaciones sociales a diferentes niveles (los *loteadores*, las familias, las juntas vecinales, los sindicatos agrarios, los movimientos de ocupación, etcétera). Esta interacción concierne las reglas (el pluralismo legal), pero también los procedimientos para concretar estas reglas y los actores que elaboran e implementan estas reglas.

El objetivo de este artículo es analizar cómo, en la frontera urbana-rural y mediante la regulación social, los actores sociales colectivos tratan de producir una definición de la función social de la tierra urbana, de controlar la especulación y de limitar el interés y ciertos derechos individuales.

Este análisis se basará en una investigación realizada sobre un caso ejemplar de frontera urbana-rural: el Distrito Municipal 9, al sur-oeste de la ciudad de Cochabamba, un espacio rural en vía de conversión rápida al uso urbano a través de una explosión impresionante del mercado informal del suelo.

Organizaremos nuestro análisis según la estructura siguiente. En una primera parte, veremos cómo tanto la regulación por el Estado como la regulación por el mercado han fallado en servir adecuadamente los intereses sociales de los pobladores empobrecidos de la frontera urbana-rural. Examinaremos el fracaso del Estado en la definición precisa de la función social de la propiedad urbana y el efecto general de los mecanismos de mercado sobre la degradación de la oferta de suelo. Finalmente analizaremos los resultados de estas carencias en el Distrito 9 de Cochabamba.

En la segunda parte, nos concentraremos en el análisis de la regulación por la “comunidad”, o sea los actores colectivos⁴ de la frontera,

4 Con el término comunidad, no nos referimos a una acepción cultural particular, como la “comunidad andina” o “indígena”, sino a la idea de “comuna”, lo que está “en común”. La colectividad que administra lo común puede existir en base a criterios étnico-culturales (las comunidades indígenas) o socioeconómicos en torno a la autogestión de recursos concretos (los comités de agua, las juntas vecinales, los sindicatos agrarios, etcétera). Esta comunidad puede hibridar legados culturales muy distintos. En los barrios periurbanos de Cochabamba, Cajías muestra que la memoria de los ex-mineros, entre permanencia y recreación en sus nuevos espacios de migración, se permeó de representaciones campesino-indígenas y de sus repertorios de acción al mismo tiempo que aportó a sus aliados varios de sus aprendizajes militantes: su “capacidad de liderazgo”, “las prácticas asambleístas”, y “la manera tradicional de enfrentar los conflictos con una lógica de “guerra” y “hasta las últimas consecuencias” (2004: 22).

y en su elaboración paulatina, empírica, tartamudeante y conflictiva de una definición de la función social de la propiedad en la frontera urbana-rural. Describiremos cómo los pobladores van elaborando un primer criterio sobre la función social, la oportunidad de la oferta de suelo, e imponen una modalidad muy parecida a las prácticas agrarias, donde el trabajo crea el derecho. Luego, indagaremos cómo la organización colectiva busca concretar un segundo criterio, el acceso a los servicios urbanos, controlando a los “pasajeros clandestinos”. Por fin, mostraremos que los derechos de propiedad informales, no reconocidos por el Estado pero garantizados por un colectivo, sostienen la cohesión del grupo y su acción colectiva. En este sentido, la regularización de estos derechos promete realizar una tercera finalidad, la seguridad de la tenencia, pero desestabiliza la regulación por la comunidad y su acción a favor de la función social de la propiedad.

El caso del Distrito 9 de Cochabamba

El déficit legal sobre la función social de la propiedad urbana

El principio constitucional de función social de la propiedad ha sido ampliamente desarrollado para las tierras agrarias mientras queda atrofiado en el ámbito urbano. Esta predominancia de la temática agraria en el imaginario del legislador boliviano, pero también de los pobladores campesinos y ciudadanos de la frontera urbana-rural (como lo veremos en la segunda parte), nos obliga a partir de la función social agraria para llegar a las pautas legales que definen la propiamente urbana.

a) Función social de la propiedad en la frontera urbana-rural

Las principales leyes que definen la función social de la propiedad en el ámbito rural son: el Decreto-Ley de Reforma Agraria de 1953, la Ley del Servicio Nacional Reforma Agraria (llamada Ley INRA) de 1996, y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006.

Sin entrar en los diferentes aspectos y sutilezas de estas leyes para concentrarnos en lo útil a nuestra reflexión, se puede decir que la finalidad de la función social de la propiedad agraria es el derecho de todo campesino a acceder a una parcela, cuyo tamaño está definido según su localización geográfica (tierras bajas, valles, altiplano). Las modalidades de esta función social se derivan del principio según el cual la tierra es para quien la trabaja. A partir de la Ley de 1996, el Estado se reafirma como el iniciador del proceso: prohíbe la práctica del asentamiento de hecho y revierte las tierras ociosas (la ausencia de trabajo fragiliza el derecho de propiedad) para redistribuirlas a los

que la necesitan. Con la Ley de 2006, se incorpora una modalidad: la dotación bajo el régimen de propiedad colectiva de la tierra.

El Estado y los sectores campesinos han forjado, en su diálogo, este cuerpo de nociones sobre la función social de la propiedad agraria. Al contrario, la función social de la propiedad urbana está muy poco esbozada por el Estado. La única ley, la Ley de Reforma Urbana de 1956, está impregnada por una lógica rural en un país que entonces estaba muy poco urbanizado y no se adecua a la complejidad de la dinámica urbana actual. La Ley permitía la reversión al Estado de las grandes extensiones de suelo (más de 10.000 metros cuadrados) pertenecientes al radio urbano, para fines de vivienda. Entonces, define la finalidad de la función social del suelo urbano de manera equívoca, tomando como único criterio el del acceso a la vivienda de los necesitados, sin precisar nada acerca de las características de esta vivienda⁵.

En estas circunstancias, la normativa municipal se limitó a menudo, como es el caso en la ciudad de Cochabamba (ver Achi y Delgado 2007), a imponer restricciones sobre la propiedad en pos del interés público (p.e. las “fajas jardín” en las zonas residenciales), olvidando el interés social. Además, este interés público ha sido definido históricamente como la edificación de una ciudad elitista. En Cochabamba, el Plano Regulador de 1961 marca una excepción por sus objetivos progresistas (recuperación de plusvalías, control del mercado de suelo), pero quedó poco aplicado por los gobiernos municipales sucesivos.

Sin embargo, la integración del derecho humano a la vivienda adecuada en la nueva Constitución introduce un avance en la definición legal de la función social de la propiedad urbana, pues su finalidad debería corresponder a los requisitos de una vivienda adecuada: un suelo económico, seguro (con título de propiedad), servido (con servicios e infraestructura urbana) y oportuno (disponible para las necesidades de hoy y no las de mañana).

Esta innovación progresista debería poner en tela de juicio la pasividad histórica del Estado frente a las dinámicas urbanas y cuestionar la perpetuación de la agenda neoliberal en el sector.

b) Las carencias del mercado: la agenda neoliberal y sus detractores

En Bolivia como en América Latina, el mercado del suelo, tradicionalmente poco intervenido por las instancias públicas, se ha desregulado

5 Es de importancia recalcar que en Cochabamba no es ilegal ofertar lotes sin servicios ni equipamientos: la única obligación de un urbanizador es la apertura de vías de acceso, sin especificación de la calidad de éstas.

todavía más bajo la agenda neoliberal según la cual un mercado puro y perfecto es el mejor instrumento para una distribución eficiente de este recurso. A partir de los años noventa, e inspirándose de De Soto (1986), el Banco Mundial promueve programas de regularización de los derechos de propiedad en los asentamientos ilegales, que se acompañan de una flexibilización de las normas urbanísticas y de mayor tolerancia hacia la ciudad ilegal. En comparación con el paradigma anterior, elitista y segregativo, este nuevo enfoque mejoró innegablemente la condición de los pobladores humildes (Smolka 2002).

Sin embargo, los trabajos del Lincoln Institute of Land Policy (Morales-Schechinger 2005a, Fernandes y Smolka 2004) intentan demostrar que, a mayor política de regularización, mayor crecimiento de la informalidad. Argumentan que esta política elimina el riesgo del desalojo que en el mercado informal implica un precio inferior al practicado en el mercado formal. En consecuencia, el precio del suelo con y sin título tiende a igualarse y eso empuja al alza de precios del suelo informal mientras disminuye la oferta de suelo en el mercado formal. La rentabilidad muy baja del uso social aleja a los propietarios inmobiliarios, excepto si adoptan la estrategia informal, ofertando una mercancía de menor calidad (mala ubicación, sin servicio, sin seguridad de la tenencia), para bajar costos de creación de suelo urbano. Se rebasan así las tasas de ganancia obtenidas en el mercado formal, atrayendo cada vez a un mayor número de promotores. Esto explica el crecimiento de los mercados informales que recientemente alcanza no solo a las capas más humildes sino también a las capas medias que en décadas anteriores acudían solo a mercados formales de la propiedad.

Para que esta tendencia progrese, ha necesitado que las leyes y autoridades reduzcan las obligaciones a la propiedad sobre ubicación (p.e.: vía la cancelación de la frontera del plan urbano o la flexibilización de las normas de zonificación), servicios (reducción de los anchos de calle, de las redes de servicios, de las cesiones para usos públicos y ecológicos), riesgo (tolerando y regularizando tierras inundables o colapsables como regularizando títulos de propiedad turbios) y oportunidad (anulando las obligaciones a desarrollar en un tiempo específico o los castigos fiscales por no liberar al mercado tierras a usos demandados en el presente día en espera de uno más rentable en el futuro).

Las dinámicas evidenciadas por las investigaciones en América Latina se confirman cuando nos interesamos en los cambios experimentados por el Distrito 9 de Cochabamba durante los últimos quince años.

El Distrito 9: explosión del mercado informal de suelo

c) La conversión demográfica

Ubicado en la zona sur, el cinturón de pobreza de la ciudad de Cochabamba, el Distrito 9 es el segundo polo de crecimiento urbano de la misma (12% de crecimiento anual entre 1992 y 2001), pues constituye el mayor reservorio de tierras del municipio (su superficie representa 48% del territorio municipal) con una población todavía menor al 10% del total (INE 2001; Plan Municipal de Ordenamiento Territorial-PMOT 2005).

Los asentamientos en el Distrito han seguido dos patrones de ocupación del suelo: por un lado, el desborde de la mancha urbana al lado del límite urbanizable (río Tamborada) organizado por instituciones públicas (Universidad Mayor de San Simón, UMSS, Maestros, Servicio Nacional de Caminos-SENAC, Ferrovianos, Municipales, etcétera) y con población originaria en su mayoría de Cochabamba (ciudad y provincias). Un segundo patrón de ocupación corresponde a los fraccionamientos en enclave organizados por loteadores a manera de islas en medio de áreas cultivadas y comunidades agrarias con población inmigrante proveniente de los centros mineros de Oruro y Potosí (PMOT 2005: 66, 91, 151 y 174).

En 2003, la población “rural” ya representaba solamente 24% de la población total del Distrito y estaba organizada en 31 comunidades campesinas, mientras que la población “urbana” contaba con 76% de la población distrital y vivía en unos 80 asentamientos ilegales.

d) La conversión legal y política

Cochabamba es uno de los cinco municipios bolivianos con el cual el Gobierno firmó en 2004 un Acuerdo de Responsabilidad Compartida (ARCO) para implementar el Proyecto Piloto de Regularización del Derecho Propietario Urbano financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En Cochabamba, este proyecto se implementó en el Distrito Municipal con mayor problema de ilegalidad, el Distrito 9, donde se hallaban 80 de los 113 asentamientos ilegales de Cochabamba (Gobierno Municipal de Cochabamba 2005: 174).

La implementación de ARCO de 2004 a 2007 se tradujo en una flexibilización y expansión del radio urbano y en un reconocimiento *a posteriori* del derecho de hecho. Se definieron en el Distrito 9 cinco perímetros urbanos en torno a los asentamientos seleccionados, como islas en un espacio de uso agro-pastoril.

Los efectos de la regularización no deben ser evaluados en función a los tres años de vigencia de ARCO sino en función a más de una década, desde 1995, durante la cual el Municipio prometió la

regularización e hizo varias tentativas para ello en el Distrito 9, reemplazando su política de desalojo esporádico por una de tolerancia negociada al mercado informal.

La promesa de regularización coincide con los cambios introducidos por la Ley de Participación Popular de 1994, a partir de la cual las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) se vuelven interlocutoras obligadas de la Alcaldía para la distribución de parte del presupuesto municipal⁶ y su fiscalización. El resultado de esta conjunción entre una fuerte presión demográfica, una gobernanza urbana participativa y la perspectiva de regularización fue la explosión del mercado informal de suelo en el Distrito 9.

Entre 1997 y 2006, los precios del suelo en el Distrito 9 se multiplicaron por 13 (Delgado 2007). En el mismo periodo, el incremento de la inversión pública en el Distrito fue mínimo: de 0,02% en 1995 a 1,21% en 2005 (Achi y Delgado 2007: 162 y 163). Aunque la inversión pública no constituye la única fuente de urbanización de los terrenos informales (la otra fuente sigue siendo la inversión de los mismos pobladores), el incremento en los precios es desproporcionado en relación al mejoramiento de la calidad del producto.

La regulación por la comunidad

Un suelo oportuno para el uso habitacional

En el Distrito 9, la “producción” de suelo urbano para el mercado informal se realiza a través del fraccionamiento de terrenos agrícolas. Esta materia prima es abundante: si algunas zonas mantienen una producción lechera importante (por ejemplo La Maica), otras carecen de medios de producción (zonas sin riego o bajo riego pero con cantidades insuficientes), son infértiles (las serranías, de uso pastoral extensivo, representan dos tercios de la superficie del Distrito 9) o sufren del minifundio⁷, mientras el crecimiento de la mancha urbana incrementa paulatinamente el valor mercantil de estos terrenos.

6 Las OTB reciben mínimamente la “co-participación popular”, una pequeña parte del presupuesto municipal distribuida en función al número de habitantes de cada OTB. Entonces la Ley de Participación Popular representa un gran cambio para los barrios ilegales y periurbanos tradicionalmente discriminados por el Gobierno municipal. Es interesante notar que ello introduce una contradicción y una gradación entre niveles de legalidad que son explotables políticamente: un barrio ilegal puede ser una OTB legal, lo cual abre un margen de negociación (clientelista) entre el barrio y el municipio.

7 El minifundio es una finca rústica de extensión tan reducida que dificulta su explotación; su antónimo es el latifundio.

El fraccionamiento en lotes urbanos es generalmente operado por intermediarios informales llamados loteadores, quienes compran terrenos agrícolas a bajo precio. En otros casos, no se trata de una compra sino de una invasión de los terrenos más vulnerables por falta de producción agrícola y de resistencia física de los propietarios. Las invasiones recurren claramente a la fuerza para imponerse sobre el título del propietario legal, así como también a argumentos de legitimidad y legalidad, que demuestran en sí una carencia y ambigüedad de la regulación formal para el suelo en transición entre el uso agrario y el uso urbano.

Por ejemplo, en el conflicto de Pampa San Miguel⁸, el propietario legal del predio (la Universidad Mayor de San Simón, UMSS), respetuoso de la ley de uso agropecuario y forestal del suelo, subutilizó su propiedad durante largos años. La UMSS asumió sus obligaciones de preservación del bosque en la fracción forestal del predio y de desarrollo de una granja experimental en una pequeña parte de la fracción agro-pastoril, mientras dejaba a los ex colonos dotados de parcelas dentro su predio cultivar tanta superficie como vean conveniente. Sin embargo, aun esta fracción agro-pastoril quedaba subutilizada debido a la decadencia de la actividad lechera. El *statu quo* terminó cuando el crecimiento de la mancha urbana dio un nuevo valor al terreno. Entonces, los campesinos lugareños quisieron aprovechar un principio fundamental de la Reforma Agraria (“la tierra es para quien la trabaja”) y el artículo 66 de la Ley INRA de 1996⁹ con la simulación de sembradíos para reservarse un terreno mientras los ofertaban para la venta. Pidieron al INRA la anulación del derecho de propiedad de la Universidad por incumplimiento de la función social y la titulación a su favor. Recién frente a estos indicios de loteamiento, la Universidad empezó a preocuparse por su terreno y decidió fraccionarlo en lotes urbanos y monetizarlo, aunque en violación de la misma norma de uso de suelo.

En los conflictos agudos por la tierra como Pampa San Miguel se evidencia que la norma legal plasmada en el título de propiedad formal entra en competición con una norma social muy fuerte: la función social dada al suelo por la posesión y “el trabajo” realizado.

8 El conflicto de Pampa San Miguel, en el Distrito 9 de Cochabamba es uno de los conflictos por tierra más importantes de Bolivia: por el tamaño del terreno en disputa (163 ha), por el número de familias involucradas (por lo menos 6.000), y por la duración del conflicto violento (cuatro años, de 2002 a 2006).

9 Este artículo estipula que el saneamiento tiene el propósito de titular tierras que estén cumpliendo la función social “por lo menos dos años antes de [la] publicación [de la Ley], aunque no cuenten con trámites agrarios que los respalden”.

Las familias que accedieron a un lote por medio de los campesinos-loteadores de Pampa San Miguel (llamados con el nombre genérico de “comunarios”), como las familias que compraron un lote a la Universidad, reunidas en la asociación Asociación Agrícola Minera (Agromin), tuvieron que ocupar físicamente los espacios deseados (“encarparse”), después de construir rápidamente una precaria vivienda y luego habitarlos. La presión de los dirigentes y aún de las mismas autoridades¹⁰ para que las familias de los dos bandos construyan y habiten sus lotes apuntaba a consolidar un hecho consumado que la debilidad del sistema formal¹¹ no podrá revertir. No obstante, “construir y habitar” es un procedimiento que se impone a la ley no solamente por la fuerza, sino también por una legitimidad bastante consensuada en el cuerpo social.

K'asa Mayu [una fracción del predio de la Universidad], para entonces, vacío estaba: había unas cinco casas por ahí. Como ellos [la Universidad] dicen y hablan legalmente: “Con proceso jurídico, los vamos a meter a la cárcel”, yo les he creído.

Todas las autoridades otra vez han llegado y ahí se ha manifestado menos mal el Viceministro de Tierras: “Yo les voy a hacer respetar, vamos a solucionar esto”. [...] Lo hemos traído a K'asa Mayu. El Chileno [uno de los dirigentes comunarios], todos estaban ahí, diciendo: “Aquí hacemos producir estos maizales”, cuando el maíz de otro lado era. Para entonces casitas había: de la noche a la mañana han hecho aparecer toda una ciudadela [en K'asa Mayu]. [...] ¡Pucha! ¡A nuestras vistas! Yo jamás he movido una aguja sin la participación de ellos [la Universidad], haciéndoles caso a ellos y a nuestras vistas ¡chin! ¡La gente se ha entrado y la policía no ha dicho nada! [...] Ya [los comunarios] son dueños ahí en K'asa Mayu: en esos convenios [entre los comunarios, la Universidad y el INRA] ya se les ha aceptado más bien, la universidad ha firmado que va a respetar las casas.

Bueno eso ha pasado y no ha habido solución. [...] Aquí [El Martillo] hemos venido directamente 155 personas bajo consenso de Agromin, como medida de presión. Pensábamos que ellos [la Universidad] ya reaccionarían cuando estábamos entrando aquí. Han pasado dos semanas: ¡nada! Dos meses: ¡nada! Si en

10 La Universidad y su aliado circunstancial, el Viceministerio de Tierras, presionaron a las familias de Agromin.

11 Las decisiones judiciales se traducen difícilmente en acciones para imponer la ley; además estas decisiones intervienen después de largos años de un juicio costoso y sujeto a la corrupción.

ese momento hubiéramos entrado a las construcciones ya estaría toda una ciudad. Yo he dicho: “¡De una vez le meteremos! Porque así lo ganan, así se está consolidando”. Ésa era la mejor respuesta para nosotros (entrevista con un dirigente agrario aliado de Agromin y de la Universidad, 9 de agosto de 2006).

“Construir y habitar” es un procedimiento legítimo para los mismos pobladores que estaban en competencia por el suelo: aun en este conflicto entre comunarios y Agromin, los comunarios respetaron este principio: cuando invadieron los terrenos ya distribuidos a las familias de Agromin, los únicos que lograron mantener su lote fueron los que ya habían construido un cuarto.

Segundo, “construir y habitar” es un procedimiento reconocido *a posteriori* por las autoridades, como principio de discriminación entre los asentamientos que merecen una regularización¹², porque ésta beneficiará a los pobladores, y los asentamientos que no la merecen porque tal regularización solo beneficiaría a los especuladores (loteadores y familias que no usan su lote).

El Distrito 9 fue objeto de un proceso de regularización masiva del derecho propietario urbano a través del proyecto ARCO. Setenta asentamientos fueron regularizados porque cumplieron con un requisito de consolidación física de 25% de los lotes. Del mismo modo, los asentamientos todavía ilegales, como los conformados por los comunarios y Agromin, ya apuntan, mediante la presión de los dirigentes sobre las familias, a llegar a estos 25% de lotes construidos y habitados para reclamar una próxima ola de regularización.

Sin embargo, estos procesos de regularización merecen dos observaciones. Primero, el requisito de 25% de consolidación física es muy bajo: 75% de terrenos sin función social, pertenecientes al loteador o a familias patrimonialistas e inversionistas¹³, se ven premiados por el incremento de su valor mercantil. La presión social de los mismos

12 La regularización de la cual hablo aquí es en realidad de carácter “técnico”: es decir, la Alcaldía cambia el uso de suelo de agrario a urbano (extiende el radio urbano) y aprueba la planimetría del asentamiento. Luego, los poseedores de lotes dentro del asentamiento pueden empezar los trámites de regularización de su derecho propietario individual. En otras palabras, “construir y habitar” es un procedimiento que permite ganar el estatuto de urbano, pero no automáticamente el de propietario: en el caso de los comunarios de Pampa San Miguel, si el INRA declara que la Universidad es propietaria de los terrenos, los asentados tendrán que negociar con la Universidad un precio de venta que convenga a las dos partes, o esperar cinco años para intentar un proceso de usucapión, aunque tendrían que demostrar que la toma del terreno fue pacífica.

13 Los propietarios no se comportan como un grupo homogéneo: unos actúan más como *usuarios* del suelo; otros son más *inversionistas* en búsqueda de ganancias; y los demás son *patrimonialistas* que retienen un terreno sin darle uso mientras nada lo presione a venderlo.

dirigentes y habitantes para que los propietarios den una función social al suelo queda entonces débil, pues el 25% es fácil de alcanzar pero es insuficiente para acelerar la urbanización del barrio (la apertura de caminos, la conexión al transporte, a la electricidad, etcétera). Segundo, construir y habitar son dos cosas distintas: la Alcaldía, en los hechos, mide el porcentaje de lotes construidos. En los asentamientos de Agromin y de los comunarios, la presión social de los dirigentes logra más fácilmente que la gente construya y no tanto que viva. Es así que, en noviembre de 2006, 90% de aproximadamente 2000 lotes de adjudicatarios de Agromin eran construidos, pero unos 5% eran habitados, según las propias estimaciones de un dirigente de Agromin.

Estos datos parecen demostrar que no hay un problema de producción de lotes urbanos (aunque informales), sino de oportunidad de la oferta o, en otras palabras, de retención del suelo sin uso.

Un suelo servido

En los barrios surgidos del mercado informal, existe una correlación entre la cantidad de familias que habitan el lugar y la cantidad de servicios disponibles. Al inicio de un asentamiento, pocos de los compradores de un lote quieren hacer el sacrificio de irse a vivir allí porque no hay transporte, luz, agua, escuela, etcétera. Los que se mudan al barrio nuevo dejando su alquiler, su anticrético o su casa prestada en un barrio más cómodo y central de la ciudad son los que más necesitan de una casa propia.

Los primeros vecinos son los que más participan en el esfuerzo colectivo para mejorar el asentamiento: participan más en los trabajos comunitarios para, por ejemplo, abrir caminos, presionan y apoyan más al dirigente para que gestione la llegada de servicios, porque son los que sufren cotidianamente de las carencias del barrio. A medida que se mejoran los servicios, más familias se asientan y se van mejorando los servicios. Este círculo virtuoso es difícil de arrancar, por culpa de los “pasajeros clandestinos”¹⁴. En muchas organizaciones colectivas, el

14 En inglés: *free rider*. Es el socioeconomista estadounidense Mancur Olson quien construye este concepto en su libro *La Lógica de la acción colectiva* (1971). Con un enfoque de individualismo metodológico, busca explicar cómo los individuos se organizan para realizar un objetivo común. En su teoría de la acción colectiva, ésta conlleva un costo para el individuo (dinero y tiempo invertido, riesgo, etcétera) y beneficios o ventajas para todo el grupo (incremento del salario, empleo, etcétera). Existe una tendencia a que los miembros de un grupo quieran beneficiarse de una acción colectiva pagando el costo mínimo de ésta. Cuanto más grande es el grupo, más importante resulta esta tendencia. La respuesta a este fenómeno es a menudo la implementación de medidas coercitivas para permitir la realización de la acción colectiva o preservar la existencia de la organización.

interés individual empuja a los miembros a esperar que los demás se esfuercen para conseguir beneficios colectivos, y el desafío de estas organizaciones colectivas es desalentar el comportamiento del pasajero clandestino. En el caso de los asentamientos informales, los pasajeros clandestinos no solo participan menos que los demás en el mejoramiento del barrio sino que en parte lo obstaculizan, pues para conseguir que una línea de transporte sirva al barrio, que la empresa de electrificación extienda su red, que la Alcaldía regularice el asentamiento o que una ONG construya una escuela, la junta vecinal tiene que demostrar que el número de clientes o de beneficiados es suficiente. En el caso de la regularización, las juntas vecinales que no alcanzaban el requisito de 25% de consolidación física debatieron en sus asambleas generales cómo imponer el interés colectivo sobre los intereses individuales, y una mayoría de vecinos —residentes y no residentes— votaron a favor de imponer sanciones a los pasajeros clandestinos, mediante multas o amenazas de reversión de los lotes a favor de la junta vecinal.

María-Dolores: Todos sabemos que hemos entrado en María Auxiliadora porque necesitamos una vivienda digna con todos los servicios. Queremos más gente viviendo en María Auxiliadora, porque necesitamos movilidad. Entro a pie porque necesito comer y trabajar. ¡Apoyo al que viene a vivir aquí!

Celestino: Argumentos hay para no venir a vivir: que mis hijos no quieren, su colegio es muy lejos. Mis hijos están en Pagador en colegio, ¡pero quieren tener una casa de ellos! Porque yo he conocido la situación de vivir en alquiler. Mejor es hacer este sacrificio. Necesitamos para el transporte. A veces entramos a pie, de día, de noche. ¡Queremos gente aquí! [...] Estamos trabajando, van a venir a vivir a buenas cosas. Las otras urbanizaciones nos envidian de todo lo que tenemos: agua, luz, transporte...

Reynalda: Quisiera pedir a las personas que vengan a vivir ya no más. Siempre dicen que no tienen plata para construir. Nosotros hemos venido a vivir en carpa.

Ana: Cuando nos acercamos a Electrificación rural, me explicaron que solo la parte poblada de la Comunidad iba a entrar en alumbrado público. Arriba, hay poca gente: ¡imposible que se les conecte la luz! Los que no están viviendo nos están perjudicando grandemente a los que vivimos. Por favor, los que no

quieren vivir, que desocupen por favor para los que quieren.
¡Esto es la voz de los 110 que vivimos aquí!

Celestino: Olmedo [el barrio vecino] para traer la luz, han obligado a la gente a que construyan casas para que cuando venga la inspección, se les dé. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? (asambleas generales del barrio “Hábitat para la Mujer-Comunidad María Auxiliadora”, 7 de marzo y 4 de junio de 2006).

La Comunidad María Auxiliadora¹⁵ es excepcional porque los terrenos donde se erige el barrio están en propiedad colectiva justamente para quitarle al suelo su valor de cambio y dejarle solo su valor de uso, con la idea de que el suelo y la vivienda son un derecho humano y no mercancías. Además, esta propiedad colectiva apunta a proteger el derecho de los niños, mediante el derecho de sus madres, a la seguridad de la tenencia, para que crezcan bajo un techo y no en la calle.

Es decir que la forma particular de “regulación social” del suelo inventada por la Comunidad María Auxiliadora aporta una definición ambiciosa de la función social de la propiedad urbana: el uso habitacional para las familias más pobres, la seguridad de la tenencia, en particular para los niños y las mujeres y, de modo más general, todos los componentes del derecho a la vivienda adecuada como los servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad, etcétera) y sociales (educación, salud, etcétera). Adicionalmente, propone un instrumento audaz, inspirado de las prácticas rurales-indígenas, para realizar esta función social: la propiedad colectiva que confiere a la colectividad el poder de restringir los intereses individuales en aras del interés colectivo. A pesar de este instrumento poderoso a mano de la directiva, María Auxiliadora contaba con solo 28% de sus lotes construidos y habitados después de ocho años de existencia (septiembre 2006).

En Bolivia, se entiende que la necesidad de autofinanciar la construcción de la vivienda, así como la necesidad de autogestionar poco a poco los servicios, alargan el tiempo entre la compra de un lote y su habitación; pero también está en tela de juicio la costumbre popular de ahorrar y/o especular con el suelo¹⁶. Entonces, dentro de los

15 “Hábitat para la Mujer-Comunidad María Auxiliadora” es un proyecto de vivienda social conformado por 373 lotes en la zona de Sivingani. La Comunidad María Auxiliadora fue fundada en 1999 por una mujer, Rosmary Irusta, cuya rica trayectoria militante la llevó a vincular la violencia intrafamiliar a la privación del derecho a la vivienda de las mujeres.

16 Smolka (2003) explica que, en América Latina, la historia de alta inflación y la limitada cobertura del sistema de seguridad social alimentan una cultura establecida en los sectores de bajos recursos de usar terrenos como reserva de valor y mecanismo de capitalización.

pasajeros clandestinos, unos se benefician del esfuerzo de los demás porque el barrio es más habitable, y otros porque el valor monetario de su lote se incrementa: apropiándose de la plusvalía generada por el esfuerzo de los demás, van a poder vender su lote a un precio mayor.

Olmedo, el barrio vecino a la Comunidad María Auxiliadora, fue creado también en 1999 con un precio inicial del lote de 2 \$us/m². El año 2006 el precio había subido a 15 \$us/m² por las (pocas) mejoras conseguidas: la participación en el proyecto ARCO de regularización, la electrificación, el transporte, una cancha deportiva. Esto significa que las familias más pobres ya no podían comprarse un lote en un asentamiento como Olmedo y tenían que adquirir un terreno en un asentamiento incipiente sin servicios ni reconocimiento legal alguno. Y ahí se reinicia todo el círculo, más vicioso que virtuoso, entre la retención del suelo sin uso, la poca consolidación del barrio y el lento acceso a los servicios.

Eso significa que se siguen incorporando tierras al mercado urbano sin haber terminado de poblar los asentamientos ya existentes, lo que conlleva problemas considerables. Primero, esta demanda inflada presiona al alza de los precios por un suelo de muy baja calidad, pues no está servido. Segundo, se dificulta para el municipio cumplir con su responsabilidad de financiar los servicios en red y otros equipamientos en una ciudad que crece horizontalmente y con muy baja densidad poblacional.

Un suelo seguro

En los casos de movimientos de ocupación de la tierra como los comunarios de Pampa San Miguel, los demandantes de suelo dependen totalmente del loteador, quien no les vende un terreno sino el derecho de estar en su lista. El poder arbitrario del loteador de sacar a alguien de su lista y de su derecho a un lote es absoluto. No obstante, este poder se basa, en parte, la aceptación por las “bases” de su legitimidad: el loteador es a la vez un dictador y un garante del interés colectivo de acceder a un lote, lo cual depende de la eficacia de la acción colectiva; es decir de la movilización obligatoria de la fuerza física de todos los miembros del movimiento de ocupación.

En los casos más comunes donde el loteador vende el lote y entrega una minuta de compra al demandante, éste es menos dependiente. Sin embargo, la minuta no es un documento legal; el único propietario legal sigue siendo el loteador, quien tiene registrado en Derechos Reales el título sobre el terreno agrícola no fraccionado. Entonces, las familias dependen del loteador para cualquier trámite

legal y para revender su lote a un tercero (tienen que pagar al loteador para que firme una nueva minuta al tercero). Además, mientras siga habiendo lotes para vender, lotes comprados pero no construidos y gente que no terminó de pagar su deuda al loteador, éste tiene el poder de otorgar lotes o no, de cambiar a la gente de lugar o aun de sacarla de la urbanización. En otras palabras, el poder del loteador se basa en la inseguridad del acceso a la tierra de los compradores.

Por fin, la superioridad económica del loteador y su conocimiento y experiencia en los procesos de urbanización —a menudo, conoce bien las normas y las personas de la Subalcaldía— lo vuelven un “notable” del barrio, quien patrocina los campeonatos de fútbol y da consejos sobre los trámites con la Alcaldía e incluso sobre las relaciones conyugales de los vecinos.

Esta dependencia de las familias frente al loteador explica que a menudo, en los primeros años de los asentamientos, las juntas vecinales tengan como presidente al mismo loteador, lo cual le permite realizar mejores negocios en el barrio, vendiendo las áreas verdes, por ejemplo.

El presidente: Como loteadores, ellos se han nombrado dirigentes entre ellos y como estaban ellos a cargo del negocio, directamente el mando han asumido ellos. Y al que pone una propiedad en venta, solamente le interesa vender y no los servicios. Eso es lo que ha pasado durante aquella gestión. No han gestionado nada. Creo que hay alguna intención: cuando ya terminan de vender los lotes, entonces empiezan ya a atacar las áreas verdes. Las calles eran de 12 a 9 metros y lo han reducido de 10 a 8 metros. Por ejemplo, un manzano componía 18 lotes, entonces, con lo que lo han reducido las calles, han crecido a cuatro lotes más en un manzano.

El vecino: Cuando ya, más tarde, nos hemos dado cuenta, más que todo los que tienen casa aquí y viven aquí. Todos nos hemos reunido y hemos dicho: “No, parece que estamos mal, hay que frenar”. Claro, los que tienen lotes nomás, éstos, los que no viven, estaban con él. Porque no sabían cómo uno sufre de aquí a allá trasladando, todas esas cosas (entrevista con el presidente de la OTB Olmedo y un vecino, 14 de agosto de 2006).

La paulatina autonomización de los vecinos frente al loteador es un proceso en el cual se enfrentan generalmente los que no viven en el barrio y los que sí viven en el barrio. Los primeros dependen más

del loteador para garantizar su posesión del lote y se dejan manipular por él, mientras que los segundos han consolidado su posesión por el hecho de habitar en él, constatan las maniobras del loteador y tienen interés en que la dirigencia se dedique a urbanizar el asentamiento en vez de lotear. Adicionalmente, el reciente proceso de regularización con ARCO ha permitido a las familias registrar su propiedad en Derechos Reales e independizarse definitivamente del loteador.

Sin embargo, los dirigentes vecinales perciben que la regularización de los derechos de propiedad individual debilita la organización colectiva, la cual es necesaria en estas zonas olvidadas por las instancias estatales, para obtener cualquier mejoramiento de las condiciones de vida. El control del “pasajero clandestino”, un desafío esencial a la eficacia y aún a la existencia de la acción colectiva, depende de la capacidad del grupo a manejar incitaciones selectivas y sanciones. La seguridad de la tenencia otorgada por la esfera legal (el registro en Derechos Reales) vuelve inútiles las garantías a la seguridad de la tenencia otorgadas por la organización colectiva, que se obtienen por la participación en las reuniones y actividades del barrio, reforzando así los comportamientos individualistas de los pobladores¹⁷.

Los loteadores son a menudo dirigentes y los dirigentes vecinales son confrontados a numerosas oportunidades de volverse loteadores y de lucrar.

Los loteadores tienen interés en vincularse con la Subalcaldía para evitar la demolición de su asentamiento y obtener autorizaciones tácitas y ayudas a su actividad. Por su lado, los dirigentes vecinales tienen que negociar con la Subalcaldía favores para su barrio: en un contexto de poca inversión municipal en el Distrito y de ilegalidad de los asentamientos, la aprobación de la extensión de la red eléctrica o la apertura de un camino se obtienen a cambio de presiones callejeras en contra de la autoridad y/o de marchas de apoyo a la autoridad y promesas de votos.

17 Los programas promovidos por el Banco Mundial, como ARCO, favorecen la regularización hasta la etapa del título de propiedad individual registrado en Derechos Reales. Sin embargo, como lo muestra Payne (2004), los habitantes de los asentamientos informales ya pueden compartir una percepción eficaz de seguridad de la tenencia, tener acceso a crédito y servicios públicos e invertir en mejoras en su vivienda, todo ello sin la necesidad de títulos legales individuales: el reconocimiento público a instituciones sociales que regulan armónicamente la tierra y garantizan colectivamente la tenencia (como una organización vecinal) o políticas públicas más flexibles como la regularización de asentamientos en conjunto sin ir hasta la titularización individual, pueden ser mecanismos menos costosos y más eficaces para la seguridad de la tenencia, en particular de los pobladores más débiles.

¿Cómo es posible que una urbanización ilegal, levantada sobre el avasallamiento y el asalto, tenga los servicios básicos? La zona de K'asa Mayu es la zona donde los adjudicatarios de Agromin tenían que haber sido instalados, donde ellos habían comprado. Fue avasallada por los comunarios, en menos de un mes es una urbanización y nos enteramos que ahora tiene luz eléctrica, les han instalado agua, alcantarillado, tienen todo y es una urbanización ilegal en terrenos que son propiedad de la Universidad. ¿Qué ha pasado ahí? No sabemos. El gobierno se comprometió a investigar. Se supone que la Alcaldía tiene que autorizar. Ahora, uno de los loteadores [Aurelio Chileno], que está señalado como loteador y ha participado en loteamientos en varios lugares de Cochabamba, trabaja en la Sub Alcaldía de la zona y él es el que, hasta donde hemos podido averiguar, ha autorizado el ingreso de material, ha autorizado la construcción, ha aprobado planos sobre la nada (entrevista con la Coordinadora de la Comisión de Conflictos del Arzobispado, implicada en la mediación del conflicto de Pampa San Miguel, 21 de agosto de 2006).

Los loteadores manejan a los compradores. De ese modo es que con la presión social que van a hacer los vecinos, los que les compran, se va a obtener la regularización del barrio. En el caso del Distrito 9, hay loteadores que llegan a ser dirigentes de la OTB. No viven en el barrio. Se van a la ciudad, tienen las comodidades que ellos quieren, pero se infiltran fuerte. El actual presidente del Concejo Distrital es loteador, de Villa Israel arriba. Ahora se están metiendo a nivel dirigencial, me imagino para tener el control (entrevista con un experimentado dirigente vecinal y ex administrador de la Casa Comunal del Distrito 9, 17 de agosto de 2006).

Más que protección de los loteamientos, hay casos de reconocimiento podríamos decir. Esta gente que ha logrado asentarse necesita vías de acceso, alumbrado público, servicios básicos. Como son declarados “clandestinos o ilegales”, no pueden recibir. Sin embargo, hay coyunturas que permiten, esto normalmente en procesos electorales. Existe el ofrecimiento de dotarles alguno de estos servicios, a cambio de sus compromisos políticos; y los dirigentes son los que empiezan a hacer los acuerdos (entrevista con un asesor legal de la Subalcaldía Distrito 9, 11 de septiembre de 2006).

Las estructuras partidarias que cortejan el poder en el nivel local tienen mucho interés en cooptar a los loteadores y dirigentes por su capacidad de influencia sobre la población. Con estos intercambios clientelares, los políticos apuntan a seducir o capturar el apoyo de los ciudadanos “de a pie”, agrupados en redes sociales más o menos coercitivas o estructurantes de toma de posiciones políticas (Bouju 2000). Las cabezas de estas redes sociales modelan la visión colectiva o definen las acciones obligatorias para los miembros de la organización, apuntando al interés común de la organización pero también desviándolo a favor de sus intereses personales.

Existen diversas redes sociales con sus respectivas cabezas: los loteadores y sus redes de compradores; los loteadores-dirigentes de movimientos de ocupación (por ejemplo, los comunarios de Pampa San Miguel) son quizás los que poseen más poder sobre sus bases; los loteadores-dirigentes de sindicatos agrarios y los campesinos; los loteadores-dirigentes vecinales y los vecinos; los loteadores-representantes del distrito y los presidentes de OTB del Distrito; los dirigentes vecinales, dirigentes agrarios y representantes del distrito que no son loteadores y sus respectivas redes sociales.

Por consecuencia, la inseguridad de la tenencia del suelo constituye una clave de la cultura política de la frontera urbana-rural; pues es el cemento de la acción colectiva, de la regulación por la comunidad y entonces de algo como una ciudadanía comunitaria, pero a la vez es el pecado original que permite y perpetúa el chantaje político, el clientelismo y la corrupción como modos normalizados de relación entre el ciudadano y el político. Hablamos de cultura política porque el tiempo entre el asentamiento informal y su regularización marca toda una generación, y porque la frontera es un proceso que se repite al avanzar: el modo de integración política que genera ha concernido territorios y generaciones sucesivas desde la conformación de las ciudades.

En este contexto, la regularización de los derechos de propiedad individual abre las puertas a varios escenarios. El más positivo vería la perpetuación de las organizaciones vecinales y de su acción colectiva a favor del interés común (en particular el acceso a los servicios básicos y urbanos), pero emancipadas de las redes clientelares y reivindicando sus derechos como sujetos políticos. En el escenario más negativo, el debilitamiento de las organizaciones vecinales resultaría en una individualización de sus miembros, un agotamiento de la acción colectiva a favor del interés común, y una estagnación en el mejoramiento de los barrios favorable, nuevamente, a la búsqueda de favores clientelares, bajo una modalidad más anómica.

Conclusión

Si la regulación por la comunidad tiene el mérito de existir y de imponer ciertos límites al mercado informal de suelo y a sus dinámicas especulativas, destructoras del medio ambiente y contraproducentes para los intereses sociales y públicos de la sociedad, esta regulación es demasiado débil. Pese a las divisiones internas (entre pobladores en competición por el mismo suelo, o entre habitantes de su lote y pasajeros clandestinos) y las manipulaciones externas (por loteadores, dirigentes y autoridades políticas), la regulación por la comunidad podría resultar ser la mejor aliada del Estado para acertar en la función social de la propiedad en las ciudades y en sus fronteras en expansión. Vimos, pues, que los pobladores de la frontera urbana-rural ya precedieron al Estado en la tarea de definir las finalidades y modalidades de la función social de la propiedad urbana. En este texto, examinamos las tres dimensiones de la función social que priorizan estos pobladores:

La primera dimensión es la oportunidad de la oferta, o sea, la disponibilidad del suelo (cantidad suficiente) para las necesidades habitacionales (uso adecuado) de las familias empobrecidas de hoy (precio económico). La segunda dimensión es la calidad del suelo, o sea el acceso a los servicios básicos y urbanos, lo cual depende de la inversión de los actores públicos (la Alcaldía, la Prefectura, el Estado), privados (los loteadores, las grandes y pequeñas empresas) y colectivos (los mismos pobladores), pero también de la localización de los asentamientos (se debe promover un crecimiento compacto menos costoso en cuanto a la expansión de los servicios en red). La tercera dimensión es la seguridad de la tenencia del suelo, sea ésta obtenida por títulos de propiedad individual o por un reconocimiento colectivo (como un plano de urbanización aprobado).

Estas tres dimensiones de la función social de la propiedad del suelo componen un retrato de los ciudadanos de la frontera urbana-rural: en la lucha por la ciudadanía social (su *derecho a* la tierra, la vivienda, el agua, etcétera), reinventan formas de ciudadanía comunitaria que mediatizan su relación con el Estado y el mercado y les permiten acceder más eficazmente a los recursos escasos que les son negados por éstos. Sin embargo, los modos de gestión política de la frontera por el centro (tolerancia negociada y regularización *a posteriori*, mecanismos de la Participación Popular) han instrumentalizado este anhelo de ciudadanía social y esta tradición reinventada de la ciudadanía comunitaria para encerrar a los ciudadanos de la frontera en un tipo de ciudadanía política marcada por el clientelismo.

En el escenario político nacional, no se llega todavía a reconocer este retrato como una figura política unificada con reivindicaciones y portavoces propios; pero, en su faceta más conocida de pobres y migrantes, cholos y mestizos, fabriles y trabajadores informales, ya logramos identificar a estos ciudadanos en las movilizaciones políticas recientes: unas engendraron la “revolución democrática y cultural” y su agenda antiliberal, plurinacional y comunitaria, como la Guerra del Agua o la Guerra del Gas; otras, a pesar de su violencia y recurrencia, todavía no encuentran un discurso y una respuesta coherente con esta agenda, como los movimientos de los “sin techo” que ocupan tierras suburbanas en Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba u Oruro.

La politización de estos movimientos implicaría transformar las reivindicaciones puntuales y localizadas por vivienda y tierra urbana en un cuestionamiento a la injusticia estructural. Estos movimientos no logran todavía articularse como parte de la agenda antineoliberal y comunitaria del “Gobierno de los movimientos sociales”, pues no identifican al responsable común de sus sufrimientos: según las condiciones particulares a cada conflicto, los demandantes de suelo se oponen sucesivamente a las alcaldías, las prefecturas, el Estado central, a los delincuentes individuales (los loteadores) o a las lógicas anónimas y atomizadas del mercado informal.

Esta politización de los movimientos sociales por la tierra urbana y la vivienda nos parece altamente deseable para que, como los movimientos campesinos e indígenas, puedan entrar en diálogo con el Estado e imponer la función social de la propiedad urbana en la agenda política nacional. Sin este diálogo, el Estado (los funcionarios y los líderes políticos que lo conforman) no superará la inmadurez de su reflexión sobre la ciudad, y es dentro de este diálogo que se elaborará el cambio de paradigma que está ocurriendo en otros sectores.

Bibliografía

- Achi, A. (coord.), Delgado M. (2007) *A la conquista de un lote. Estrategias populares de acceso a la tierra urbana, entre relegación política y resistencia*, PIEB, La Paz.
- Benda-Beckmann, F. (2003) “Mysteries of capital or mystification of legal property?” en *Focaal-European Journal of Anthropology*, (41), 187-191.
- Bouju, J. (2000) “Clientélisme, corruption et gouvernance locale à Mopti (Mali)” en *Autrepart* (14), 143-163.
- Cajías, M. (2004) “Articulaciones ideológico culturales en los movimientos sociales. El poder de la memoria” en *Barataria*, n°1, octubre-diciembre.

- Chauveau, J.P., J.P., Jacob, P.Y., Le Meur. (2004) "L'organisation de la mobilité dans les sociétés rurales du Sud" en *Autrepart*, (30), 3-23.
- Delgado, M. (2007) "Especulación con el suelo baldío en la ciudad de Cochabamba", en J. Feyen, L. Aguirre, M. Morales (compiladores), *Proceedings of the International Congress on Development, Environment and Natural Resources: Multi-level and Multi-scale Sustainability*, VLIR-UMSS, Cochabamba, 1763-1771.
- De Soto, H. (1986) *El otro Sendero*, Editorial El Barranco, Lima.
- Fernandes, E., M., Smolka (2004) "Regularización de la tierra y programas de mejoramiento: nuevas consideraciones" en *Land Lines*, vol.16, n° 3.
- Gobierno Municipal de Cochabamba (2005) *Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio Cercado de Cochabamba*, Gobierno Municipal de Cochabamba, Cochabamba.
- Instituto Nacional de Estadística (2001) *Censo Nacional de Población y Vivienda*, INE, La Paz.
- Morales-Schechinger, C. (2005a) "Políticas de suelo urbano, accesibilidad de los pobres y recuperación de plusvalías", *Lincoln Institute of Land Policy*.
- Morales-Schechinger, C. (2005b) "Algunas explicaciones del comportamiento del mercado de suelo", Texto preparado para el curso de Educación a distancia Mercados de Suelo en Ciudades Latinoamericanas, en www.lincolninst.edu.
- Olson, M. (1971) *Logic of Collective Action*, Harvard University Press, Harvard.
- Payne, G. (2004) "Land Tenure and Property Rights: An Introduction" en *Hábitat International*, 28, 2, 167-179.
- Ramírez, L. (2004) "Políticas de vivienda en Bolivia" en *Aportes para la formulación de una política de vivienda en Bolivia*, RENASEH, Cochabamba, 41-64.
- Smolka, M. (2003) "Informalidad, pobreza urbana y precios de la tierra" en *Land Lines*, enero 2003, vol. 15, n° 1.
- Smolka, M. (2002) "Regularización de la ocupación del suelo urbano: El problema que es parte de la solución, la solución que es parte del problema", Versión presentada en el Curso profesional sobre mercados informales, regularización de la tenencia y programas de mejoramiento urbano, Lincoln Institute of Land Policy.
- van der Haar, G. (2000) "The contested nature of land tenure regulation" en A. Zoomers y G. van der Haar (editores), *Current land policy in Latin America : regulating land tenure under neo-liberalism*, KIT Publishers - Vervuert Verlag, Amsterdam, 271-287.

Ecología de barrio miseria en la ciudad de La Paz

Víctor Hugo Perales Miranda

Casas junto al cerro, casas en mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro.

Enrique Congrains Martin, *El niño de junto al cielo*

Uno de los rasgos importantes de las ciudades latinoamericanas en general y de las ciudades bolivianas en particular es el proceso de urbanización acelerado y poco o nada planificado (Riofrío 2003). Este proceso, entre otras cosas, ha traído consigo diversos problemas a raíz de la imperiosa necesidad de los vecinos de los asentamientos humanos en las zonas más pobres de satisfacer espontáneamente la demanda de servicios básicos de agua potable y saneamiento básico (Quiroz 2006).

Este proceso de construcción de nuestras ciudades está jalonado por una serie de interrelaciones que se dan entre campo y ciudad, en el marco del particular desenvolvimiento del capital en nuestros países, que construye una multilocalidad en la que paralelamente interaccionan procesos de diáspora rural y crecimiento demográfico y ocupación espacial desordenada de las ciudades.

El *medio ambiente construido* (Harvey 2005; Altvater 2006), en estos contextos de expansión improvisada de las áreas urbanas suele ser poco amigable con la Naturaleza. Pueden constatarse desbalances del entorno natural al afectarse el ciclo hidrológico de las cuencas donde se producen estos asentamientos humanos, en contravención a la recomendación de las visiones mundiales del agua que plantean como tipo ideal un manejo integral de cuencas.

Según la visión mundial del agua refrendada en múltiples convenios, encuentros mundiales, foros y declaraciones, la gestión integral del agua de cuencas propone a la cuenca como la escala espacial de

gestión de los recursos hídricos en la que se resuelven los conflictos de intereses entre los habitantes de la parte alta, media y baja de las mismas (Global Water Partnership, GWP, e International Network of Basin Organizations, INBO 2009). La aplicación del enfoque de la gestión del agua en la escala socioeconómica de la cuenca debe procurar el equilibrio de los elementos que apunten a consolidar de manera práctica la equidad social y la eficiencia económica y que garanticen una ecología sustentable, a través de organismos de cuenca que faciliten el diálogo y el consenso entre los diversos actores y sus múltiples usos del agua (*ibíd.*).

Sin embargo, en la práctica, los comportamientos que pueden observarse en las ciudades bolivianas como La Paz o Cochabamba¹ evidencian procesos de deforestación, la pérdida de capacidad de infiltración y retención del agua en los suelos, los procesos erosivos, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los efluentes domésticos e industriales, así como una larga lista de otros factores, que generan una permanente situación de vulnerabilidad frente a los “desastres naturales”², así como una serie de problemas de salud (en particular, enfermedades diarreicas agudas de evidente origen hídrico). A esta situación la hemos denominado “manejo no integrado de cuencas”.

En tal sentido, el propósito del presente trabajo es caracterizar los problemas originados por el proceso de expansión urbana no planificada, en especial aquellos originados por la infraestructura para el acceso al agua y servicios básicos autoconstruidos en el contexto de un manejo no integral de microcuencas, y reflexionar sobre los mismos.

Para tal efecto, centraremos nuestra atención en las microcuencas del río Janq'u Qullu³ y del río Cotahuma⁴ de la ladera oeste de la ciudad de La Paz, ambos tributarios del río Choqueyapu. Según nuestra consideración, este espacio urbano sintetiza la problemática

1 El caso de Cochabamba resulta paradigmático, pues una gran cantidad de cuencas hidrográficas que prestan servicios ambientales a las áreas urbanas tienen sus nacientes en un área protegida colindante con la misma ciudad, el Parque Nacional Tunari (Boillat *et al.*, 2008). Sin embargo, la declaratoria de «parque natural» no ha permitido evidenciar un manejo ambiental sustentable en esta frágil área natural.

2 Un ejemplo de esta situación pudo evidenciarse en los “desastres naturales” de febrero del 2002 en la ciudad de La Paz, con el saldo trágico de decenas de muertes y cuantiosas pérdidas materiales.

3 Voz aymara que alude a un cerro o montaña blanca.

4 Cotahuma, deriva de la voz aymara *qota uma*, que quiere decir “agua del lago”, pues existe la creencia de que las aguas de este río provienen del lago Titicaca; la zona se encuentra próxima a la divisoria de aguas entre las cuencas del lago Titicaca y del Amazonas; el río Cotahuma es un tributario de las nacientes de la cuenca del Amazonas.

del manejo no integral de cuencas, pues en esta zona no existe protección de las fuentes de agua ni tratamiento de aguas residuales. Además, la infraestructura de provisión de agua y saneamiento es completamente improvisada.

En la investigación que sustenta este trabajo, se ha aplicado una metodología cualitativa, basada en una observación sistemática estructurada de las relaciones entre la sociedad y la Naturaleza, a partir de una lectura del paisaje natural urbanizado o “medio ambiente construido”. La misma ha sido complementada con una serie de entrevistas a vecinos de las dos microcuencas estudiadas y una revisión bibliográfica referida a la construcción de la ecología urbana de la ladera oeste de la ciudad de La Paz.

Ecología urbana y marginalidad

La literatura sobre sociología urbana en Latinoamérica frecuentemente ha tratado el tema de la migración interna y de las relaciones entre campo y ciudad. De hecho, esta preocupación deviene de la constatación de la aceleración urbana que la región ha experimentado desde la década de 1960 y de la “marginalidad ecológica” en la que están sumidos los migrantes. Éstos han sido expulsados de sus tierras por el hambre y la miseria y se encuentran que los espacios urbanos tampoco cuentan con la infraestructura idónea para asimilarlos, por la configuración de una red urbana trunca y desarticulada, donde un lugar común es la ausencia de planificación (Castells 1973).

América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con mayor nivel de urbanización, con el 75% de su población viviendo en ciudades. Según el censo de 2001, en Bolivia, 62% de la población boliviana habita en ciudades (Pereira y Montaña 2002). Si tenemos en cuenta que las concentraciones urbanas generalmente se han desarrollado de manera improvisada, resulta relevante atender el problema de los barrios miseria, ranchos, pueblos jóvenes, favelas, *shanty towns* o *slums*, pues, sin duda, son los espacios urbanos más poblados en las ciudades de América Latina, problemática que viene extendiéndose en gran parte del Planeta, en los llamados países del Tercer Mundo (Davis 2006).

La sociología urbana norteamericana tradicionalmente concentró su atención en la ecología urbana, en la segregación residencial, bajo la influencia de los trabajos de la Escuela de Chicago. Los trabajos realizados sobre las urbes en Latinoamérica estuvieron enfocados en el problema de la marginalidad o informalidad (Ríofrío 2003).

El trabajo de Davis, *El planeta favela* (2006), reúne elementos de la ecología urbana como de la marginalidad para reflexionar sobre los barrios miseria, ya no solo de Latinoamérica, sino de todo el orbe.

En esa misma dirección y acogiendo tales elementos, que permiten elucidar sobre lo que Lefebvre llamaba *la construcción social del espacio*, es necesario incorporar, reforzar o recordar la presencia del espacio natural. Si bien lo urbano implica un *medio ambiente construido* (Harvey 2005; Altvater 2006), la Naturaleza no deja de ser tal, pese a las transformaciones sufridas. De hecho, Davis anota que no resulta casual que los “desastres naturales”, por lo general, tienen mayor impacto en los pobladores más pobres de las ciudades⁵.

De esa manera, debe reconocerse que los eventos naturales o “desastres naturales”, cuyo tratamiento abrió una corriente multidisciplinaria llamada “gestión de riesgos” (Lavell 2008), en realidad son resultados de una entropía en la relación entre las sociedades urbanas y la Naturaleza. Su presencia se deja sentir bajo la forma del desastre, como una clara expresión de resiliencia (en su acepción más tradicional, es decir, desde la perspectiva física, biológica y química) ante el desorden de los ciclos hidrológicos en cuencas que han sido producidos por la intervención humana.

La ladera oeste y el proceso de segregación residencial en La Paz

La particular topografía de la ciudad de La Paz está constituida por una hoya geográfica de donde nacen empinadas pendientes que, por el lado occidental, se conectan con la ciudad de El Alto. Uno de estos declives es la ladera oeste, comprendida por una serie de barrios de viviendas autoconstruidas como San Juan de Cotahuma, San Juan de Tacagua, Alto Tacagua, Las Nieves, Obispo Bosque, Huallparrimachi, Pasankeri, entre otros.

Las laderas que acordonan todo el perímetro de la ciudad de La Paz, pese a sus fuertes pendientes, han sido urbanizadas al punto de haberse convertido en una mole de cemento que recorre indisolublemente las pendientes que unen la hoyada paceña con la planicie de la ciudad de El Alto. Se trata de una concentración de viviendas en las que existe un déficit de espacios públicos, donde las carreteras de

5 Tales como los desastres en New Orleans, Manila y Centroamérica, lista a la que podemos agregar las riadas y granizada de febrero de 2002 en La Paz o los permanentes aludes en las laderas paceñas.

reciente construcción han tenido que sortear una serie de negociaciones y compras de viviendas particulares para garantizar los espacios en los que se construyeron. Las pocas áreas verdes existentes aún siguen retrayéndose frente a la necesidad creciente de espacios para ser habitados.

Las laderas paceñas empiezan a ser pobladas en la década de 1950 y 1960, en tanto que, en la década de 1970, termina por estallar la urbanización de estas zonas de alta pendiente. Esta situación rediseñó los patrones de segregación residencial urbana, pues mientras los proletarios y subproletarios ocuparon las pendientes y la ciudad de El Alto, la élite paceña empezó a desplazarse hacia la zona sur de la ciudad (Van Lindert y Verkoren 1982). Sin embargo, la ecología urbana paceña no alberga patrones residenciales estrictamente homogéneos (Cf. Arbona 2008; Ledo 2005), pues en El Alto y la zona noroeste de La Paz se ha ido asentando una élite comercial, así como también hay barrios carenciados en las laderas de la zona Sur de La Paz, como Huanu Huanuni, Barrio Municipal, Pedregal, Los Rosales, entre otros.

La ocupación de las laderas surgió por la presión de la creciente necesidad de acceder a espacios cercanos al centro por estos vecinos de origen rural (Cuadros 2003; Bedregal 2003) quienes, expulsados del campo por el fracaso de la Reforma Agraria de 1953 (Albó 1983), llegaron a estas zonas de ladera. El atractivo de las laderas consiste en su cercanía al centro de la ciudad.

Las autoridades edilicias y del gobierno central de aquel entonces observaron con impotencia, negligencia e incompetencia este fenómeno. En 1976, el alcalde paceño de turno, Mario Mercado, contrató a una consultora francesa para que haga los trazos de la primera planificación urbana de la ciudad de La Paz (BRGM y BCEEO 1978; Cuadros, 2003).

Hasta entonces, la iniciativa y el dominio de todo este proceso de urbanización no planificada, los mantuvieron los traficantes de tierras urbanas o *loteadores*. Estos traficantes aprovecharon una serie de nexos con autoridades corruptas o en su defecto capitalizaron la ineptitud de las autoridades de turno, que no previeron los alcances de este nuevo proceso de urbanización en las laderas. Los loteadores impusieron sus intereses económicos sobre cualquier intento de planificación urbana. Sus criterios de loteamiento no contemplaban el espacio público. En sus maquetas de preventa solo había lotes de terrenos para vivienda, mas no había espacio para parques, plazas, escuelas o espacios deportivos. El tráfico de suelos urbanos tampoco atendió a las características espaciales del entorno natural que se estaba loteando.

En adición, no estuvo prevista la instalación de servicios básicos de agua potable, electricidad, alcantarillado sanitario y pluvial. Ante esta contingencia, aparecieron cooperativas y comités que se movilizaron en torno a acciones colectivas, una suerte de extrapolación de las actividades comunales de las comunidades rurales a las que estaban habituados los nuevos pobladores urbanos en sus lugares de origen (Albó *et al.* 1983).

Este proceso de asentamiento humano de zonas altamente vulnerables por sus características topográficas (Ledo 2005) ha dejado como resultado un mapa demográfico en el macrodistrito de Cotahuma (donde se encuentra la ladera oeste), en el que existe una densidad demográfica de 9.451 habitantes por kilómetro cuadrado⁶.

Manejo no integral de dos microcuencas urbanizadas, ecología de *barrio miseria*

La zona sufrió la deforestación de sus especies nativas en una época difícil de precisar. Según Álvaro Cuadros (2003), en la década de 1960 hubo un plan de reforestación de las laderas paceñas, a raíz del cual se plantaron miles de árboles de eucalipto. En la década de 1970, nuevamente la zona sufrió un rápido proceso de deforestación que aún no cesa, producto de la creciente urbanización.

En el caso particular de la ladera oeste, los árboles cedieron paso a las viviendas que fueron instaladas en las riberas de los ríos. El proceso de deforestación fue rompiendo la dinámica hidrológica de la cuenca, evitando que el agua se infiltre, con la consecuente impermeabilización y erosión de los suelos y el escurrimiento de las aguas, lo que ocasiona deslizamientos, máxime si los suelos de estas pendientes son arcillosos.

En la memoria de los pobladores de la cuenca están los aludes que afectan la parte baja de la cuenca. Uno de esos eventos fue el aluvión que enterró el campo deportivo del club de fútbol The Strongest⁷, que existía en la zona de Cotahuma (donde ahora está ubicado el Mercado Strongest). De la misma manera, uno de los barrios que está ubicado

6 En el macrodistrito Cotahuma, el 10,42% de las viviendas tienen piso de tierra, 50% de estas viviendas tienen paredes de adobe; 77%, techos de calamina; más del 19% cuentan con dormitorios habitados por más de tres personas (GMLP 2008), teniéndose en cuenta que el desglose de los datos del macro distrito de Cotahuma podría revelar mayores carencias en la ladera oeste de La Paz, pues los porcentajes enunciados incluyen a los pobladores de Sopocachi y San Jorge cuyas condiciones socioeconómicas son mucho mejores las de los pobladores de los otros barrios del Macrodistrito.

7 El club decano del fútbol paceño y boliviano.

en la zona de unión de aguas del río Cotahuma y del Janq'u Qullu recibió el nombre de Tembladerani⁸, por las frecuentes mazamoras que ocasionaban temblores, cuyos efectos llegaban hasta la Plaza El Cóndor, ubicada a un kilómetro hacia abajo de la ladera oeste.

Como señalamos, los loteadores distribuyeron los lotes en toda el área, porque los mismos eran atractivos por su cercanía al centro y porque eran muy baratos dado que los suelos son inestables y con pendientes muy pronunciadas. Los nuevos pobladores asumieron el riesgo de habitar zonas vulnerables ante eventos naturales, en suelos arcillosos, donde hay flujos subterráneos, terrenos en alta pendiente, a lo que se suma la proliferación de tugurios y espacios hacinados.

Estamos hablando de una lógica de ocupación del espacio, de territorialización, originalmente empleada en contextos rurales, caracterizados por la dispersión del asentamiento humano. Sin embargo, en este caso, el asentamiento está densamente concentrado. Por ello, la forma como estos nuevos pobladores urbanos se relacionan con la Naturaleza va adquiriendo dimensiones insospechadas. En la ladera oeste puede evidenciarse una continuidad cultural y organizativa entre campo y ciudad (Albó *et al.* 1983), pese a que geográficamente la zona está en medio de la conurbación de las ciudades de La Paz y El Alto, por lo que no se trata de un área periurbana, aunque sí de una zona económicamente deprimida.

En la ladera oeste, muchos de los habitantes no cuentan con los títulos de propiedad de estas casas que, aglomeradas, van imitando el estilo arquitectónico de las viviendas del centro, con forma de damero, como legado de las lógicas de aglomeración urbana de los españoles de tiempos de la Colonia, en una zona donde las pendientes oscilan entre los 45° y 60° (Bedregal 2003). Esta situación dificulta la construcción de viviendas y de la infraestructura de agua y saneamiento. Además, no existe una planificación urbana ni identificación de lugares de edificación en terrenos estables.

Por otro lado, se puede ver que estos nuevos pobladores se agencian de todos los medios para cubrir sus necesidades de ocupar un espacio. Por ello, la necesidad de agua potable fue paliada por el uso irregular y desordenado de las vertientes, ojos de agua o manantiales existentes en la zona. Los vecinos instalaron canaletas de desagüe cuya desembocadura fue a dar al río Janq'u Qullu, convirtiendo a sus aguas en un virtual drenaje de aguas residuales.

8 Tembladerani es una palabra que entremezcla los idiomas español y aymara (*aymarañol*), y alude a un "lugar que tiene tembladeras o temblores".

Todo emprendimiento de provisión de agua potable y saneamiento se realizó en el marco de acciones colectivas. En buena cuenta estamos hablando de una “gestión de la penuria” (Poupeau 2007). Resulta impresionante observar cómo las cañerías cruzan de un lado al otro el río en distancias de 200 metros sobre barrancos de 300 metros de altura.

En cuanto a los *outputs* del alcantarillado sanitario, claramente se observa que se entremezclan los efluentes con el alcantarillado pluvial y van a parar a los ríos Janq'u Qullu y Cotahuma y luego al río Choqueyapu. Esta situación provoca que las aguas residuales se infiltren en los suelos, cosa que los ha tornado más inestables aún, pues el remojo de los mismos hace peligrar las viviendas asentadas en la zona. Dado que se trata de suelos arcillosos, en la época de lluvias muchas de estas viviendas fueron arrastradas o enterradas por aludes.

Se puede observar cómo las excretas caen desde tuberías instaladas en las riberas hacia los ríos Janq'u Qullu y Cotahuma. En otros casos, las excretas están a la vista, corriendo por la misma calle. Los residuos sólidos y líquidos del centro de la ciudad también se entremezclan con las aguas del río Choqueyapu. Al no contar con una planta de tratamiento, las aguas residuales se mezclan con las aguas del río a través del alcantarillado sanitario y el pluvial que están ocultos por la compleja trama de obras de embovedado.

Esta infraestructura de saneamiento básico autoconstruida, además de generar peligros en la estabilización de los suelos, en la deforestación, también es un foco infeccioso de múltiples enfermedades.

La resiliencia de la Naturaleza para recuperar el terreno perdido ante el *medio ambiente construido* o la naturaleza humanizada, ha generado diversos deslizamientos. Éstos propiamente no son “riesgos”, sino consecuencias de las alteraciones sociales sobre el ciclo hidrológico de la cuenca.

De hecho, el manejo displicente del orden natural de la cuenca desde la década de 1960 ha provocado muertes, personas heridas y pérdidas materiales. Han ocurrido desastres en zonas como Las Lomas, Las Nieves, Cotahuma, Tacagua, Niño Qullu, K'ala Uuta. En muchos casos, nunca se han encontrado los cadáveres que quedaron sepultados. Pese a todo, la población damnificada sobreviviente ha presionado al Municipio para reinstalarse en el mismo lugar.

La vivienda e infraestructura autoconstruida responden a una ecología de barrio miseria, pues la intervención institucional es inexistente o insuficiente. Por ello, la “gestión de las penurias” (Poupeau 2007) se plasma en acciones colectivas llevadas a cabo en el marco organizacional de cooperativas y de comités de agua potable. Estas

acciones han sido escasamente estudiadas en el medio boliviano (véase Quiroz 2006; Rojas *et al.* 2007).

Sin embargo, también es necesario remarcar que esta situación solo se verifica en la captación del agua, pero en el caso de los *outputs* de estos sistemas de aprovechamientos de agua, prácticamente no funciona la acción colectiva, pues este tema ha quedado relegado al ámbito de la vivienda familiar, bajo el criterio de que “mi obligación termina cuando empieza la tuya”. Por ello, cada quien se deshace de sus residuos sólidos y residuos líquidos como puede.

El manejo de los efluentes ya no se realiza de manera colectiva, por ello es que se utilizan ciertas tuberías unifamiliares que apuntan hacia el río o hacia la calle. De hecho, en un ambiente de absoluta improvisación, la necesidad de agua requiere de la participación colectiva que pueda asumir la construcción de una red de agua por cañería que transite por lugares de fuerte pendiente, donde el acceso es muy dificultoso. En tanto que el tratamiento de los *outputs* de los sistemas de aprovechamiento de agua se hace innecesario en lo inmediato, pues el colapso ocasionado por la falta de intervención o gestión adecuada de los mismos no será visto sino después de mucho tiempo. A eso se debe el descuido del manejo de los residuos sólidos y líquidos, pues en un ambiente de precariedad se atiende solo aquello cuya urgencia es inmediata.

Entre la infraestructura autoconstruida y la participación institucional de emergencia

En este punto se intenta reflexionar sobre las implicancias de la autoconstrucción, las relaciones de pobladores con el Estado y en particular con el Municipio. La respuesta institucional frente a esta problemática, en un primer momento (en las décadas de 1970 y 1980) prácticamente ha beneficiado a los traficantes de tierras urbanas, mediante la habilitación de nuevos espacios habitables por la construcción de embovedados de los ríos, espacios que han sido sujeto del tráfico de tierra y suelo.

Entre los nuevos pobladores y las instituciones estatales, el loteador se constituía en el mediador principal. Sacó partida de sus nexos con los gobiernos o del mejor conocimiento de su dinámica y con los migrantes quienes se constituían en sus principales clientes.

Las acciones de las autoridades municipales, como los embovedados, fueron mínimas y puntuales. Al embovedarse los ríos se ganaron espacios destinados a las vías de comunicación (por ejemplo, debajo de la avenida Landaeta que va del centro de la ciudad hasta la ladera oeste están los embovedados de los ríos Cotahuma y Janq'u Qullu).

Estos embovedados tienen serias imperfecciones que obligan a que cada cuatro o cinco años se les haga mantenimiento o remozamiento, debido a los constantes sifonamientos.

Por otro lado, las obras más importantes en las laderas se desarrollaron durante la gestión municipal de Juan del Granado (2000 al 2010), con la instalación de graderías, instalación de obras hidráulicas para el control de deslizamientos, control de torrenteras, infraestructura de reducción de la velocidad de las aguas en época de lluvia (mediante colchones hidráulicos que permiten la disipación de la energía con la que baja el agua en terrenos con pendientes pronunciadas).

Quizá el Programa Barrios de Verdad implementado en esta gestión ha sido uno de los más serios en el mejoramiento de barrios y viviendas instaladas en pendientes pronunciadas. Se trata de un trabajo pionero que, sin embargo, aún necesita de muchos ajustes en la captación de agua, el tratamiento de los efluentes, así como en el manejo de cuencas; éstos son temas que son indesligables de una solución integral de los barrios de las laderas de La Paz, además de otros cuestionamientos que se le puede hacer al Programa Barrios de Verdad y que no resulta pertinente enumerar en este trabajo.

También se realizó un conjunto de expropiaciones para viabilizar carreteras asfaltadas que conectan la ladera oeste con la ciudad de El Alto. En otros casos, a raíz de algunos desastres, como un alud que sepultó a los moradores de la zona de K'ala Uta y sus viviendas, la Alcaldía hizo intervenciones de emergencia en la cuenca, tales como la prohibición del reasentamiento en el lugar del desastre, la construcción de un parque de diversiones y de un espacio público, pese a la insistente demanda de algunos damnificados para que les ayuden a construir sus viviendas en el mismo lugar.

Por otro lado, algunas instituciones del desarrollo han impartido algunos cursos de “gestión de riesgos” a los vecinos de la ladera. Sin embargo, son trabajos que no tienen en cuenta el sistema integral natural de las microcuencas del río Jach'a Qullu y del río Cotahuma.

Además, uno de los grandes problemas insolubles para el Municipio es la evidente imposibilidad de construir una planta de tratamiento de efluentes, porque la ciudad de La Paz no cuenta con el espacio suficiente para la instalación de una planta de tratamiento aeróbico y anaeróbico de las aguas residuales.

Este problema de la vivienda autoconstruida, pero también de la infraestructura de aprovechamiento de agua potable y de saneamiento autoconstruida, prácticamente no ha sido tomado en cuenta por las autoridades de los diversos niveles estatales ni por investigadores de las

ciencias sociales y tampoco por los ingenieros que evaluaron o implementaron experiencias de ingeniería sanitaria o civil aplicable a zonas de pendiente pronunciada en el caso de las obras hidráulicas para riego en las zonas de montaña en Bolivia (Bottega y Hoogendam 2004).

Sin embargo, la energía creativa, propositiva y la iniciativa para crear sus propios sistemas de aprovechamiento de agua de parte de los pobladores pobres de la ladera oeste tiene sus limitaciones y deficiencias. Tal es el caso del tratamiento de potabilización inicial, previo a la distribución del agua y el tratamiento de las aguas residuales, las que rebasan la capacidad económica de los usuarios, la capacidad de autoconstrucción y de acción de más de una decena de comités de agua potable y cooperativas. Sin embargo, los vecinos se oponen a que la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), que es la empresa prestadora de servicio de agua potable y saneamiento más grande en La Paz, los incorpore en su sistema y administre sus fuentes de agua.

Conclusiones

El Programa Barrios de Verdad y la reapropiación por parte de la Alcaldía de algunos espacios públicos destinados para la recreación han sido de utilidad para controlar inundaciones o aludes en las microcuencas de la ladera oeste, pues los últimos años no se registraron desastres en las épocas de lluvias. Sin embargo, la infraestructura de saneamiento autoconstruida que se mantiene incólume a estas puntuales intervenciones municipales y la falta de armonía con el orden hidrológico de la zona requieren una planificación con enfoque de cuenca. Aún está ausente una visión integral que incorpore la gestión de residuos líquidos y sólidos y otros componentes ecológicos en el aprovechamiento de agua, en el marco de una visión del orden hidrológico de la cuenca.

De momento, las obras responden a paliar las emergencias. Además, últimamente una mayor incidencia en los trabajos en laderas ha sufrido una inflexión en su desarrollo como programa. Al finalizar su gestión municipal, el alcalde Del Granado repentinamente se ha concentrado en obras visibles en el centro urbano o en proyectos de mayor envergadura como los puentes trillizos y otros, con seguridad, ante la necesidad de aprobación popular de la gestión municipal a través de las obras, porque “obras son amores”.

Las obras que suelen hacerse en estas pendientes pronunciadas de las laderas pacañas no han sido sistematizadas en un trabajo que

permita brindar las pautas de una solución integral a una serie de problemas dentro de estas microcuencas urbanizadas, pues las obras hidráulicas en laderas exigen el manejo escrupuloso y el control de la energía producida por las caídas de agua o rápidas naturales propias de terrenos con pendientes de entre 45° y 60°, así como contener algunos desbordes ocasionados por riadas o aludes.

Ese tipo de trabajos son altamente necesarios. De hecho, la Alcaldía de La Paz ya tiene una importante experiencia y material para desarrollar una sistematización de este tipo de infraestructura de saneamiento básico para zonas de altas pendiente, que incluso podría ser enriquecida con lecciones compartidas extraídas de trabajos similares realizados en las favelas de Río de Janeiro, barrios marginales de Quito, los ranchos de Caracas y las barriadas de Lima u otras ciudades con características similares.

De otro lado, el espacio en las microcuencas de la ladera oeste se ha ido conformando en base a una acumulación de improvisaciones propias de la autoconstrucción y de las intervenciones de emergencia de las autoridades estatales, que hasta el momento solo han servido para salir del paso frente a las contingencias y para no lamentar mayores desgracias en estos barrios.

Las energías desplegadas por los pobladores de la ladera oeste de La Paz, sin duda, son un derroche de creatividad. Sin embargo, hay que reconocer que esas iniciativas son posibles en contextos de necesidad y carencias, lo que hace que las acciones colectivas respondan a una “gestión de la penuria”, pues estos vecinos se las arreglan como pueden y las instituciones no intervienen o sus acciones son muy limitadas.

Es necesario remarcar que la gestión municipal de Del Granado sí ha intervenido con acciones puntuales y concretas, que en cierta medida han demostrado tener algunos buenos resultados, aunque insuficientes. En un contexto de vivienda e infraestructura de agua y saneamiento básico autoconstruidas, la pregunta es: ¿se puede desenmarañar la compleja trama de miseria tejida por esta misma dinámica social, económica y política en tantas décadas?

De hecho, este fenómeno de segregación residencial, de *favelización* de las laderas, no solo es producto de la época neoliberal (Cf. Arbona 2008), sino que también es un resultado de las relaciones que permearon el capitalismo de Estado que propuso el modelo de la Revolución de 1952 en Bolivia. Actualmente es evidente su permanente reproducción (en lo que podríamos llamar periodo posneoliberal), pues la posibilidad de una gestión integral de cuencas y de la

reformulación de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza seguirá rezagada en tanto la miseria se mantenga supérstite, dado que estas laderas caóticamente urbanizadas no han dejado de ser marginales.

Bibliografía

- Albó, Xavier, Thomas Greaves y Godofredo Sandoval (1983) *Chukiyawu, la cara aymara de La Paz: Cabalgando entre dos mundos*, CIPCA, La Paz.
- Albó, Xavier (1983) *¿Bodas de plata? O réquiem para una reforma agraria*, CIPCA, La Paz.
- Altwater, Elmar (2006) “¿Existe un marxismo ecológico?” en A. Borón, J. Amadeo y S. González, *La teoría marxista hoy: Problemas y perspectivas*, CLACSO, Buenos Aires, pp. 341-363.
- Arbona, Juan Manuel (2008) “‘Eso es ser pobre e indio en este país’. Repercusiones urbanas e implicaciones sociales de la discriminación y la exclusión: lecciones de El Alto, Bolivia” en María del Carmen Zabala Argüelles (compiladora.), *Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe*. Siglo del Hombre Editores y CLACSO, Bogotá, pp. 349-372.
- Bedregal Villanueva, Juan Francisco (2003) *El espacio abigarrado de La Paz: Crítica urbanística y arquitectónica a la concepción espacial del Municipio*, Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, La Paz.
- Boillat, Sébastien, Stephan Rist, Elvira Serrano, Dora Ponce y Jaime Delgadillo (2008) “Struggling ‘Ontological Communities’: The Transformation of Conservationists’ and Peasants’ Discourses in the Tunari National Park, Bolivia” en Marc Galvin y Tobias Haller, *People, Protected Areas and Global Change. Participatory Conservation in Latin America, Africa, Asia and Europe*, Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR), University of Bern, Bern, Vol 3, pp. 81-110.
- Bottega, Alfonso y Hoogendam, Paul (2004) *Obras de riego para zonas montañosas*, PRONAR, Cochabamba.
- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) y Bureau Central d’Études pour es Équipements d’Outre-Mer (BCEEO) (1978) *Plan de Desarrollo Urbano-Ciudad de La Paz*, Alcaldía Municipal de La Paz, La Paz, Tomo III.
- Castells, Manuel (1973) “La urbanización dependiente de América Latina” en *Revista Planificación*, pp. 2-18.
- Cuadros Bustos, Álvaro (2003) *La Paz*, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes UMSA, Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, COBEE, La Paz.
- Davis, Mike (2006) *Planeta favela*, Boitempo, São Paulo.

- Global Water Partnership (GWP) y International Network of Basin Organizations (INBO) (2009) *A Handbook for Integrated Resources Management in Basins*, GWP e INBO, Sweden.
- Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (2006) *Atlas sociodemográfico del Municipio de La Paz*, GMLP, La Paz.
- Harvey, David (2005) “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión” en *Socialist Register* 2004, CLACSO, Buenos Aires, pp. 99-129.
- Lavell, Allan (2008) “Una Nota sobre Cambio y Variabilidad, Gestión de Riesgo y Adaptación: ¿Hacia dónde Vamos?” en http://www.desenredando.org/public/columna/2008/2008-08-10_LaRed_CambioYVariabilidad_AlanLavell.pdf (Visitado el 14/09/2009).
- Ledo, Carmen (2005) *Agua potable a nivel de hogares con una dimensión de género: derecho de las mujeres al agua en las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba*, CEPLAG, Cochabamba.
- Pereira, René y Jaime Montaña (2002) *El proceso de urbanización en Bolivia: 1992-2001*, CODEPO, La Paz.
- Poupeau, Franck (2007) “Movilizaciones políticas y gestión de la penuria de agua en los distritos populares de El Alto, Bolivia” en C. Crespo y S. Spronk (coordinadores), *Después de las guerras del agua*, CESU-Plural, La Paz, pp. 183-209.
- Quiroz, Franz (2006) “El apoyo a comités de agua potable: Historia y experiencias para lograr su sostenibilidad” en F. Quiroz, N. Faysse y R. Ampuero (compiladores) *Apoyo a la gestión de comités de agua potable: Experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia*, Cochabamba, Centro Agua-CIRAD, pp. 21-50.
- Riofrío, Gustavo (2003) “Pobreza y desigualdad en nuestras ciudades” en *Revista Quehacer*, DESCO, 2003, número 141, marzo-abril, Lima, pp. 82-89.
- Rojas Ortuste, Franz *et al.* (2007) *Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento*, PROAPAC/PROAGUAS/GTZ, La Paz.
- Van Lindert, Paul y Otto Verkoren (1982) “Segregación residencial y política urbana en La Paz” en *Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* N° 33, Amsterdam.

Caranavi: diferenciación social y génesis urbana en la colonización campesina del Alto Beni

Alberto A. Zalles

Desde el punto de vista demográfico, Caranavi es la cuarta ciudad en importancia del departamento de La Paz. Su emergencia se asocia al proceso de la colonización campesina y la expansión de la frontera agrícola hacia las tierras tropicales del norte del Departamento, a partir de la Revolución Nacional de 1952. Por otra parte, es también el principal centro urbano de la región de Caranavi-Alto Beni¹. La provincia Caranavi fue creada en 1989, a partir de la antigua Provincia Nor Yungas y en virtud al crecimiento demográfico de esta región. La constitución de la provincia Caranavi respondió al interés que demostraron los colonizadores por asumir su propia representación política y lograr autonomía administrativa respecto de Coroico, la capital de la provincia Nor Yungas. Con la creación de la provincia Caranavi, los colonizadores pasan a constituirse también en los principales actores sociales y políticos de la región.

Geográficamente, el espacio regional tiene un relieve accidentado, pues se ubica en las últimas estribaciones cordilleranas al este de los Andes, en vecindad con el departamento del Beni y las llanuras amazónicas. Las altitudes extremas de la geografía regional oscilan entre los 1.500 msnm y los 500 msnm y su clima corresponde al de selva húmeda tropical. Otro referente importante para determinar el perfil espacial de Caranavi-Alto Beni es el hidrográfico, ya que la cuenca que forman sus ríos sirvió y sirve aún, en menor medida, como vía de comunicación².

1 Región que abarca el conjunto de la provincia de Caranavi, la cuarta sección, Palos Blancos, y la quinta sección, La Asunta, de la provincia Sud Yungas y el cantón Teoponte de la provincia Larecaja.

2 Los principales ríos de la cuenca son: el Coroico, el Kaka y el La Paz, antes de tomar la denominación de río Beni.

Hecha esa breve descripción, señalamos que el objetivo de nuestro trabajo está orientado a explicar la génesis urbana de Caranavi considerando las condiciones históricas de su emergencia y, sobre todo, la formación de clases: la diferenciación social y la consiguiente y particular evolución de la estratificación social. En primer lugar, se resalta la continuidad del desarrollo regional; es decir, la articulación histórica que se establece entre la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni y los precedentes ejes de expansión de la frontera cuyos focos de difusión fueron las haciendas tropicales de Sorata y Coroico, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX (figura 1). En segundo lugar, se revisa, a partir de los datos de los censos nacionales de 1976, 1992 y 2001, el proceso de diferenciación social de la región, que permite sentar los elementos interpretativos del génesis urbano local cuyo núcleo indiscutible es la ciudad de Caranavi, la capital de la provincia del mismo nombre.

En el plano metodológico, el examen sociológico y las argumentaciones del artículo se enmarcan en aquello que los estudios sobre la estratificación social llaman el “análisis de clase”, el cual consiste en la explicación de la distribución de las desigualdades sociales a partir del rol económico y profesional que desempeñan los individuos y que van a conformar los distintos grupos de estatus o clases sociales. El análisis de clase es un procedimiento esencialmente sociológico y sintetiza las enseñanzas fundamentales de los fundadores de la sociología: Durkheim, Weber y Marx. Asimismo, sigue el camino trazado por una tradición de investigación empírica conocida como la escuela de Chicago que combina e integra el análisis estadístico, el trabajo de terreno y la implicación etnográfica del investigador (Chapoulie 2001).

Los ejes de expansión de la hacienda tropical paceña

La evolución del espacio económico de la hacienda³ tropical paceña, a fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, dará forma a lo que nosotros llamamos los ejes de expansión de la frontera tropical del departamento de la Paz. Esos ejes se conformaron a partir de

3 La hacienda es una institución colonial que reproduce un modelo feudal de organización económica: la existencia de un gran propietario al cual se subordinan los campesinos trabajadores. La hacienda andina se constituyó en base a las *encomiendas*, las cuales se instituyeron como un sistema de concesiones de tierra y mano de obra campesina para beneficio de los encomenderos españoles. El advenimiento de la República en 1825, no cambió sustancialmente el sistema de la hacienda al punto que esta institución fue abolida recién en 1953.

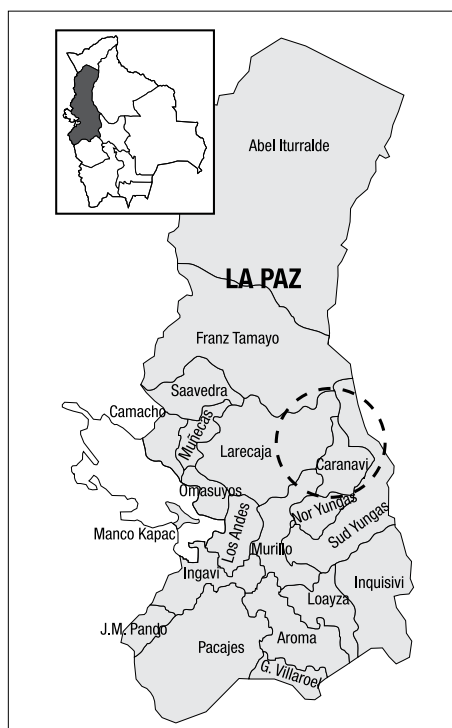


Figura 1: Región de colonización Caranavi-
Alto Beni

Fuente: Elaboración propia

dos centros urbanos: los pueblos de Sorata y Coroico, desde donde se gestionaba la empresa agroforestal y colonizadora. Los dos ejes correspondían a las rutas de circulación por las cuales se desplazaban los agentes económicos y las mercancías y que confluían en el sector oeste de la cuenca alta del río Beni⁴. Entonces, desde la perspectiva sociogeográfica, el área de convergencia de los ejes de penetración consolidó un espacio de interacción económica y humana, entre las poblaciones de Guanay y Puerto León.

El eje de Coroico

Coroico junto a Chulumani e Irupana eran los tres principales pueblos coloniales situados en los Yungas⁵ de La Paz. Ellos surgen como entidades administrativas de la región agrícola y forestal yungueña, cuya

4 Esta cuenca está definida hidrográficamente por el río Kaka y sus afluentes: los ríos Conzata, Mapiri, Tipuani, Atén, Challana, Zongo y Coroico, y, por el Alto Beni propiamente dicho.

5 *Yungas* es una palabra de origen aymara que denomina a la región tropical situada al este de los Andes. Su connotación climática y geográfica provee la especificidad a este término.

vocación esencial fue el desarrollo de una economía exportadora fundada en la extracción de la goma y de la quina y de la producción de la hoja de coca (Soux 1993), así como en la provisión de alimentos de origen tropical y subtropical a la ciudad de La Paz. Las tierras circundantes a Coroico fueron concedidas a los soldados y cortesanos españoles, quienes dieron origen a una clase terrateniente que dominó la región desde finales del siglo XVI hasta la década de los años cuarenta del siglo XX, cuando la inminencia de la reforma agraria neutralizó su rol protagónico en la zona. La población de Coroico fue fundada bajo el nombre de San Pedro de Coroico y en 1903 adquiere el rango de ciudad en virtud de su concentración demográfica y a su actividad comercial.

Coroico toma preponderancia respecto de Chulumani e Irupana, gracias a la posición geográfica que la vincula casi directamente con la cuenca del Alto Beni. Aunque Coroico no se encuentra sobre la ribera misma del río que le da su nombre, éste era una importante ruta para la penetración de los agentes económicos hacia las tierras de la Amazonía. En ese contexto, el centro urbano yungueño deviene un *pivot* para la proyectada colonización.

La vinculación de Coroico al mercado interno nacional se presentaba también como una prioridad de desarrollo y de modernización. En tal sentido, como acción estratégica de primer orden, se intentó construir una línea de ferrocarril entre La Paz y Coroico. Así, en el año 1924, la vía férrea alcanzó a atravesar la cordillera andina, aunque su construcción se detuvo antes de llegar al pueblo (Romecín 1928). De todas maneras, el tramo habilitado fue empleado hasta fines de los años cincuenta del siglo XX, cuando entró en desuso debido al costo que exigía su mantenimiento.

Un segundo intento, y definitivo para la apertura de la frontera, fue la construcción en 1936 del camino carretero, vía que fue trabajada, dicho sea de paso, por los soldados paraguayos que el Ejército boliviano mantuvo prisioneros durante la Guerra del Chaco. Los dos ensayos de apertura de la frontera, a través de la construcción de una infraestructura de transporte, certifican la voluntad estatal por ampliar la frontera agrícola para desarrollar una economía agraria de corte capitalista.

En lo que toca a la acción colonizadora propiamente tal, es decir, como una estrategia impulsada por el gobierno central de la República, Coroico fungió como ciudad de avanzada y desde allí se orientó el asentamiento de primeras familias campesinas colonizadoras instalándolas en la Zona de Santa Ana, en la parte central del río Coroico, en vecindad a la actual población de Caranavi, a partir de 1945 (Zalles 1993).

El eje de Sorata

Uno de los rasgos de la presencia española en los Andes, desprendida del carácter feudal de la conquista, fue el surgimiento de pueblos intermedios dotados de relevancia política y económica. La existencia de una bien estructurada clase terrateniente arraigada a su propiedad rural influyó fuertemente en el desarrollo de los pueblos coloniales. Uno de esos pueblos fue Sorata, erigido gracias al potencial agrícola de su entorno, pero sobre todo porque fue paso obligado hacia Tipuani, uno de los más famosos yacimientos auríferos regionales desde la época precolombina.

El clima de Sorata, por su situación, 2.700 msnm, tiene más bien un clima templado. El pueblo está ubicado en el valle del río Conzata, a una distancia de 150 km de la ciudad de La Paz, lo que favoreció para su autonomía política y económica. Sorata jugó así un rol relativamente más preponderante que Coroico, en lo referido a la ocupación humana de las tierras tropicales del Departamento. El pueblo fue fundado en 1598, pero su verdadero florecimiento económico tuvo lugar alrededor de 1850, cuando se establecieron en la zona inmigrantes extranjeros con capitales listos para invertirlos en la extracción de la quina y la goma (Jáuregui *et al.* 1991). Las principales fueron las familias alemanas que dieron origen a la Casa Gunther y a la Casa Richter, empresas que, a diferencia de los hacendados tradicionales, desde un inicio, combinaron los negocios de extracción forestal con la producción agrícola y con el comercio de diversas mercancías de consumo⁶. Por otra parte, la economía de la goma y de la quina generó un circuito mercantil interno que se extendió por toda la provincia Larecaja. En esta región, el Estado también había hecho concesiones de tierra a otros proyectos capitalistas extranjeros, como al propuesto por el inglés Martin Conway (Antezana 1996: 67).

Por otra parte, es oportuno señalar que la extracción forestal, especialmente del caucho, exigía fuertes inversiones y, asimismo, innovación en la forma de la organización de la producción. Sin embargo, si bien la Casa Richter y la Casa Gunther presentaban una estructura productiva de tipo empresarial, también tuvieron que adecuarse al sistema imperante en Bolivia, reproduciendo, en cierta forma, relaciones de producción homólogas a las de las haciendas terratenientes. Por esa vía, aseguraron el concurso de la fuerza de trabajo a

6 La Casa Gunther, por ejemplo, obtuvo una concesión de superficie de tierras que alcanzó a los 4.500.000 acres, instalando un gran almacén comercial en Sorata convirtiéndose así en un verdadero motor económico regional.

través del *enganche*⁷. Por otra parte, empresarios locales como Benedito Goytia y Adalberto Violand, conocidos hacendados paceños, no permanecieron indiferentes frente al nuevo *élan* económico que prometía beneficios a la inversión.

Para comprender la magnitud de la acción empresarial, vale la pena hacer mención a la amplia red de poblaciones que florecieron en función de Sorata: Sarampiuni, Mapiri, San Carlos, Santiago, Achiquiri y Charopampa, donde se encontraban repartidas las instalaciones de acopio de goma, los talleres de acondicionamiento y transformación de materia prima o las destilerías de alcohol de caña. Al mismo tiempo, es indudable la conexión entre Sorata y otras poblaciones clave como Guanay y Puerto León para garantizar el transporte y la organización de la producción misma. La acción empresarial, al demandar mano de obra, generó de manera simultánea y paralela el asentamiento de familias campesinas, es decir, inauguró, en cierta forma, la colonización campesina en la selva paceña⁸ (Zalles 1993).

Por último, remarquemos también que la hacienda empresarial se articuló con la actividad minera en dos sentidos: 1) incursionó en la explotación, el rescate y el comercio de oro y 2) Sorata fue, para el entorno minero de Tipuani, un lugar de aprovisionamiento de insumos, de alimentos y de mano de obra trabajadora.

En síntesis, tanto Sorata como Coroico, hasta antes de la reforma agraria de 1953, fueron los núcleos urbanos de avanzada hacia las tierras tropicales del norte del departamento de La Paz.

La diferenciación social en la colonización campesina y la urbanización en la frontera tropical paceña (1976-2001)

La proposición principal de nuestro trabajo es la siguiente: Caranavi, como población que cataliza el fenómeno de urbanización dentro de la construcción de una nueva región, refleja en su génesis y en su consolidación como ciudad el proceso de diferenciación social en el cual evoluciona la colonización campesina del Alto Beni. Para

7 El *enganche* significa el endeudamiento del trabajador a través de la provisión de mercancías de manera adelantada. Comprometía al *enganchado* a cancelar su deuda a través de la recolección de goma y quina. El *enganche* fijaba al trabajador a la empresa y fue una forma típica de disciplinamiento de la mano de obra en la frontera tropical.

8 Una evidencia de aquella transformación demográfica puede ser rastreada, en el periodo posterior a la reforma agraria de 1953, en la reconstitución de las comunidades campesinas que se efectúa en Larecaja tropical, en la región de Mapiri, Vilaque y Sarampiuni.

comprender, desde el punto de vista histórico, la mecánica de la diferenciación social, es decir, el sistema de estratificación social emergente, es necesario balizar nuestra reflexión con los avances efectuados en anteriores estudios sociológicos. De esa manera, vamos a retomar la investigación que dirigió William McEwen, para discutir el capítulo específicamente dedicado a la región de Coroico (McEwen 1975; Huariste 1998). McEwen y su equipo advierten de manera prospectiva, en su momento, el potencial urbano y el rol político que jugará Caranavi en la futura configuración regional y, desde el punto de vista sociológico, en la evolución de la distribución estatutaria de la población pionera. Para el autor, Caranavi estaba dejando de ser una aldea perdida en la selva para constituirse en una ciudad (McEwen 1975: 145).

En cuanto al esquema de clases y actores sociales que diseña el estudio en Coroico, sin establecer una jerarquía de estratos, muestra el siguiente panorama. En primer término nos presenta a la categoría formada por los *rescatadores*, quienes, con el tiempo, se constituirán en componentes de la nueva élite local. Según los investigadores, este grupo se habría estructurado a partir de ciertos antiguos hacendados, de comerciantes ya establecidos en la zona y de campesinos que, viviendo en el pueblo, tuvieron la oportunidad de ingresar al circuito mercantil. Luego, se menciona a una gran capa de personas independientes que realizan diversos oficios, artesanos y trabajadores dedicados a un rubro particular: zapateros, sombrereros, sastres, joyeros, carpinteros, albañiles, conductores de camión, panaderos, herreros y carniceros. En las estimaciones del estudio, este segundo grupo de población constituía una tercera parte del grueso de la población. Respecto a la estructura de sus ingresos, éstos se obtenían de la combinación de sus actividades: una parte les proveía su oficio y la otra la captaban en la labor agrícola que realizaban, muy especialmente cultivando café. Como vemos, la investigación nos descubre que una porción de la población urbana de Coroico fue susceptible a la diversificación de sus empleos y, por tanto, estaba comprometida en una dinámica de transición laboral. Por último, la investigación completa la distribución de los estatus ocupacionales observando también la existencia de oficios vinculados al rubro de los servicios: empleadas domésticas, cocineras, lavanderas, etcétera, constituido principalmente por mujeres (McEwen 1975: 150-151).

Otra observación interesante, nacida de la comparación con otras regiones rurales del país, introduce el tema de la movilidad social,

la cual se la asociaba al cambio estructural gestado por la reforma agraria que habría posibilitado el enriquecimiento de algunos campesinos yungueños (McEwen 1975: 152). Y aquí, ya con el propósito de corroborar las proposiciones de nuestro trabajo, podemos suponer que los actores de la expansión de la frontera colonizadora hacia Caranavi eran portadores de intereses heterogéneos y, por tanto, al hacerse colonizadores influyeron, desde un principio, en el surgimiento de una sociedad local diferenciada. En aquel contexto, el éxito económico y la oportunidad de ascenso que ofrecía la coyuntura histórica (el nuevo mercado regional), van a potenciar a una élite de origen campesino que pasará a tener más tarde un rol político decisivo en la región.

En aquel periodo, un factor esencial para la movilidad social lo constituye el volumen de capital económico que puede disponer la persona; eso muestra que la sociedad local se encuentra al principio de una fase de desarrollo mercantil. En cuanto a la escuela —campo de realización del capital cultural—, en el mismo momento, solo representaba un factor secundario de movilidad social. Los individuos verdaderamente deseosos de ascender socialmente optarían más bien por desempeñar un empleo e instalarse en Caranavi, en la ciudad emergente que estaba dispuesta a acoger actividades comerciales vinculadas a la producción agrícola o a la provisión de insumos y mercancías de uso doméstico.

Otro fenómeno que no puede ser soslayado es la posibilidad que la sociedad abrió a la mujer para que ésta intervenga con mayor protagonismo en la economía, especialmente en el rubro comercial. McEwen advierte que la mujer, en algunos casos, deviene responsable a título pleno del sustento y organización de vida familiar (1975: 184). El trabajo de McEwen nos permite comprender la influencia que la distribución de las desigualdades tiene en la génesis urbana regional y percibir el trasfondo social sobre el que se desarrolla la reconfiguración del territorio.

La recomposición de la estratificación social en Caranavi Alto-Beni (1976-2001)

Para establecer el esquema actual de la estratificación social, es decir, un cuadro gráfico de los grupos o categorías sociales que actúan en la región de Caranavi-Alto Beni, comencemos redefiniendo la colonización y su significado. Es necesario recordar que la colonización fue un proyecto que buscó consolidar el Estado-nación a través de la

plena ocupación del espacio, de las zonas potencialmente aptas para el desarrollo agrícola. Por tanto, el nuevo régimen estatal surgido después de 1952 fue el principal interesado en estimular el asentamiento de trabajadores de familias campesinas en la cabecera de la Amazonía. Para cumplir con aquel objetivo dotaba a los pioneros de 20 hectáreas de terreno por familia.

Los estudios dedicados a la colonización normalmente han puesto énfasis en el análisis del desarrollo económico agrícola. Muy pocas investigaciones se ocuparon de temas como la formación de clases o la estratificación social, y tampoco se preocuparon sino marginalmente de debatir sobre los orígenes sociales de los colonizadores; es decir, del impacto que el origen social de los agentes pudo haber tenido en la posterior conformación de los estratos sociales dentro de los procesos de diferenciación y de movilidad social. La mayoría de los estudios homogeneizaron el origen social de los colonizadores identificándolos como campesinos migrantes del altiplano. La migración fue explicada como consecuencia de una supuesta escasez de tierra cultivable en la puna andina, escasez que no habría podido ser satisfecha con la disolución de las haciendas.

Para sobrepasar el sentido común en el cual ha quedado la sociología de la colonización, nosotros proponemos algunos elementos que pretenden mostrar la diversidad de origen de los colonizadores y las implicaciones del caso. Para ahondar en este tema, proponemos la siguiente pregunta: ¿Quiénes fueron los candidatos a la colonización del Alto Beni? Si bien una buena parte de los colonizadores fueron campesinos de origen, una revisión atenta de la literatura de la colonización muestra que entre los pioneros había gente que provenía del semiproletariado existente en las ciudades capitales, campesinos que no tenían tierras en el altiplano⁹, y la juventud que prestaba el servicio militar en el Regimiento de Ingeniería General Román con cuartel en Caranavi. El reclutamiento de los colonizadores estuvo alimentado por el deseo gubernamental de un control efectivo sobre el territorio nacional. A esa aspiración se sumaban los condicionantes externos derivados del financiamiento y crédito con los que el país se comprometió a fin de diversificar su economía y modernizar su agricultura. El Estado, para cumplir con los convenios internos, reclutará colonos no solamente entre los campesinos, sino entre miembros de

9 Los campesinos sin tierra siempre estuvieron presentes en la sociedad rural, aún antes de la reforma agraria. Conocidos como: *arrimados*, *yernos*, *buajchas*, estas denominaciones denuncian la precariedad laboral en la que se desenvolvían.

otras categorías sociales marginalizadas. Para algunos de los pioneros, inscribirse en los planes de colonización fue un simple pretexto para trasladarse a la región y eventualmente emprender otras actividades. Entre las primeras evaluaciones del proyecto colonizador se pueden advertir conclusiones como las que dicen que los colonizadores se trasladaban al Alto Beni no para dedicarse a la agricultura, más bien solo estaban “interesados en ganar plata” (Wiggins 1976: 11).

La heterogeneidad social de los pioneros también consta en el estudio de Crist y Nissly sobre el Proyecto Alto Beni I, según el cual 75% de los colonizadores provenían del altiplano, 15% de la ciudad y 10% de la región vecina de Coroico en los Yungas. Pero aún más revelador es el análisis que realizan de los empleos y ocupaciones previos a los que se dedicaban los colonizadores. Alrededor de un 50% de los colonizadores tenían antecedentes campesinos; un 39% tuvieron previamente un empleo en la ciudad y 11% eran comerciantes o mineros (Crist y Nissly 1973: 143). En otros términos, la mitad de la población pionera, en aquella muestra, no era campesina. En el horizonte de las consecuencias, demás está decir que esa realidad actuará de manera determinante sobre el posterior comportamiento laboral y económico de los colonizadores.

En concreto, la colonización, desde sus inicios, plantea una diferenciación social que se acentuará a medida que evolucione la economía regional, en principio, orientada al abastecimiento del mercado interno, especialmente el de la ciudad de La Paz, y, luego, extendida hacia los mercados internacionales, a través de la exportación de cacao y de café. Por otra parte, el crecimiento económico potenciará al comercio regional y, éste, junto al transporte serán los rubros a los cuales se subordinará la economía campesina. Dicho de otra manera, en los primeros años de la colonización ya están diseñados significativamente los diferentes estratos sociales. Sin embargo, en la literatura sociológica solo se destacan los comerciantes y los campesinos. Otros actores importantes no son mencionados, nos referimos a los maestros rurales, los promotores agrícolas, los funcionarios de la colonización y los numerosos artesanos (carpinteros, cerrajeros, peluqueros, zapateros, entre otros) (McEwen 1975; Wiggins 1976; Zalles 1993).

Hacia una construcción empírica de la estratificación social en Caranavi-Alto Beni

La evolución de la distribución de las desigualdades, es decir, la transformación de la estructura social está claramente determinada a

través de los datos estadísticos de los censos nacionales efectuados en 1976, 1992 y 2001¹⁰. Esos datos son la fuente principal a partir de la cual elaboraremos el análisis de la distinción estatutaria de la población. Los datos de los censos posibilitarán el acceso a un detallado y preciso conocimiento de los aspectos socioeconómicos y demográficos de la región. Este universo engloba a 309 unidades poblacionales y un total de 114.225 personas (62.537 hombres y 51.688 mujeres).

Hechas esas indicaciones, comencemos diciendo que, en lo que respecta a la situación del empleo, en 2001 se registra una población económicamente activa que alcanza la cifra de 90.415 personas, de las cuales las efectivamente ocupadas son 65.010. Los inactivos hacen la cifra de 25.405 personas¹¹.

Otro tema que merece atención, fruto de la ambigüedad de la codificación censal, es que no se puede afirmar con certeza la tasa del desempleo. Si entendemos que los desempleados se corresponden con la categoría de los “sin especificación”, en el cuadro del estatus socioeconómico (cuadro 1), percibiremos que el porcentaje llega al 22,38%¹². Sin embargo, si vemos los otros cuadros, podemos concluir que este porcentaje de desempleo desaparece. Eso se explica por la “ruralización” de la economía, que tiende a representar a todos los miembros adultos de la unidad productiva campesina como trabajadores a título pleno. Es de notar también que, en la ciudad de Caranavi, del total de 9.932 personas que representan la PEA, 5.158 entran en la categoría

10 Antes de iniciar nuestro examen vamos a advertir que el mismo tomará el censo del Año 2001 como referente sobre el cual diseñaremos la estructura actual que presenta la estratificación social. Los datos de los otros censos, 1976 y 1992, los expondremos en los cuadros y ellos servirán para certificar la variación histórica de la diferenciación social.

11 Aquí cabe una digresión. La categorización del INE plantea un problema de orden empírico, pues, en nuestro entender, tanto el trabajo doméstico, como la población joven, en el medio rural no pueden entrar dentro el rubro de la inactividad. Así, en lo que toca a la cuestión del trabajo doméstico, una vez que analicemos el conjunto de datos y las variables que juegan en la construcción de cada uno de los cuadros, veremos que esta categoría está asimilada con la de los jornaleros, es decir con la de los trabajadores eventuales. Dicho de otra manera, el estatus de la persona varía en función de las preguntas de la encuesta. En consecuencia, hay que entender que el “trabajo doméstico” camufla la presencia de un sub-proletariado, de una fuerza de trabajo que se encuentra subordinada en el sistema de división del trabajo y que coyunturalmente, en época de cosecha, deviene propiamente tal, al recibir un jornal. Pues, a este propósito, añadamos que, en la colonización, el jornal es la forma generalizada de retribución por la realización de un trabajo agrícola. Al respecto digamos que aún cuando se retribuye en especies, el monto de la retribución se lo hace en función del precio que tienen el jornal en el mercado local, especialmente en lo que se refiere a la cosecha de arroz o cacao que ocupa a jornaleros, hombre y mujeres, en periodos específicos del año agrícola.

12 A título indicativo señalemos que la tasa neta de desempleo a nivel nacional, en 2001, era de un 14,44%, según las encuestas nacionales de empleo del INE.

“sin especificación”. En este caso, la segunda cifra debe entenderse como la representación de las personas que tienen un empleo precario. En un contexto urbano, la categoría “sin especificación” significa la población desempleada. En otras palabras, es la población pobre la que reproduce la marginalidad típica del medio ciudadano.

Cuadro 1: Estatus socioeconómico* (categorías sociales según el ingreso)

	1976		1992		2001	
Estatus socioeconómico	Total	%	Total	%	Total	%
Sin especificación	383	2,32	8.543	18,47	14.405	22,33
Sin remuneración fija*	2.204	13,40	4.675	10,10	3.511	5,44
Independientes**	10.011	60,89	25.987	56,19	43.176	66,93
Asalariados	3.706	22,54	6.681	14,44	2.605	4,04
Patrones / cuadros***	136	0,82	360	0,77	809	1,25
Total	16.440	99,99	46.246	99,97	64.506	99,9

Fuente: INE. Cuadro. Elaboración propia en base a los censos nacionales de 1976, 1992 y 2001.

* Engloba a las personas que hacen trabajo doméstico sin remuneración fija y a aquellos que buscan empleo por primera vez.

** Los miembros de las cooperativas son asimilados a los independientes.

*** Los profesionales liberales son asimilados a los patrones.

Ahora bien, si pasamos al análisis de las categorías de estatus socioprofesional (cuadro 2) por primera vez se advierte la presencia de dos categorías que la sociología de la colonización no ha considerado explícitamente: el grupo patronal que puede considerarse como la burguesía regional (o una “pre-burguesía” para ser cautos en la utilización del concepto) y una población asalariada, un proletariado agrario en formación, que nosotros hemos clasificado como “jornaleros y eventuales”. Allí integramos a los “sin especificación” y a las personas que buscan trabajo por primera vez. En nuestra interpretación, este segundo grupo constituye el “semi-proletariado” que estaría formado por campesinos sin tierra, jornaleros agrícolas y gente que realiza trabajos domésticos o de servicio en condiciones verdaderamente precarias.

Cuadro 2: Estatus socio-profesional (categorías según la actividad)

	1976		1992		2001	
Grupos socio-profesionales	Total	%	Total	%	Total	%
Jornaleros y eventuales*	1.232	7,49	6.670	14,42	18.060	27,78
Campesinos	12.088	73,53	30.145	65,18	34.467	53,02
Obreros	172	1,05	901	1,94	1.072	1,65
Artesanos y operarios	869	5,29	4.903	10,60	4.909	7,55
Comerciantes	578	3,52	1.884	4,07	3.800	5,85
Empleados**	941	5,72	345	0,74	360	0,55
Profesionales***	484	2,94	1.248	2,69	2.124	3,27
Patrones / cuadros	76	0,46	150	0,32	218	0,34
Total	16.440	100	46.246	99,96	65.010	100

Fuente: INE. Cuadro. Elaboración propia en base a los censos nacionales de 1976, 1992 y 2001.

* Reúne a “peones”, “sin especificación” y a aquellos que “buscan trabajo por primera vez”.

** Reúne a los empleados, los policías y militares. Para 1976 incluimos allí a choferes e independientes.

*** Profesiones liberales y técnicos.

Pero volvamos a hablar de los patrones y de los cuadros de la pre-burguesía antes nombrada. Éstos representan a las personas que organizan, dirigen o son propietarios o copropietarios de las factorías agrícolas (las peladoras de arroz, las torrefactoras de café y las plantas de enriquecimiento de cacao, de las cuales, la más grande pertenece a la cooperativa El Ceibo con sede en Sapecho), los aserraderos, las grandes cooperativas auríferas (en Guanay y Tipuani), los grandes comercios instalados principalmente en Caranavi y Guanay y las empresas de transporte de pasajeros. Se puede evidenciar que, en la región de Caranavi-Alto Beni, están sentadas las bases para el desarrollo de una economía agroindustrial y, en consecuencia, para un prometedor desarrollo comercial¹³.

13 En ese escenario, la nueva ruta que vincula La Paz con Caranavi (conocida como Cota-pata-Santa Bárbara), es un factor que potencia el flujo de mercaderías y facilita la introducción de maquinarias.

Las otras categorías de estatus socio-profesional la forman los independientes y los asalariados. Como “independientes” debe considerarse a todo el campesinado propietario de lotes agrícolas, a los artesanos establecidos en pueblos y en las colonias y a los pequeños comerciantes que tienen sus negocios en los principales centros poblacionales o que se mueven, de manera itinerante, entre los distintos mercados y ferias por todo el Alto Beni. Respecto a los asalariados, éstos son los trabajadores de las factorías agrícolas, de los aserraderos, de las cooperativas auríferas; pero también lo son los jornaleros o campesinos sin tierra que admiten mantenerse con un ingreso monetario.

En cuanto a la situación profesional (actividad de las personas), el INE establece diez categorías de clasificación¹⁴, que mostramos de manera sintética en el cuadro 2.

Podemos ver que la categoría de campesinos alcanza, en 2001, a la cifra de 34.467 personas. Comparada esta cifra con la de 43.176, que corresponde al estatus de “independientes” del cuadro 1, descubrimos la existencia de un campesinado *no independiente*, es decir que no posee sus propios medios de producción: tierra y herramientas. Aunque el resultado de la simple resta no nos asegura el volumen cabal de ese tipo de campesinos, lo que sí se puede tener como realidad evidente es la existencia de campesinos sin tierra. De otro lado, es obvio que en el estatus de independiente se encuentran las personas que perciben su independencia a partir de la actividad que realizan, por ejemplo, los pequeños comerciantes y los artesanos pobres. Dicho de otra manera, podemos suponer que una parte de trabajadores jornaleros y temporarios (campesinos sin tierra) son asimilados genéricamente como campesinos en consideración al estatus socio-ocupacional. De ahí que la forma en la cual se agrupa a los entrevistados oculta la diferenciación interna dentro de la clase campesina: la desigualdad frente a la propiedad de los medios de producción y la desigualdad a nivel de los ingresos. Otro hecho relevante a constatar, respecto de la emergencia de un campesinado sin tierra o de un semi-proletariado rural, son las cantidades en las que variaron históricamente las categorías de

14 Directivos de gobierno y de empresas, profesionales científicos e intelectuales, técnicos profesionales de nivel medio, empleados de oficina y afines, trabajadores de servicio, vendedores y afines, artesanos y operarios de oficios, operarios de máquinas e instalaciones, peones y trabajadores no calificados, miembros de la Fuerzas Armadas y Policía, personas que no especifican su actividad y personas que buscan por primera vez empleo.

jornaleros y eventuales y la de los campesinos. En 1976, según el estatus socio-profesional, los jornaleros y eventuales representaban un 7,49% de la PEA, mientras que en 2001 la categoría alcanza el 27,78%. En cuanto al campesinado, en 1976 alcanzaba el 73,53% de población colonizadora, mientras que en 2001 solo representa un 53,02%.

Si comparamos el cuadro 1 y el cuadro 2, vemos que el grupo de patrones/cuadros se reduce de 809 a 218 unidades. Es decir que los patrones representarían alrededor de un tercio del expuesto en el primer cuadro. La segunda cantidad se mantendrá en los cuadros siguientes, lo que deja suponer con certitud que la clase rica de la región rural del Caranavi-Alto Beni tiene una bien determinada representación cuantitativa.

Para completar el paisaje de la estratificación social, en el cuadro 3 mostramos la estructura del empleo y de las profesiones. En este cuadro es importante destacar la desagregación que se establece entre los trabajadores asalariados, cuando se especifica las principales ramas de actividad económica que ellos realizan. En ese contexto, los mineros representan la más grande categoría productiva asalariada. En cuanto a la articulación de la actividad minera con la agricultura, ciertos trabajadores jornaleros alternan su trabajo de temporada agrícola con el trabajo ocasional que pueden obtener cuando se trasladan a las minas auríferas, a las cooperativas de Guanay y Tipuani, en la provincia Larecaja.

Otro grupo importante son los obreros de la construcción que se concentran en los principales centros poblados. De los 1.067 trabajadores de la construcción registrados, 349 están domiciliados en Caranavi. Es importante decir que esta categoría expresa los cambios que paulatinamente se dan en lo que toca al estilo de vida, en este caso, respecto a la manera de construir la vivienda tanto en el área rural como en las áreas propiamente urbanas. La construcción poco a poco se adecua a las normas municipales y, sobre todo, emplea obreros cualificados. En este tema es bueno destacar la obra de la institución Evangélica Hábitat en el medio rural¹⁵. Hábitat ha mejorado la concepción de la vivienda campesina a través de la asistencia técnica profesional.

La existencia de una importante cantidad de empleados de instituciones públicas y de servicios revela la emergencia de una clase

15 Conocida por *Hábitat* en Bolivia, esta institución cristiana ecuménica tiene su sede en Georgia, Estados Unidos. En el Alto Beni había construido 389 viviendas el presente año 2000.

media local y la presencia de importante cantidad de oficinas públicas regionales. Este aumento en la cantidad de personal de administración es también el resultado de la fundación de la provincia Caranavi como una provincia autónoma.

En seguida podemos considerar el número de personal comprometido con el quehacer educativo. La encuesta del INE nos ofrece una diferenciación neta entre el profesorado y la gente empleada en la burocracia regional.

El cuadro 3 también permite focalizar a los transportistas, que por su volumen no tienen la significación de otras categorías; aunque poseen su propia diferenciación, según el carácter que toma el servicio y el volumen de capital que involucra: empresas de transporte de pasajeros, transporte pesado automotor, servicio inter-provincial y servicio urbano e interurbano.

La categoría de comerciantes encubre la diferenciación interna que se desprende del capital económico del que dispone cada individuo. En la región existen al menos cinco tipos de comerciantes: 1) El gran comerciante, propietario de grandes almacenes de productos de consumo alimentario, de vestuario y de muebles o productos electrodomésticos (cocinas y refrigeradores) y de insumos agrícolas. 2) El pequeño comerciante, que tiene un pequeño puesto de venta en el mercado, vende las mismas materias antes nombradas, naturalmente el volumen de sus negocios es menor. 3) El gran rescatador que se moviliza en su propio camión por las diferentes colonias o a través de una red de contactos bien definida. Opera, en general, desde Guanay, Palos Blancos o Caranavi. 4) El pequeño comerciante itinerante especializado en un rubro específico y coyuntural de mercado. 5) El propietario de un pequeño almacén, de una tienda.

Finalmente, tenemos la categoría de patrones y directivos que obviamente engloba a todos los propietarios de un gran volumen de capital económico y que se encuentran a la cabeza de las principales empresas comerciales, de transporte, de las factorías agrícolas, de los aserraderos y de otra serie de empresas que funcionan en base a la contratación de un personal asalariado. Confrontados todos los cuadros, arribamos a la conclusión de que la existencia de una pre-burguesía es una realidad dentro de la región de Caranavi-Alto Beni.

Cuadro 3: Estatus socio-ocupacional (categorías según la actividad)

	1976		1992		2001		Ciudad de Caranavi -2001	
Grupos profesionales	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%(**)
Agricultura	12.088	73,53	30.839	66,57	34.580	53,23	616	0,95
Caza y pesca	0	0,00	1	0,00	11	0,02	3	0,00
Actividad minera	594	3,61	3.859	8,33	2.187	3,37	16	0,02
Industria y manufactura	869	5,29	896	1,93	1.309	2,02	410	0,63
Energía	0	0,00	21	0,05	54	0,08	23	0,04
Construcción	172	1,05	601	1,30	1.067	1,64	349	0,59
Comercio	578	3,52	1.125	2,43	3.332	5,13	1.381	2,13
Hotelería y restauración	0	0,00	190	0,41	1.277	1,97	650	1,00
Transporte	242	1,47	685	1,48	872	1,34	272	0,42
Finanzas	0	0,00	9	0,02	44	0,07	28	0,04
Empresas	76	0,46	172	0,37	143	0,22	65	0,10
Administración pública	105	0,64	186	0,40	322	0,50	140	0,22
Educación	484	2,94	961	2,07	1.533	2,36	249	0,38
Servicios de salud	0	0,00	143	0,31	267	0,41	86	0,13
Servicios sociales	0	0,00	1.193	2,58	436	0,67	182	0,28
Servicios personales	816	4,96	327	0,71	507	0,78	126	0,19
Seguridad pública	0	0,00	12	0,03	2.481	3,82	178	0,27
Sin especificación	372	2,26	4.871	10,51	14.536	22,38	5.158	7,94
Busca empleo primera vez*	44	0,27	235	0,51	--	--	--	--
Total	16.440	100,0	46.326	100,0	64.958	100,00	9.932	15,29

Fuente: INE. Cuadro. Elaboración propia en base a los censos 1976, 1992 y 2001.

(*) Este rubro no es mencionado en la encuesta de 2001.

(**) El porcentaje es calculado sobre el total de 2001 (64.958).

Estilos de vida y capital cultural: conflicto y autopercepciones

Los estilos de vida definen lo que la sociología weberiana estima como el prestigio. Un estilo de vida implica fundamentalmente una manera de vivir, un *habitus*; pero también la realización del mismo dentro de una estructura de relaciones que es conocida como red social (Bourdieu 1985). Los estilos cambian y se estructuran a fuerza y medida de

la evolución de la diferenciación social. El fenómeno no ha sido ajeno en la historia de la colonización ni en la formación de Caranavi.

Según el estilo de vida podemos definir diferentes estatus sociales. Un primer grupo de estatus, lo que llamaremos la clase popular, está compuesto por la gran masa de colonizadores y otros sectores sociales pobres. Los rasgos más generales de su *habitus* de vida están establecidos por su pobreza y por su bajo nivel de consumo. Los principales alimentos de su dieta son el arroz, la yuca y el plátano. En cuanto a su manera de vestirse, su vestimenta es austera y ligera, el varón ha adaptado totalmente su manera de vestir para vivir en el trópico; al contrario, la más conservadora es la mujer. Las colonizadoras de primera generación no han abandonado la gruesa pollera que caracteriza a la mujer andina ni la manera de peinarse, el cabello lo arreglan en dos largas trenzas y, casi nunca, abandonan su sombrero. Las más jóvenes han renunciado totalmente a aquel estilo de presentarse en sociedad; sin embargo, algunas, luego de su matrimonio, vuelven a vestirse con una pollera y un sombrero, especialmente en ocasiones sociales: asistencia a la Iglesia, a una fiesta, a una reunión sindical o para salir a Caranavi o a La Paz. La capa popular de la población tiene un fuerte apego a la religión. Pertenecer a una iglesia implica participar de un sistema de solidaridad colectiva que facilita, en muchos casos, el acceso a los sistemas escolares confesionales o a los servicios de orientación técnica agrícola que fomentan las Iglesias. El pluralismo religioso es un hecho innegable en la sociedad colonizadora (Zalles 2005: 72). La clase popular adscribe su pertenencia étnica a la cultura aymara.

En cuanto a la clase media, una característica de su ideología es creer que la educación es el principal vehículo de movilidad social; aunque, en la práctica, sus miembros participan activamente del sistema de movilidad establecido socialmente: el comercio y el transporte. La clase media asume su rol directivo de la vida social y de la institucionalidad política, cívica, sindical y religiosa. Y, si bien reivindicar una identidad aymara de manera instrumental, en el fondo este grupo social no se liga a las tradiciones del modo como se ligan las clases medias de los pueblos del altiplano; o sea, su mentalidad religiosa no es rígida y se preocupa en menor grado de las festividades patronales. Su mentalidad es ante todo mercantil y la acumulación del dinero, en función individual, está definitivamente legitimada.

Por su parte, la clase alta, los ricos, muestran objetivamente un deseo de desprenderse de su pasado campesino, aunque esta actitud es ambigua, porque en términos de mentalidad religiosa y cumplimiento de rituales y ceremoniales es la más tradicionalista. Son generosos con

sus ahijados y, si profesan la religión católica, son promotores de los prestes (las fiestas patronales) donde les gusta lucir su riqueza y distinción. Estas personas normalmente poseen un edificio de tres o cuatro pisos en Caranavi y casas en la ciudad de La Paz. Sus hijos tienen la posibilidad de acceder a la educación universitaria, así dinamizan positivamente sus estrategias económicas y su reproducción social.

En lo que respecta a la situación educativa, la figura 2 ilustra el nivel de escolaridad del conjunto de la región, en él se percibe el crecimiento de la población escolar así como el incremento de estudiantes en los niveles secundario y superior. En 1976 solamente había un 16,6% de colegiales; mientras que en 2001 la proporción de ese grupo es de 31,4%. En cuanto a la población con un nivel de instrucción superior, ésta pasa de un 1% a un 4,1%. Recordemos también que la educación secundaria y superior era virtualmente inaccesible para el campesinado antes de la Reforma Agraria. Por otro lado, hay que señalar de manera pertinente que la población pionera, en sus inicios, presentaba un significativo porcentaje de analfabetos y un muy bajo nivel escolar¹⁶.

Actualmente, la tasa de analfabetismo alcanza al 12,4% (INE) y un 4,1% de la población mayor de 6 años ha alcanzado la educación superior, es decir, la formación universitaria o técnica superior.

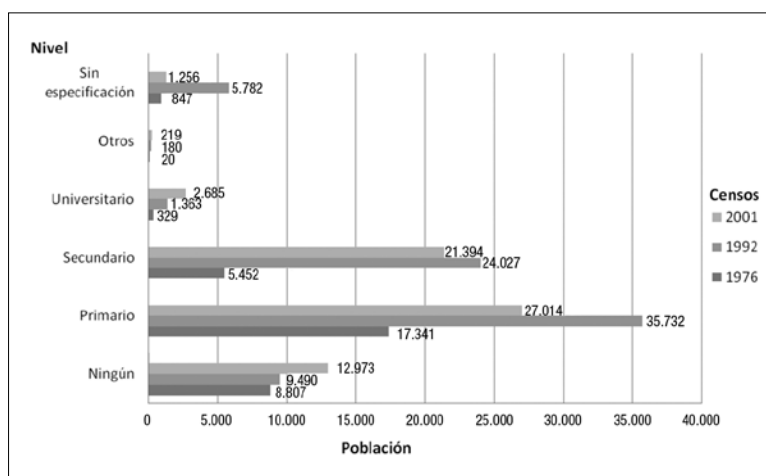


Figura 2: Nivel de escolaridad de la población mayor de 6 años

Fuente: Elaboración propia

¹⁶ Crist y Nissly, en el estudio que realizan, muestran que un 71% de los jefes de familia habían asistido a la escuela, de lo que puede deducirse que el analfabetismo alcanzaba en 1973 a un 29% en una muestra que está referida a la Área I del Alto Beni (Crist y Nissly 1973: 143). Por su parte, Douglas Kitt indica que el analfabetismo, a partir de las estimaciones del INC, alcanzaba un índice del 30% en la misma área (Kitt 1977: 115).

La estratificación y distribución de los grupos sociales: construcción empírica de las clases sociales

En síntesis, el anterior análisis y el examen que hicimos de los diferentes cuadros nos permiten construir la estratificación social desde una perspectiva empírica y contrastando diversas variables. Nuestro trabajo ha sido realizado siguiendo un proceso inductivo y está basado en la comparación del estatus socio-económico, el estatus socio-profesional y las actividades a las cuales están ligados los agentes. Podemos así identificar cinco clases sociales que pueden agruparse a su vez en tres grandes grupos de estatus, como se muestra en la figura 3 y en el cuadro 4.

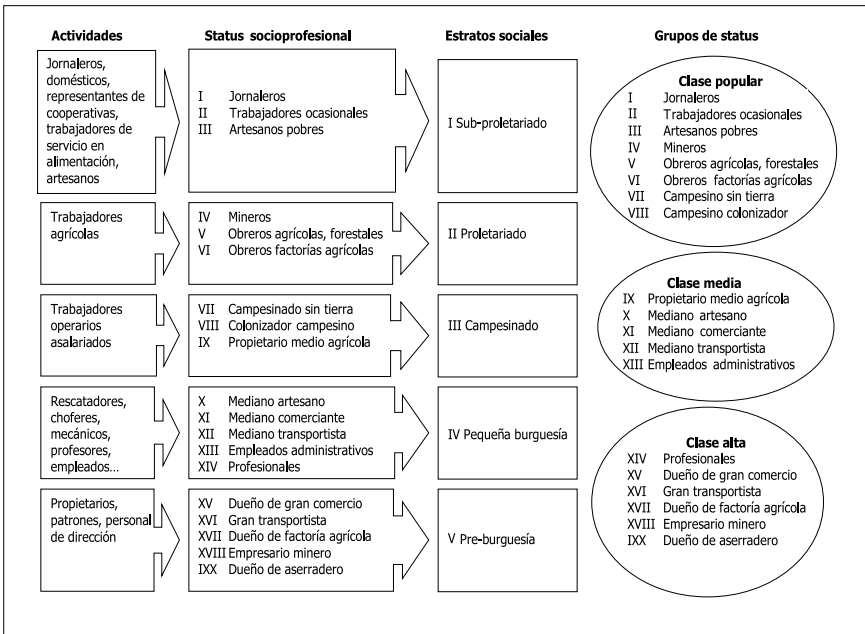


Figura 3: Estratos sociales

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, el esquema muestra de manera elocuente la distribución de las desigualdades; sin embargo las consecuencias de una tal representación de la realidad social son las siguientes: 1) La construcción de la región colonizadora de Caranavi-Alto Beni, su historia, está marcada por una creciente diferenciación social y el urbanismo está asociado a la formación de clases. 2) Caranavi y los principales centros urbanos son a la vez centros residenciales de los sectores medios y altos de la sociedad regional. 3) Los individuos adquieren un estatus

Cuadro 4: Estratos sociales (distribución de grupos sociales)

Grupos sociales	1976		1992		2001	
	Total	%	Total	%	Total	%
Semi-proletariado	1.826	11,10	5.433	11,75	18.060	27,78
Campesinado	12.088	73,53	30.840	66,69	34.467	53,02
Proletariado	1.041	6,33	5.377	11,62	5.981	9,20
Pequeña burguesía	1.409	8,57	4.424	9,57	6.284	9,67
Pre-burguesía	76	0,46	172	0,37	218	0,34
Total	16.440	100,0	46.246	100,00	65.010	100

Fuente: INE. Cuadro. Elaboración propia en base a datos censales (INE).

y una adscripción a un grupo de estatus en virtud a su ubicación en la división del trabajo, en referencia a la profesión que ejercen en la vida. 4) La clase social, en la sociedad regional, se presenta como una variable independiente respecto de la identidad étnica. 5) La existencia de clases, en el tiempo, abre las compuertas de la movilidad social; los individuos, potencialmente, pueden cambiar de estatus.

La urbanización y el mundo rural

Caranavi, una pequeña aldea antes de 1953, se constituiría pronto en un pueblo próspero al influjo de la colonización. Sus primeros años de desarrollo significaron un verdadero *boom* que atraería a personas ambiciosas y emprendedoras, especialmente campesinos y comerciantes y algún que otro transportista (McEwen 1975). La colonización trajo consigo otro fenómeno: el surgimiento de entidades urbanas dentro del espacio fronterizo, cuya manifestación efectiva fue la consolidación de Caranavi como ciudad. Dicho de otra manera, el campesino colonizador estuvo lejos de ser un personaje pasivo, satisfecho con el lote de tierra agrícola que le hubo provisto el Estado y resignado a trabajar solo para garantizar su subsistencia. El espíritu de la revolución y la ideología popular emergente, que influyeron en la rápida apropiación campesina de un proyecto societal de gran envergadura, pueden considerarse también como factores que ayudan a explicar la fulgurante y veloz emergencia de Caranavi. Es así que el nuevo pueblo fronterizo no solamente

generaría una dinámica económica propia, sino que concentraría los intereses regionales que disputarían a Coroico los roles políticos y administrativos propios a una capital provincial. Las reivindicaciones políticas regionales toman cuerpo en los años ochenta, cuando, desde Caranavi, se organiza una estrategia cívica regional que logrará la creación de la provincia Caranavi, con capital propio. Caranavi pasó a ser uno de los más progresistas pueblos emergentes en la región occidental de Bolivia a partir de 1953. Este pueblo, al igual que muchos otros, se conformó y se fundó como resultado de una acción voluntaria del campesinado. Por otra parte, la visión de una zona rural activa permite sobrepasar aquella representación que muestra a los pueblos campesinos como meros estancos intermedios donde se realiza la captación del *surplus* agrario y cuya vida dependería de la hegemonía central de la sociedad global. En el caso de la colonización, se ven expresados los intereses del campesino pionero que quiere manifestar al resto de la sociedad que Caranavi es un centro urbano que le pertenece y donde se desarrolla también parte de su socialización y de su espíritu cívico.

Caranavi no es un pueblo ajeno al colonizador, no expresa de manera explícita la dicotomía entre vecinos y campesinos, propia de la sociedad rural nacional. Las desigualdades sociales y económicas se manifiestan de otra manera en la ciudad colonizadora. Sin embargo, es bueno decir que cuando el colonizador deja su lote para dirigirse a Caranavi para cumplir tareas administrativas, tareas comerciales o simplemente para sustraerse del trabajo cotidiano y divertirse, él se moviliza como propietario de ese espacio. En Caranavi el campesino se siente libre de comprar, de vender y de circular por los restaurantes, mercados y servicios públicos locales sin sufrir las restricciones discriminatorias existentes para los campesinos en otros pueblos rurales de Bolivia. Los domingos es interesante ver llegar a Caranavi a los camiones procedentes de las diferentes colonias, repletos de colonizadores ataviados con sus ligeras ropas tropicales y como preparados para una fiesta; hombres, mujeres y niños recorren y llenan las calles, los mercados, los restaurantes populares, las Iglesias, la plaza y el terreno de fútbol donde es común asistir a algún encuentro deportivo que enfrenta a los equipos de las diferentes colonias.

Algunos colonos tienen su residencia secundaria en Caranavi, donde pasan la mayor parte de su tiempo en el año, ya sea por el gusto de vivir en la capital provincial o porque de esa manera pueden asegurarse otros ingresos realizando actividades alternativas. Otra motivación

de la permanencia en Caranavi es el deseo de posibilitar la educación secundaria de sus hijos.

Caranavi no solamente tiene los servicios administrativos públicos. También ha concentrado otro tipo de servicios privados como los comerciales y bancarios.

Finalmente, se puede decir que si bien existen contradicciones entre el mundo urbano de Caranavi y el resto del mundo campesino del Alto Beni, la colonización no puede ser percibida como una dicotomía entre el entorno rural y la pequeña ciudad, la cual, de una u de otra manera, ha sido creada al influjo colonizador. En tal sentido podemos decir que los colonizadores han sido también protagonistas de la urbanización en la frontera.

Conclusiones

La región colonizadora del Caranavi-Alto Beni es un espacio socio-geográfico que se constituyó a partir de los cambios estructurales de la Revolución de 1952 y que es una especie de fase definitiva del denominado periodo nacional de ocupación de las tierras tropicales. La emergencia de la región colonizadora, en una aproximación histórica de larga duración, se imbrica con los procesos de la expansión del mercado capitalista de la goma y de la quina y con la expansión de la economía agrícola yungueña, cuyos dos ejes principales tienen sus puntos de partida en el valle de Sorata y en los yungas de Coroico, respectivamente. Los dos ejes formaron en el pasado inmediato un espacio regional y se vincularon mutuamente a través de sus avanzadas tropicales y en base a la navegación de los ríos de la cuenca alta del río Beni.

Dicho de otra manera, si bien el Estado en sus inicios fomentó la colonización campesina, posteriormente a este proceso la colonización adquirió su propia identidad bajo el influjo de las nuevas posibilidades abiertas por el mercado y de los cambios socioculturales estructurales globales. De esa manera, emergió una economía campesina de transición que influyó en la creciente diferenciación social y en el surgimiento de un modelo dinámico de estratificación social. La génesis urbana de Caranavi está contagiada de esta viva y vigorosa realidad societal. Dicho de otra manera, Caranavi es una ciudad que fue autoconstruida por sus pobladores; allí, la resolución de los intereses cívicos y de poder regionales resultan de la jerarquía de desigualdades distribuidas en el sistema de la estratificación social existente. En consecuencia, el estilo del desarrollo urbano se corresponde con el perfil socioeconómico de todo el Alto Beni.

Bibliografía

- Antezana, Alejandro (1996) *Los liberales y el problema agrario en Bolivia 1899-1920*, Plural, La Paz.
- Bieber, Leon (1999) "La Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas: Su aporte a la integración económica de judíos en Bolivia" en *Latin American Research Review*, vol. 34, N° 2, pp 152-178.
- Bourdieu, Pierre (1985) "The forms of capital" en Richardson, John G (edit), *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. Greenwood Press, New York, pp 241-258.
- Buchholt, Helmunt (1994) "The Impact of the Christian Mission on Processes of Social Differentiation" en Buchholt, Helmunt et Mai, Ulrich (editores), *Continuity, Change and Aspirations; Social and Cultural Life in Minabasa, Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, pp 12-26.
- Casanovas, Roberto (1981) *Migración interna en Bolivia: origen, magnitud y principales características*. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, La Paz.
- Centro de Estudios y Proyectos (1981) *Apuntes sobre colonización: Primera parte, Agricultura y subsistencia en el norte de Santa Cruz; Segunda parte, la colonización en el Alto Beni*. Centro de Estudios y Proyectos, La Paz.
- Chapoulie, Jean-Michel (2001) *La tradition sociologique de Chicago 1892-1961*. Seuil, Paris.
- Cisneros C. Antonio (1979) *La colonización en Bolivia: un estudio analítico de distribución espacial de la población*. Ediciones CIS, La Paz.
- COTESU-OSCAR (1992) *Evolución de uso de la tierra en el Área 4 del Alto Beni*, Cotesu, La Paz.
- Crist, Raymond E. et Nissly, Charles M. (1973) *East from the Andes*, University of Florida Press, Miami, 1973.
- Crompton, Rosemary (1993) *Class and Stratification: an introduction to current debates*, Polity Press, Cambridge.
- Deler, Jean-Paul (1988) "Veinticinco años de investigación urbana en el IFEA (1960-1980) en *Bulletin Institut français d'études Andins*, vol XVII, N° 1, pp 3-9.
- Estrada Paredes, Fidel (1999) *Caranavi Tierra de Grandezas: Quince poemas que hablan de su pasado, presente y futuro*. Estrada y Arciénega, La Paz.
- Gamarra, María del Pilar (2007) *Amazonía norte de Bolivia, economía gomera (1870-1940): bases de un poder regional, la casa Suárez*. CIMA, La Paz.
- Gill, Lesley (1987) *Peasants, entrepreneurs, and social change: frontier development in lowland Bolivia*. Westview Press. Boulder.

- Goldthorpe, John et Breen, Richard (1999) "Class inequality and meritocracy: a critique of Saunders and an alternative analysis", *The British Journal of Sociology*, v. 50, No 1, 1999, pp 1-27.
- Grusky, David B. Van Rompaey, et Stephen E. (1992) "The vertical scaling of occupations: some cautionary comments and reflections", *American Journal of Sociology*, v. 97, May 1992, pp 1712-28.
- Hilari, Ruben *et al.* (s.f) *Apolobamba, Caupolicán, Franz Tamayo: Historia de una región paceña*, Prefectura de La Paz-UMSA, La Paz, pág. 305.
- Huariste, Pablo (1998) *Monografía de Caranavi*, Prograf, La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (1976) *Base de datos Censo nacional de población y vivienda 1976*, INE, La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (1992) *Base de datos Censo nacional de población y vivienda 1992*, INE, La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (2001) *Base de datos Censo nacional de población y vivienda 2001*, INE, La Paz.
- Jáuregui, Juan *et al.* (1991) *Sorata: Historia de una región*, Prefectura del Departamento-UMSA, La Paz.
- Lagos, María L. (1994) *Autonomy and power: the dynamics of class and culture in rural Bolivia*. University of Philadelphia Press, Philadelphia.
- Kitt, Kitt (1977) *El Alto Beni: Estudio Socioeconómico*. ASEC, La Paz.
- Léons, Madeleine (1966) *Changing patterns of social stratification in an emergent Bolivian community*. UCLA, Los Angeles.
- Léons, Madeline Barbara (1967) "Land reform in the bolivian yungas" en *América Indígena*, vol. XXVII, N° 4, octubre 1967, pp 689-713.
- López Barrón, Miriam *et al.* (1997) *Desarrollo humano y pobreza en las provincias Caranavi y Aroma*, Plural, La Paz.
- McEwen, William J. (1975) *Changing Rural Society; a study of communities en Bolivia*. Oxford University Press, New York.
- Nuñez, Ana (2008) "Sobre la génesis urbana y las fracciones sociales: 'Hay una cosa que se llama Mar del Plata, donde está Martín...'" en *Nómadas: Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, N° 17, Madrid, <<http://www.ucm.es/info/nomadas>>.
- Poupeau, Frank (2009) "Les villes de l'Altiplano-Tendances de la recherche urbaine en Bolivie dans les années 2000" en *Diarios sociológicos*, <http://www.pieb.com.bo/blogs/poupeau/act_2.php>.
- Romecín, Ezequiel (1928) *La historia de la vialidad yungueña*, Imp. Cervantes, La Paz.
- Savage, Mike (1995) "Class analysis and social research" en Butler, Tim & savage, Mike (eds), *Social Change and the middle classes*. UCL, London, pp 15-25.

- Soriano López, Rodolfo (1990) *Diagnóstico socioeconómico Alto Beni, Área 4*. AIPE-CEDLA, La Paz.
- Soux, María Luisa (1993) *La coca liberal: producción y circulación a principios del siglo XX*, Misión de Cooperación Técnica Holandesa-CIDesarrollo, La Paz.
- Spedding, Alison (1994) *Wachu Wachu. Cultivo de coca e identidad en los Yunkas de La Paz*. Hisbol, La Paz.
- Stavenhagen, Rodolfo (1975) *Social Classes in Agrarian Societies*. Anchor Books, New York.
- Wiggins, Steve (1976) *Colonización en Bolivia*. Acción Cultural Loyola, Sucre.
- Zalles, A. Alberto (1993) *Balseros, borticultores itinerantes y barranquilleros*, Ceja del Alto, La Paz.
- Zalles, A. Alberto (2005) "El pluralismo religioso en la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni: iglesias y poder en la sociedad rural boliviana" en: *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. N°22, Quito, pp. 61-73.
- Zalles, A. Alberto (2007) "El sistema de la movilidad social en la sociedad rural latinoamericana: el caso de la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni, Bolivia, 1953-2001", V Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, Bruselas, Abril 11-14.

La acción colectiva territorial de la Media Luna

Entre la reacción sucrense y la ruralización del voto

Bruno Fornillo

Para pedir la locación de la capital de Sucre, invocó Chuquisaca los títulos más o menos morales (los desmoralizados títulos) de haber sido el asiento de la Audiencia. En otros términos, para resolver algo perentorio en grado sumo se refería a dos hechos que pertenecían sin remedio al pasado: a la unificación burocrática cuyo aval venía del nexo colonial y, de otro lado, a la segunda economía de la plata, si bien localizada en el sur, que había entrado ya en su curso descendente. Invocó, en otros términos, *los últimos días coloniales* cuando la actualidad fiera sin duda de los hechos habla de otro tiempo. Chuquisaca por tanto no era el Piamonte. Para salvar las dificultades hegemónicas que provenían al menos en cierta medida del hábito del fraude electoral, recurrencia constante desde Pacheco y Arce, es decir, en medio mismo de la transición entre la formación no verificable y la formación racional-verificable del poder, cuando estaba en duda su prestigio porque la propia situación del excedente se difuminaba y cuando nadie había acordado otorgar a Chuquisaca algo que en cambio ella daba por resuelto y saldado (la capitalía), se lanzó entonces Fernández Alonso en nombre de Chuquisaca a la imposición militar lisa y llana, a que las armas resolvieran lo que no podía resolver la política. Pero Chuquisaca no era Prusia.

René Zavaleta Mercado. *Lo nacional-popular en Bolivia*

La conquista de la presidencia por parte del Movimiento al Socialismo a fines de 2005 acarreó una mutación de la geografía política del país. La élite opositora fue desalojada del Poder Ejecutivo y prácticamente del Legislativo, carente de un proyecto global; su estrategia tuvo un perfil ofensivo pero limitado al radio de acción de las regiones y ciudades para las que reactivó sus asentadas identidades polares constituyendo la Media Luna (Pando, Beni, Santa

Cruz y Tarija) (Tapia 2009). Una vez que la Asamblea Constituyente, cuyo destino era crear un renovado ordenamiento político, se instaló en el departamento de Chuquisaca, la ciudad de Sucre demandó restituir su antigua calidad de “capitalía plena”, cifrando el inicio del ciclo de antagonismo frontal entre el bloque de poder en ascenso y las élites en retirada que hizo peligrar el entero proceso constituyente y la estabilidad del flamante gobierno¹. La anexión de Chuquisaca, central por su propia posición de entre-medio, pareció inclinar la balanza a favor del bloque opositor, que ganó protagonismo al controlar seis de los nueve departamentos y siete de las nueve prefecturas, contando la misma ciudad de La Paz y de Cochabamba.

Si desde el 23 de noviembre de 2007 hasta el 20 de octubre de 2008 transcurre la temporalidad del antagonismo frontal, aquí sondeamos su comienzo hasta el momento en que un “golpe democrático” (el triunfo de Evo Morales en el revocatorio con el 67 por ciento de los votos favorables en agosto de 2008) restablece un escenario de relativa “paridad de fuerzas”, de modo que abordamos una etapa marcada por la “ofensiva autonómica” de las regiones discolas. En una primera parte describimos el ocaso de la Asamblea, sus causas y el posicionamiento de los principales actores políticos chuquisaqueños, en una segunda abrevamos en la dinámica territorializada del voto, para así brindar una panorámica del primer pasaje a la iniciativa de la Media Luna, menos visitada que la acción de los movimientos sociales, protagonistas casi privilegiados de los avatares de Bolivia desde el año 2000.

La hipótesis que subtiende el trabajo es que la comprensión cabal de este ciclo requiere dar cuenta de una lógica de acción de tipo territorial, en la que la inclinación triunfal del oficialismo se debe a que, por fuera del supuesto conflicto entre departamentos, talló en última instancia una discontinuidad entre áreas urbanas y una zona rural afín a los vientos de cambio. Así, procuramos dar cuenta de la dinámica geopolítica a través de una mirada de gran escala enmarcada en un periodo de tiempo concreto y a partir de constatar el rol del campo y las ciudades —determinante en algunos casos a la hora de dar cuenta de la base social de la oposición— en el juego de fuerzas nacional. Más que enfocar en

1 La mención del “punto de bifurcación” para establecer el comienzo de la temporalidad del ciclo político contencioso la propone el actual vicepresidente, Álvaro García Linera, para el momento en que el gobierno nacional aprueba en soledad la constitución en Oruro el 9 de diciembre de 2007, pero lo cierto es que aquel inicio reside en el estallido de la Asamblea en Sucre, momento en el cual se desatan las fuerzas en pugna (Linera 2008).

los relevantes procesos de borramiento de límites, hibridación o mixtura existentes tanto en las dinámicas ciudadinas como en los desplazamientos del área rural de hoy —y las migraciones circulares hacia el área periurbana de Sucre no dejan de ser un ejemplo de ello— resaltamos sus tensiones, puesto que la expresión electoral de la matriz identitaria y organizacional indígena-campesina, plebeya en su conjunto, fue clave a la hora de contrarrestar el avance de la Media Luna en un escenario profundamente dividido. Pretendemos, en este escrito, abonar a una línea de investigación que particularmente en Bolivia se muestra promisoria, aquella que considera las dinámicas espaciales como determinantes a la hora de comprender las matrices de las relaciones sociales y la escala amplia del despliegue político.

La eclosión de la Asamblea Constituyente

Sucre en movimiento y la Asamblea a la deriva

Al conmemorarse 198 años de la apertura del proceso independentista latinoamericano, el 25 de mayo de 2007 —prerrogativa que La Paz se atribuye 14 días antes—, 200.000 sucrenses se congregaron en el estadio Patria bajo la consigna “¡Bolivia también somos nosotros!”, con el propósito de forzar a la Asamblea Constituyente a que trate el pedido de “capitalidad plena”; es decir, el retorno del órgano ejecutivo y legislativo afincado en tierra paceña. Una petición originalmente tangencial que más temprano que tarde terminará dominando la vida política del país. El Comité Interinstitucional, que aglutinaba a una parte de la sociedad civil sucrense, pugnó insistentemente por presentar la discusión en múltiples comisiones del cónclave, pero el retiro de la solicitud por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), con el aval de los representantes paceños —un tercio de la bancada masista—, motivó la reacción de los representantes sucrenses de la oposición, que abandonaron el recinto del Teatro Mariscal Santa Cruz para convocar a un paro cívico, declarar estado de movilización permanente y una huelga de hambre (que a los pocos días contaba con 620 ayunadores en 50 piquetes)². El integrante del comité cívico local, Rodolfo Rivas, afirmó: “Esto es una verdadera dictadura y hoy se ha puesto en vilo a

2 La Paz pidió tratar como asuntos varios un proyecto de resolución que dejaba de lado los seis informes en los que Chuquisaca logró introducir su demanda de retorno de los poderes. Las resoluciones de plenaria solo necesitaban de la aprobación por mayoría absoluta, por lo que La Paz vio la oportunidad de no tener que conseguir los dos tercios para dejar de lado al pedido chuquisaqueño. La directiva, dominada por el MAS, aceptó la propuesta de manera rápida.

la democracia. Si la Asamblea fracasa será por culpa de la Asamblea Constituyente, que no se nos atribuya a los asambleístas de Chuquisaca, ni a los partidos políticos: el MAS le ha dado el tiro de gracia”. La protesta fue irrefrenable, a tal punto que el prefecto chuquisaqueño por el masismo, David Sánchez, terminó abandonando el país.

Presa de una inestabilidad acuciante, la directiva de la Asamblea quiso dar cita a una nueva plenaria protegida por un cerco campesino en torno al cónclave; pero los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Local (FUL) procuraron hacerse del recinto, se trenzaron con policías y campesinos lanzándose cartuchos de dinamitas, gases lacrimógenos y balines entre barricadas y autos rotos, con 40 heridos de saldo. El enfrentamiento culminó a la madrugada, cuando la presidenta Silvia Lazarate anunció que la plenaria se suspendía, disipando el temor de una aprobación evista de la Constitución a oscuras. En su andar triunfal, las fuerzas de choque sucrenses realizaban la toma física simbólica de la Corte Superior de Distrito, el Servicio de Impuestos Nacionales y el Colegio Junín, fijando un plazo al Gobierno para atender la demanda de “capitalidad plena”; caso contrario, irían por la toma de todas las entidades estatales. Imaginaban revivir las jornadas épicas de la gesta que prometía la independencia —reclamando esa tradición que la había convertido en centro geográfico—, además de sentir un sabor a revancha por la derrota que los paceños le infligieron hacía más de 100 años. Lo caótico de los hechos —alimentado por una Corte Superior de Justicia radicada en Chuquisaca que ordenaba retomar el pedido de capitalidad amenazando con la cárcel a quien se opusiera— dio lugar a la propuesta de un constituyente de la tercera fuerza Unidad Nacional: suspender la Asamblea durante un mes, a la espera de que se establezca una mesa de diálogo entre La Paz y los delegados de la culta Sucre.

Microclima de ciudad y fronteras antagónicas

¿Cuáles son las causas por las cuales una región en la que el MAS había obtenido el control de la Prefectura pasa brutalmente a las filas de la oposición? Explicaciones evidentes de la radicalidad desplegada en Sucre anclan en la historicidad. A partir de la derrota infligida por los batallones paceños en la Guerra Federal en 1899, Sucre deja de ser el polo político del eje que la tenía junto al cercano y rico enclave potosino comandando los destinos de la República, pese a que una vez desaparecida la audiencia de Charcas tras la ola independentista se conformaron una pluralidad de “republiquetas” desconectadas

entre sí, bajo la leve unión de una capital que solía ser itinerante. Naturalmente, aquel combate que La Paz libró en nombre de un federalismo que olvidó ni bien alcanzado el triunfo, permanece en la memoria colectiva sucrense como la afrenta injusta a la preeminencia que le pertenecía, desalojándola del camino a la modernidad. Este duelo irresuelto suele ilustrarse con un episodio repetido en las instituciones de la ciudad blanca: la masacre de Ayo Ayo rememora que un grupo de estudiantes de la aristocracia sucrense pereció salvajemente a manos de un batallón de indígenas nortños. Una densidad en el registro de la memoria larga que tendría la ocasión de volver a la superficie en el momento en el que se decide que Sucre aloje a la Asamblea Constituyente, tanto porque era la ocasión para replantear de principio a fin el diseño del país —e indudablemente procesaría múltiples aristas del “fondo histórico”— como por el paradójico reconocimiento que le daba, puesto que era honrada como la capital oficial al mismo tiempo que se le negaría ese reconocimiento al evitar la posibilidad de que plantee su demanda de capitalidad.

Ya entrado el siglo XX, la presencia del Estado central como constructor de una hegemonía que contenga a la derrotada región chuquisaqueña tendió a ser relativamente nula, como sucedió en buena parte del país. A la pérdida de los recursos económicos destinados al poder central, menguando su importancia política, se le sumará que se mantuvo relegada del erario común en un progresivo aislamiento que terminará por asociar su pertenencia equívoca a la nación boliviana en relación con su pasado republicano. Ciertamente, el reclamo se asentaba en que Chuquisaca pertenece a una Bolivia en la que Sucre es capital plena, antes incluida en lo que tradicionalmente se llamó el Bloque Sur, junto a Tarija y Potosí. Pero a distancia del norte “aymara”, y de la polaridad La Paz-Santa Cruz y del eje horizontal que componen estas ciudades desde 1952. En el registro de la memoria mediana la radicalidad no se basó en la simple reacción de las élites locales, que ciertamente carecen de un perfil económico dirigencial propio³,

3 Tampoco en tiempos recientes se constituyó en la región un entramado económico capaz de “vehicular” el desarrollo local. En un acostumbrado anteuúltimo lugar en el ranking económico nacional, el perfil chuquisaqueño es simple. Aparte de la producción de materias primas (alimentos facturados por manos campesinas que, sobrepasando la economía de subsistencia, abastecen el mercado local), se encuentra la actividad turística y la producción cementera. Ésta es la única y mayor industria de lo que antes era una empresa estatal y ahora, con el nombre de Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), propiedad gala y de Doria Medina (principal dirigente del opositor partido Unidad Nacional). Tiene a Santa Cruz como principal destino —que además tiende a ser el mercado “natural” de la región— y articula una gama variada de actividades secundarias, como el trasporte.

sino en la prescindencia del Estado y en la relativa identificación nacional, cuyo síntoma es la explosión misma de la Asamblea Constituyente. Es decir, la debilidad de lo nacional-estatal y de la integración regional vino a contraponerse a la fortaleza de la identidad ciudadina, un eje de rotación, al decir de Luis Tapia, que ancla en la historicidad singular de este Departamento de entremedio (Tapia 2006).

Son éstos los elementos de arrastre que de manera compleja se imbricaban cuando en el año 2006, ni bien lanzada la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una serie de organizaciones de Sucre convocan a un Foro de Intereses Ciudadanos, el cual toma la determinación de que debería ser el conjunto de las entidades del Departamento el que viabilice una propuesta para que los representantes locales propongan el retorno de los poderes. Así es como en marzo del 2007 se conforma el Comité Interinstitucional, que reunió a cuarenta y seis sectores, apelando a dejar de lado las banderas políticas. A la cabeza del Comité se encontraba Jaime Barrón, rector de la Universidad más antigua de Sudamérica (la Universidad Mayor Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca, creada en 1534), y lo secundaba John Cava, máxima autoridad del Comité Cívico. Con el tiempo, la capacidad de convocatoria del organismo no tendrá límites, según afirma un dirigente obrero: “Estaba la Sociedad Protectora de Animales, que tenía participación orgánica. Estaban todos, pero todos”. Aquí se aglutinaba el ente dirigente, y la triada operativa central la componían el Comité Cívico, la Universidad y la Alcaldía (a la que se sumará la Prefectura tras la fuga del prefecto masista); con el apoyo inicialmente implícito de la Corte Suprema de Justicia y el apoyo explícito de los medios de comunicación y la curia local (que en medio de los enfrentamientos convocó a una misa “por la libertad, la democracia y contra la dictadura de Evo Morales”); todos estos sectores en gran parte dedicados a funciones administrativas, de servicios y gestión. Justamente, esta institucionalidad representa la principal faena de la ciudad y aporta el grueso de los ingresos de la Capital del Departamento⁴.

Tenemos, pues, el anclaje institucional de un discurso de *reparación histórica* articulado por el significante madre de “capitalía plena”, nombre del bien a reconquistar, sobre el que confluían todas las demandas y que la experiencia del conflicto terminará por cristalizar. Si

4 Véase lo siguiente: la cantidad de dinero que llega para todos los municipios (27, exceptuando Sucre) es prácticamente igual que lo que recibe la Universidad, tal es así que los servicios de la administración pública fueron un cuarto del total del PBI chuquisaqueño en el 2007, que representa el 5% del nacional.

desde el bastión oficialista afirmaron que “la propia Asamblea Constituyente no estuvo a la altura de este tema” es porque lo intempestivo de la protesta, una de sus condiciones de posibilidad, se debió a que el masismo desoyó el tratamiento de la temática en la Asamblea, por fuera del reglamento. Tampoco se dispuso a convenir seriamente una solución intermedia, como el llamado a un referéndum nacional que zanje el tema, con lo cual despertaba el componente catártico y patentizaba la percepción de sufrir una injusticia que birlaba la dignidad, trayendo nuevamente la derrota y confirmando su arbitrariedad. De esa manera, se fue tejiendo una malla discursiva cada vez más densa en la que el Comité Interinstitucional argumentaba que, al igual que en el conflicto marítimo con Chile, la guerra no da derecho; que la capital no se perdió constitucionalmente sino que perdió sus poderes de facto; que gracias al petróleo chuquisaqueño se mantiene el rentismo paceño; que la capital oficia de estratégico entremedio en el país, garantía de un Estado descentralizado y con autonomías. A lo cual refirió el senador chuquisaqueño de Podemos, Fernando Rodríguez: “El mundo aymara está dominando al país, es endógeno, autogestionado, y Santa Cruz hoy en día se ha globalizado, se ha abierto al comercio, y en medio hay un fiel a la balanza que tiene una percepción menos radical de posiciones extremas, los valles. El peligro de encerrarse con la nación aymara o irse con la nación Camba pasa por esta bisagra que es Sucre”. Una posición consensualista que sostuvo el Comité Interinstitucional y que tendería a abandonar puesto que el ala más afín al bloque opositor trabajó por una alianza fuerte y pronta con la Media Luna, aunque también a causa del ascendente ritmo de la crispación local. La articulación concreta y masiva de los sectores ciudadanos partiría de una suerte de coacción participativa y de la experiencia de la movilización misma, como claramente lo expresa la diputada podemista Lourdes Millares: “Y cuando empieza la arremetida del gobierno, la gasificación sistemática, Sucre se vuelve una trinchera de guerra, y de resistencia y de consciencia. Y es que ya no era necesario establecer un punto de concentración para la marcha. Cada familia, cada hogar, cada grupo de amigos era una concentración. Y entonces tú veías a la gente con sus poleras y sus banderas. Y llegó al punto que nosotros dijimos: si va a haber guerra, que haya guerra”. Naturalmente, la ajenidad respecto al encumbramiento de lo “indio”, la percepción de un reclamo justo y el sentido de la ocasión, fueron algunos de los componentes que alimentaron un microclima ciudadano que convocaba a cada vez más aliados, disponiendo a apostar el todo por el todo.

Claro está, a la movilización de la Ciudad Blanca rápidamente se le sumó la “Media Luna y la Prefectura de Cochabamba, iniciando una coordinación común entre Comités Cívicos y mandos locales que al poco tiempo (el 30 de agosto de 2007) dará origen a la primera integración operativa del Bloque Cívico-Prefectural: la Junta Democrática de Bolivia⁵. Como diría John Cava, uno de los impulsores más salientes de la iniciativa: “logramos constituir un bloque importante en el país de seis departamentos”. La oposición, a no dudarlo, brindó apoyo logístico, articuló los representantes partidarios, y vio la ocasión de extender el entramado cívico, para azuzar el conflicto naciente en el eslabón débil del área andina; antes comandado por un prefecto masista, ahora parecía echar por tierra a la Constituyente oficial alojada en su propio terreno. Parte de la radicalidad del enfrentamiento se explica, entonces, por la representación de que Sucre era la punta de lanza de una articulación de alcance nacional, abriendo un juego de fuerza que rozaba la paridad, y solo *a posteriori* podría afirmarse que ese equilibrio de poder no era tal, y que la alta dirigencia de la Media Luna, que llegó a ofrecerle ser su capital (Santa Cruz como la nueva Potosí del poder político sucrense), ciertamente no daba la vida por la reivindicación capitalina. Convocar a la inestabilidad política por la vía de capitalidad para Sucre no fue un hecho sin antecedentes, lo mismo había propiciado la falange derechista reunida en Santa Cruz tras la revolución emenerrista de 1952.

Empero, no resulta del todo apropiado situar en la fisonomía del poder regional la causa madre de las discordias (Roca 1999), ni presentar una identidad departamental y del área urbana homogéneas, puesto que esos mismos espacios estaban surcados por tensiones en su interior de principio a fin. De hecho, el acercamiento rotundo a la Media Luna, a la par que invitaba a las posiciones extremas, despertó las fisuras. La demanda sucrense, aunque evidentemente buscaba acarrear a todo el Departamento, se topó con una serie de instituciones locales que sufrieron alineamientos variables en relación con los vaivenes de la coyuntura. La Central Obrera Departamental apoyó en sus comienzos la movilización local, y así también lo hizo la Federación de Juntas Vecinales, pero la primera cambió de bando al cambiar de dirección y la segunda se partió en dos, amén del impacto del intento de construir el Comité Cívico Popular, aglutinador del entramado plebeyo afín al masismo, nutrido en el

5 La representación cívica y prefectural de estas seis regiones se reafirmó el 8 de noviembre de 2007 cuando los seis prefectos reunidos en Tarija conformaron el Consejo Nacional Democrático (Conalde).

cordón periurbano⁶. Es que en la misma Chuquisaca la clave reside en el posicionamiento de un área rural que, por fuera de los comités cívicos provinciales de pequeños poblados y de peso casi inexistente, expresa una *frontera antagónica* territorial, de clase y étnica. Pese al grito ciudadano, es uno de los departamentos con mayor proporción de población rural⁷ y condensa, casi como ningún otro departamento, un clivaje geográfico polar entre la ciudad y el campo, donde tiene un protagonismo central la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH)⁸. En tanto organización territorial, que recientemente tomó el nombre de originaria remplazando al más clásico de campesino, son seis las provincias afiliadas y está dividida en centrales, subcentrales y comunidades, controlando hoy directamente el 30 por ciento de los municipios y con influencia en el conjunto del área rural⁹.

En efecto, tenemos una división urbano-rural que también traza una línea entre ingresos, status, clases. En Sucre, más del 70 por ciento de los hogares poseen agua de red, energía eléctrica, baño, desagüe y utilizan gas para cocinar, mientras que en la zona rural, en términos genéricos, el 30 por ciento de los hogares cuenta con alguno de estos recursos, descontando la utilización de radio, que sobrepasa el 70 por ciento. Más concretamente, el 70,12 por ciento de la población chuquisaqueña es pobre (57,2 por ciento se encuentra en condiciones de indigencia y marginalidad total), pero del 29,88 por ciento restante que posee necesidades básicas satisfechas, el 89,8 vive en la ciudad de Sucre¹⁰. Según el censo nacional de 2001, Chuquisaca es la región más pobre de Bolivia (ya de por sí el país más pobre de Sudamérica). Tenemos, por tanto, una polaridad de clase a la que también se le sobreimprime un clivaje

6 En él, participaron la asamblea permanente de DD.HH., el Movimiento Sin Techo, de desocupados, mártires de la violencia de la década de los setenta y ochenta, entre otros.

7 En el área rural de Chuquisaca habita el 59 por ciento de su población, 313.369 personas.

8 El partido local Movimiento Bolivia Libre (MBL) logró adquirir una sólida presencia en el campo, y si bien desde el año 1996 Evo Morales poseía contacto con las tres federaciones, pasaron a formar parte del instrumento político recién en el 2002, cuando el MAS obtuvo un buen número de representaciones municipales y amplió su nivel de influencia, desplazando parcialmente al MBL y absorbiendo parte de su estructura. Solo en el 2005, previa debacle de los partidos tradicionales en la región, el MAS comienza a dotarse de una red orgánica mayor, aunque nunca logró constituir una estructura partidaria sólida, lo cual se hizo evidente con la elección del candidato a prefecto, que provenía de las organizaciones religiosas pentecostales, o con una administración pública que rápidamente trocó su adhesión al MNR por la más conveniente del masismo para finalmente adherirse a las directivas de la actual prefecta Cuéllar, símbolo de la oposición.

9 Las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, que se encuentran en el Chaco chuquisaqueño, tienen su propia regional, del mismo modo que constituyen otra federación regional las provincias de Nord y Sud Sinti, ambas afiliadas de modo directo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

10 Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de Estadística.

étnico. La “Ciudad de los Cuatro Nombres”¹¹ nunca consideró seriamente la construcción de sólidos parámetros de integración. A diferencia de Cochabamba, donde predomina cierta mixtura y mestizaje, aquí es más pronunciada una marca de nacimiento que distingue la geografía en una valoración escalonada capital/provincia y sucrense/campesino/indígena; y el hecho de que haya ocupado un lugar marginal y de relativo estancamiento en la geografía del país hizo que ciertos hábitos de segregación sedimenten con intensidad. Desde el mismo Podemos aseguran que “El campo, el área rural de Chuquisaca, jamás asumió como prioritario el retorno de los poderes del Estado a Sucre. El campo entendía que era mucho más importante luchar por la inclusión social y estuvieron siempre dispuestos a negociar con el Gobierno (...) Son diferentes por el hecho de decir: “Evo soy yo”, era como que cada campesino se sentía presidente. La gente es diferente”. En suma, tal como menciona Carmen Carrasco, a pesar de la pregnancia de la Revolución de 1952, “siempre quedó la sociedad chuquisaqueña muy estratificada, el peso de la religión y de la partición estamental española es muy fuerte”.

Por su parte, el discurso del MAS sobre el conflicto chuquisaqueño se basó en el diagnóstico de que el tema de la capitalía fue utilizado por la Media Luna para truncar el funcionamiento de la Asamblea, apropiarse del poder local a través de la prefectura, intentar desestabilizar al gobierno y acometer un golpe de estado civil. Paralelamente, arguyen que fuese cual sea la situación nunca se iba a dar el retorno de los poderes a Sucre, “así estuviese gobernando Tuto Quiroga”, porque La Paz concentra gran parte del electorado nacional y debido al relativo peso socioeconómico de Chuquisaca —a la cual no veían en nada alejada de las ansias “rentistas”—; caracterizaban así de demagógica cualquier propuesta contraria amparados en la consigna de que un “discurso veraz” era una forma de resistencia. Los representantes regionales del evismo, por tanto, apostaban a sustituir la reivindicación histórica por una que sea de privilegio, materializando condiciones para el desarrollo chuquisaqueño, pero la diputada podemista afirma que “para nosotros, en ese momento histórico, eran limosnas”.

El accionar del principal aliado del gobierno nacional, la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH), comenzó siendo ambivalente: un día proclamaba la

11 Los cuatro nombres de la ciudad son: “Charcas” por los primigenios habitantes preincaicos; “Chuquisaca” en tanto capital del pueblo de los Charcas; “La Plata” como nombre dado por Pedro de Anzures cuando funda la actual ciudad el 29 de septiembre de 1538, y “Sucre” en referencia al mariscal independentista de Ayacucho.

“unidad campo ciudad” y otro “defender con la vida al hermano Evo”, e igualmente esquivaba era la forma de considerar al sector campesino por parte del Comité Interinstitucional, lo cual se torna evidente ante el pedido de un representante de la zona de Río Chico —Santos Llanos— quien sugirió al comité socializar la propuesta regional en el área rural donde —dijo— pese a la simpatía que despertaba el retorno de los poderes aún no se entendía la palabra “capitalidad”¹². El campesinado se alejó de la común defensa del Comité por el lazo natural que en definitiva lo une al masismo, por la desconfianza a ser utilizados y al ver surgir la articulación con los comités cívicos del oriente: “En un principio había que mantener la unidad del Departamento. Ellos nos querían utilizar. Yo planteaba que no se da de noche a la mañana. Y en relación con la Asamblea Constituyente decían ‘no seas oveja, no seas animal’ ¿Eso qué significa? Que el campesino tenía que estar detrás apoyando. Entonces, cuando nuestro planteamiento no ha sido respetado, nosotros nos dijimos ‘no nos respetan’. Y ahí armaban la Media Luna. Que el campesino siga como antes, acá fue tremendo cómo ha sido humillado”¹³. A la hora de las definiciones, la Federación Chuquisaqueña terminó encolumnándose tras el Gobierno nacional, lo que motivó la apreciación de John Cava: “se subordinaron totalmente al Gobierno y seguirán así”.

Esta frontera antagónica, tiempo después, se pondrá nítidamente de manifiesto en ocasión del 199 aniversario de la Independencia, pero esta vez no traerá de “fondo histórico” la Guerra Federal ni la añoranza capitalina, sino la visión no menos profunda de las “dos repúblicas”¹⁴. El 24 de mayo de 2008, cerca de cuarenta indígenas y campesinos que se dirigían a la Capital departamental a recibir las ambulancias que

12 Las ambivalencias y los realineamientos no eran privativos de la oposición. Cuando en el MAS decidieron avanzar en la Asamblea sin tomar en cuenta el reclamo chuquisaqueño comenzaron a mostrarse contradicciones internas. La Dirección Política Departamental resolvió expulsar a los discolos asambleístas chuquisaqueños, Epifania Terrazas, Sabina Cuéllar (que luego sería prefecta), Arminda Herrera y Edgar Arraya, remitidos al Tribunal de Ética por no “guardar fidelidad a los principios, programas de gobierno y la estructura orgánica estatutaria del MAS IPSP”.

13 Vale considerar que la intervención del MAS en el territorio no ha sido menor, destinó 120 millones de Bolivianos para el programa Evo Cumple que cuenta con 150 proyectos, desde agua potable, pasando por caminos vecinales, hasta escuelas, gestionados en un contacto directo con los municipios, que a su vez reciben recursos a través del Fondo Productivo Social.

14 Se sabe, el poder regio estableció la existencia de dos comunidades legalmente separadas entre sí: la “república de españoles” y la “república de indios”. En la primera categoría se incluyeron a los españoles nacidos en la Península, a los criollos o hijos de españoles nacidos en las colonias y a los mestizos “legítimos” o hijos de españoles casados con mujeres indígenas. En la segunda se incluyeron a todos los indígenas.

traería un Presidente que nunca alcanzó a pisar el territorio chuquisaqueño sufrieron una encerrona y fueron arrastrados hasta la plaza principal, directamente obligados a quemar sus símbolos de identidad colectiva y a besar la bandera sucrense, a persignarse arrodillados, humillados públicamente como símbolo de rendición y sumisión al poder regional. Una racialización de la política en exceso palpable veía al campesino rural en un lugar “no propio” (AAVV 2009), invadiendo el espacio aún reservado a la élite local. Es que la apelación a la violencia desatada ansiaba restituir un criterio de dominación que obviamente sentía peligrar demasiado, cuyo evidente signo de debilidad es la necesidad misma de hacer jugar a la fuerza pura sobre una tensión urbano-rural que más temprano que tarde volverá a salir a la luz, pero expresada de manera tajante en la esfera de acumulación política electoral.

Hacia una nueva convocatoria

Con una Asamblea Constituyente suspendida, el MAS terminó aceptando activar el comité de diálogo en Sucre, con intermediación del Arzobispo, para finalmente anunciar que no discutiría la capitalidad, pero sí el asiento de los poderes del Estado, lo cual era una simple modificación nominal. Todo parecía encaminarse, pero el constituyente oficialista oriundo de la capital de facto, Mario Orellana, dejó en claro una posición regional más fuerte que la partidaria, para La Paz era “absolutamente inadmisibles” tratar el traslado de los poderes, afirmaciones que tenían por telón de fondo un área andina —bastión del oficialismo— donde la marcha por la paceñidad había reunido a 500.000 simpatizantes.

La potestad para hallar una vía de solución pasó a manos de un consejo político suprapartidario reunido en La Paz y presidido por el vicepresidente, que decidió ofrecer a Sucre el Cuarto Poder y la sede del Tribunal Electoral Supremo. Pero la contraoferta fue el retorno inmediato del Poder Legislativo y el paulatino del Ejecutivo, base de la que no se movería el comité interinstitucional aún cuando se sume a lo ya mencionado las sesiones extraordinarias del Congreso y el asiento del Defensor del Pueblo¹⁵. Entre negociaciones estancadas, los capitalinos llamaron a un cabildo en la céntrica Plaza 25 de Mayo

15 Entretanto, el ejecutivo arremetía creando la Renta Dignidad, extensión del antiguo Bonosol, universalizando el estipendio de 200 Bolivianos (equivalentes a 22 USD) para todos los mayores de 60 años. Los recursos saldrían de un recorte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que iba directo a las prefecturas, lo que motivó la encendida respuesta de los departamentos enlazados por la Junta Democrática de Bolivia, en lo más mínimo dispuesta a dialogar sobre la “distribución de la renta petrolera”.

en medio de los rumores de que los campesinos de Potosí cortarían el canal de agua que abastece la ciudad, que se pretendía relegar definitivamente la propuesta de capitalidad y aprobar el traslado de sesiones a otra región. La lectura final de las conclusiones del Cabildo se encontró con una nueva participación policial. Entre provocaciones cruzadas, las calles de la ciudad volvieron a ser el escenario de una gran batalla urbana. El diario local titulaba: “La Constitución del MAS se manchó de sangre”, ya que el resultado de la bataola fue dos muertos y más de 100 heridos, entre intoxicados, policontusos, personas con traumatismo encéfalo craneano y baleados. Las dependencias policiales fueron quemadas y saqueadas, y cien “reos” encontraron una insólita libertad, evaporándose el poder coercitivo clásico.

Tras 88 días de receso, el ala dirigencial del MAS —atrincherada en la población de Tarabuco a 60 kilómetros de la Capital— ratificó la convocatoria a plenaria de la Asamblea Constituyente en La Glorieta, sede del Liceo Militar, bajo el resguardo de militares, policías y 2.500 campesinos como garantes. Los constituyentes evistas se trasladaron al Liceo por la noche, pero la arremetida local convocó a la palestra a cerca de 20.000 sucrenses que los obligaron aprobar presurosamente en grande la Constitución y huir, haciendo estallar la residencia sucrense de la Asamblea. Al día siguiente, Sucre exigía juicio por las muertes y seis prefecturas departamentales llamaban y acataban el paro cívico (Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Chuquisaca) en rechazo a las políticas del oficialismo. Como será usual, es el Congreso Nacional el que saldrá al auxilio del Gobierno, cuando con dos tercios de los votos de masistas y aliados sancione con urgencia la modificación del artículo 6 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y autorice a su presidenta Silvia Lazarte a llamar a sesión “en cualquier parte del territorio patrio”, si la ciudad de Sucre “no otorga las garantías para la aprobación del nuevo texto constitucional”.

Acerca del ciclo ofensivo de la Media Luna

En efecto, la eclosión de Asamblea Constituyente como lugar de condensación en el cual se procesaban las múltiples tensiones “orgánicas” de Bolivia y una de las mayores apuestas del Gobierno nacional, constituyó un punto de torsión neurálgico de la coyuntura, ya que no dejó de representar una victoria para la Media Luna y así abrió un periodo signado por lo que podría denominarse como una guerra de clases; es decir, un enfrentamiento abierto y agudamente polarizado donde la resolución de la encrucijada parecía

demandar una solución “militar”. Tras el colapso de la Asamblea, la iniciativa política pasa a manos de la oposición, presa de una suerte de sentimiento triunfalista que la lleva a operar y a atrincherarse en las regiones que mayormente controla, en búsqueda de consolidar un control local de *facto* y afianzar un eje territorial que haga retornar la política a las calles, espacio en el que usualmente operaban los movimientos sociales. A su vez, los sectores opositores cristalizan una articulación basada en la actuación programada del bloque cívico-prefectural, haciendo de la “autonomía” para los departamentos su exigencia, para la que organiza votaciones *ad-boc*. El partido de gobierno, por su parte, deja de diagramar el campo sobre el cual se dirimen las fuerzas en pugna (la ventaja relativa que poseía por tener un mayor peso en el cónclave), abandonando la estrategia consensualista que venía desplegando. Por otra, privilegia el hecho efectivo del antagonismo, ya fuertemente territorializado dada la ausencia de la mediación asamblearia de los partidos políticos, en definitiva, de toda instancia de mediación superestructural por fuera de la corporativización generalizada. A todo esto, el 9 de diciembre de 2007 el oficialismo baja el martillo final a una Constitución aprobada según sus propios preceptos en la ciudad de Oruro.

El campo de disputa electoral

La opción plebiscitaria como acumulación de poder

Aprobado en Oruro el texto de la Constitución oficialista, los comités cívicos y las prefecturas de Santa Cruz y Beni, en directo diálogo con legisladores estadounidenses, se aprestaron a realizar sendos referéndums para avalar sus propios estatutos autonómicos. Paralelamente, gracias a un cerco de las organizaciones sociales al Congreso de la República, a una ingeniería numérica en la cámara de senadores¹⁶ y a la amenaza con apelar al decreto o cerrar el órgano legislativo si sus medidas no prosperaban, el oficialismo logró sancionar una ley que convocaba para el domingo 4 de mayo a un referéndum dirimitorio (sobre dos opciones acerca de la extensión en la tenencia de la tierra, cinco mil o diez mil hectáreas) y ratificatorio (de la nueva Constitución Política del Estado), y otra que otorgaba al

16 Andrés Heredia y Abraham Cuéllar, suplentes de Róger Pinto (Podemos) y José Villavicencio (UN), aparecieron en el pleno, junto a María Elsa Calle y Carlos Guasace, suplentes de los masistas Gerald Ortiz y Guido Guardia, respectivamente, ambos disidentes del MAS.

Congreso, hasta tanto no existiesen legalmente los gobiernos departamentales, la atribución “exclusiva” de llamar a consultas regionales.

El Consejo Nacional Democrático, conformado ahora por seis departamentos, lanzó la directiva de realizar una campaña por referéndums autonómicos en todas las regiones de influencia opositora, decretó también la movilización, el desacato y la protesta en contra de los referendos recién sancionados. Y, en pie de desafío, Santa Cruz buscaría aprobar su estatuto autonómico el mismo 4 de mayo, una iniciativa desconocida por la Corte Nacional Electoral (que solo valida convocatorias congresales), pero sostenida por cada una de las cortes departamentales de la Media Luna¹⁷. Las reacciones del Gobierno fueron ambivalentes, al principio pensó en resistir la ronda de consultas locales, luego no se opuso a las convocatorias, terminó por llamar a la resistencia pacífica y, ante el anuncio por parte del Presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) de dificultades técnicas y bastante políticas de realizarla, el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, aceptó públicamente la sugerencia de posponer el llamado a sufragio en el que se jugaba la aprobación de la nueva ley madre.

El 4 de mayo de 2008 Santa Cruz aprueba con 86 por ciento su estatuto, superando en 14,18 los votos logrados en la consulta autonómica del 2006, pero aumentando de 17 a 39 por ciento los niveles de abstención, dado que la participación alcanzó el 61 por ciento. Apenas unos días después, el gobierno nacional se encuentra con un espaldarazo realmente inesperado. Evo Morales, a mediados del 2007, había enviado al poder legislativo un proyecto de ley para realizar un referéndum revocatorio del presidente y los prefectos, el que, a principios del 2008 logró media sanción. De repente, el partido opositor Podemos lo viabilizó por entero desde su bloque senatorial, buscando restablecer la alicaída representación partidaria, aunque desató una feroz crítica del conglomerado cívico-prefectural, que veía cómo desde su principal aliado se abrían las puertas para una elección promovida por el MAS. Así fue que el bloque tarijeño amenazó con dejar el partido, diputados presentaban un proyecto derogatorio y comenzaba la sangría de legisladores podemistas, al punto que tiempo después, desahuciado, el partido culminó perdiendo la personería jurídica.

17 Debemos mencionar que la institucionalidad legal no se encontraba muy concurrida: en la Fiscalía General de la República existía un interinato; en el Tribunal Constitucional, nueve acefalías: dos en la CNE y una en la Corte Suprema de Justicia.

Los referéndums locales siguieron su curso. El primero de junio, el Estatuto Autonómico del Beni fue aprobado con el 78 por ciento de los votos y el de Pando por el 81,8. En Beni, el 35,3 por ciento de los inscritos no votó (41,1 en la zonas rurales) y en Pando el 45,3 por ciento, lo que valió la declamación presidencial de que el ausentismo “derrotó a los caciques de Beni y Pando”. El 23 de junio el Sí logra 78,8 por ciento en Tarija, con un ausentismo del 38,13 (según datos de las CDE). Consumado el hecho, los departamentos de la Media Luna pasaron a tener sus estatutos autonómicos aprobados, con lo cual los prefectos alistaron una posición conjunta en contra del gobierno nacional: conminaron al presidente a que asista a un diálogo, desconocieron el revocatorio y, en todo caso, llamaron a realizar elecciones generales para renovar todos los cargos públicos.

Se esperaba que Chuquisaca incline la balanza política. En efecto, al quedar el puesto prefectural acéfalo durante los disturbios que propiciaron el cierre de la Asamblea Constituyente, la elección pautada para mediados de año dio por resultado el triunfo de una mujer de pollera, antigua masista, Savina Cuéllar, que aventajó al candidato del gobierno, Walter Valda, hasta entonces Ministro de Aguas (Cuéllar obtuvo 51,58 por ciento frente al 44,17 por ciento de Valda). El resultado no fue tan rutilante como se esperaba, debido a dos hechos significativos: la candidatura de Cuellar fue elegida por un cabildo dominado por el comité interinstitucional que sugirió a los partidos no disgregar las fuerzas, de modo que toda la oposición partidaria se unió para competir electoralmente con el MAS, constituyendo una verdadera apuesta por contar su suerte en un escenario local, a partir de la creada *ad hoc* alianza Comité Interinstitucional. Seguidamente, el MAS triunfó en el área rural, donde se revirtieron los resultados. La ACI obtuvo el 74,1 por ciento de respaldo en Sucre y un 70,9 en el área urbana (que incluye a los centros urbanos de todo el departamento), frente a un 22,1 y 25,2 respectivamente, del postulante oficialista; aunque los números arrojaban lo opuesto en el área rural, donde Valda alcanzó el 68,4 por ciento de apoyo y un 27,5 Savina Cuéllar¹⁸. Con

18 En todo el departamento de Chuquisaca, el MAS prácticamente mantuvo la votación que había obtenido en la elección de prefectos de diciembre del 2005, aunque esta vez perdió la elección porque la oposición se unió. En esa ocasión el candidato oficialista David Sánchez ganó con el 42,31 por ciento de votos, luego se ubicó Podemos con el 36,34 por ciento, seguido de Unidad Nacional, MIR y MNR, éstos tres últimos con porcentajes inferiores a los dos dígitos. Durante el 2006 el MAS también ganó la elección de constituyentes y su propuesta de “No” a las autonomías.

todo, la balanza parecía inclinarse y la oposición en plena ofensiva acumulaba victorias —aunque con mayoría ficticia dado que las organizaba— en el campo electoral. Tal es así que Evo Morales ya solo ejercía su influjo en las prefecturas de Potosí y Oruro, mientras que las otras siete estaban en manos de una oposición que venía de aprobar los estatutos autonómicos para sus regiones nucleares.

A principios de agosto, el bloque cívico prefectural cruceño, voz suprema de la Media Luna ampliada, afirmó que aceptaba el plebiscito revocatorio —y la corte electoral oriental anunciaba que no presentaría ninguna demanda de nulidad—, arrastrado por la percepción, además de tener toda la legalidad en contra, de que el control de las siete prefecturas y la seguidilla de resultados favorables redundaría en un golpe electoral que el oficialismo no podría contrarrestar. Igualmente, los disturbios cruzados no mermaban: el Consejo Nacional Democrático (Conalde), a fin de saberse solidario con Chuquisaca, demandó la realización de un referéndum por la capitalidad, y los repertorios de protesta florecían por doquier. La Media Luna alistó una huelga de hambre generalizada para recuperar la proporción que les correspondería de los impuestos a los hidrocarburos. La Central Obrera Boliviana se mantenía en estado de emergencia y sus bloqueos inmovilizaban a la capital paceña por la desatención de su Proyecto de Ley de Pensiones. Tampoco hallaba solución la protesta de los choferes de micros, que querían un incremento de los pasajes. Los discapacitados exigían un bono anual de 3.000 bolivianos. Así, Evo Morales no consiguió pisar ni Santa Cruz —donde se interrumpieron las caravanas programadas— ni Chuquisaca ni Beni ni Pando ni Tarija, teniendo que realizar su último acto de campaña en la amigable ciudad de La Paz.

Territorialidad y ruralización del voto

La contundencia de los resultados fue sorprendente, el 10 de agosto de 2008, el binomio presidencial logró la ratificación con el 67,41 por ciento (2.103.872 votos) de los electores del país, superó con creces el 52 por ciento obtenido en el 2005 y ganó en todos los departamentos menos en Santa Cruz, Beni, y Tarija. A su vez, el oficialismo conquistó un sustancial respaldo en los departamentos de la Media Luna; en una Chuquisaca conmovida por el ultraje a los indígenas originarios, por ejemplo, obtuvo el 53,88 por ciento. Los prefectos no corrieron igual suerte. Fue ratificado el de Santa Cruz (66,43%), el de Pando (56,21%), el de Oruro (50,85%); el de Tarija (58,06%), el de Beni (64,25%); el de Potosí (69,08%) pero perdieron dos opositores a Morales, la autoridad

máxima de La Paz, con el 64,52 por ciento de votos negativos, y el de Cochabamba, con el 64,81 por ciento. Así, el MAS descabezaba a dos departamentos, que tendrían un mandatario interino —hasta las nuevas elecciones presidenciales— elegidos por el propio Presidente (recordemos que constitucionalmente aún era su derecho).

En principio, si quisiéramos tener en vistas el escenario electoral que arroja esa partición llamada occidente-orienté podríamos contar con los siguientes datos: del total de 3.120.909 de votos válidos, contando solo los recibidos por Evo Morales en los departamentos occidentales de La Paz, Oruro y Potosí, sumándole Cochabamba, tenemos el 51,7 por ciento votos favorables (1.614.187) sobre el total de electores. Es decir, el binomio presidencial resultaba amplio ganador si cosechaba solamente los sufragios que consiguió en esos cuatro departamentos y todo el resto del electorado se opusiese. El bastión es sin duda el departamento de La Paz, donde cosechó el 83 por ciento de aprobación, el 42 por ciento del total de sus partidarios. De modo que la hegemonía “occidental” en caudal de votantes es decisiva. Incluso en todos los departamentos de la Media Luna obtuvo el 42,7 por ciento; en Pando directamente ganó (con una diferencia de 1.408 votos) y en Tarija la diferencia a favor del “No” fue de 0,2¹⁹. Simples imágenes para presenciar el peso de número del “evismo”; no menor, puesto que, en términos genéricos, terminó de anunciar que la Media Luna podía atinar a disputar la acumulación electoral si organizaba las elecciones de principio a fin.

Profundizando en la geografía electoral, la imagen compuesta por la polarización campo-ciudad, pese al límite que impone sondear las consecuencias de una simple pregunta acerca de la continuidad del binomio presidencial²⁰, no deja de arrojar consecuencias aún más notorias. Los votos del campo representan el 53,5 por ciento del total nacional, y allí Evo obtuvo el 92,8 por ciento a favor (1.345.302). Es una cifra singular, puesto que 9 de cada 10 electores del área rural

19 Cuando Evo Morales resultó elegido Presidente en el 2005 no obtuvo votaciones significativas en la región amazónica del país, algo que se expresó en la inferioridad numérica en la Cámara de Senadores, donde el MAS contó con 12 senadores frente a los 13 de Podemos, Unidad Nacional y el MNR. Esta vez, en Pando, el ascenso de Morales fue de 32 puntos, ya que pasó del 20 por ciento al 52 por ciento a los dos años y medio de gestión. En Beni, el salto fue del 16 por ciento al 41 por ciento, en Tarija, del 31 por ciento al 49 ciento, en Santa Cruz, del 33 al 38,15 por ciento.

20 Sin embargo, las apreciaciones aquí expuestas no resultarían modificadas en grado sumo, más bien confirmadas, si trabajásemos con los datos proporcionados por el referéndum para la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado de enero de 2009. Algunas cifras utilizadas en este acápite son de elaboración propia en base a los datos de la CNE y de las cortes departamentales.

se encolumnaron decididamente con el “evismo”, mientras que obtuvo el 52 por ciento de aprobación en el conjunto de las secciones capitales. Pero existe otro dato bien significativo en relación con la situación polar mencionada: aunque triunfó en las secciones capitales, ellas explican el 67,9 por ciento de los votos negativos, es decir, de la suma de los votos negativos obtenidos casi el 70 por ciento provino de las secciones capitales. Con todo, en las provincias del Conalde, que muestran un paisaje más completo de la dinámica de los departamentos —fundamentalmente del área rural— la presidencia ganó en 44 de las 60 provincias. En Cochabamba ganó en las 16 provincias, en Chuquisaca en 9 de las 10 (perdió en la provincia capital); en Pando, en 4 de 5; en Tarija, en 5 de 6 (perdió en la provincia capital); en Santa Cruz, en 7 de 15 (que fue la votación departamental más baja, 40 por ciento) y en Beni, en tres de las ocho provincias. Es decir, Morales salió derrotado fundamentalmente en ciudades importantes, perdió en cuatro de las nueve capitales de departamento, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Tarija y Sucre.

Otras cifras centrales pueden contribuir a dar cuenta de una territorialización del voto, bajo rasgos corporativos. En el cantón de Orinoca, de donde Evo es originario, cosechó el 99,83 por ciento de los votos, es decir, 594, pero mencionemos que obtuvo el 0,17 en contra, es decir, de 595 electores hubo uno que se decidió —verdaderamente entrenado en la contracorriente— a votar en contra del “hermano Evo”. En ciertos lugares, no votar por el presidente es un problema de lazo familiar (haciendo que los comentarios risueños sobre la imposibilidad del sindicato de “soportar tamañas traiciones” o sobre el envío de compañeros “a sufragar en contra para evitar la acusación de fraude” empiecen a confundirse con la evidencia empírica). Naturalmente, el “voto sindical” o el “voto comunitario” suele ser aplicado por los sectores cocaleros del Chapare, los campesinos de Achacachi, los cooperativistas mineros o los indígenas del Norte de Potosí. Cupertino Huacanqui, dirigente de esta zona, en un encuentro de autoridades originarias expresaba la decisión de que “todos votaremos por el compañero Evo. Estamos obligados a votar por el proceso de cambio, porque así queremos. Esta iniciativa es parte de las autodeterminaciones de los pueblos indígenas, se decide como pueblo, como una sola persona”. La existencia de esta dinámica electoral también puede comprobarse en los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que vieron en el “voto comunitario” un delito electoral tipificado como violación al secreto de voto o directa coacción electoral. Se trata

de un modo de ejercer la democracia delegativa bajo la mediación de la decisión comunal territorialmente asentada. Pero si acaso podría decirse que el número es menor, en la provincia de Omasuyos de La Paz, donde participa la nada despreciable cifra de 29.874 electores, 29.407 votaron por el sí, es decir, el 98,44 por ciento (467 en contra). Ahora bien, si acaso siguiese siendo una muestra pequeña, en El Alto, tercera ciudad populosa del país, el binomio presidencial obtuvo el 91,13 por ciento de los votos, más de 311.000 contra un poco más de 30.000. Y Chuquisaca, como vimos, no fue ajena al seguro alineamiento con el masismo: la creencia de que la lucha por la capitalía desajustaría las últimas tendencias generales de las elecciones solo se hizo efectiva en la provincia capital, las nueve restantes propiciaron una suerte de “cerco electoral” sobre la ya solitaria Ciudad Blanca.

Consumado el triunfo, durante su visita al municipio de Villa Independencia, provincia Ayopaya de Cochabamba, el Jefe de Estado aseguró que quienes pregonaban que la nueva Constitución debía ser aprobada por dos tercios ya no tenían ninguna autoridad para hacerlo: “Yo diría, compañeros, que con este revocatorio hemos obtenido más de dos tercios, automáticamente puedo imaginarme que está aprobada la nueva Constitución Política del Estado boliviano porque dos tercios del 100 por ciento, espero no equivocarme, (hacen) 66,33 por ciento y estamos con 67,42 por ciento”. Empero, aclaró que “por el bien del país” acudiría a los mecanismos necesarios para “juntar los bien o mal llamados estatutos autonómicos con la nueva Constitución Política del Estado boliviano para que el pueblo, con su voto, apruebe la nueva Carta Magna. Es una responsabilidad no solo para mí, sino para todos”.

Palabras finales

Durante este ciclo, evidentemente quedó huérfana la posibilidad de que una instancia como la Asamblea sirviese para procesar las tensiones internas, en verdad se hizo patente que el entramado del conflicto lejos estuvo de recalar en las dimensiones consensualistas para mejor dirigirse al sitio real donde acontecía el devenir político de la Bolivia de entonces; esto es, por fuera de la imagen de regiones o departamentos en pugna, la dimensión netamente anterior de las *fronteras antagónicas* de carácter territorial, étnico y de clase. De manera obvia, no queremos brindar una imagen de identidades contrastantes y cristalizadas en torno a la polaridad urbano-rural, pero está claro que fue el emplazamiento estratégico básico a la hora de la reafirmación política en la escala amplia del juego de fuerzas nacional. Justamente, entre la significación

de los múltiples magmas de historicidad que salieron a la palestra, vale mencionar la densificación de la identidad ciudadina de Sucre, que sin embargo no dejó de estar fisurada en su interior, al tiempo que se tornó visible la determinación política de un área rural que tendió a mantener su patrón organizativo y su arraigo ideológico casi inalterado, de lo cual dio sobradas muestras, particularmente en el “golpe democrático” que posibilitó la ratificación inapelable de Evo Morales.

Así, el conflicto amagaba con encontrar la balanza de la concordia en la resolución eleccionaria, ya que la Media Luna debía allanarse a un mecanismo de validación del poder —el peso del número— que ella misma había practicado. Sin embargo, el Conalde, con la incorporación de la prefecta chuquisaqueña Cuéllar, sostuvo que se había dado un “empate” de autoridades, ya que fueron ratificados tanto la dupla presidencial como los prefectos de la Media Luna, de modo que rompió un diálogo casi inexistente y declaró paro cívico regional. El vicepresidente del comité cívico cruceño, Roberto Gutiérrez, daba la pauta de lo que se abría: “profundizar la autonomía”, encarar una “resistencia civil ciudadana” y sentenció que no aceptarían “ningún decretucho del Gobierno (que venga) a imponernos cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer con nuestros recursos o qué tipo de autonomías vamos a querer”. Al despuntar septiembre de 2008, se saldaría la opción por la confrontación directa; en las regiones bajo el influjo de la oposición se llamó a intensificar los bloqueos para demandar la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, rechazar a los referendos por la nueva Constitución, impedir el suministro de gas al exterior, bloquear carreteras, crear un “organismo de seguridad autónomo” formado por civiles y tomar las dependencias estatales del poder central; en definitiva, acceder al control efectivo de las regiones opositoras y desestabilizar al gobierno nacional de manera contundente. Claro está, comenzaba una temporalidad en la que, tras el revés electoral, la Media Luna acorralada se lanzó a bordear la “guerra civil”.

En este clima de caos desatado, la siempre particular Chuquisaca, que suele llegar un tiempo antes a lo que está por venir, se encontraba cercada por el sector campesino. Sintomáticamente el Comité pro Intereses de Chuquisaca optó por apartarse de las movilizaciones y el paro cívico convocados por el Conalde porque percibió que sus afiliados estaban cansados de participar en medidas de protesta que perjudican la actividad productiva de la región. La COD —presta a cambiar de mando— decidió ignorar las medidas, y en las zonas alejadas del centro de la ciudad la actividad comercial se desarrollaba con normalidad, lo que alivió a la Cámara Hotelera, en vista de que el ajeteo perjudicaba sus

actividades. Sucedió, más profundamente, que los campesinos avivaron el bloqueo de caminos con la amenaza de cercar la ciudad de Sucre en demanda de que la prefecta Savina Cuéllar reconozca a los subprefectos elegidos por las organizaciones sociales. Los agricultores chuquisaqueños —exactamente los mismos que acababan de dar muestras de homogeneidad electoral— eligieron diez subprefectos a través de ampliados y cabildos para igual número de provincias del Departamento y exigían que se los reconozca como autoridades legales y legítimas designadas por “usos y costumbres”. El bloqueo organizado por la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca sumaba 17 puntos que impedían la entrada de alimentos del campo, hasta que cerraron todos los accesos a la ciudad y consiguieron aislarla del resto del país, mientras el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señalaba que no instruiría a la Policía a que desbloquee por ser un “conflicto interno”.

Comenzó entonces a hablarse de desabastecimiento de productos y los precios aumentaron en los mercados. Un intento de consenso fue infructuoso, tras siete horas de reunión, la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca rompió el diálogo con la prefecta Savina Cuéllar, a quien asociaban al ultraje que sufrieron el 24 de mayo, y anunció la prosecución del cerco: “Estamos —explicó el dirigente— de acuerdo para dialogar si hay respuestas positivas a todos nuestros planteamientos”. Es que esta capacidad de presión, esta completa ajenidad a aquel reclamo sucrense que abrió el ciclo de antagonismo territorial, habla también de la realidad fiera de espacios disonantes, no del todo alejada de la tensión urbano-rural que más temprano que tarde se pondrá en juego en el cerco a Santa Cruz, en la beligerancia que aconteció en el mercado campesino de Tarija, en la posterior mantaza de campesinos por parte de las huestes prefecturales de Pando que motivó la militarización del Departamento, hechos que reenviarán a un “golpe de fuerza” sobre los bastiones —antes que nada ciudadanos, vale decir— de la oposición.

Bibliografía

- AAVV (2009) “¿Cómo entender el 24 de mayo en Sucre?” en *Cuarto intermedio*, Cochabamba.
- García Linera, Álvaro (2008) “Empate catastrófico y punto de bifurcación” en *Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, CLACSO, Año 1, no. 1, Buenos Aires.
- Roca, José Luis (1999) [1979] *Fisonomía del regionalismo boliviano*, Plural, La Paz.

Tapia, Luis (2006) “Eje de rotación, movimiento y significación en Bolivia” en *Pensamiento de los confines*, Fondo de Cultura Económica, no. 19, Buenos Aires.

Tapia, Luis (2009) La coyuntura de la autonomía relativa del Estado, Muela del Diablo/CLACSO, La Paz.

Entrevistas

Carmen Carrasco, socióloga, reside en Chuquisaca

Faustino Yujra, dirigente de la FUTPOCH

Fernando Rodríguez, senador chuquisaqueño por Podemos

Gonzalo Llanos, dirigente de la COD

John Cava, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca

Lourdes Millares, diputada chuquisaqueña por Podemos

René Martínez, diputado chuquisaqueño por el MAS

Wilber Flores, diputado chuquisaqueño por el MAS (antiguo dirigente de la FUTPOCH)

Diarios nacionales

La Prensa en www.laprensa.com.bo (varios números)

Correo del Sur en www.correodelsur.com (varios números)

Recursos web

www.chuquisaca.cne.org.bo

www.ine.gov.bo

www.cne.org.bo

Tercera parte

Rupturas y continuidades entre lo rural y lo urbano

En las puertas de la gran metrópoli

Desarrollo local y relaciones interculturales rural-urbanas en Viacha

Fernando Galindo

Introducción

Las relaciones urbano-rurales en Bolivia sufrieron cambios fundamentales en el último cuarto de siglo (1985-2010) debido a la migración rural-urbana y a los procesos de descentralización del Estado, entre otros factores. Un resultado de esta cambiante relación es la emergencia y del crecimiento de ciudades intermedias, las cuales mantienen fuertes vínculos con sus entornos rurales y las urbes metropolitanas más cercanas, configurando una “nueva ruralidad” (Arce y Uzeda 1999) o emergentes relaciones “peri-urbanas” (Ávila 2005) dependiendo del contexto que se observe.

El municipio de Viacha en el altiplano de Bolivia es un ejemplo de estos cambios. Culturalmente, Viacha es un municipio principalmente aymara. Demográficamente, tiene una población de más de 50 mil personas (dos tercios de las cuales es urbana). Sin embargo, un gran número de la población urbana es de origen rural, mantiene una casa y desarrolla alguna actividad económica en el área rural. Una gran variedad de actores públicos, privados y sociales se mueven alternativamente entre los espacios rurales y urbanos, incluyendo el área metropolitana La Paz-El Alto (con una población de 1,7 millones de personas), configurando complejos escenarios e intercambios interculturales y socioeconómicos.

Este artículo tiene dos propósitos. En primer lugar, describir los cambios en las relaciones rural-urbanas como resultado de las iniciativas de desarrollo implementadas en la zona desde la década de los setenta. En segundo lugar, indagar cómo esas iniciativas de desarrollo han respondido o responden al desafío intercultural. Sostenemos que las relaciones rural-urbanas en Viacha expresan un largo proceso

histórico de reapropiación de la población rural de los espacios rurales y urbanos. En el periodo moderno, la reapropiación de la tierra y el espacio rural, a través de la Reforma Agraria, es un primer hito en este proceso. La intensificación de la migración rural desde la década de los ochenta, tanto hacia el centro poblado de Viacha como hacia el área metropolitana La Paz-El Alto, constituye un segundo hito de este proceso: la “recuperación” de la Marka Viacha y la territorialización de la Marka Chuquiago. Ambos procesos de reapropiación transcurren al interior de novedosas dinámicas de diferenciación social y cultural vinculadas a la interfase rural-urbana. Asimismo, las iniciativas de desarrollo rural implementadas en la zona se han ido moviendo paulatinamente desde una visión monocultural hacia una apertura intercultural. Si bien esta apertura es más evidente en el ámbito económico-productivo, en la última década se evidencia una apertura similar, no exenta de conflictos, en otros ámbitos como el de la toma de decisiones políticas en el ámbito municipal.

Primeramente, presentamos una descripción del municipio de Viacha. En segundo lugar, se describen de manera breve las relaciones rural-urbanas antes de la Reforma Agraria (1953). En tercer lugar, se describen las transformaciones de espacio rural como resultado de iniciativas de desarrollo implementadas desde la década de los setenta. En las últimas dos secciones se describen las relaciones rural-urbanas desde la aprobación de la Ley de Participación Popular (1994), centrando nuestra atención en la relación conflictiva entre las mismas (1995-2005) y en las relaciones de encuentro de los últimos cinco años. Cerramos con algunas consideraciones generales sobre las relaciones rural-urbanas.

Metodológicamente nuestro abordaje de las relaciones rural-urbanas se enfoca en el área rural de Viacha, el Distrito 3. Los datos sobre los que se basa este artículo provienen de una investigación mayor realizada por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) sobre el impacto de las relaciones interculturales en el desarrollo rural sostenible de Bolivia desarrollada en el marco de la red de investigación europea Desarrollo Sostenible en un Mundo Diverso (SUS.DIV por sus siglas en inglés).

El espacio-territorio de Viacha

En el periodo colonial, Viacha fue un importante punto de tránsito entre Cuzco y Potosí. Fue reducido como pueblo de indios por el Virrey Francisco de Toledo en 1573 y ya durante ese periodo constituía

una Marka Aymara¹: la Marka Viacha. Durante el periodo de la República, Viacha se convirtió en capital de la provincia Ingavi (1884). En 1906 fue elevada legalmente a rango de ciudad como Villa Viacha, aunque en el imaginario social de la época era todavía considerada como un pueblo². Hasta las dos primeras décadas del siglo XX, la agricultura fue la principal actividad productiva de la zona. En 1925 se inicia la actividad industrial extractiva con la creación de la Fábrica Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE). Posteriormente se convierte en el centro ferroviario más importante de Bolivia, como punto de tránsito de productos de importación-exportación y maestranza de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). A partir de la Revolución Nacionalista de 1952, Viacha se consolidó como un importante centro militar, vial e industrial. En Viacha se establecen empresas como la Cervecería Boliviana Nacional y, desde la década de los ochenta, de empresas ladrilleras, de cerámica y de extracción y procesamiento de áridos (arena, piedra, cal y otros materiales de construcción) y de servicios (fábrica de sombreros, panaderías y fundiciones).

Con la Ley de Participación Popular (1994) Viacha se constituye en un municipio de gran extensión territorial (4.380,33 km²) compuesto por siete distritos municipales. Debido a conflictos por recursos y por la tensión rural-urbana, el año 2005, tres de los distritos rurales se separan y se constituyen en nuevos municipios: Jesús de Machaca (Distrito 4), San Andrés de Machaca (Distrito 4) y Parcial Arriba (Distrito 6). Viacha queda reducida en territorio (1.120,86 km²) y a cuatro distritos municipales: tres de composición mayoritariamente urbana (1, 2, y 7) y uno rural (Distrito 3). Este último distrito abarca más del 90% de la extensión total del Municipio, 1.070,85 km² (Gobierno Municipal de Viacha 2007).

Ubicación y características generales

Viacha está ubicada al sudoeste de la ciudad de La Paz, es la primera sección municipal de la provincia Ingavi, ubicada en el altiplano central de La Paz. Al Norte limita con los municipios de Laja y El Alto, al Este con los municipios de El Alto, Achocalla, Calamarca y Collana, al Sur con los municipios de Collana y Comanche, y al Oeste con los municipios de Comanche, San Andrés de Machaca y Laja (GMV 2007).

1 Una ciudad o pueblo conformado por varios *ayllus*.

2 Un reporte de investigación de fines de la década de los cuarenta sobre la finca Ingavi, situada cerca de Viacha, se refería a esta última en los siguientes términos: "Los indígenas de la finca Ingavi, venden o intercambian sus productos en la plaza central del cercano pueblo de Viacha donde hay mercado todos los domingos" (Keller 1950: 47, mi traducción).

Geográficamente Viacha está ubicada en la zona menos productiva de la cuenca del Lago Titicaca, a unos 50 a 60 kilómetros de la parte sur del lago, a una altitud aproximada de 3.850 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación entre las altas montañas de la Cordillera de los Andes influyen en el clima, caracterizado por bajas temperaturas y el riesgo constante de heladas y vientos durante la época de invierno y de granizos en la época de lluvia, con fuertes efectos sobre la producción agropecuaria (Keller 1950).

El 2005, Viacha tenía una población de 51.540 habitantes, con una distribución equitativa de hombres y mujeres. Si bien anteriormente el crecimiento de la población urbana se debía a la migración de trabajadores de las ciudades de Oruro y Potosí atraídos por las industrias y el ferrocarril, desde la década de 1980, la población urbana se nutre de la migración de las comunidades rurales aledañas y otras de la provincia Ingavi. De acuerdo al Censo 2001, el 78% de la población habla castellano, el 2% quechua y el 72% aimara. Un porcentaje significativo de su población (aproximadamente 2.000 personas) está compuesto por personal militar y sus familias asignados a uno de los cinco establecimientos militares asentados en la ciudad³ (Mayta Chipana 2008). El Municipio tiene un índice de bienestar alto y su población se ubica en la categoría de pobreza moderada (Federación de Asociaciones Municipales, FAM 2008).

Un 65% de la población actual de Viacha es urbana. Sin embargo, gran parte de esta población cabalga entre el mundo urbano y rural; es decir a) desarrolla actividades agrícolas de manera directa o indirecta, b) mantiene relaciones sociales, económicas y culturales con sus comunidades de origen, tales como el cumplimiento de cargos, y c) mantiene residencia en la ciudad para acceder a servicios (sociales, educativos y de salud), y los mercados de trabajo urbano y de bienes (Mayta Chipana 2008). Gran parte de la población del Distrito 3, que asciende a un poco más de 17 mil personas, mantiene doble residencia tanto rural como urbana. La población de Viacha desarrolla actividades vinculadas con la agricultura, la industria, el comercio y los servicios.

Relaciones rural-urbanas antes de la Reforma Agraria

Hasta antes de la Reforma Agraria (1953) la base económica de la región de Viacha era principalmente la producción agrícola combi-

3 Primera División del Ejército, las unidades militares: Max Toledo 23 de Infantería, Bolívar 2 de Artillería, Bilbao Ríoja Artillería Anti Aérea RA6 y además la Escuela Militar del Músicos del Ejército.

nada con una producción pecuaria asentada sobre una estructura de tenencia de la tierra dual, comunidades de hacienda y originarias, pautada por el poder de los hacendados. Las relaciones rural-urbanas eran restringidas y se establecían a través del comercio y de la migración campo-ciudad. El comercio estaba principalmente controlado por los hacendados. Los procedimientos de venta eran diversos: 1) al consumidor en la tienda del hacendado en el pueblo de Viacha o La Paz, 2) a comerciantes mayoristas en los mercados Camacho, Rodríguez y Lanza de La Paz, 3) en grandes ferias rurales, y 4) contratos a conventos y cuarteles (Buechler 1983: 113). Para las actividades de comercio se asignaban roles específicos a los colonos de las haciendas tales como: a) *apiri* o transportador, b) *aljiri* o vendedor, 3) *camani* o productor de chuño y d) *pongo* o sirviente. El *apiri* era responsable del transporte de productos de la hacienda a los mercados y el *aljiri* el responsable de la venta de los productos del patrón en la tienda del comerciante mestizo en la ciudad. Este último solía permanecer en la ciudad hasta por seis meses (Buechler 1983: 112-113).

Al lado de este sistema de comercio dominante estaba el comercio de productos agrícolas de los colonos a los intermediarios mestizos en las ferias locales. Si la venta era algo mayor, como por ejemplo de un animal, los colonos vendían sus productos en las ferias de los domingos o en la feria anual del pueblo de Viacha. Sin embargo, el grueso de la producción campesina estaba orientado a la subsistencia y el autoconsumo debido a la limitada producción de las pequeñas parcelas. Los colonos eran también parte del sistema de intercambio de carne, huevos y queso por condimentos, ollas, sal, añelina, coca, ropa, lana y otros. En algunos casos, se permitía a los colonos de las haciendas la venta de sus productos en patios reservados para los mismos en la tienda o dominio del patrón en la ciudad (Buechler 1983: 115).

Asimismo, la migración de los colonos de hacienda y de campesinos de comunidades independientes estuvo vinculada también con el comercio. Antes de 1952 hubo un importante flujo migratorio de las zonas rurales hacia la Paz debido a la presión sobre la tierra y las deplorables condiciones de vida en el campo. Algunos migrantes comenzaron como pequeños vendedores de pan y tostado y otros productos que requerían poco capital o asistencia. Algunas mujeres que tenían una o dos vacas vendían leche de casa en casa. Otros migrantes se familiarizaban con La Paz solo como un punto de paso hacia los Yungas para realizar trabajo temporal para el hacendado,

lo que eventualmente condujo a al comercio y al asentamiento en la ciudad (Buechler 1983: 116).

Al mismo tiempo, algunas personas de comunidades libres muy pobladas complementaban sus ingresos con la venta de coca, charque y añelinas, vinculando tres espacios: La Paz, los Yungas y el altiplano. La migración de las comunidades libres a la ciudad era facilitada por los paisanos (Buechler 1983: 116).

Desarrollo local y relaciones rural-urbanas post Reforma Agraria

Con la Reforma Agraria se inició un proceso de apertura al flujo de circulación de personas, productos y servicios entre el campo, el pueblo y la ciudad. Factores clave en este proceso fueron: la destrucción de la hacienda y el poder de los hacendados, la intensificación de iniciativas de desarrollo en el área rural, la ampliación de servicios sociales y la cercanía de la zona con la ciudad de La Paz.

Esta apertura contribuyó a iniciar dos procesos paralelos e interrelacionados en Viacha. Primero, un paulatino fortalecimiento de lo urbano debido a la migración, el crecimiento industrial y la consolidación de Viacha como centro ferroviario y vial. El proceso migratorio tuvo dos momentos. Antes de la década de 1980, éste era principalmente una migración urbana desde las ciudades de Oruro y Potosí para integrarse con las industrias que paulatinamente se iban asentado en Viacha. Después de las sequías e inundaciones de los años ochenta que afectaron fuertemente al campo, la migración será fundamentalmente de origen rural. Paralelamente, se generó un proceso de transformación productiva rural promovido por proyectos de desarrollo públicos y privados, la cercanía de mercados, el flujo de gente entre el campo y la ciudad y la revalorización de formas de organización social locales. En ambos procesos, la cercanía de la gran urbe de La Paz y luego el área metropolitana La Paz/El Alto tienen una incidencia particular. Dado que nuestra mirada es desde lo rural, en esta parte centramos nuestra atención en la transformación productiva rural.

Iniciativas de desarrollo rural e innovaciones

Desde inicios del siglo XX se implementan en el altiplano diversas y esporádicas iniciativas de desarrollo educativo, salud y apoyo a la producción con el propósito de modernizar la economía, las

costumbres y las formas de organización de los pobladores rurales. Estas iniciativas fueron promovidas por el Estado, la Iglesia católica y protestante, instituciones internacionales y los propios indígenas y campesinos.

A partir de la Reforma Agraria se intensificaron las iniciativas de desarrollo focalizadas en comunidades. A mediados de la década de los setenta, se inicia la implementación de un proyecto de desarrollo rural de alcance regional, el “Proyecto Ingavi”⁴ que consolida un largo y lento proceso de innovación que transforma la base productiva del altiplano desde una economía de reciprocidad, de base agrícola, hacia una economía de mercado de base pecuaria⁵. Los actores de este proceso de innovación productiva y cultural iniciado por el Proyecto Ingavi son principalmente instituciones de desarrollo del gobierno nacional y regional, organizaciones no gubernamentales de Desarrollo (ONG) y cooperación internacional. En este proceso, como acertadamente señalan Carter y Mamani (1982) en una evaluación puntual del impacto de diversas iniciativas de desarrollo en la comunidad de Irpa-Chico (Viacha), los indígenas-campesinos fueron a la vez *víctimas y beneficiarios*. El alcance de esta innovación es adecuadamente capturado en el siguiente testimonio del director de desarrollo rural del municipio de Viacha:

(Antes) no había ganado lechero. Algunos hacían queso, tenían una o dos vacas, una yunta más para el trabajo, ¿para qué más vacas? decían. Entonces el Proyecto Ingavi trae una visión de negocios, la parte de economía. Antes en la cultura aymara se decía que uno era mal visto cuando vendía su producto. ¡Cómo aquella persona se va a desprender de su quinua! Se consideraba mejor la seguridad alimentaria. El Proyecto Ingavi

4 Este proyecto fue resultado de un convenio entre el gobierno militar de Hugo Banzer y el Banco Mundial firmado en marzo de 1976 sobre la base de una propuesta de desarrollo regional elaborada por la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ). En su primera fase (1976-1981) el convenio establecía la inversión de un crédito de 9,5 millones de dólares para un proyecto de desarrollo integral para el altiplano pazeño que contemplaba la construcción de infraestructura, comunicaciones, saneamiento básico y crédito agropecuario. La segunda fase con fondos del gobierno boliviano iba a ser iniciada a inicios de los ochenta, pero quedó trunca debido a conflictos sobre la administración del mismo entre la gente de las comunidades y el gobierno. En sus inicios, tuvo un área de cobertura de 800 kilómetros cuadrados. Uno de sus objetivos centrales era el mejoramiento de los ingresos y de la calidad de vida de los pequeños productores.

5 Un indicador de este cambio es que el 2008 se estimaba que la producción anual de leche en Viacha era de aproximadamente 8 millones de litros.

cambia esa mentalidad, no almacenar solo para comer, sino para vender y ganar dinero. Parecía bien, si tiene dinero, pueden tener salud, comprar cosas y eso entró en la mentalidad de la gente (Clemente Calle 2008).

Las iniciativas de desarrollo en Viacha contribuyen a un proceso de diferenciación productiva y socioeconómica. En lo productivo, se genera un proceso de *transformación y especialización*. Hasta la década de los sesenta, la base económica de la región rural del altiplano era principalmente la producción agrícola y el sistema productivo estaba orientado principalmente al *autoconsumo* con algunos excedentes destinados a nichos de mercado en las ciudades y las minas controlados por los hacendados y la participación de campesinos de comunidades libres y de hacienda en pequeñas ferias locales con intermediarios mestizos. Las iniciativas de desarrollo generan una transformación y especialización de la producción agropecuaria, uno de cuyos ejemplos más evidentes es la Cuenca Lechera del altiplano Norte⁶ en la que aproximadamente cuatro mil familias están vinculadas a la producción y transformación lechera. En el Distrito 3 de Viacha las iniciativas de desarrollo generan una diferenciación entre una zona especializada en la producción lechera y de carne que agrupa alrededor del 50% de las 63 comunidades rurales, y una zona diversificada que agrupa a las restantes comunidades.

En Irpa Chico, el Proyecto Ingavi no intentaba una especialización. Los técnicos dijeron que metieron fertilizantes para papa. Apuntaban a mejorar lo que tenían, pero con el tiempo, el apoyo y la gente misma se orientaron hacia la leche. Dicen: 'ya no siembro papa, prefiero leche y con eso me compro papa' (David NN 2009).

Paralelamente a la diferenciación productiva se ha generado un proceso de *diferenciación económica entre productores*. En la actualidad, entre los productores especializados lecheros de Viacha pueden distinguirse tres categorías: productores grandes, medianos y pequeños, cuya situación puede estar parcialmente vinculada al momento de adopción de la innovación productiva y cultural.

6 La cuenca lechera del altiplano comienza en la provincia Omasuyos, desde Achacachi, pasando por Batallas, Pucarani y Laja; continúa por Ingavi (donde está Viacha) y sigue por Ayo Ayo y Patacamaya, abarcando finalmente parte de la provincia Villarroel.

Ligado a lo anterior, en la interfase rural-urbana se viene generando un proceso de *diferenciación o estratificación social*. Un reciente trabajo de tesis (Mayta Chipana 2008), considerando factores tales como la interfase rural-urbana, la intensidad de actividad económica desarrollada en ambos espacios y la situación socioeconómica de la población, ha estratificado la población en tres categorías: estrato superior, medio e inferior. Los primeros reproducen sus condiciones de vida principalmente en la ciudad, pero mantienen vínculos con el campo; los segundos reproducen sus condiciones de vida entre ambos mundos, y los terceros reproducen sus condiciones de vida en el campo y mantienen vínculos esporádicos con la ciudad. En los tres casos, sin embargo, la gente se mueve entre ambos espacios.

De modo interesante este proceso de estratificación se expresa también a nivel de las mujeres (género). Una de nuestras informantes sugiere que las mujeres de Viacha podrían dividirse en tres estratos.

...hasta ahora hay tres estratos, 1) *qarizas*, 2) las comadres, las cholas que llaman, y 3) nosotras. Las *qarizas* son hijas de patronos, las segundas son comerciantes, y las otras más indígenas, más de comunidad. Las del medio no hacen campo, viven de la ciudad, y las que somos de la comunidad, hacemos ciudad y campo (Martha Gonzales 2009).

Lo novedoso de esta estratificación cruzada por género, sin embargo, es que expresa una diferenciación interétnica entre los propios aymaras. Esta estratificación expresa cambios en la diferenciación cultural que ya no pasa tanto por la distinción blanca-chola, indígena o que en el mejor de los casos tomando la misma como arquetipo, la re-funcionaliza para adecuarla a la dinámica de diferenciación intracultural en marcha. Asimismo, es interesante que en este proceso de diferenciación existe un mayor reconocimiento de lo indígena, pues las antiguas pueblerinas o blancas tienden a autodefinirse como indígenas para poder acceder a ciertos derechos, por ejemplo, cargos en las comunidades.

Del monoculturalismo a la apertura intercultural en el desarrollo rural

Las relaciones interculturales entre instituciones de desarrollo e indígenas y campesinos productores en Viacha han sufrido una

transformación desde los primeros intentos de transformación de la base productiva de la zona e introducción de una economía mercantil a finales de los setenta hasta la actualidad. Esta transformación puede caracterizarse como una apertura intercultural desde una visión de desarrollo monocultural que negaba el valor de lo local hacia un reconocimiento y revalorización del mismo, la cual ha servido para la adopción y aceptación de esta innovación productiva y cultural.

El cambio en las relaciones interculturales entre los actores involucrados en los procesos de desarrollo es un factor importante en el proceso de innovación productiva y cultural que analizamos. Este cambio se ha expresado fundamentalmente en una apertura intercultural tanto de las instituciones promotoras de iniciativas de desarrollo, como de los productores.

Este proceso de innovación se desarrolla en dos etapas. En un primer momento (1976-1995) las iniciativas de desarrollo estuvieron orientadas por una *visión mono-cultural* del desarrollo que privilegiaba la tecnología y el saber occidental sobre el conocimiento y experiencia local, estructurando una gama de relaciones de dependencia e indiferencia de los indígenas-campesinos respecto a las instituciones y actores de desarrollo externos.

Me acuerdo del proyecto Ingavi, me casé el 77, el 78 debió ser. Hemos venido al proyecto Ingavi. Nos ha dado semilla, úrea. Eran los donadores que te daban todo, y tú podías hacer a tu gusto y gana. Lo que nos han traído es como caído del cielo. Regalaban. Puede que la comunidad no se apropia cuando así viene. Al final se fueron porque se les acabó. Eran las ONG. Se ve que reciben mucha plata. Me acuerdo que no hubo cursos de capacitación, talleres, decir 'qué quieren hacer ustedes', controlarnos los abonos, no había administración de ambos lados. Fue como el viento fuerte que llega y desaparece. Luego he visto el PMA, por un peso tenías harina, aceite. Llegaba pollo verdura desmenuzada era para el chanco, no estábamos acostumbrados a la verdura. La harina, la leche, vendíamos la leche al heladero (Martha Gonzales 2009).

Desde mediados de la década de 1990 se inició un lento proceso de *apertura intercultural* de las instituciones de desarrollo y de afirmación de lo propio por parte de los productores locales. Esta apertura se expresa en el surgimiento de la preocupación por el medio ambiente,

los planteamientos agroecológicos que revalorizan el conocimiento, la tecnología, formas de producción y cultura campesina y procesos de descentralización político-administrativos en el Estado boliviano (leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa). Esto da lugar a la configuración de nuevas iniciativas y prácticas de desarrollo⁷ más susceptibles de ser reconocidas y apropiadas por los campesinos.

Después lo que conocí es Irpa Taiqa, Choquenaira, ha hecho infraestructura. Era más objetivo para la comunidad. Podías ver la construcción del muro, era más visible para la comunidad. El otro algunos han aprovechado y otros no (Irpa Taiqa) ha promovido una consciencia en la comunidad de que puede mejorar (Martha Gonzales 2009).

Estas nuevas iniciativas de desarrollo despiertan entre los productores locales un proceso de revalorización y aprecio de su cultura, tecnología, formas de producción y cultivos tradicionales, una condición para la apropiación plena de innovaciones externas. Respecto a esto último, hoy por hoy los productores aymaras muestran con orgullo sus vacas Holstein como expresión de su cosmovisión e identidad (figura 1).



Figura 1: Vaca Holstein

7 Esto no significa, sin embargo, que las instituciones hayan dado un giro completo en sus propósitos modernizadores del agro, sino más bien expresa el desarrollo de una sensibilidad hacia formas de ser y de hacer desarrollo desde la visión indígena y campesina, la cual en lo cotidiano del negocio del desarrollo a veces queda reducida a buenas intenciones dentro del marco de las demandas de sus agencias financiadoras que exigen resultados efectivos en los procesos de intervención en desarrollo. Por otro lado, si bien hay instituciones con apertura intercultural y/o sensibilidad hacia el otro, existen también instituciones que todavía no han desarrollado esta apertura o sensibilidad intercultural, las cuales en muchos lugares son todavía la mayoría.

Esto no es solo propio del altiplano boliviano sino un proceso común en otros contextos, como la apropiación del café en Guatemala o Colombia, o la apropiación de la escuela en el Perú.

En la actualidad (2009), en Viacha y en el altiplano boliviano esta *apertura intercultural* en el ámbito del desarrollo es un proceso en marcha. Cada vez más en diversos ámbitos hay un reconocimiento de *la coexistencia de la lógica del mercado y la reciprocidad* y que futuras alternativas de desarrollo productivo en la zona para ser sostenibles deben necesariamente combinar las mismas.

Para nosotros desarrollo es pasado presente y futuro, si no logramos tocar el tema económico en las comunidades no pasa nada, no solo es economía de mercado ni tampoco de reciprocidad. La economía informal va a seguir siendo de reciprocidad. Aquí necesitamos otro tipo de economía siendo parte de una economía global (Julio Álvarez 2009).

Este reconocimiento de formas locales de desarrollo crea condiciones para el surgimiento de iniciativas productivas colectivas e individuales que comienzan a construir puentes entre la lógica de mercado y de reciprocidad y establecer emprendimientos de desarrollo concretos como las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA), Asociaciones de Productores Lecheros y empresas familiares. Sin embargo, en la actualidad esta combinación de lógicas todavía está atravesada por conflictos como lo expresan las dificultades confrontadas por las OECAS y asociaciones, que contrasta con el éxito de las empresas familiares que parecen haber encontrado un mejor balance entre estas dos lógicas de desarrollo. En conjunto, aunque todavía en proceso de consolidación, esta apertura intercultural al reconocimiento de la necesidad de combinar lógicas productivas contribuye a iniciar un proceso de superación de una práctica y visión de desarrollo monocultural que todavía está muy arraigada en la práctica de muchas instituciones de desarrollo⁸. El desafío de promover iniciativas de desarrollo rural sostenibles en la zona pasa por encontrar formas creativas de combinar estas dos lógicas.

8 De manera un tanto rígida, puede distinguirse entre instituciones de desarrollo con apertura intercultural e instituciones con una visión y práctica de desarrollo monocultural, las cuales probablemente son todavía la mayoría. Entre aquellas instituciones con apertura intercultural, es interesante notar que las mismas están atravesadas por tensiones en su intento de combinar actividades e iniciativas de desarrollo que apuntan a fortalecer la economía de intercambio y aquellas que apuntan a revalorizar y fortalecer la economía de reciprocidad.

En suma, desde los años setenta hasta mediados de los noventa, las iniciativas de desarrollo configuran relaciones interculturales de dependencia de los productores campesinos respecto a los actores e instituciones y visiones de desarrollo exógenas, que no obstante generan la adopción de la innovación entre ciertos sectores, encuentran resistencia o un uso instrumental del mismo por parte de los “beneficiarios”. Luego de los años noventa se inicia un proceso de apertura intercultural hacia la economía de reciprocidad. En la actualidad la combinación de ambas lógicas constituye uno de los desafíos del desarrollo local en la zona.

Cambios y continuidades en las relaciones rural-urbanas

La *cercanía de Viacha con las ciudades de El Alto y La Paz*, separadas por una distancia de aproximadamente 20 kilómetros en proceso de acortamiento por el crecimiento de la mancha urbana de El Alto, posibilita un flujo continuo de personas, productos, mercancías y relaciones entre el campo, la ciudad intermedia de Viacha y las grandes ciudades vecinas. Las redes de producción y comercialización lechera y derivados en las ferias de El Alto y La Paz así como la movilidad de personas entre Viacha y el centro metropolitano son ejemplos patentes de este flujo. El hecho de que esta innovación productiva y cultural se desarrolle en un espacio-territorio cercano a las ciudades es una condición necesaria, pero no suficiente para este cambio, pues en otros casos, y como quizás de hecho ya viene ocurriendo en algunas zonas de Viacha, la cercanía de una zona rural a las ciudades genera otras opciones de desarrollo: la urbanización o la transformación del uso de la tierra agrícola en urbana e industrial.

En el *continuum* rural-urbano se han establecido novedosas *redes sociales y comerciales* que se estructuran alrededor de la producción lechera y que trascienden el espacio-territorio de Viacha. La producción de carne, leche y sus derivados (queso y yogurt) han configurado redes de producción y comercialización que articulan productores locales, empresas privadas y otros actores económicos en las ciudades de La Paz y El Alto. La configuración de estas redes de producción y comercialización fue en parte una respuesta natural del proceso de introducción de relaciones de mercado y la cercanía de mercados en las dos grandes ciudades aledaña, y por otra fue reforzada y/o facilitada o construida sobre la base de redes familiares o de parentesco preexistentes, producto de la movilidad

de la población rural a estas ciudades. Una peculiaridad es que estas redes de producción y comercialización combinan dos lógicas: la lógica de mercado y la lógica de reciprocidad y turno. Ésta, sin embargo, plantea desafíos interesantes. Por ejemplo las asociaciones de productores de leche incorporan mano de obra por turno, lo cual influye en la falta de consistencia en la producción. Por otro lado se reconoce que estas unidades productivas tienen dificultades en la combinación de estas lógicas: “Nos hemos dado cuenta que las OECAS al hacer concesiones tienen cosas insostenibles, ejemplo APROLAC con cien socios como se reparten los dividendos, Pelagio proponía que se vuelva una empresa occidental pero con gestión aymara” (Julio Álvarez 2009).

La intensificación del flujo comercial es facilitada por la cercanía de grandes mercados urbanos en expansión. Un estudio reciente sobre la producción lechera en el altiplano concluye que la producción lechera en el altiplano todavía no ha satisfecho la demanda de leche de la ciudad de El Alto (Morales 2009), conclusión que es reforzada por un técnico de una ONG.

Hemos construido o mejorado 40 queserías. Hasta el 2007 transformar era más atractivo. A partir del 2008 las industrias demandan más leche. Es más atractivo vender leche para el desayuno escolar que transformar. Algunos acopiadores, por ejemplo PANDA, llegan hasta la casa del productor (Antonio Copa 2009).

Las estrategias productivas que articulan campo y ciudad sugieren que un importante grupo de personas ha optado por habitar espacios aparentemente excluyentes, o por cabalgar entre los mundos rural y urbano, como es el caso de la población del Distrito 3. A diferencia de migrantes de zonas rurales alejadas, quienes para establecerse en las ciudades deben en muchos casos relajar o a veces romper sus vínculos con sus zonas de origen, los migrantes de Viacha tienen la posibilidad de convivir en ambos mundos; el mundo rural, con su propia lógica comunitaria, y el mundo urbano, con su lógica más individualista. Más aún, con la mejora en la infraestructura de caminos y servicios de transporte, las jóvenes generaciones tienen, por ejemplo, la posibilidad de acceder a servicios como la educación universitaria que en otra época hubiese implicado un alejamiento o ruptura con su lugar de origen. Esta cercanía y el propio carácter de la cultura aymara han permitido el

establecimiento de redes y relaciones fluidas de parentesco que hacen que la diferenciación urbana-rural permanezca más imbricada en la economía local agraria.

Mi nombre es Martha González Paco. Vivo aquí desde el 77. Me casé en Pacajes, estoy en El Alto y en la comunidad. Cuando yo me casé, llegué de la comunidad a una mina a mis 16 o 20 años. Una vez en el campo mi suegra nos dio semilla y lugar para vivir. Luego había que cuidar lo que se nos dio. Luego de varios años, cuando hubo sequía no había en el campo para sobrevivir, eran los ochenta. En ese trajín llega el Programa Mundial de Alimentos, el ochenta y tres vuelvo a entrar al pueblo. En el campo mi suegra todavía vivía, había que ir a ver el campo. El 2000 ya no hice la chacra, no es para pastear. Siempre hemos vivido en campo y ciudad y nos ha ayudado. El campo es bendito.

Como se ve, esta población aunque migra a la ciudad no rompe sus lazos con el campo y estructura su tiempo y actividades en ambos espacios. Sus ingresos, que son variables, provienen tanto de su actividad productiva en el campo como de un empleo o actividad urbana, principalmente de la venta de sus productos (leche, papa, yogurt, queso), los cuales se equilibran mutuamente. Respecto a la organización del tiempo de los miembros de la familia, el estudio citado de Mayta Chipana comenta: “El padre durante la semana desarrolla alguna actividad en la ciudad y los fines de semana en el campo, la madre trabaja en el campo y atiende un negocio en la ciudad. Los hijos trabajan en el campo” (2009: 29).

En suma, antes de la Reforma Agraria las relaciones rural-urbanas en Viacha eran restringidas y se establecían a través del comercio de productos y bienes de consumo y la migración controlada. Con la Reforma y sobre la base de las innovaciones productivas y culturales previamente descritas se intensifica el flujo comercial y de gente entre lo rural y lo urbano inmediato (el pueblo de Viacha) y la urbe mediata (el área metropolitana La Paz/El Alto). Asimismo, la gente del campo y del pueblo obtiene mayor acceso a bienes de servicio, como salud y educación, y se amplía el flujo para mercados de trabajo. Si bien la producción lechera constituye una novedad en las relaciones rural-urbanas, esta actividad se construye sobre flujos comerciales previamente existentes, los cuales son magnificados por el gran crecimiento urbano.

Relaciones rural-urbanas post Participación Popular

Si bien durante la década de los noventa, a nivel económico productivo continúan los procesos de fortalecimiento territorial y apertura intercultural rural-urbana con procesos de diferenciación social y económica, a mediados de esta década se genera un nuevo escenario que reconfigura las relaciones rural-urbanas en Viacha. La Ley de Participación Popular (LPP) aprobada en 1994 crea, para la población local, vecinos del pueblo, indígenas y campesinos, espacios de participación en instancias de toma de decisión municipales, y pone a disposición de la población recursos económicos para el desarrollo local. Desde entonces, el ámbito municipal se convierte en un espacio nodal en las relaciones rural-urbanas y la promoción del desarrollo local, caracterizado por la tensión conflicto-colaboración y la negación-apertura intercultural.

Desde mediados de la década de 1990, las relaciones rural-urbanas en el ámbito municipal atraviesan por dos momentos claramente definidos: 1) un periodo de abierto conflicto (1995-2005) y 2) un periodo de colaboración (2005 hasta la actualidad), los cuales se describen a continuación. Sin embargo, es importante indicar que conflicto y colaboración describen tendencias generales, pues en la práctica, ambos elementos están continuamente presentes con diferente intensidad en las relaciones rural-urbanas.

Conflictos rurales-urbanos

Desde la aprobación de la LPP, las relaciones rural-urbanas en Viacha están atravesadas por múltiples tensiones y conflictos, algunas de las cuales se describen a continuación.

a) Tensión territorial

Con la LPP, Viacha emerge como un municipio de una gran extensión territorial (4.380,33 km²) compuesto por siete distritos municipales. Sus límites se extendían desde las puertas de la metrópoli La Paz/El Alto hasta la frontera con el Perú. Los siete distritos de inicio fueron:

- Los distritos 1 y 2, que conforman la ciudad de Viacha.
- El distrito 7, sobre el borde del camino asfaltado hacia la ciudad de El Alto.
- El distrito 3, de carácter rural, compuesto por 7 subcentrales y 58 comunidades en los alrededores de la ciudad de Viacha.

- El distrito 4, conformado por el *ayllu* de Jesús de Machaca, el cual comprende 18 subcentrales y 61 comunidades.
- El distrito 5, constituido por el *ayllu* de San Andrés de Machaca, el cual comprende 10 subcentrales y 53 comunidades, y
- El distrito 6, constituido por el *ayllu* Parcial Arriba, el cual comprende seis subcentrales y 19 comunidades (Blanes 2000: 28).

Sin embargo, como municipio, Viacha fue una construcción territorial forzada construida de arriba hacia abajo, que agrupó poblaciones social y culturalmente diversas: comunidades originarias, sindicatos campesinos y poblaciones urbanas. Jesús de Machaca mantenía relaciones más fluidas con las ciudades de El Alto y La Paz que con Viacha, lo que le permitía agenciar iniciativas de desarrollo con instituciones públicas y privadas. Después de la LPP, este distrito se vio forzado a establecer relaciones con la ciudad de Viacha para obtener recursos de coparticipación para sus proyectos de desarrollo. Asimismo, los pobladores del distrito de San Andrés de Machaca, debido a la distancia, confrontaban grandes dificultades de llegar hasta la ciudad de Viacha para realizar trámites y solicitudes.

La diferencia poblacional, la distancia y las disputas por la asignación de recursos de coparticipación, contribuyeron a que desde los inicios de la LPP los distritos más rurales de Viacha, liderados por Jesús de Machaca, se plantearan el desafío de constituirse en secciones municipales independientes, lo cual se dio el año 2004.

Esta redistribritalización del municipio de Viacha ilustra un proceso de reconstrucción territorial desde abajo y reconfigura las relaciones rural-urbanas del municipio. Desde entonces, la dinámica rural-urbana en Viacha se dará en función de las relaciones entre el distrito 3, compuesto por organizaciones sindicales y los distritos 1, 2, y 7, que conforman el centro poblado de Viacha y la conurbación con El Alto.

b) Conflicto campo-pueblo

Con la implementación de la LPP en Viacha, se reactiva una secular tensión entre los habitantes del pueblo, a quienes se conoce como “vecinos” y los habitantes del campo, indígenas y campesinos. Si bien esta tensión tiene bases sociales, históricas y culturales de larga data, la LPP pone en escena dos nuevos elementos, 1) la pugna

por el control y asignación de recursos de coparticipación para proyectos de desarrollo en las comunidades, y 2) la pugna por el control de la instancia municipal de toma de decisiones. Aquí brevemente nos referimos al primer elemento y en la siguiente sección al segundo.

La pugna por el control de recursos económicos se expresa fundamentalmente en la distribución de los mismos para proyectos en las comunidades. Desde el inicio, y ésta es una tendencia general también en otros municipios, la distribución fue inequitativa, con mayores recursos asignados a la ciudad de Viacha y comunidades de alrededor, y menores recursos para las comunidades rurales sobre todo las más alejadas. Esto, como se indicó anteriormente, fue una causa central para el proceso de redistribución del municipio. Sin embargo, es interesante que tanto vecinos como indígenas y campesinos se quejaban de una insuficiente asignación de recursos. En el fondo, esta tensión expresa prioridades y visiones distintas de desarrollo: un desarrollo modernizador de las ciudades y un desarrollo rural de las comunidades rurales con énfasis en lo productivo.

El conflicto campo-pueblo, que en parte se generó alrededor de la distribución de recursos y la definición de prioridades de desarrollo, tuvo dos consecuencias interesantes. Por un lado, despertó viejas prácticas de discriminación étnica de los “vecinos” respecto de los indígenas y campesinos. Por otro, debilitó la solidaridad aymara generando competencias intracomunales por acceso a recursos. Respecto a esto, Blanes concluye que “para captar recursos en mejores condiciones, las OC tienden incluso a quebrar vínculos de solidaridad entre las organizaciones originarias, como parece ser el caso del sector Machaqa” (Blanes 2000: 54).

c) Sistemas de toma de decisiones

El proceso de participación social generado por la LPP abre también otro escenario de tensión rural-urbana expresada en la tensión entre dos sistemas de toma de decisiones: el sistema de toma de decisiones “natural” de las comunidades rurales y el sistema de toma de decisiones “formal”, de cuño estatal y urbano, ahora descentralizado.

Históricamente, y sobre todo desde la Reforma Agraria, el sistema de toma de decisiones natural estableció una doble relación con el sistema de toma de decisiones estatal central. Por un lado, se enroló en las redes de clientelismo (construidas por el Estado del 52 a través de los comandos del MNR y los caciques de las organizaciones sindicales) para obtener algunas ventajas. Por otro,

intentó mantener una autonomía propia a través de sus organizaciones originarias.

Con la LPP el Estado descentralizó funciones y recursos, generando un escenario para la participación local, a través de las propias organizaciones en la toma de decisiones. No obstante esta promesa, en la práctica, la instancia de decisión municipal se convierte en un espacio de disputa de los partidos políticos, en muchos casos instrumentalizados desde centros urbanos como la ciudad de La Paz. De modo que una tendencia central en la política local de los municipios reproduce las lógicas clientelares y subordinantes de lo urbano respecto a lo rural.

Como producto de un proceso de revalorización de sus propias formas organizativas a finales de la década de los noventa, las comunidades rurales fortalecen el sistema de toma de decisiones “natural”. Si bien durante gran parte de la post Reforma Agraria, las organizaciones sociales rurales funcionan bajo el denominativo de sindicatos, durante la década de los noventa se inicia un proceso de recuperación de la estructura originaria para establecer una congruencia entre su lógica de funcionamiento y su denominación. Como resultado, a partir del año 1999 los representantes comunales, intercomunales y municipales reciben el denominativo de mallkus.

Los encuentros entre el sistema natural y formal de toma de decisiones generan conflictos que expresan la tensión general rural-urbana. Por ejemplo, justo después de la aprobación de la LPP (1995-1998) el alcalde de Viacha era un aymara (Edwin Callisaya) que había sido elegido como candidato de un partido político (Unidad Cívica Solidaridad). Asimismo, se nombra como subalcalde al Jilir Mallku de Jesús de Machaca. Pero pronto, éste entra en conflicto con el alcalde porque, como mallku, no podía someterse al alcalde. Este evento expresa la difícil convivencia entre sistemas normativos diferentes, así como la estructuración de relaciones de “subordinación de las organizaciones sociales a los gobiernos municipales —y, por tanto, a los partidos— que amenaza seriamente a la identidad de estas organizaciones” (Blanes 2000: 8).

Una de las causas importantes de entre las varias que explican los conflictos antes descritos es la poca capacidad de responder al desafío intercultural en el ámbito municipal, desafío que en el ámbito económico-productivo ya estaba siendo respondido durante el mismo periodo en forma de apertura. En cierto modo, este periodo de conflicto en el municipio de Viacha podría equipararse al periodo monocultural de las iniciativas de desarrollo (1976-1990). Sin embargo, a partir del año

2005 se avizoran indicios de colaboración rural-urbana en el municipio de Viacha, aspecto al cual volcamos nuestra atención a continuación.

Colaboración rural-urbana

Si bien en la actualidad persisten varias tensiones como las descritas en el anterior punto, a partir del 2005 se evidencia el inicio de un periodo de encuentro y colaboración rural-urbana en el ámbito municipal de Viacha. Una característica central de este periodo emergente es que se comienza a asumir el reto de responder al desafío intercultural en el plano de la toma de decisiones orientado a la búsqueda de un desarrollo local que integre los intereses rurales y urbanos. Para ilustrar esta tendencia emergente, en esta sección se describen ejemplos relativos al nivel de la toma de decisiones y la vida cotidiana.

a) Encuentro rural-urbano en la toma de decisiones

Después de la redistribución del municipio, que concluye con la conformación de tres nuevos municipios el 2005, la dinámica rural-urbana en Viacha adquiere una nueva connotación: una tendencia hacia la colaboración, la cual no implica la ausencia de conflictos. La antigua dinámica rural-urbana que se daba principalmente entre los distritos rurales alejados como Jesús de Machaqa y San Andrés de Machaqa en tensión con la zona urbana de Viacha y su entorno rural inmediato, adquiere una nueva dinámica, ya que el Distrito 3 de Viacha y sus organizaciones campesinas sindicales asumen un rol más activo en el polo rural en relación a la parte urbana de Viacha.

Un ejemplo palpable de la tendencia a la colaboración y/o coexistencia de los sistemas de toma de decisiones “natural” y “formal” es el hecho de que, desde el año 2005, el distrito rural de Viacha (distrito 3) elige a su propio subalcalde siguiendo la normativa originaria del *muyu* o *thaki* (rotación)⁹, aunque formalmente la elección del subalcalde es atribución del alcalde.

Nosotros, las 63 comunidades hemos elegido, hemos llegado a un acuerdo de que la comunidad Batalla de Ingavi va manejar

9 En realidad, esto fue resultado del conflicto de ingobernabilidad del año 2004 suscitado a raíz de malos manejos administrativos que condujo a la destitución de la alcaldesa. Como resultado, Viacha tenía dos alcaldes, uno apoyado por los distritos urbanos 1 y 2 (Eulogio Poma) y otro apoyado por los campesinos del distrito 3 (Isabel Tapia). El conflicto se resolvió con la intervención del Ministerio de Participación Popular que hizo un acuerdo con los representantes de los siete distritos para descentralizar el presupuesto de coparticipación tributaria y designar subalcaldes en cada uno de los distritos, dejando acéfala la alcaldía hasta las siguientes elecciones municipales.

dos gestiones. Al año, el hermano Sixto cambiaría y va a entrar Batalla de Ingavi. Por subcentral está girando, el muyu debe ser de las nueve subcentrales (Desiderio Aquino, Jilir Mallku de la Central Agraria de Viacha).

Otra indicación de esta coexistencia colaborativa con apertura intercultural de los sistemas natural y formal de toma de decisiones es el hecho de que desde la gestión 2008, algunas instancias municipales de Viacha (como la Secretaría de Desarrollo Rural) se han movido a la sede de la Central Agraria del Distrito 3 donde funciona la subalcaldía, lo cual está permitiendo una mejor relación entre el sector rural y el Gobierno Municipal. Finalmente, otra indicación de la colaboración rural-urbana es la conformación de espacios municipales de convergencia rural-urbana, como el Consejo de Desarrollo Local (CODEL) y la definición de políticas municipales como las políticas de sanidad animal y vegetal, en la que los sectores rurales a través de sus organizaciones tienen una participación activa y decisoria.

La colaboración entre el sistema natural y formal de toma de decisiones en Viacha sugiere el surgimiento de espacios interculturales de toma de decisiones, tanto a nivel local, municipal e inclusive provincial, donde convergen elementos de ambos sistemas (figura 2).

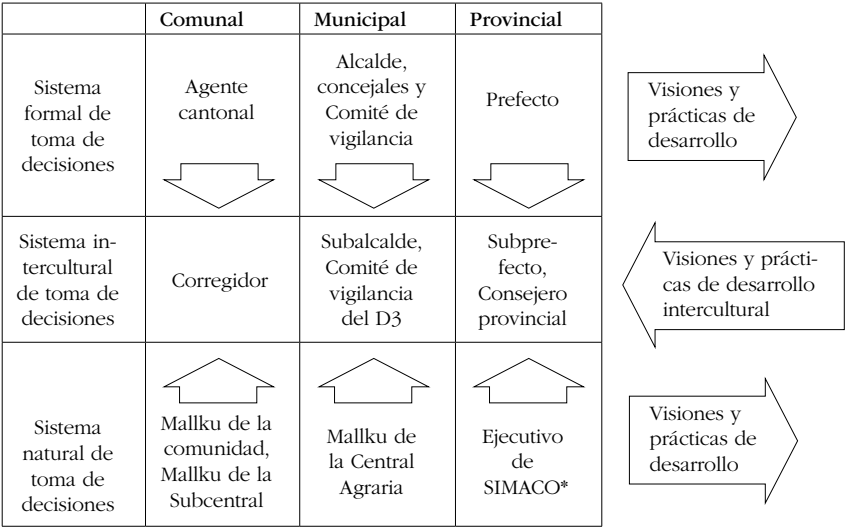


Figura 2: Emergencia de un sistema intercultural de toma de decisiones
* Suyu Ingavi de Marcas, Ayllus y Comunidades Originarias
Fuente: Elaboración propia.

La convergencia entre estos dos sistemas de toma de decisiones en el periodo de colaboración sugiere el surgimiento todavía incipiente de un sistema de toma de decisiones complementario, base para la construcción de una visión y práctica de desarrollo local inclusivo e intercultural. Anteriormente, estos sistemas de toma de decisiones transcurrían en sus propios ámbitos (lo rural y lo urbano) y con sus propios ritmos. La LPP abre un espacio para la interrelación entre los mismos, que genera conflictos y encuentros. Los factores que contribuyeron a esta convergencia son un control social más efectivo que cuida por la transparencia de la gestión municipal, el cumplimiento de la Ley, la inclusión de representantes indígenas en el gobierno municipal y de profesionales indígenas, la designación del subalcalde indígena (donde juega un rol fundamental la central agraria) y una planificación participativa para la distribución de los recursos.

La coexistencia entre los dos sistemas de toma de decisión es resultado de la reducción territorial del municipio, que ha permitido una mejor coordinación entre los actores rurales y urbanos en la elaboración del Plan Operativo Anual, la construcción de propuestas de desarrollo y el manejo de recursos. La separación como municipios autónomos de los anteriores distritos rurales dejó una unidad territorial más viable y manejable en su administración.

b) Encuentro rural-urbano en la vida cotidiana

Más allá del ámbito de toma de decisiones en Viacha, desde décadas atrás se viene generando interfases rural-urbanas a nivel de la vida cotidiana, que evidencia encuentros entre ambos ámbitos. Desde la década de 1980 y con mayor intensidad en los últimos años, un grueso de la población de este municipio vive cabalgando entre lo rural y lo urbano, es decir, reproduciendo su forma de vida tanto en el campo como en la ciudad.

Otro elemento saliente es que debido a su cercanía con las ciudades de El Alto y La Paz, Viacha se ha constituido en una ciudad dormitorio tanto para la población que desarrolla actividades en su entorno rural, como para aquellos que desarrollan actividades o acceden a servicios en el entorno urbano metropolitano. El rol de la gran urbe es particularmente saliente para los pobladores rurales de Viacha en su relación con la gente de la pequeña ciudad de Viacha, en el sentido de que en lugar de ver como referente a la gente del pueblo, los pobladores rurales ven como referente a las grandes ciudades, y este conocimiento y experiencia permite a los mismos reposicionarse en relación al pueblo. Es decir, lo urbano cercano y más

grande sirve como un elemento de legitimación de sus intereses y de deslegitimación de los intereses de la gente del pueblo. Esto ocurre porque los pobladores tanto de la zona rural como urbana de Viacha ven como referentes a las dos urbes vecinas.

Conclusiones y aperturas

Para finalizar con este capítulo se esbozan algunas conclusiones y se plantean algunas aperturas.

Conclusiones

- a) El desarrollo económico productivo en la región central del altiplano antes de 1976 era intracultural. Las iniciativas de desarrollo promovidas desde fines de esta década promueven un modelo de desarrollo monocultural introduciendo innovaciones productivas (ganadería) y culturales (economía de mercado) que destruttura o invisibiliza el desarrollo intracultural previo estructurando relaciones interculturales negativas. A mediados de los noventa se inicia un proceso de apertura intercultural que pone en diálogo y acerca tanto la lógica de mercado como de intercambio que da un nuevo impulso a las iniciativas de desarrollo. El desafío de un desarrollo rural sostenible en la zona de Viacha pasa por encontrar formas creativas de combinar estas dos lógicas o la construcción de un desarrollo rural local intercultural.
- b) En el plano de la toma de decisiones políticas, tomando como escenario el proceso de participación social generado a partir de la implementación de la LPP, describimos el desencuentro a nivel municipal entre dos sistemas de toma de decisiones: el sistema “natural” correspondiente a las comunidades rurales y el sistema “formal” de cuño estatal y urbano, y el surgimiento todavía incipiente de un sistema de toma de decisiones complementario, base para la construcción de una visión y práctica de desarrollo local inclusivo e intercultural.
- c) Esta experiencia muestra que venga de donde venga una innovación, la misma es apropiada cuando apela a los referentes, conocimientos y experiencias productivas y organizativas que tienen una base cultural. En este sentido, se puede decir que *innovación* y *transferencia* es el lenguaje de los agentes exógenos y que apropiación es el resultado que tenemos que ver. La *apropiación* es una combinación creativa de lo que llega de fuera y lo que surge desde adentro. Y esto es interculturalidad. La experiencia de Via-

cha de combinar lógicas económicas modernas e indígenas, así como formas de organización formales y naturales son expresiones de la configuración de escenarios de *modernidad indígenas*.

- d) A la luz de lo anterior, es necesario plantearse cuáles son las tendencias de la interculturalidad rural-urbana. La resistencia rural a la penetración urbana, la penetración urbana de lo rural o un escenario alternativo. Si bien las dos primeras tendencias son plausibles, me parece que hay indicios interesantes de la tendencia alternativa, la combinación de lógicas productivas y de toma de decisiones, lo cual obviamente hay que comprenderlo en contexto. Por ejemplo, la transformación productiva de la economía de esta zona ha introducido nuevos valores (individuo, mercado) sobre una estructura económico-cultural basada en la reciprocidad. Como consecuencia, se evidencia que el desafío, tanto en el ámbito económico, como de toma de decisiones e inclusive simbólico, es como unir estas dos lógicas y creo que tanto los actores económicos como políticos tienen claro este desafío. Claro está que, en el proceso, el desafío no es solo lidiar con las tensiones locales, sino también con las posibilidades y las limitaciones de los marcos normativos estatales existentes y emergentes (por ejemplo, los establecidos por la nueva Constitución Política del Estado), así como por las articulaciones de lo local con lo global, para combinar estas lógicas.

Aperturas

- a) Si bien los abordajes de las relaciones rural-urbanas plantean la necesidad de ver las mismas en términos no dicotómicos, sino complementarios, por lo general, se concluye que en último término hay una relación de subordinación de lo rural hacia lo urbano que fortalece la hipótesis de penetración de lo rural por parte de lo urbano. En el caso concreto de Viacha esto se expresaría, por ejemplo, en la afirmación de que El Alto amenaza con comerse las zonas rurales de su entorno. Sin embargo, este artículo sugiere algunos indicios de una hipótesis alternativa: la apropiación rural de lo urbano como parte de un proceso histórico más general de reapropiación de su territorio ancestral conformado tanto por espacios rurales como urbanos. A diferencia de otros contextos, los pobladores rurales de Viacha tienen una capacidad (sustentada en su cultura y formas de organización) de resistir, de adaptarse y de adaptar elementos provenientes de las distintas modernidades urbanas. Elementos de la modernidad de la Reforma Agraria, expresada en las iniciativas de desarrollo (por ejemplo la producción

lechera) fueron adaptados y apropiados como parte de su propia cosmovisión. Sin embargo, este proceso de apropiación de la economía de mercado se dio en convivencia con la economía de reciprocidad, lógicas que actualmente conviven de manera dinámica, por ejemplo, en sus emprendimientos productivos. De igual modo, el surgimiento todavía incipiente de un sistema de toma de decisiones intercultural a nivel municipal hecho de elementos de un sistema “natural” y “formal” es otro indicador sugerente de este proceso de apropiación rural de lo urbano, en este caso estatal.

- b) Esta hipótesis alternativa de las relaciones rural-urbanas proporciona indicios para repensar las categorías de urbano, rural, campo, ciudad. Sin pretender demasiada precisión, porque esto escapa a los propósitos de este trabajo, sugiero reasumir las categorías de lo urbano y lo rural como *modos de vida* típicos con características peculiares a ser definidas histórica y contextualmente. Estos modos de vida están imbricados en la vida de los sujetos y podrían pensarse como matrices ordenadoras. Es decir que si bien en la actualidad la vida de las personas tiene elementos de ambos modos de vida, algunos tienen una matriz más urbana y otros más rural. Asimismo, es posible diferenciar variantes en estas matrices en función de factores históricos y culturales. Paralelo a esto creo necesario precisar las nociones de campo y ciudad, las cuales me parece se refieren más a espacios o territorios que contienen individuos y grupos con mezclas de modos de vida urbanos y rurales. La concepción de lo urbano como modo de vida no es nueva, ésta fue planteada a inicios del siglo XX por la así denominada Escuela de Chicago de sociología urbana norteamericana, que ponía un fuerte énfasis en la dimensión cultural. En el altiplano de Bolivia, dada la fuerte imbricación de lo cultural en la totalidad de vida social, el abordaje de las relaciones rural-urbanas con énfasis en lo cultural podría proporcionar pistas interesantes para su comprensión. La imbricación de la economía de mercado y de reciprocidad no es más que un ejemplo patente de esta situación.

Bibliografía

- Arce, Alberto y Andrés Uzeda (editores) (1999) *Desarrollo y nueva ruralidad en Bolivia*, PROMEC, Cochabamba.
- Ávila Sánchez, Héctor (coordinador) (2005) *Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?*, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, México.

- Blanes, José (2000) *Mallkus y Alcaldes: La Ley de Participación Popular en Comunidades Rurales del Altiplano Paceño*, PIEB-CEBEM, La Paz.
- Buechler, Judith-María (1983) "Trade and Market in Bolivia before 1953: An Ethnologist in the garden of Ethnohistory" en *Ethnohistory*, Vol. 30(2): 107-119.
- Carter, William y Mauricio Mamani (1982) *Irpa Chico: Individuo y comunidad en la cultura aymara*, La Juventud, La Paz.
- FAM (2008) "Fichas Municipales: Viacha" (<http://fichas.enlared.org.bo/fichas.asp?id=20801>, accedido el 8 de enero de 2008).
- Gobierno Municipal de Viacha (2007) *Plan de Desarrollo Municipal. Viacha: Gobierno Municipal de Viacha*, Gobierno Municipal de Viacha, Viacha.
- Keller, Frank (1950) "Finca Ingavi: A Medieval Survival on the Bolivian Altiplano" en *Economic Geography*, Vol. 26 (1): 27-50.
- Mayta Chipana, Favio Franklin (2008) "La Estratificación Social en la relación del campo y la ciudad en Viacha", tesis para optar al grado de licenciatura en sociología, UMSA, La Paz.

Desplazamientos urbanos

Modernidad e indigenismo de las mujeres del comercio informal en Cochabamba

Isabel Scarborough¹

Introducción: Alta Modernidad y marginalidad urbana

El mundo atraviesa una era de urbanización sin precedentes. Regiones y países que se definían por una población mayormente rural dedicada a la agricultura se han visto, en el lapso de pocas décadas, transformados en naciones cuya abrumadora mayoría reside en las ciudades. En los discursos que circulan raudos gracias al más reciente proceso de globalización, las grandes urbes y sus habitantes son considerados desde el punto de vista de una ideología de alta modernidad (*high-modernist ideology*), así denominada por el antropólogo James Scott (1998: 4). Esta doctrina tiene sus orígenes en la era de avances industriales y científicos de la primera mitad del siglo XX. Sus practicantes, entre los que se encuentran ingenieros, científicos, arquitectos y técnicos, entre otros, vislumbraban a la ciudad regimendada y regulada geométricamente como un centro donde sus habitantes llevaban vidas igualmente ordenadas y productivas. El entusiasmo y genio contagioso de Le Corbusier es el ejemplo que utiliza Scott para ilustrar este movimiento ideológico, una corriente que tuvo gran influencia en toda América Latina.

1 Agradecimientos: la investigación de trabajo de campo en la que recabé los datos que analizo en el presente artículo fue generosamente financiada por una beca para la investigación de la Fundación Wenner-Gren, así como por una beca "Fulbright-Hays Doctoral Dissertation Research Abroad" del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Agradezco de manera especial las sugerencias de mis colegas en el Taller de Disertación Doctoral de la Universidad de Illinois en Urbana quienes leyeron una versión anterior de este ensayo, así como los comentarios y la paciencia de Nelson Antequera y Cristina Cielo. Por supuesto, agradezco también a las mujeres del comercio informal en Cochabamba, quienes generosamente compartieron su conocimiento y experiencias conmigo. Cualquier error u omisión en este texto es de mi entera responsabilidad.

Estas ideas globalizadas de modernización han influenciado en los procesos de aculturación y progreso en el imaginario nacional boliviano, lo que a su vez se refleja en la historia de planificación urbana de las ciudades de Bolivia, impuesta desde las municipalidades. En Cochabamba, las ideas de alta modernidad fueron plasmadas por consultores contratados por su alcaldía a lo largo del último siglo — que contaban con arquitectos de la talla de José G. Prada y Franklin Anaya, entre otros— para transformar la urbe de estrechas calles coloniales desde una visión de modernidad, civilización y progreso (Goldstein 2004). La preocupación por la planificación y la estética de la ciudad jugó un papel preponderante en las campañas y gestiones de la mayoría de los burgomaestres de las últimas seis décadas y continúa hoy en las constantes referencias a un progreso y a una modernidad dirigidos a todos los cochabambinos. Esta corriente ideológica generó una serie de prácticas de exclusión en las urbes bolivianas del siglo pasado que contribuyeron a mantener la jerarquía social y afectaron la conformación de las ciudades al dividir a los grupos sociales por barrios y zonas. En esta visión, los barrios residenciales se ven claramente diferenciados de las zonas de comercio y servicios, lo cual a su vez facilita e impone la limpieza de la ciudad ya que la ideología de higiene que se relaciona con la ascendencia de las clases privilegiadas se traduce en la apariencia de los espacios públicos (Stephenson 1999). Esta utopía de una ciudad estructurada y aséptica se ha relacionado con otra doctrina de igual fuerza y largo aliento, en la que el indígena, considerado sin educación y retrógrado, se relaciona con el área rural, y las urbes son consideradas como centros de civilización, conocimiento y modernismo, así como espacios que cobijan a lo no indígena (Larson 2003).

Estas divisiones étnicas y sociales sobreimpuestas en el plano urbano resistieron los embates de varias olas de migrantes rurales indígenas hacia las ciudades bolivianas que desafiaron tanto la infraestructura y recursos urbanos como la noción de una urbe no indígena. Este proceso comenzó poco después de la Revolución Nacional de 1952 y llegó a su cúspide durante la reestructuración económica neoliberal de las décadas de 1980 y 1990. La ciudad de Cochabamba sufrió una explosión demográfica en estas dos décadas escalando de 80 mil a 900 mil habitantes con el influjo de migrantes debido a la relocalización de los trabajadores en la industria minera, al cierre y privatización de empresas estatales y a la promesa de un mejor nivel de vida para las empobrecidas zonas rurales (Gustafson 2009; Blanes 2007). Este cambio en la composición de la ciudad resultó en

esfuerzos renovados por parte del gobierno municipal para combatir el desorden generado por la llegada de habitantes que no cabían en la definición de alta modernidad al que hago mención al principio de este ensayo. Sin embargo, a medida que crecía la migración campo-ciudad, el mantener la visión quimérica de una ciudad ordenada en términos de planificación urbana y de una población educada y conforme a las doctrinas del urbanismo se volvió cada vez más difícil.

Una de las estrategias que ya sea consciente o inconscientemente utilizan los gobiernos ciudadanos para lidiar con el problema de explosión demográfica y la contradicción de una mayoría urbana *indígena* ha sido relegar a los grupos de migrantes rurales a la periferia donde se convierten en parte de una masa invisible y difusa que habita los llamados “barrios marginales.” Estos espacios se manifiestan como extensiones en blanco en la mayoría de los mapas oficiales y turísticos y se caracterizan por cobijar a migrantes recientes de escasos recursos económicos (Gordillo 2005), la mayoría de los cuales se encuentra en la economía informal donde genera ingresos inseguros y limitados. En las siguientes páginas me propongo analizar el tema de la construcción de la modernidad desde la urbe boliviana de Cochabamba a través de un grupo de mujeres comerciantes informales establecidas ya por varias generaciones en esta ciudad, en base a datos recabados en una investigación etnográfica de dieciocho meses que ha documentando las experiencias vividas por este grupo. El momento histórico por el que atraviesa Bolivia en las primeras décadas del siglo XXI comprende la adopción de una nueva ideología de valoración de las tradiciones andinas que se traduce en el nacionalismo indigenista del actual partido de gobierno el cual, a primera vista, niega los ideales de alta modernidad. La pregunta en torno a la cual gira este ensayo, que espero se responderá a la conclusión del mismo, es hasta qué punto las ideologías de modernismo y exclusión de lo indígena continúan vigentes en Cochabamba en vista de las experiencias de los sujetos en los márgenes.

El estudio de caso presentado por el grupo de mujeres de extracción indígena del comercio informal de este trabajo es ideal para el análisis de las ideologías de valorización o depreciación urbanas actuales debido a la triple marginalización de la que son objeto estas vendedoras. Dada su identidad étnica y de género, pertenecen a un grupo con una larga tradición de exclusión (De la Cadena 1995). Por otro lado, la economía informal tiene una historia de discriminación en relación al mercado y los negocios formales (Seligmann 1989). Utilizando como eje analítico el tema del contraste entre el centro y los márgenes, en términos de espacios centrales y periféricos en la urbe de Cochabamba y de

las luchas de poder entre el centro y los extremos, el presente ensayo se divide en tres secciones. En la primera, trazo el contexto de los espacios urbanos centrales y periféricos, y la toma simbólica de las mujeres comerciantes del centro de poder que representa la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, incluyendo su papel en los movimientos sociales y sindicales que reclaman sus derechos ciudadanos al aparato gubernamental. La segunda sección describe cómo estas mujeres movilizan y transforman el espacio central comercial que es el gran mercado al aire libre denominado La Cancha, al punto que se puede decir que diseñan la faz urbana. La tercera y última sección vuelve al uso estratégico de la movilización de ideologías neoliberales e indigenistas y cómo éstas afectan la negociación de identidades de estas mujeres, complicando el posicionamiento de las comerciantes en relación al centro. Finalmente, utilizo la analogía de los *desplazamientos* de estas mujeres a través de todo el ensayo ya que discuto su movilidad para trasladarse entre identidades étnicas y sociales, su trayectoria histórica política y sus estrategias para movilizar sus propias ideologías.

Descansos y desplazamientos por la plaza

En Bolivia, el sindicalismo y su rol como eje articulador de mecanismos de resistencia y protesta política es un tema apasionante que explica cómo se fueron ganando los derechos de ciudadanía para sus miembros a lo largo del siglo XX. Estos grupos representaban la fuerza laboral de la mayoría indígena nacional en una historia fascinante en la cual no podemos ahondar en este breve ensayo. Gracias a estos movimientos de base, comerciantes y fabriles conformaron sindicatos locales y se unieron a un movimiento global laboral que dio legitimidad a la lucha de la clase mestiza urbana para ser aceptada como ciudadanos de clase trabajadora, con todos los derechos y privilegios que acompañaban este estatus (Ardaya 1992; Lagos 2006). Las mujeres del comercio informal en la zona andina de Bolivia tuvieron una participación sindical notable y consideraban sus acciones como parte de la lucha trabajadora. Sin embargo, su vestimenta y un menor acceso a la educación hicieron que sus compañeros hombres marcaban étnicamente a estas mujeres, por lo que la identidad sindicalista no logró borrar su identidad indígena de la misma manera que la identidad fabril se impuso sobre las demás identidades en los hombres (Lehm y Rivera 1988; Medinacelli 1989).

Esta situación ambigua donde los indígenas se incorporaban a las ciudades bolivianas resultó en la creación de una nueva categoría de

clase dentro de límites sociales establecidos. En base a las ideas de Pierre Bourdieu (1985: 728) sobre clases sociales, no como entidades rígidas y concretadas, sino como diversas, construidas socialmente y en un constante estado de cambio, los estudios sobre los sindicatos de comerciantes informales demuestran que los mismos transformaron y adaptaron la definición de clase media trabajadora en las ciudades bolivianas para incluir a trabajadores por cuenta propia tales como artesanos, trabajadoras del hogar y las mujeres del mercado. En Bolivia, y en Cochabamba en particular, surge con esta población una nueva clase mestiza o chola que representaba la contradicción de habitar en la zona urbana y ser al mismo tiempo indígena. En las páginas que siguen, describo cómo se relacionan las cholas del mercado informal de Cochabamba con los espacios, al centro y en los márgenes de esta ciudad.

Cochabamba, al igual que muchas otras urbes latinoamericanas, cuenta con un espacio central simbólico e histórico que es su Plaza de Armas, que se contrasta con el núcleo donde se agrupan las poblaciones marginadas, que es el inmenso mercado al aire libre de la ciudad, La Cancha. A pesar de los obvios contrastes que representan, la plaza y La Cancha también se complementan resaltando sus diferencias a través de las experiencias de los ciudadanos que se desplazan entre ambos espacios. Las mujeres del comercio informal llevan a cabo un sinnúmero de recorridos entre sus puestos de venta y las oficinas de gobierno en el centro de la ciudad en el transcurso de su rutina. Su diario ir y venir entre el mercado y la plaza principal tiene como fin la ejecución de transacciones económicas, actividades de recreo y descanso o para la protesta y reclamo de derechos.

La importancia de la plaza radica en que simboliza el poder de gobierno de la ciudad y el departamento, un ámbito donde reinan las instituciones de la banca y de la iglesia. Las galerías de la plaza en Cochabamba son un mudo recordatorio de las raíces coloniales de la ciudad y de una época de poderío indiscutido simbolizada por los edificios de la Prefectura, la Alcaldía y la Catedral, demostrando su capital emblemático. Esta situación se replica en la mayor parte de América Latina donde el simbolismo político de la plaza la identifica como un espacio público prominente, con una larga tradición como el centro cultural de la ciudad. Es por ello que los ciudadanos batallan por apoderarse de las plazas, aunque sea nada más por un momento. De hecho, a pesar de que muchas de las plazas de las ciudades de Latinoamérica ya no se encuentran en el mismo centro comercial, cultural o económico, continúan ocupando un lugar importante en

el imaginario de los habitantes de esas urbes y por tanto continúan también representando una autoridad importante (Low 2000: 35).

Debido a esta preponderancia, las cholas de los mercados participan hoy en varias tomas simbólicas de la plaza en Cochabamba. Siguiendo a las mujeres comerciantes cholas en sus recorridos a través de este ámbito, pude observar dos tipos de actividades de conquista y ocupación de este espacio: las de marchas de protesta y las actividades de descanso y recreo. Ambas se llevan a cabo en la plaza casi a diario y hasta se llegan a sobreponer, como me demostró una chola comerciante en una de muchas visitas que hicimos juntas al lugar. En una de estas ocasiones, nos sentamos en un banco para calentarnos al tenue sol de invierno y observar a los transeúntes. Mi acompañante aprovechó la ocasión para relatar nostálgicamente los paseos de domingo que ella y sus pares hacían por la plaza principal en sus tiempos mozos hace un par de décadas. Su callada y al mismo tiempo apasionada descripción me llevó a imaginar un desfile de mujeres que transitaban por la plaza tomando helados, desplegando los bordados en sus mantas elegantes y caminando lentamente para no arrugar los pliegues de sus pesadas polleras y así atraer la mirada de los jóvenes que iban en pos de un romance con las cholitas. Cuando acoté que este mismo tipo de actividad entre las comerciantes jóvenes y sus enamorados se llevaba a cabo hoy cerca de la terminal de buses a escasas cuadras de La Cancha, la chola insistió que no era lo mismo que poder pasear por la plaza, con sus jardines bien cuidados, lejos del bullicio del tráfico y los gritos de los vendedores ambulantes. En otras palabras, mi acompañante tenía la impresión, que confirmó ante mis repetidas preguntas, que la plaza es un oasis de paz en contraste con el caos ruidoso de La Cancha, una imagen que reproduce la idea de la plaza como un espacio ordenado en contraste con el desorden y suciedad del mercado. A su vez, esta idea consagra a la plaza como el espacio lógico y deseable para llevar a cabo ciertas actividades de recreo y descanso.

Mi acompañante concluyó su defensa de la plaza como lugar de recreo al llamar mi atención a un grupo de cholas sentadas a la sombra de un árbol que charlaban entre sí y comían, al mismo tiempo que vigilaban los juegos de unos cuantos niños que las acompañaban. Un poco más allá, estudiantes de colegio, enamorados tomados de la mano, amas de casa, personas de la tercera edad y curiosos hacían una pausa en su paso para escuchar las exhortaciones de un hombre que, armado con un megáfono, continuaba con su perorata a favor del partido de gobierno, o para contemplar la fuente de piedra o algún otro monumento en las veredas. Mi acompañante rió y comentó que escuchar

estas arengas políticas era también una forma de entretenimiento. Al retomar nuestro camino, se acercó al grupo de mujeres que disfrutaban su descanso para saludarlas y, para mi sorpresa, nos dijeron que estaban esperando la llegada de más compañeras para poder comenzar una marcha de protesta frente a la Alcaldía para reclamar las promesas del gobierno municipal de poner luminarias en las calles de su barrio. Una vez más, no pude resistir discutir con mi amiga comerciante diciendo que el grupo de mujeres no estaba en la plaza en una actividad de descanso, sino de protesta política. Tanto mi amistad como las marchistas me miraron curiosamente y ambas preguntaron por qué insistía en separar las dos actividades. El marchar o comer con sus compañeras, señalaron, son simplemente dos maneras de compartir con sus amistades y conocidas. Su conclusión fue que la plaza es un espacio donde el descanso bucólico en sus jardines se complementa perfectamente con las manifestaciones de protesta en sus calles. La idea de que los límites entre ambas acciones son flexibles se basa en que, en ambos casos, la plaza continúa reflejando su centralidad en su estética que la transforma en un lugar de recreo, y en la ubicación del aparato estatal bajo los arcos de sus galerías. La idea de que una marcha de protesta puede estar enmarcada al principio y al final por actividades de recreo y descanso en el mismo espacio donde se llevó a cabo la marcha es un concepto que demuestra claramente que los límites entre los ámbitos públicos y privados en la vida de las cholas comerciantes son difusos y porosos. Éste es un tema al que vuelvo en mayor detalle en mi descripción de las actividades de estas vendedoras en el mercado informal.

En cuanto a las marchas de protesta, la plaza principal de Cochabamba juega un papel esencial en las noticias diarias de los medios de comunicación masiva, ya que es el imán diario de una serie de manifestaciones que la invaden al son de petardos, cánticos y la interrupción del tráfico vehicular. Las causas de reclamo son diversas, van desde pedidos de infraestructura y servicios a nivel de barrios, pasando por peticiones personales y acabando en causas políticas. Las demandas de las mujeres de la clase comerciante, sujeto de este ensayo, no son la excepción de este patrón y se han visto estampadas un sinnúmero de ocasiones en manifestaciones en este centro de la ciudad. Tan solo una mirada a los canales de televisión y los medios impresos en Cochabamba muestra diferentes grupos que organizan sus protestas de tal manera que no ocupen el horario de las marchas de otros grupos en conflicto, o de modo que puedan unir fuerzas y presionar a las autoridades con la conquista total y completa de las principales arterias de la ciudad y la consecuente interrupción de tráfico. Los cochabambinos,

al igual que todos los bolivianos, se han convertido en el transcurso de los últimos diez años en expertos en volcarse a las calles para reclamar sus derechos y presentar sus peticiones, por considerar a esta forma de lucha la única estrategia efectiva de negociación con un aparato estatal sobrecargado y corrupto, especialmente cuando se trata de servicios básicos, salud, educación e infraestructura. Esta nueva manera directa de relacionarse con las autoridades a través de las protestas ha permeado la política boliviana de manera que este proceso ha desembocado en que más de un estudioso bautice a la última década como una incipiente “cultura de protestas callejeras” (Robins 2006).

Volviendo al análisis expuesto al principio de este ensayo sobre los ideales de urbanidad desarrollados por los altos modernistas, es irónico que los españoles quienes trazaron la ordenada red de calles que cruzan a intervalos regulares por el casco viejo de la ciudad, así como los planificadores urbanos que impusieron su visión utópica de orden, se horrorizaran ante las repetidas conquistas caóticas de la plaza que describo. De hecho, la creencia de que las ciudades ordenadas y geométricas facilitaban el trabajo policial y prevenían a las autoridades de turno sobre cualquier amenaza revolucionaria (Scott 1998) es una norma básica de la ideología civilizadora que continúa afectando a las nociones sostenidas por planificadores y funcionarios municipales en Bolivia sobre el uso adecuado de los espacios urbanos. Es en la diaria interpretación de protestas en Cochabamba, que el caos y el desorden asociados con los espacios más “indígenas” y por ende menos civilizados —tales como el mercado— se desatan en el sitio de la ordenada plaza en un consciente desdibujo de fronteras sociales y físicas para desafiar el orden establecido. En este sentido, las “tomas” simbólicas de la plaza por parte de los sectores marginales en Cochabamba se llevan a cabo en los diarios desplazamientos de las marchas de protesta, así como también en la conquista del espacio físico como lugar de descanso con el simple hecho de ocuparlo. En la siguiente sección continúo esta conversación sobre desplazamientos, asentamientos y toma de espacios narrando ejemplos de estas mismas vendedoras en La Cancha o mercado informal central, y comparo las diferencias en la manera de movilizarse dentro del mercado y por la plaza.

Las cholas como arquitectas del mercado urbano

En Cochabamba, los barrios marginales surgen como conglomerados de viviendas precarias en los límites de esta ciudad. El centro simbólico de estas periferias es el mercado informal de La Cancha donde, de una

u otra manera, los habitantes de los márgenes se incorporan a la economía citadina. La Cancha es un sitio donde se llevan a cabo encuentros de personas de todos los estratos sociales como parte de la creación de economías familiares articuladas en un colosal sistema regional de ferias o mercados informales (Calderón y Rivera 1983). Así como la plaza es el centro donde se asienta el poder político público simbolizando el orden estatal, el centro comercial de La Cancha representa una febril y caótica actividad económica. Este conglomerado de puestos de venta y mercados al aire libre no tiene igual y su historia se remonta a la fundación de la ciudad. Durante la colonia, las ciudades andinas dividieron diferentes barrios entre los de indios y los de gente española, de manera que la fragmentación de clases y etnicidad se veía reflejada en el espejo urbano (Barragán 1992). En este sentido, los mercados informales se han considerado tradicionalmente como el seno de las zonas indígenas de las ciudades, así como las plazas pertenecían a las élites. La literatura sobre la historia de las ciudades en Bolivia abunda con ejemplos de las restricciones a las cholitas de la clase comerciante, ya que ellas ocupaban un lugar prominente en los espacios públicos urbanos. En diferentes momentos, se prohibió a las cholitas alquilar negocios para la venta y el consumo de la bebida fermentada de maíz, o chicha, en el centro de la ciudad de Cochabamba (Goldstein 2004), así como viajar en los tranvías que recorrían la urbe y, más recientemente, tener sus puestos de venta cerca de o en la plaza (Stephenson 1999).

El inmenso mercado al aire libre de La Cancha se constituye como un nodo de “intermediación” entre lo rural y lo urbano, que permanentemente complica y desafía la dicotomía entre lo indígena y lo moderno (Gordillo 2005). La Cancha es un espacio donde se siente el fuerte pulso de la actividad económica local y regional y donde se viven constantes desplazamientos de habitantes, de la infraestructura física urbana y de identidades. El constante flujo de bienes y dinero hace de La Cancha un punto donde se rompe con las nociones tradicionales de espacios públicos y privados con sus respectivos límites (Paulson 2002). Las vendedoras en los mercados utilizan los espacios entre y detrás de sus puestos de venta, los mismos puestos, y el asfalto de las calles y cemento de las veredas donde los autos y transeúntes intentan darse paso para llevar a cabo una complicada serie de transacciones y negociaciones mercantiles y domésticas. Las mujeres del comercio informal cocinan, cuidan a sus hijos, planchan, ven televisión y se visitan entre sí en medio del bullicio de la compraventa, todas actividades “domésticas” en las que me tocó participar durante mis recorridos por este mercado. Asimismo, las transacciones económicas, la

firma de contratos y la preparación y producción de bienes y servicios continúan llevándose a cabo en los hogares de las comerciantes, luego de que han dejado sus puestos de venta. De esta manera, las actividades de las vidas públicas y privadas de las cholas comerciantes continuamente se confunden, efectivamente demostrando la porosidad de las barreras entre la vida y el trabajo de estas mujeres que, como se pudo ver, borraron las diferencias entre actividades de descanso y de protesta política al pasear y marchar en la plaza principal de la ciudad.

El mercado de La Cancha es un espacio que alberga una asombrosa heterogeneidad y diversidad de vendedoras, desde mujeres que manejan una red mayorista de comestibles y un verdadero poder económico, hasta vendedoras ambulantes que apenas ganan lo suficiente para subsistir. Esta diferenciación crea una jerarquía socioeconómica en la que el mercado se vuelve el tablero de un inmenso juego de estrategia donde cholas, a lo largo y ancho de este escalafón, luchan por una movilidad social que implica desplazar a otras vendedoras en una continua competencia por espacios de venta. En mis primeras visitas a La Cancha, llegué con el propósito de trazar un mapa del sitio, donde marcaba los tipos de puestos que encontraba en las calles a mi paso. Luego de un par de semanas, caí en cuenta que un mapa convencional no era la herramienta más adecuada para describir este universo. En los recorridos que hice con las mismas comerciantes como guías, pude ver cómo una mujer que vende ropa en un quiosco lujoso no era más que una dependiente, o alquilaba o tenía el puesto de venta en anticrético de la dueña y se quejaba de no poder reunir el dinero necesario para adquirir su propio toldo de venta algún día. Por otro lado, la mujer humilde sentada en el piso, junto a una canasta de lechugas, podía ser una persona con mucho dinero, dueña de varios puestos de venta y una flota de camiones para el transporte de productos desde el área rural al mercado mayorista. Asimismo, los puestos de juguetes que llenaban la calle un día martes, desaparecían y daban lugar a puestos de material de escritorio el día miércoles en la vereda de enfrente, ya que el tráfico vehicular que fluía de norte a sur el martes, al día siguiente transitaba en dirección opuesta debido a que los miércoles se cortaba el tráfico en varias calles para dar paso a los puestos temporales de decenas de vendedoras por ser “día de feria”.

El constante flujo de movimiento en las atiborradas calles de La Cancha se contrasta con una serie de estrategias que las cholas comerciantes han perfeccionado a lo largo de varios años para tomar posesión de un espacio público, por lo general una calle, para dedicarlo a

la venta y eventualmente legalizar esta situación. Para poder acceder a un puesto, una vendedora comienza comprándolo de otras comerciantes o directamente de la municipalidad, lo cual puede requerir un capital considerable. Otra posibilidad, y la más común, es que se reúna un grupo de mujeres que desean ingresar en la venta informal y las mismas se unan todos los días para “asentarse” en una calle aledaña a otras calles ya tomadas por el comercio informal. Sigue aquí un proceso por el que los vecinos de los hogares o comercios en esa calle hacen un llamado a la policía municipal para desalojar a las mujeres. Se procede a la evicción forzosa de las mujeres y su mercadería y comienza un arduo, y a veces prolongado, proceso en el que las vendedoras continúan intentando ganar un permiso oficial denominado de “sentaje” que les permite ocupar la calle dentro de ciertas regulaciones que especifican las horas de ocupación, el lugar —ya sea la vereda o parte de la calle misma— y el tipo de mercadería que ofrecen. Esta batalla para la toma literal de un espacio de un metro por metro y medio de la misma urbe es un proceso por el cual las cholas han ido cambiando la cara de la zona comercial de la ciudad. Las contienda pueden durar años y se sabe de casos en que se han entablado juicios legales o ambos lados han intentado y logrado que la municipalidad determine a su favor con el pago de sobornos.

Lo que más me llamó la atención de estas interacciones fue, una vez más, el rol de estos actores en el cambio de la fisonomía de la ciudad. En uno de varios ejemplos sobre estos conflictos, me comentaron sobre la pelea entre una serie de tiendas de electrodomésticos y una fila de vendedoras de ropa deportiva a sus puertas y me mostraron cómo los dueños de las tiendas habían colocado una cerca de postes y vallas de metal excluyendo a los puestos de las personas y posibles clientes que transitaban por la vereda. Las vendedoras contrarrestaron esta maniobra llevando una noche a un grupo de albañiles quienes ensacharon la vereda hacia la calle unos treinta centímetros para que las vendedoras también puedan permitir que sus posibles clientes accedan a sus puestos de venta sin tener que bajar de la vereda. El ejemplo más obvio de las cholas como diseñadoras de la urbe es que muchas de ellas invierten su capital en la construcción de edificios en La Cancha, la zona de Cochabamba donde se lleva a cabo una constante y febril construcción.

Todos estos ejemplos nos demuestran que en La Cancha actualmente existe una ausencia de límites entre los ámbitos públicos y privados debido a la fluidez y flexibilidad de las comerciantes al llevar a cabo actividades que caen dentro de cualquiera de las dos categorías

y a su constante conquista y diseño de espacios públicos. Esta situación ambigua es denunciada en la prensa de Cochabamba por los oficiales de la Municipalidad y miembros de la élite a intervalos regulares, argumentando que es la desvergonzada demostración de actividades domésticas en las calles por parte de las mujeres del mercado la que convierte a estos espacios en sitios peligrosos e insalubres, continuando con la ideología de lo indígena como habitando espacios con características negativas. Esta criminalización de las mujeres de los mercados ha sido exacerbada por una constante lucha por el Gobierno Municipal que de manera casi rutinaria intenta regimenterar y contener la expansión de los puestos callejeros de venta, tanto a nivel de las comerciantes establecidas que operan con la sanción y licencia de la Municipalidad, como a nivel de los vendedores ambulantes o de las ferias de venta temporales que surgen de la noche a la mañana para festividades locales o eventos o feriados específicos.

De hecho, cada fin de año la ciudad de Cochabamba es testigo del espectáculo causado por la batalla entre el burgomaestre de turno y un número cada vez más grande de vendedores eventuales que bregan por un espacio en la Feria de Navidad que toma varias manzanas del centro de la ciudad, resultando en un caos absoluto en las ya conglomeradas arterias. Los medios de comunicación masiva se explayan mostrando imágenes dramáticas de vendedores afligidos mostrando a sus hijos pequeños para que las cámaras puedan capturar la desesperación que sufren, seguidas de entrevistas con los frenéticos y angustiados dueños de los edificios a la sombra de los cuales se desarrolla esta feria y de declaraciones hechas por funcionarios municipales. Estos últimos se quejaban de que la situación se venía deteriorando rápidamente y que puede resultar en un peligro público debido a la suciedad y enfermedades que este tipo de ferias traen y transmiten debido a las costumbres consideradas poco higiénicas e ignorantes de los vendedores. La prensa muestra a los comerciantes como víctimas de una situación injusta en la que este grupo de explotados sufre terriblemente por culpa de un sistema burocrático opresor y obsoleto, pero tampoco argumentan en contra de la imagen que se continua reproduciendo de los mercados como poco civilizados y como focos de enfermedades infecciosas. De este modo, los discursos sobre higiene y modernidad civilizada continúan reproduciéndose, al igual que los permanentes conflictos entre las mujeres del mercado y las autoridades locales.

Seguir a las cholas comerciantes y observar sus travesías y desplazamientos ha producido una variedad de historias que nos permiten

vislumbrar cómo van llenando la trama de un fino tejido de relaciones y acciones recíprocas entre los mundos aparentemente opuestos de poder político y comercio informal. En la siguiente sección me concentro en un par de puntos de contacto entre estos dos mundos, volviendo a la discusión de las relaciones políticas de la primera sección y uniendo los ejemplos sobre la toma de espacios públicos para dilucidar dónde se posicionan estas vendedoras en la construcción de las ideologías de alta modernidad y de nuevo indigenismo.

Puntos de contacto: política, puestos de mercado y modernismo

Como parte de la trayectoria sindical de demandas políticas de las mujeres del comercio informal, en la última década estas vendedoras en Cochabamba tuvieron también un papel destacado en la red de protestas antineoliberales que fueron parte de la plataforma política que llevó al poder al Movimiento al Socialismo (MAS) del actual gobierno. La misma combinaba un discurso pro-indigenista con fuertes críticas a la economía de libre mercado y el impacto de políticas de reestructuración (Albro 2005). Estas protestas y el trabajo sindical convierten a las comerciantes cholas en actores eficientes que utilizan información sobre sus derechos ciudadanos y se educan sobre el tema. Esta adquisición de conocimiento propio, postula Holston (1999: 258), se puede interpretar también como negando la idea de que el pueblo es ignorante y solo puede ser llevado hacia una modernidad civilizadora por las élites, ya que tiene la capacidad de reconocer sus derechos y pelear por los mismos y las ideologías que los sustentan. La situación de grupos subordinados como el de las cholas comerciantes, unidas a un ahondamiento del proceso de democratización en la región causan movimientos de lo que Holston denomina “ciudadanía insurgente” (2009: 245). En Cochabamba, al igual que el trabajo realizado en Brasil por este investigador, se puede ver que la combinación de estos dos procesos ha producido una condición en la que los habitantes urbanos que residen en las periferias empobrecidas, incluyendo las comerciantes cholas, también se han manifestado en demanda de mejores condiciones de vida.

Los ejemplos de las cholas de los mercados han pintado una descripción de una práctica de ciudadanía insurgente al punto en que pareciera que existe un permanente conflicto entre ellas y el aparato estatal. El registro etnográfico refuerza esta idea en una serie de trabajos a nivel mundial y de la zona andina en particular (Babb 2001;

Femenías 2007) en los que se describe esta constante relación de lucha en la que se ratifica y fortalece la ideología que coloca a las mujeres de mercado en una categoría marginal permanente debido a su naturaleza desordenada y sucia por su identidad indígena. Sin embargo, mis visitas diarias a los mercados observaron también otra faceta de la asociación entre el gobierno local y las cholas. Las vendedoras del mercado de La Cancha, a lo largo de generaciones, han construido una relación de negocios particular y sumamente beneficiosa para ambas partes con el aparato municipal y departamental de Cochabamba donde existe una estrecha simbiosis y dependencia económica. Tanto la Municipalidad como la Prefectura del Departamento mantienen divisiones que generan grandes divisas, basadas en la emisión de permisos de venta y la adjudicación de puestos y espacios para la venta de las comerciantes del mercado informal. Estos espacios varían desde puestos permanentes, construidos por la municipalidad y que están integrados en los proyectos de planificación urbana, hasta el alquiler anual de un par de metros cuadrados de vereda o asfalto, donde el vendedor o la comerciante se pueden sentar por aproximadamente cinco a seis horas semanales durante los días de feria. Efectivamente, se puede fácilmente trazar la heterogeneidad de la población de comerciantes con tan solo seguir quién es dueña de qué tipo de puesto de venta, así como cuántos puestos y si los mismos son propios o alquilados. Asimismo, las comerciantes aprovechan la red de relaciones de compadrazgo y reciprocidad que mantienen entre sí para utilizar mejor estos puestos y mejorar sus ganancias; a su vez, se articulan con otra red de contactos y relaciones políticas mediante las cuales tejen sus fortunas y prácticas de negocios con la burocracia local y regional.

En la última década, un resultado de la llegada de las políticas neoliberales y su aprovechamiento por las cholas comerciantes es un punto de contacto entre estas vendedoras y las clases media y alta de la ciudad. Este contacto lo forjan las hijas e hijos de estas vendedoras, la mayoría de los cuales son ahora estudiantes universitarios, algunos de los cuales han asistido a las mejores casas superiores de estudio privadas del país. La mayoría de las comerciantes más exitosas han invertido su capital en bienes raíces en la zona residencial de clase alta de Cochabamba y la familia se turna entre estas residencias y una casa cerca de sus puestos de venta. Al parecer, estas compras de propiedad son recientes, por lo que aún queda por ver el impacto que tendrán las comerciantes al ampliar sus desplazamientos entre el mercado y las zonas más alejadas de éste. Como mínimo, este hecho

indica que las cholas continuarán jugando un papel preponderante en la planificación urbana, ahora como dueñas de propiedades tanto en el centro como en la periferia.

El contemplar las ciudades como espacios tanto físicos como imaginados ayuda a comprender mejor las diferencias que se construyen alrededor de las experiencias ciudadinas. Los teóricos urbanos han demostrado que la alta densidad poblacional incrementa la posibilidad de los contactos entre personas que provienen de distintos medios (Brown-Glaude 2008: 114). Esta diversidad, así como las complejas relaciones de poder se traducen en la fragmentación de los espacios urbanos de tal manera que las jerarquías se negocian o transforman a través de su uso, desafiando y flexibilizando de este modo las barreras entre los ámbitos público y privado. En base a las experiencias del grupo de comerciantes informales desarrolladas hasta este punto, podemos concluir que la ideología de alta modernidad que define la planificación de la ciudad de Cochabamba sigue vigente, y son las mismas comerciantes las que la mantienen y refuerzan. A pesar de que el modernismo se ve desafiado en parte por el sindicalismo y la doctrina antineoliberal de las cholas en su ciudadanía insurgente, sus acciones en la lucha por la conquista de espacios simbólicos y económicos lo defienden. Es más, su manipulación y conquista de espacios urbanos con claros objetivos de movilidad social, su íntima relación con el aparato gubernamental y su inversión en propiedades en barrios centrales y periféricos de la urbe me llevan a concluir que las cholas pueden alinearse con los discursos indigenistas del actual partido de gobierno en la retórica, pero en la práctica apoyan la ideología de alta modernidad descrita al inicio de este texto.

Basado en un estudio etnográfico de las comerciantes de este mercado, este trabajo definió la importancia de los flujos de movimiento de las mujeres del comercio informal, y cómo los recorridos entre distintos puntos de la ciudad apropian diferentes espacios que marcan distintas clases sociales. Asimismo, seguir de cerca los desplazamientos de las comerciantes de La Cancha y sus relaciones con el aparato de gobierno local y estatal y con el sector económico nos permite un mejor entendimiento de cómo influyen y transforman el imaginario y el diseño urbanos. El continuo estudio y análisis del posicionamiento de las comerciantes informales y de las poblaciones marginales en general como ciudadanas y residentes ciudadinas nos proporciona una ventana exclusiva por la que entrever las respuestas culturales a transformaciones más amplias que resultan de los recientes cambios sociopolíticos por los que atraviesa Bolivia. Propongo

que explorar los flujos de movimiento y estrategias políticas de los comerciantes de La Cancha a futuro contribuirá a la discusión y el análisis de los procesos de contestación ciudadana y urbana de la región en un momento de cambios socioeconómicos más amplios creados en parte por los procesos de globalización y modernización descritos en este ensayo.

Bibliografía

- Albro, Robert (2005) "The Indigenous in the Plural in Bolivian Oppositional Politics" in *Bulletin of Latin American Research* 24(4): 433-453.
- Ardaya, Gloria (1992) *Política sin rostro: mujeres en Bolivia*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
- Babb, Florence (2001) "Market/places as gendered spaces: market/women's studies over two decades" en Linda Seligmann (editora), *Women traders in cross cultural perspectives*, Stanford University Press, Stanford.
- Barragán, Rossana (1992) "Entre polleras, lliqllas y ñañacas: Los mestizos y la emergencia de la tercera república." en Silvia Arze and Rossana Barragán (editoras), *Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes*, HISBOL, La Paz.
- Blanes, José (2007) "Bolivia: Las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional" en *Villa Libre*, 1.
- Bourdieu, P. (1985) "The Social Space and the Genesis of Groups" en *Theory and Society*, 14 (6), 723-744.
- Brown-Glaude, W. R. (2008) "Spreading Like a Dis/ease? Afro-Jamaican Hegglers and the Dynamics of Race/Color, Class and Gender" en Daniel Cook (editor), *Lived Experiences in Public Consumption*, Palgrave Macmillan, Nueva York.
- Calderón, Fernando y Alberto Rivera (1983) *La Cancha*, CERES, Cochabamba.
- De La Cadena, Marisol (1995) "Women are More Indian: Gender and Ethnicity in a Community in Cuzco" en Olivia Harris y Brooke Larson (editoras), *Ethnicity, Markets and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology*, Duke University Press, Durham.
- Femenías, Blenda (2007) *Gender and the Boundaries of Dress in Contemporary Peru*, University of Texas Press, Austin.
- Goldstein, Daniel (2004) *The Spectacular City: Violence and Performance in Urban Bolivia*, Duke University Press, Durham.
- Gordillo, José (2005) "Región de Cochabamba" en PIEB/CESU, *Cochabamba: Estados de la Investigación*, PIEB/CESU/DicyT/ASDID, Cochabamba.
- Gustafson, Bret (2009) *New Languages of the State: Indigenous Resurgence and the Politics of Knowledge in Bolivia*, Duke University Press, Durham.

- Holston, James (2009) "Insurgent Citizenship in an Era of Global Peripheries" en *City and Society*, 21 (2), 245–267.
- Lagos, María (compiladora) (2006) *Nos hemos forjado así: al rojo vivo y a puro golpe. Historias del comité de amas de casa de Siglo XX*, Plural Editores, Asociación Alicia "Por Mujeres Nuevas", La Paz
- Larson, Brooke (2003) *Trials of nation making: liberalism, race, and ethnicity in the Andes, 1810-1910*, Cambridge University Press, Nueva York.
- Lehm, Zulema y Silvia Rivera (1988) *Artesanos libertarios y la ética de trabajo*, Taller de Historia Oral Andina, La Paz.
- Low, Setha (2000) *On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture*, University of Texas Press, Austin.
- Medinaceli, Ximena (1989) *Alterando la Rutina: Mujeres en las ciudades de Bolivia 1920-1930*, CEDIM, La Paz.
- Paulson, Susan (2002) "Placing Gender and Ethnicity on the Bodies of Indigenous Women and in the Work of Bolivian Intellectuals" en Rosario Montoya, Lessie Jo Frazier y Janise Hurtig (editoras), *Gender's Place: Feminist Anthropologies of Latin America*, Palgrave Macmillan, Nueva York.
- Robins, Nicholas (2006) "Introducción" en Nicholas Robins (editor), *Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia*, Estudios Bolivianos Vol. IV, Plural Editores, La Paz.
- Scott, James (1998) *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed*, Yale University Press, Nueva York.
- Seligmann, Linda (1989) "To be in between: the cholas as market women" en *Comparative Studies in Society and History* 31(4): 694–721.
- Stephenson, Marcia (1999) *Gender and Modernity in Andean Bolivia*, University of Texas Press, Austin.

Los espacios múltiples de una comunidad periurbana

Migraciones, pluriactividad y desarrollo en Cochabamba

Acción Andina-Bolivia¹

¿Cómo viven los pobladores de barrios que tienen múltiples anclajes de relaciones familiares y productivas? ¿Cómo afecta esta espacialidad vivencial a sus perspectivas sobre sus barrios y el desarrollo de éstos? En este artículo, examinamos las prácticas e implicaciones de las múltiples localidades de relaciones y enlaces de residentes de un barrio periférico de la ciudad de Cochabamba. Este trabajo fue parte de una investigación cuya meta fue determinar los efectos colectivos de la migración internacional en comunidades periurbanas. En uno de los barrios de estudio, Lomas de Santa Bárbara, destacó la importancia de los múltiples sitios en que los vecinos y sus familias viven y trabajan.

Vecinos de Lomas de Santa Bárbara, poblado desde hace apenas una década, mantienen fuertes vínculos con lo rural, llevando de ese mundo sus lógicas, visiones y prácticas al barrio. Esta influencia rural se ve en la cercanía doméstica de vecinos y en su dependencia mutua, rasgos comunitarios que permanecen a pesar de las presiones urbanizadoras de la ciudad. En parte, este sentido familiar de comunidad se mantiene por la organización de los vecinos: el nexo de participación no es la junta vecinal, sino los grupos más pequeños de manzano que acogen entre una y dos docenas de familias por grupo. De este modo, las lealtades y sentidos de pertenencia de los vecinos se atañen al manzano y a redes sociales más allá del barrio.

1 El presente ensayo es parte del informe de investigación *La vecindad que no viajó: Migración internacional y desarrollo comunitario en zonas periurbanas de Cochabamba* (2009), publicado por el PIEB. La investigación se impulsó por el Centro Vicente Cañas y se desarrolló en el marco de la Convocatoria Nacional Temática "Impacto Económico y Efectos Socioculturales de la Migración Transnacional en Bolivia" del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), y auspiciado por el Defensor del Pueblo y Pastoral de Movilidad Humana. El equipo de investigación fue coordinado por Theo Roncken y conformado por Oscar Alquiñan, Cristina Cielo, Redner Céspedes y Yeshid Serrudo.

Las dinámicas colectivas de Lomas de Santa Bárbara nos dan la posibilidad de examinar las implicaciones de una comunidad conformada por numerosos ejes de asociación. En tal contexto, podemos preguntarnos: ¿cómo se puede hablar de un desarrollo colectivo de la comunidad? Tendríamos en este caso que hablar de un desarrollo que conecta la localidad, a nivel de los vecinos en vez del barrio, con otros espacios marginales, sean éstos rurales, periurbanos o urbanos. La manera de vivir el desarrollo en Lomas de Santa Bárbara es a través de un desarrollo disperso y por redes extendidas. Los elementos fundamentales de esta forma de desarrollo son los actores y sus diversas estrategias de subsistencia así como sus vínculos personales y laborales.

Son éstas las redes que enmarcan las posibilidades de la vivencia colectiva en el barrio. Ideas abstractas sobre el futuro colectivo se reemplazan por potencialidades endógenas y reales basadas en relaciones sociales. Por ejemplo, en contraste a la planificación de una red barrial de agua potable en el marco del desarrollo obrista y urbanizador, los habitantes de Lomas más bien cuentan con su vecino quien le prestará agua cuando lo necesite. En el artículo que sigue, observamos las particularidades de la forma de desarrollo de una comunidad anclada en múltiples sitios, enfocándonos en la manera en que se integra la migración interna y al exterior. Veremos que la forma de vivir la migración en Lomas de Santa Bárbara refuerza las asociaciones variadas que tienen los vecinos entre ellos mismos y con otras redes. Esto debilita la fuerza del colectivo vecinal dentro del marco de desarrollo urbano, pero a la vez traza posibilidades de comunidades urbanas menos excluyentes.

La construcción de la comunidad dispersa

Lomas de Santa Bárbara está relativamente a poca distancia del centro político y comercial de la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, estando en el barrio, uno se siente lejos, muy lejos, de la ciudad. Será por el transporte ocasional y los caminos con baches que demoran la llegada al barrio, o por su poco desarrollo en infraestructura o tal vez por la procedencia y vinculación continuada de su población con lo rural. Tendrá que ver también con los ritmos más lentos del barrio, con sus prácticas de movimiento y de desplazamiento, con las relaciones e imaginarios que de allá se construyen. Un vecino del barrio describió: “De aquí se ve el horizonte, y aquí por lo menos hay un poco de aire puro, mientras que en la ciudad todo está contaminado”.

Lomas de Santa Bárbara está erigida en una loma alta en la zona sur de la ciudad, desde donde se ve la Avenida Petrolera que la comunica

con el centro atiborrado de la ciudad. Más allá, se ven hasta los cerros verdes de la zona norte, la cual miran con anhelo algunos vecinos de los barrios marginados de la zona sur: “Imagínese que las Lomas de Santa Bárbara se convierta como en las Lomas de Aranjuez, soñar no cuesta nada, esto que se convierta en Pacata Alta, como se puede ver, una belleza [...]. A veces pienso, miro ese cerro, ojalá este cerro se convertiría en ese cerro, en el Tunari y así podríamos tener bastante agua”. Este tipo de mirada hace hincapié en lo que les falta a barrios como Lomas.

Pero Lomas de Santa Bárbara posee algunas características propias, a diferencia de otros barrios más urbanizados. Entre éstas se destacan sus vínculos fuertes con el campo. Desde el cerro donde se encuentra Lomas, volviendo la espalda a la ciudad, uno vislumbra la Laguna de La Angostura entre las colinas. La Angostura es el punto que señala la salida definitiva de lo urbano y la entrada al Valle Alto rural, región de procedencia de muchos de los vecinos del barrio². Y se sienten en el barrio los aires del campo y del valle rural. Chanchos, ovejas y perros deambulan por las calles de Lomas, donde pasan unos pocos vehículos. Hasta hace poco, la tenue luz de las velas daba un ambiente hogareño a las reuniones de manzano o a la reunión semanal de los delegados de manzano. Ahora ya hay luz eléctrica en Lomas. Pero los ritmos barriales y las relaciones sociales más aldeanas y familiares permanecen.

Cuando se asentó el área que ahora es Lomas, era más campo que ciudad. Contó una vecina: “Todo esto era espina, no había nada, primerito yo he venido a este lugar, no había nada”. Esta zona árida se fue asentando tras la organización de loteadores, quienes se aprovecharon de los requerimientos de vivienda de los recién llegados a la ciudad. Un vecino relató sobre el asentamiento de Lomas:

Salió en las noticias, que estaban loteando este cerro. Entonces como a modo de pasear han venido. Ahí abajo estaban los que estaban inscribiendo, los loteadores [...]. Ahí había una bandera larga, en un listón colocado, viendo eso la gente iba, porque desde lejos se veía la bandera [...]. De los loteadores, ése siempre había sido su trabajo.

En Bolivia, los barrios periurbanos siguen padrones de asentamiento irregular muy similares a los de muchos barrios de Latinoamérica. La

2 De acuerdo a encuestas realizadas por el Centro Vicente Cañas en 2007 en este y otros barrios de la zona sur, casi 80% de los vecinos actuales de Lomas de Santa Bárbara son de procedencia rural. En contraste, en otros barrios de la misma zona periurbana de Cochabamba menos de la mitad de vecinos vienen de zonas rurales (Cielo y Céspedes 2008).

migración interna masiva a las urbes latinoamericanas, combinada con la falta de documentación de las periferias urbanas, allana el camino para loteamientos y asentamiento informales en toda la región. De acuerdo a un informe reciente de la División de Población de las Naciones Unidas, se estima que más de 30% de la población urbana latinoamericana vive en tierras informales (Da Gama 2008: 5). Víctor Hugo Calizaya describe estos procesos de los sectores populares, indicando que:

Han perdido toda posibilidad de acceder a un lote y/o vivienda vía el mercado inmobiliario formal, porque no tienen ninguna de las condiciones que el mercado exige. Su prioridad principal siendo la sobrevivencia, poco puede ahorrar para adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario formal [...]. De esa manera se han sentado las bases sociales, políticas y económicas para solucionar el problema de otras maneras, una de ellas es el loteamiento clandestino y la toma violenta de tierras urbanas (s/f 2).

El asentamiento informal a menudo conlleva conflictos, con otros grupos y loteadores rivales por el terreno. En Lomas de Santa Bárbara, su historia polémica ha sido fundamental en la formación de su actual dinámica social y de organización. Cuando llegaban los vecinos, se les mandaba en grupos a ocupar predios. Un joven que llegó al barrio con esos primeros grupos describió: “De acuerdo a la lista, llenaba 30 personas y les llevaban a ver los manzanos. Ya había estado dividido”. Entonces hay un sentido de unidad en los manzanos del barrio, también debido a sus conflictos compartidos. En estos grupos, durante el asentamiento del barrio, los vecinos fueron camaradas de armas: “Allá en la punta había gente, ¡Están atacando! ¡Hay que ir con petardos!” Les hemos hecho escapar. Había gente que venía: a este hombre no conocemos, ese ratito lo agarrábamos ya”.

Además, la forma de asentamiento en Lomas agrupaba a personas que llegaban juntas, quienes a menudo eran conocidas o de la misma procedencia. Vecinos de un manzano, por ejemplo, provenían todos de la zona rural de Tiraque, en el Valle Alto a unas horas de Cochabamba. Los tiraqueños levantaron sus viviendas como se suele hacer en su pueblo, de forma comunal. Hasta hoy día, la participación más regular y vital se realiza en torno a los grupos de manzanos. El valor fundamental organizacional de los manzanos se nota en la cercanía entre los vecinos del mismo manzano. Un vecino comentó: “En mi manzano [...] nos hemos ayudado en hacer adobe, todo [...]. Estábamos desde el principio unidos, hasta ahora”. Otro vecino dijo que se

siente representado porque: “cada domingo en la mañana hacemos nuestra reunión, [el delegado de manzano] nos llama lista”.

En estos espacios se comparten las vivencias y preocupaciones cotidianas, como la queja sobre el perro de la familia de al lado o comentarios sobre aumentos en el precio del agua. Sin embargo, debido a la historia jerárquica de la organización del barrio, en la cual el primer dirigente/loteador ejercía un control autoritario sobre los delegados de manzano y demás vecinos, las preocupaciones que son expresadas en estos espacios pequeños raramente llegan al nivel del conjunto del barrio. Como admitió una vecina: “Yo a [la reunión barrial] tengo miedo ir, me da miedo porque por ahí pido la palabra y no puedo hablar perfectamente”. En contraste, en los grupos de manzano los vecinos hablan libremente de los temas que les preocupan: “Cuando tenemos aquí en el manzano problemas, primero aquí queremos solucionar el problema”.

La conformación de una comunidad con múltiples anclajes de organización social dentro del colectivo barrial se refuerza por los diversos vínculos y movimientos entre Lomas y el campo. Al respecto, una vecina de Lomas que aún tiene su casita en su pueblo dijo: “Sí tengo, sí, de mí es en el pueblito siempre. Es la casa de mi mamá, claro tengo una partecita ahí. Siempre voy, mi hermana vive ahí”. Las redes de los pobladores periurbanos de Lomas se extienden desde el barrio hacia la ciudad y el campo.

La migración a ciudades bolivianas

La migración interna para poblaciones en Bolivia y otros países andinos ha sido parte de su modo de vida, articulando localidades con distintas fuerzas económicas y sociales. Los procesos migratorios actuales al exterior, entonces, coexisten con la cultura y los patrones sociales de la migración interna. En términos generales, durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina presenció la transformación de sociedades rurales en grandes concentraciones urbanas. Se calcula que entre 1930 y 1990, la migración del campo a la ciudad movilizó a cerca de 100 millones de personas dentro de América Latina y el Caribe. Hoy casi el 70% de su población reside en zonas urbanas (da Gama 2008: 12).

Vacaflor destaca que los flujos migratorios bolivianos internos y externos importantes luego del colonialismo español se dieron como producto de dos momentos histórico-políticos: la Revolución Nacional de 1952 y la implementación del modelo neoliberal en 1985. En 1952, con la Reforma Agraria y la abolición del latifundio, “se originó un proceso de liberación de la fuerza laboral, que más tarde,

aquejada por el minifundio precipitó corrientes emigratorias” (citado en Siles 2007). Por su parte, la Nueva Política Económica implementada en 1985 provocó el despido de “más de 150 mil trabajadores (hasta 1996) que, con un promedio de 5 miembros por familia, equivalían a 750 mil personas desamparadas, libradas a su propia suerte, abriéndose las puertas a la emigración” (Vacaflores, citado en Siles 2007).

La masiva emigración fronteriza a Argentina y Brasil de los años ochenta y noventa se presentó para muchas familias como un proceso gradual, realizado en varias etapas (de campo a ciudad provincial, de ciudad provincial a capital departamental y de capital departamental al exterior). De la Torre (2004) ubica la actual migración organizada en torno a la búsqueda laboral en correlación con la marginalización económica del sector agrícola tradicional, notando que “es necesario recalcar que las familias que permanecen ligadas en mayor o menor grado a los espacios rurales son las más afectadas por la pobreza crónica como principal ‘causa de un exilio económico’.”

La última década ha visto “procesos de rápida urbanización [...] donde es un hecho la consolidación de tres áreas metropolitanas (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba)” (Blanes 2006: 1). De acuerdo al INE, en el censo 2001 los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí y Beni presentan una tasa de migración neta negativas con respecto al censo de 1992, siendo las más altas las de Oruro (–25,80%) y Potosí (–37,59%). Por otra parte, Ramírez (2007) describe cómo el “proceso de recepción y expulsión de migrantes continúa siendo una característica esencial de los valles de Cochabamba, durante la República y en la actualidad”. La investigadora cita al Ministerio de Desarrollo Sostenible (2004) al documentar que:

A nivel nacional Cochabamba es, después de Santa Cruz, el departamento de mayor recepción de migrantes con el 22%, representando, estos últimos, alrededor del 19% de su total poblacional, en un gran porcentaje proveniente desde las tierras altas. Paralelamente, Cochabamba es el tercer departamento expulsor de población (en términos absolutos), detrás de Potosí y de La Paz (ob.cit.: 39) y, el segundo en términos de expulsor reciente..., fenómeno que se orienta a otros países y continentes (Europa, EE.UU. y Argentina principalmente) (Ramírez 2007: 37).

Pero mientras describe los contornos del fenómeno, esta literatura sigue reforzando y recreando el imaginario del migrante individual o

familiar en búsqueda de oportunidades mejores. De manera similar, en el caso de la migración al exterior, la inclusión de los migrantes rurales en la ciudad o en la ciudadanía transnacional es una inclusión que esconde otras exclusiones. La manera en que la migración se entiende como la búsqueda legítima de oportunidades individuales sirve al mercado laboral en su necesidad de asegurar mano de obra a bajo costo. La vivencia privada de la migración tiende a esconder las presiones sociales que crean sus necesidades y los problemas colectivos que resultan como sus consecuencias.

De hecho, se pueden comparar algunas de las experiencias de la migración interna y la migración al exterior. Tal como los residentes bolivianos hablan de los que vuelven del exterior, una vecina relató sus observaciones de los ciudadanos que regresan a su pueblo: “Antes los que vivían aquí en la ciudad llegaban allá, a Mizque, los que estudiaban llegaban, que no te miraban para nada. Ellos eran como gente de alta sociedad, nos bajoneaban a nosotros los que vivíamos en el pueblo. Éramos los que no sabíamos nada”. Precisamente por las relaciones campo-ciudad que relegan a lo rural, la procedencia rural de pobladores periurbanos no se puede separar de las exclusiones que ellos viven en el ámbito urbano.

Estas exclusiones se notan en la segregación territorial de la pobreza urbana. Nelson Antequera señala: “El crecimiento demográfico de las ciudades, especialmente en los países menos desarrollados conlleva también procesos de segregación espacial y social puesto que ha ido aparejado con el incremento de la pobreza y marginalidad. En la ciudad, la pobreza es territorializada” (Antequera 2007: 12-13). Como en muchas de las ciudades latinoamericanas, los barrios nuevos en las periferias de Cochabamba son el primer anclaje para migrantes que llegan a la ciudad. De acuerdo al último censo nacional, tal área —denominada la zona sur de la ciudad— tiene porcentajes más altos de migración reciente que las otras zonas de la ciudad de Cochabamba. Los habitantes de la zona sur también se identifican como indígenas mucho más que cualquier otra parte de la ciudad: tres cuartos de los habitantes de la zona sur se identifican con algún grupo étnico, mientras que en el centro y el norte de la ciudad, menos de la mitad de sus habitantes se identifican con un determinado grupo étnico (INE 2001).

La marginalización de lo periurbano y lo indígena se evidencia en la diferenciación citadina que define al Otro no solamente como distinto sino como inferior. Marquez (2005) escribe que: “para construir lo normativo se necesita al mismo tiempo definir aquello que no lo es;

porque la tarea de definir un orden supone discriminar (y por tanto marginar) de entre los elementos que forman la realidad social [...]. Todo orden simbólico es construido y [...] en esta construcción no todos participan por igual". Es por tal razón que las relaciones de dominación dentro de la ciudad no se limitan a la producción de barrios periurbanos marginales, sino de poblaciones marginales, sea donde sea que se encuentren. Los pobladores periurbanos, sobre todo indígenas, sienten fuertemente el rechazo de sus identidades en su vida cotidiana:

Si a uno nos ven de la zona sur, piensan que estamos con tierra. Usted va en el trufi, yo varias veces así me dado cuenta, así una señora de pollera se sienta al lado de una señora así con carteras bien *jailona*, se hace a un lado, porque piensa que está con pura *polvadera* y la puede ensuciar de alguna manera. Siempre tienen que discriminarnos porque ellos se creen de alta categoría pero no debería de haber eso.

Entendido en este contexto de exclusión, la movilidad interna campo-ciudad de los vecinos es una entre muchas apuestas tentativas en varios ámbitos inseguros. Los vecinos de Lomas tienen lotes en varias partes y muchos de ellos siguen con responsabilidades en sus comunidades. Varios vecinos, por ejemplo, regresan regularmente a sus comunidades rurales para cumplir con su responsabilidad de ser autoridad allí. Otro vecino, mientras tiene su casa e hijos en su pueblo del Valle Alto, trabaja como maestro en otro pueblo del cerro y tiene lotes en la ciudad en Lomas y en otro asentamiento nuevo de la zona sur.

Antequera describe: "Los itinerarios que se dan entre el campo y la ciudad, en el caso de las comunidades indígenas andinas en general, deben ser entendidos no como un traslado definitivo y un abandono de la comunidad de origen sino en el contexto de lo que hemos denominado la "doble residencia" (Antequera: 2007: 88). Vuelve a ser una cobertura de apuestas, tanto culturales como económicas, donde los "actores responden a la incertidumbre diversificando sus ventajas, redefiniendo y recombinaando recursos" (Stark 1996: 997). Es un intento de mantener alguna medida de capital en diferentes ámbitos en los cuales sus posiciones no están nada seguros.

El desarrollo pluriactivo y la migración al exterior

En la sociología y la economía rural, el concepto de la pluriactividad ha surgido en el intento de describir nuevas formas de ruralidad. Con

la disminución de ingresos agrícolas por las estructuras económicas nacionales e internacionales, familias campesinas han empezado a involucrarse en otras actividades. Dicen Giarraca, Aparicio y Gras (2001: 306):

Distintos autores plantean que la pluriactividad constituye un rasgo estructural de las agriculturas [...]. Pocas dudas caben respecto tanto de su persistencia en el tiempo como del hecho de que el campo es, en forma creciente, asiento de actividades no agrarias [...]. Podemos pensar, entonces, que las características de los distintos tipos de sujetos presentes en el agro en la actualidad no solo se complejizan al considerar sus conexiones con actividades fuera del predio, o con actividades no agrarias, sino que las mismas son condicionadas, e incluso posibles, por tales conexiones.

Los vínculos laborales y económicos en Lomas de Santa Bárbara son estrechos entre lo periurbano y lo rural. Al respecto una vecina contó que su hijo sigue trabajando en el campo: “Viene con sus productos al mercado campesino y lo vende”. Otro residente del barrio nos comentó sobre sus compañeros de trabajo: “Hoy día no han venido, porque tenían que ir a Punata. Ahí tenemos un taller también, trabajamos bien un día martes. Como es feria allá, grande es la feria, por eso es silencio aquí el día martes. Por eso estamos yendo”. La encuesta realizada en el barrio mostró que, a pesar de ser residentes en este barrio urbano, 14% de los habitantes de Lomas siguen trabajando como agricultores o ganaderos. Más que en otros barrios, los vecinos de Lomas suelen tener otro hogar o casa alquilada fuera del barrio. Casi un tercio de vecinos de Lomas admite tener o alquilar casa en otra parte de la ciudad, mientras que en otros barrios el porcentaje de vecinos quienes tienen o alquilan casa en otra parte de la ciudad apenas llega a la mitad³. La forma de desarrollo pluriactivo de un barrio como Lomas apuesta con los múltiples vínculos y actividades de sus residentes.

3 Estos porcentajes, tanto en Lomas como en los otros barrios, a lo mejor subestiman la múltiple residencia de los vecinos, por dos razones: (1) Es probable que una cierta cantidad de vecinos que tienen residencias fuera del barrio han respondido negativamente, ya que hay un prejuicio contra vecinos que “no viven” en el barrio; y (2) La pregunta de la encuesta solamente preguntó por residencia en otra parte de la ciudad. Suponemos, basado en la recolección de datos cualitativos, que el número sería considerablemente más alto si se hubiera incluido residencias fuera de la ciudad en la pregunta.

El investigador Cristóbal Kay (2007) habla de la diversificación de los ingresos de los hogares campesinos con miembros de sus familias trabajando en actividades como artesanías, microempresas manufactureras, comercio y turismo: “En la búsqueda del sustento de vida, un número creciente de pobladores rurales emprenden migraciones temporales o a más largo plazo a otras áreas rurales o hacia áreas urbanas. También las migraciones a otros países, donde la mayoría trabaja como asalariados, son cada vez más frecuentes” (Kay 2007: 34). Pero es importante recalcar que no es simplemente el conjunto de necesidades y carencias del residente periurbano individual el que causa y define las condiciones de sus diversas actividades y su decisión de emigrar. Éstos se canalizan por los imaginarios que se van creando en la sociedad, en este caso, de los migrantes al exterior.

Visto como un proceso social, la migración atraviesa las prácticas sociales en el lugar de origen. En una entrevista, el investigador Leonardo de la Torre habló de las particularidades en la historia migratoria de los colectivos que influyen en la decisión de migrar, el nivel de preparación y las capacidades para “manejar los efectos de las dinámicas migratorias”. Identifica que en algunas zonas rurales “la red te llama”. Es decir, la tradición de migrar es tan fuerte que lo comunitario “también es causa para que el proyecto geográfico de la migración se reproduzca”. En su caso de migrantes del pueblo de Arbieta, la red también cuida a sus integrantes:

En la migración rural a Estados Unidos que yo he estudiado [...] nunca jamás vas a encontrar un arbietaño pidiendo trabajo en la calle, pero sí puede ser que encuentres un cochabambino del barrio de allá pidiendo trabajo porque sus redes no le han garantizado el trabajo, y eso genera obviamente muchos más problemas para garantizar los recursos.

En particular, en las zonas periurbanas la falta de prácticas colectivas en torno a la emigración y sus efectos se ve en la vulnerabilidad de migrantes que se han ido y en las experiencias de los que se han quedado. Así es que una vecina de la zona sur expresó con respecto a su esposo en el exterior: “Realmente yo le he dicho que me ayude con los estudios de mis hijos, porque ahora los cuatro están estudiando. Él me dice sí, te voy a ayudar, pero no tengo papeles, trabajo y no me pagan, y no puedo ir a ningún lado a quejarme, así que trabajo gratuitamente”.

Ésta es una de las razones que es esencial indagar en la construcción de comunidad para entender las formas que toma el proceso

migratorio en distintos lugares. No hay efectos de la migración internacional que no se definen por la forma de comunidad local que exista. Es decir, la migración ni puede ser vista únicamente como decisión familiar ni como efecto directo de estructuras desiguales, sino que se tiene que entender como parte de cómo se va definiendo un colectivo local. En el caso de Arbieto, la migración externa se ha vuelto parte explícita de la construcción de comunidad. Refuerza la idea del colectivo a la vez que vacía el pueblo de sus residentes.

En Lomas de Santa Bárbara, en contraste, la migración al exterior se debe entender en el contexto de los múltiples locales de anclaje de los vecinos y la pluriactividad de su desarrollo. Es decir, la posibilidad de que la migración internacional contribuya al fortalecimiento del barrio depende del reconocimiento de las maneras en que la comunidad y su desarrollo se vinculan a las asociaciones entre las personas. Es por esta razón que un enfoque en la migración internacional de los vecinos de Lomas nos puede ayudar a ver cómo las migraciones internas y externas crean y refuerzan redes en vez de una comunidad local en su conjunto.

La migración y las exclusiones

La vivencia de migración que identificamos en Lomas se contrapone a otras experiencias de migración. En las experiencias de ciudadanos profesionales, por ejemplo, la migración posibilita el acceso a oportunidades globales que carecen del mismo contexto nacional por su posición periférica. Desde esta perspectiva, la ciudad se posiciona como nexo por excelencia a lo global, tal como se elabora en el concepto de ciudades globales de Saskia Sassen (2001). Así visto, el acceso a la ciudad y a lo global a través de la migración abre oportunidades de desarrollo individual, familiar, y ahora colectivo, con los intentos internacionales y nacionales de mejorar la gestión planeada de las remesas. Un boliviano que reside ya muchos años en los Estados Unidos expresó: “Estamos integrados a esta sociedad. Vamos allá, también estamos integrados allá. [Eso es el] bi-culturalismo, binacionalismo: poder estar en ambos”.

Pero tal transnacionalismo requiere que se tenga legitimidad en ambos mundos, precisamente el “poder” de ser incluido en los dos lados. Lo que esta perspectiva no toma en cuenta son las diferentes condiciones de la migración para personas que son excluidas de lo ciudadano por los propios imaginarios y escalas de valoración de la ciudad. La legitimidad del transnacionalismo no solamente depende

de tener las visas apropiadas, sino de toda una serie de otras cualidades valorizadas en cada ámbito. Las valorizaciones del ámbito de la clase media y de los medios masivos estadounidenses han tenido una influencia enorme en el ámbito boliviano ciudadano. Así es que la migración internacional desde lo rural, desde lo periférico y desde lo urbano constituyen prácticas y fenómenos netamente distintos.

Organismos internacionales apuestan por la posibilidad del co-desarrollo a través de la migración externa. En el modelo de co-desarrollo, se busca facilitar que la migración internacional no solamente beneficie al país receptor con la labor de los migrantes, ni que se queden los beneficios económicos con los individuos migrantes y sus familias. Políticas de co-desarrollo fomentan estrategias para que la migración internacional también sea aprovechada por las comunidades y por los países de origen de los migrantes. Pero en un barrio como Lomas, es difícil imaginar cómo la migración al exterior podría ser de utilidad para los vecinos del barrio. Igual que en otras partes de la ciudad, domina la imagen pública de la migración como oportunidad de inclusión en el mundo globalizado. En esta imagen, uno solamente tiene que trabajar, estudiar, maximizar su potencial individual, y podrá entrar al círculo mágico del capital. A la vez, por la misma aceptación de problemas económicos como asuntos “privados”, aunque sea a nivel de manzano, el colectivo pierde la posibilidad de retar las exclusiones implícitas en esas valorizaciones.

La debilidad interna del colectivo de Lomas a nivel barrial y de su dirigencia impulsa su búsqueda de apoyo en instituciones externas, sean éstas autoridades públicas u organizaciones no gubernamentales. En respuesta a los problemas perpetuos de titulación de tierra, por ejemplo, algunos vecinos se organizaron para apelar al mismo presidente de la República para declarar las tierras suyas por usufructo. Sin embargo, debido a la misma fragmentación barrial que caracteriza la comunidad, la propuesta generó polémica y debilitó la acción colectiva.

Al estar sus pobladores entre los más marginados de los sistemas socio-culturales de la ciudad, también tienen menor acceso a las herramientas que se requieren para incidir en decisiones y mecanismos municipales. En contraste con barrios más profesionalizados, los vecinos de Lomas tienen un bajo promedio de educación formal⁴. Esto dificulta la incidencia en la gestión municipal y en trámites legales.

⁴ De acuerdo a la encuesta realizadas en 2007, menos de un cuarto de los residentes adultos de Lomas de Santa Bárbara alcanzaron algún nivel de instrucción de secundaria.

Lomas de Santa Bárbara sigue sin personería jurídica de Organización Territorial de Base (OTB). Esto excluye al barrio de los recursos económicos de co-participación que se les otorga a todas las OTB para la ejecución de sus propios Planes Operativos Anuales. El barrio tampoco ha tenido una dirigencia con impacto a nivel distrital o municipal, a diferencia de otros barrios cuyos dirigentes han sido líderes en cargos distritales o municipales. Parecidas relaciones ambivalentes tiene el barrio con organizaciones no gubernamentales, buscando su apoyo mientras la falta de cohesión dificulta que se concrete aquel apoyo que se busca.

Por su poco desarrollo en infraestructura y su falta de cohesión colectiva, no es de sorprender que la visión colectiva de desarrollo en el barrio no se haya elaborado más allá del horizonte de los servicios básicos. Un dirigente del barrio explicó:

Este año queremos hacer este empedrado [...]. Más importante es empedrado porque por eso no llegan las movilidades, apenas un servicio tenemos nomás [...]. Algunas (personas) no viven (en el barrio) porque no hay luz, por ese motivo. Sus casitas, no más, tienen aquí. Como sus hijos están en otros colegios [...] no está viviendo mayormente y por el colegio.

La pluriactividad de los pobladores del barrio y su inclusión en otros colectivos y redes (en manzanos, redes campo-ciudad, en vínculos internacionales de migración, etcétera) resta fuerza al barrio mismo para definir y lograr objetivos comunes, sobre todo porque los mecanismos urbanos refuerzan el tipo de comunidad y desarrollo dominantes. En contraste a Lomas, otros barrios de la zona sur que mejor se enmarcan en el desarrollo obrista municipal se reconocen “por su buena organización y dirigencia”, como se describió a un tal barrio en el periódico local (*Los Tiempos*, 27/08/2007). Mientras que ningún líder de Lomas ha tenido un puesto formal fuera del barrio, varios dirigentes de barrios colindantes han sido representantes a nivel distrital y municipal. En este sentido, la exclusión que experimenta Lomas de Santa Bárbara por las estructuras globales y ciudadanas fácilmente se vuelve parte de un círculo vicioso. Parece, entonces, que la construcción de una comunidad que depende de redes y localidades dispersas implica a la vez un obstáculo para entrar en los patrones de organización municipales y para la inclusión en sistemas globales.

Sin embargo, es sumamente importante notar que las mismas características de una comunidad conformada por múltiples espacios resultan

en formas sociales locales más equitativas. En este barrio donde la pluriactividad empuja a una diversidad de formas laborales, la migración al exterior no crea las mismas exclusiones que se ven en los otros barrios, entre migrantes y no-migrantes, entre los más ricos y los más pobres. En cada uno de los otros barrios de estudio, se evidencian nuevas casas de ladrillo detrás de muros altos, construidas con remesas enviadas por familiares en el exterior. Éstas contrastan con las casitas pequeñas de adobe que también son característica de los barrios de la zona sur. Más de una vez en la zona se escuchó la opinión de que la migración ha aportado al aumento de las inequidades económicas entre vecinos. Dice un dirigente de un barrio cerca de Lomas de Santa Bárbara: “Como familia e individuo [la migración] mejora la situación, pero a lo mejor causa más miramientos y discriminación, a un nivel social... los efectos negativos, están en lo psicológico, en los modelos mentales. Y son cambios irreversibles. El otro vecino se queda impotente”.

En Lomas, sin embargo, no existen estas mismas diferenciaciones tan tangibles entre vecinos, sobre todo en las construcciones de casas que se ven en otros sectores. Y no es únicamente porque los migrantes de Lomas en el exterior son más vulnerables y ganan menos, aunque eso también forma parte de la dinámica. Más bien, la misma configuración dispersa del colectivo de Lomas abre otros espacios para inversiones (de dinero, de tiempo, etcétera). Ahí reside el valor de múltiples locales de anclaje y de la pluriactividad: en su articulación de localidades y formas distintas que no estimulan la sobrevalorización de un “centro” y sus patrones de desarrollo sobre otras localidades “periféricas”.

El hecho de que exista poca diferenciación de estatus entre familias con migrantes y aquellos sin migrantes tiene más importancia aún cuando notamos que las desigualdades dentro del barrio son menos patentes que en otros barrios. En un estudio anterior sobre la participación en barrios de la zona sur (Cielo y Céspedes 2008), notamos que inquilinos, no-profesionales, y vecinos con baja educación en Lomas de Santa Bárbara participan al igual que sus vecinos con mayor escolaridad, y hasta llegan a ser dirigentes. El barrio también se destaca por no mostrar tendencia alguna a estigmatizar a sus jóvenes. En otros barrios, los vecinos comentan repetidamente que “los jóvenes se juntan en pandillas”, o que “los jóvenes mucho toman. De 12, 14 años ya están tomando (consumen bebidas alcohólicas)”. Un joven de la zona sur opinó al respecto que “los medios de comunicación solo sobresaltan las cosas negativas, nunca se ocupan de las cosas positivas que hacen los jóvenes hijos de migrantes”. En contraste,

los residentes jóvenes de Lomas de Santa Bárbara, al igual que sus vecinos con menos educación y con menos ingresos, se sienten más representados por sus autoridades locales que sus pares en los otros barrios de estudio.

La exclusión que viven los vecinos de Lomas en sus contactos con ámbitos e instituciones formales y estructuras socioeconómicas es inseparable de la conformación local de su comunidad, su perspectiva pluriactiva de desarrollo y su particular forma de integrar migración interna y externa a su colectivo. Pero también hemos visto que estas configuraciones implican mayor equidad. ¿Podríamos vislumbrar en ellas pistas para construcciones alternativas y más incluyentes de comunidad, desarrollo y migraciones?

Posibilidades para comunidades de múltiples localidades

Hemos observado en este artículo las características particulares de una comunidad anclada en múltiples espacios. En Lomas de Santa Bárbara, se ve una comunidad periurbana que mantiene fuertes vínculos con otros espacios, sobre todo con lo rural. Asimismo, el desarrollo colectivo en el barrio toma forma de un desarrollo pluriactivo, que se manifiesta en la productividad diversa de los vecinos, sectorial y espacialmente. La migración al exterior, en vez de fomentar el desarrollo consolidado de la comunidad como se espera en modelos de co-desarrollo, refuerza las varias asociaciones que tienen los vecinos entre ellos mismos y con otras redes, de acuerdo con las características comunales del barrio.

Lo comunitario de Lomas también se expresa en el nivel “básico” de los manzanos. Vimos que esta dinámica organizacional y social resta fuerza del colectivo barrial, donde más bien prevalecen las divisiones, reforzadas por el carácter fragmentado de la vecindad. Sin embargo, también hemos observado que al tratar temas de preocupación personal a nivel del manzano, las poblaciones vulnerables —los más jóvenes, los menos educados formalmente, los con menores ingresos— se sienten más incluidos dentro de la comunidad que en otros barrios con residentes propietarios más profesionales y ciudadanos.

Al vivir en un barrio “menos desarrollado” económicamente y en cuanto a servicios sociales y básicos, los vecinos de Lomas se encuentran especialmente vulnerables por su carencia de capital económico o de acceso a las redes bien posicionadas del mundo globalizado. El reto, entonces, para el desarrollo del barrio y de sus pobladores no es averiguar cómo enmarcarse en los paradigmas de desarrollo urbanos

y globales establecidos. Es una carrera en que un barrio como Lomas siempre empezará detrás, posicionado así por su definición a través de sus desventajas y carencias. Tal vez una pregunta más adecuada sería: ¿En qué medida el vínculo con lo rural —por ejemplo, la estrategia rural de pluriactividad o de buscar múltiples opciones productivas— puede constituir una fuerza constructiva de la comunidad?

¿Puede ser que la exclusión del barrio de ámbitos e instituciones formales y estructuras socioeconómicas desemboca en la posibilidad de construcciones alternativas y más incluyentes de comunidad? En conjunto con los vecinos, se tendría que ver cómo trabajar en la consolidación de la comunidad barrial y su definición de su desarrollo, para lo cual se tendría que identificar y partir de los mecanismos barriales que producen este sentido de inclusión. Ser parte de la periferia significa estar al borde de la inclusión, ser parte de algo, pero apenas en los márgenes. Para los que viven en las periferias urbanas, su localización les posiciona en una suerte de limbo entre la inclusión y la exclusión en la ciudad. El caso de estudio de Lomas de Santa Bárbara nos muestra que las configuraciones particulares de las comunidades periurbanas trazan las posibilidades de conformaciones distintas de comunidades ancladas en múltiples espacios que retan la configuración de centros valorados con periferias marginados.

Bibliografía

- Antequera, Nelson (2007) *Territorios urbanos. Diversidad cultural, dinámica socio económica y procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba*, Plural Editores, La Paz.
- Blanes, José (2006) *Temas de debate. Boletín del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia*, Año 3, Noviembre de 2006, PIEB, La Paz.
- Calisaya Hinojosa, Victor Hugo (s/f) “El Movimiento Sin Techo, loteadores y debilidad estatal” en <http://www.bancotematico.org/archivos/documentos/24271.pdf>.
- Cielo, Cristina y Céspedes, Redner (2008) *Participaciones periurbanas. Del control social a los movimientos sociales*, Plural Editores, La Paz.
- Da Gama Torres, Haroldo (2008) “Social and Environmental Aspects of Peri-Urban Growth in Latin American Megacities” Ponencia presentada en el United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development New York.
- De la Torre, Leonardo (2004) “Volveré para regar el campo. Migración transnacional, inversión productiva y calidad de vida”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Becas CLACSO/CROP, . La Paz.

- Giarracca, Norma, Aparicio, Susana y Gras, Carla (2001) "Multiocupación y pluriactividad en el agro argentino: el caso de los cañeros tucumanos" en *Desarrollo Económico*, Vol. 41, No. 162,. Pp. 305-320.
- Instituto Nacional de Estadística (2001) *Censo de Población y Vivienda* en <http://www.ine.gov.bo>.
- Kay, Cristóbal (2007) "Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina" en *Iconos Revista de Ciencias Sociales*, No. 29, (Quito, septiembre 2007), pp. 31-50.
- Los Tiempos (2007) "2 OTBs aplican sus propias soluciones para tener agua" en *Los Tiempos*, 27 de agosto, Cochabamba.
- Márquez, Raúl (2005) "Desorden, barbarie y peligro: La construcción de la marginalidad del favelado en Brasil" en *Gazeta de Antropología*, no.21 en (http://www.ugr.es/~pwlac/G21_13Raul_Marquez_Porras.html).
- Ministerio de Desarrollo Sostenible (2004) *Estudio de la migración interna en Bolivia*, INE-CEPAL-USAID, La Paz.
- Ramírez, Alejandra (2007) "Comentarios al documento en borrador 'Los efectos y consecuencias socio-económicos, culturales y políticos de la migración internacional en los lugares de origen de los migrantes bolivianos'", Taller PIEB/CESU, Cochabamba, 18 de junio.
- Sassen, Saskia (2001) *The Global City*, Princeton University Press, New York, London, Tokyo. Princeton.
- Siles, Augusto (2007) "Comentarios al documento en borrador 'Los efectos y consecuencias socio-económicos, culturales y políticos de la migración internacional en los lugares de origen de los migrantes bolivianos'", Taller PIEB/CESU, Cochabamba, 18 de junio.
- Stark, David (1996) "Recombinant Property in East European Capitalism" en *American Journal of Sociology*, Vol. 101, pp. 993-1027.
- Stephenson, Marcia (1999) *Gender and Modernity in Andean Bolivia*, University of Texas Press, Austin.

Ciudadanía política callejera

Articulación de múltiples espacios y tiempos políticos en La Ceja de El Alto

Juan Manuel Arbona

El Alto se ha convertido en un centro simbólico de las luchas sociales en Bolivia. Es una ciudad diversa, donde conviven migrantes de diversas regiones del país con múltiples historias y memorias de asentamiento y participación en luchas locales, regionales y nacionales. La Ceja, el corazón de esta joven ciudad, ha sido testigo de la construcción de una noción de ciudadanía política callejera en donde se articulan múltiples espacios y tiempos que han sido la fuente histórica de “pánico de cada gobierno frente a una posible alianza entre izquierda y campesinado” (Harris y Albó 1984: 89).

Esta zona vive con un constante flujo de personas que circulan para comprar, hacer trámites, o están en dirección a otras zonas de El Alto o La Paz. La gran mayoría del transporte colectivo de El Alto pasa por esta zona. Los “voceadores” compiten con los vendedores ambulantes. En las aceras, multitud de comideras invitan a los transeúntes a deleitarse con sus comidas. Jóvenes con chalecos verdes y un teléfono celular amarrado a su muñeca deambulan por las calles ofreciendo el “servicio de llamadas”. Los *paqpakus*¹ ofrecen todo tipo de productos, desde una fórmula para limpiar CDs hasta pomadas naturales para curar el reumatismo. Otros venden mapas de El Alto y panfletos sobre la vida de Evo Morales o predicán su interpretación de la Biblia. Esta gran masa de transeúntes, vendedores, *paqpakus*, cleferos, ladrones y borrachos camina en medio de rótulos y carteles, construcciones a medio terminar y una maraña de cables que se encuentran en las esquinas. Es el caos cotidiano que define La Ceja.

1 Este término aymara significa “hablador”, y designa a las personas que venden promesas y fantasías de una mejor vida.

El edificio de la Alcaldía Municipal es el centro de La Ceja. Este edificio fue quemado en dos ocasiones (febrero del 2002 y febrero del 2003) en manifestaciones de furia ante la frustración que les han producido el Estado y sus políticas. A pocos pasos de la alcaldía quemada se concentra un grupo de vendedores de libros nuevos y usados de los más diversos temas: desde textos de aritmética y química para estudiantes de colegio, pasando por leyes y decretos, hasta libros de política indianista de Fausto Reinaga y las obras de Marx y Engels.

Los vendedores de libros también ofrecen sus propios trabajos y los de otros alteños en los que autores locales interpretan y resumen datos sobre temas coyunturales como la distribución de tierras y la producción e industrialización de hidrocarburos, o presentan una línea de análisis para la organización social.

En las tardes, cuando el quemante sol comienza a caer y hombres y mujeres emprenden el retorno a sus hogares después de una jornada laboral, se forman círculos de transeúntes alrededor de alguno de los vendedores de libros. Éstos, con entusiasmo y convicción, tratan de vender sus productos llamando la atención con sus discursos. El 'evento' comienza cuando uno de los vendedores se lanza con un discurso sobre las injusticias históricas y contemporáneas, sobre la política boliviana, sobre la historia de las luchas indígenas, o con propuestas para una organización política a partir de la cosmovisión indígena o el socialismo ortodoxo. En pocos minutos se forman grandes círculos de oyentes que a medida que transcurre el tiempo hacen preguntas, retan o complementan los discursos o hacen los suyos propios. Los debates se acaloran y el público adquiere un papel cada vez más protagonista. Los temas cambian con la rapidez con que se dicen, celebran o refutan. Pero a pesar de la diversidad de temas presentados y debatidos, estos discursos tienen dos denominadores en común: la memoria de luchas sociales de los excluidos y el deseo de construir un país (o ciudad) en el que ellos se sientan parte activa.

En este ensayo se presentan algunas reflexiones sobre las formas en las que estas personas construyen y ponen de manifiesto una ciudadanía política activa a partir de su apropiación cotidiana de la calle. Sostenemos que este espacio es una expresión activa de la forma cómo en El Alto convergen y se articulan múltiples espacios y tiempos de lucha y de construcción de posibilidades (con sus respectivos límites y contradicciones). Estos espacios de discurso y debate callejero son fundamentales en la construcción de redes sociales y en la articulación de saberes y memorias que simultáneamente expresan y trascienden tiempos y espacios desde los que se construyen

imaginarios y horizontes políticos de derechos y deberes ciudadanos. En estos espacios, los alteños pretenden comprender la situación en la que viven sin olvidar de dónde vienen, ventilan sus broncas y conciben un futuro diferente. En estos encuentros se construye una ciudadanía política a partir de la apropiación de espacios públicos para debatir situaciones políticas locales y nacionales. Ésta fue *una* de las semillas para las movilizaciones de rechazo al recrudescimiento del proyecto neoliberal a finales de la década de los noventa. En este sentido, este espacio de discurso y debate articula múltiples historias y memorias de vivencia y lucha en zonas agrarias y mineras que definen una ciudadanía política callejera alteña.

Comenzamos con un panorama general sobre la ciudad de El Alto, para luego presentar diferentes marcos teóricos sobre nociones de ciudadanía en el contexto neoliberal y urbano, con el propósito de comprender cómo éste ha sido articulado por una “matriz civilizatoria” que entrelaza los hilos históricos coloniales, republicanos y neoliberales (Rivera 1993). Estas secciones sirven de plataforma para organizar la discusión sobre los procesos de construcción y manifestación de una ciudadanía política callejera en La Ceja y sus implicaciones para la ciudad de El Alto.

La metodología de la investigación consistió en la observación y la participación activa en estos espacios entre los meses de marzo a junio del año 2006 y en la realización de entrevistas abiertas e informales con varios de los participantes —activos y pasivos—, sobre todo en horas de la noche. Por lo demás, este trabajo hace parte de un estudio más amplio sobre las formas de construcción y organización de espacios políticos en El Alto.

El Alto: convergencia de procesos e historias

La llamada “guerra del gas”, en octubre del 2003, marcó un hito social y político en el país. El Alto fue su epicentro y sus residentes los actores principales. Este protagonismo político tiene sus raíces en la sangre derramada: 44 de las 63 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas cayeron en El Alto (Auza 2004). Éste fue uno de los momentos históricos determinantes de la “revolución democrática y cultural” que llevaría a Evo Morales a la presidencia de Bolivia (Stefanoni y Do Alto 2006). Aunque se podría ver el papel de El Alto en las jornadas de octubre como una “explosión social” explicada por factores externos (i.e. neoliberalismo, propuesta de exportación de gas a Chile, etcétera), las particularidades sociales y culturales de esta ciudad son

un factor de suma importancia. La población de esta ciudad, marginada e invisibilizada por generaciones, sometida a prácticas de ciudadanía excluyente a la sombra del discurso de las oportunidades propio de la democracia liberal, del libre mercado y de la multiculturalidad, sale a la superficie política para demandar un nuevo orden político. Esta demanda comienza a tomar cuerpo desde la construcción de esta ciudad, donde indígenas y mineros trabajan juntos no solo en la construcción de sus barrios, sino también en la construcción de una noción de ciudad distinta, cuyo punto de referencia principal no es el orden social de las ciudades coloniales y republicanas.

El Alto es una ciudad joven. Antes de constituirse en ciudad en 1988 al independizarse de la ciudad de La Paz², su historia fue la de las comunidades indígenas y haciendas coloniales (Arbona 2009). Las haciendas y comunidades terminaron convirtiéndose en barrios marginales que conectaban La Paz con las zonas rurales y mineras del departamento de La Paz. Los sucesivos asentamientos de migrantes llegados de estas zonas desde mediados de la década de los años ochenta principalmente convirtieron a este barrio marginal en un nuevo centro urbano (Sandoval y Sostres 1989). El Alto ha sido el destino de miles de mujeres y hombres que allí llegan guiados por la promesa de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas que ofrece la ciudad. Fue el destino de miles de familias mineras “relocalizadas” por el cierre de sus fuentes de trabajo a raíz de la implementación del proyecto neoliberal en 1985³. Es también el destino de miles de jóvenes campesinos/indígenas, principalmente de las provincias del altiplano paceño, que buscan alternativas a la situación que viven en sus zonas rurales. Gran parte de los productos agropecuarios e industriales de las zonas rurales se comercializan en El Alto, en tránsito hacia los diferentes mercados de La Paz.

Al mismo tiempo, El Alto es un espacio de paso por el que circulan personas y productos; un espacio en el que las identidades son apropiadas, rearticuladas y rechazadas; en el que las visiones de futuro están ancladas en las múltiples formas de definir un pasado cuyo fundamento para organizar sus zonas es la memoria colectiva de historias de migraciones y asentamientos. En fin, hablar sobre El Alto

2 En el año 2001 esta ciudad tenía una población oficial de 649.958 (INE 2001). Estudios recientes estiman que la población de El Alto se acerca a los 900.000, sobrepasando a la ciudad de La Paz (Albó 2006).

3 El Decreto Supremo 21060 fue el mecanismo legal mediante el cual se implementó el proyecto neoliberal en Bolivia. Una historia exhaustiva del neoliberalismo en Bolivia se encuentra en Kohl y Farthing (2007).

supone asumir esta ciudad como parte y producto de los procesos socioeconómicos vividos en Bolivia en las últimas décadas, y propone el reto de analizar el tema de las identidades políticas —indígena y minera— no como variables aisladas sino como procesos que se entrelazan y constituyen en el tiempo y espacio.

El Alto es un punto de convergencia de contradicciones, promesas y procesos contestatarios en los que lo local y lo global se encuentran en la vida cotidiana⁴. Las relaciones sociales y las organizaciones políticas locales, por un lado, se funden con las historias y las memorias “traídas” por los emigrantes llegados a esta ciudad (Albó *et al.* 1983; Sandoval y Sostres 1989); por otro, la forma en que las actividades económicas se entrelazan con lo cotidiano sirve de nexo entre los requisitos del Estado frente a la economía global del mercado, la infraestructura institucional que salvaguarda su estabilidad y las expectativas que sobre el Estado tiene la sociedad civil (Arbona 2003). En este sentido, la precariedad económica es uno de los principales ejes que informan cómo las alteñas y los alteños construyen espacios políticos sobre los cuales se organiza y construye la ciudad.

La articulación política de esta precariedad social tiene sus raíces en dos vertientes de identidad que definen la ciudad: la indígena —principalmente aymara— y la minera. El Alto articula estas vertientes político-culturales, origen de identidades urbanas y de la organización de espacios políticos. Por un lado, las migraciones campesinas-rurales han sido una fuente de la construcción de un imaginario indígena en El Alto. Según Mamani, “El Alto es una ciudad síntesis de lo aymara o indígena-popular que bajo esas condiciones no era ajena a la indignación comunal de los *ayllus* movilizados en contra del Estado blanco-mestizo” (Mamani 2005: 39). La otra vertiente ha sido la migración minera, que comenzó durante la década de los setenta y tuvo su auge a mediados de la década de los ochenta con la “relocalización”. Según Crabtree, “el cierre de las minas ocasionó la dispersión de los trabajadores mineros por todo el país, y junto a ellos se propagaron sus tradiciones políticas y su experiencia organizativa” (2005: xviii). Estas historias y memorias ilustran cómo y en qué condiciones se ha ido construyendo esta ciudad y los horizontes políticos de lucha (Appadurai 2002). También son las plataformas sociales sobre las cuales se construye sentido de ciudadanía. En este contexto histórico y social se pueden situar los espacios de debate

4 Estos encuentros ocurren en forma material y simbólica. Dichos procesos en el contexto latinoamericano han sido estudiados en detalle por Babb (1999) y García Canclini (1990).

de La Ceja y la forma en que se ha ido construyendo una ciudadanía política callejera.

Ciudad y acción social: perspectivas desde la ciudadanía

Los procesos históricos que promueven simultáneamente la integración y la segregación, el privilegio y la exclusión, están plasmados en la ciudad, pues aquéllos inciden de manera profunda en la forma en que ésta se organiza física y socialmente. De estas tensiones surgen conflictos que se relacionan con las luchas de quienes tienen derecho a disfrutar de los beneficios de la ciudad. Estos procesos producen la rearticulación de identidades que convergen en espacios urbanos —de exclusión— y alimentan la lucha por el derecho a la ciudad (Lefebvre 1995; Mitchell 2003). Estos procesos históricos establecen, legitiman y naturalizan espacios de privilegio y exclusión en los que a su vez se forman y se consolidan espacios políticos locales, ya sea de demanda o protección de la provisión de servicios básicos, y en los que se plasman demandas políticas de reconocimiento institucional. Sobre estas demandas y sobre la forma en que son definidas se construyen los horizontes políticos de ciudadanía.

Uno de los trabajos fundacionales sobre el tema de ciudadanía es el de T.H. Marshall (1964). Éste analiza los procesos históricos de extensión de derechos ciudadanos en Inglaterra y las tensiones que surgen a medida que se marca la organización de clases sociales. En la definición de ciudadanía, Marshall identifica tres elementos básicos en términos de los derechos que conceden los procesos de “ciudadanización”: civiles, políticos y sociales. Los derechos civiles, que incluyen la libertad de expresión, propiedad privada y equidad frente a la ley, son un prerrequisito para la promoción de los derechos políticos que implican el derecho a la participación —directa o indirecta— en todas las esferas del gobierno. La organización histórica de estos dos elementos es la base de los derechos sociales, que incluyen “el derecho a un mínimo bienestar económico y seguridad, el derecho a participar completamente del patrimonio social [...]” (Marshall 1964: 71-72).

Marshall reconocía las limitaciones de este precepto: los ideales de equidad, enmarcados en la construcción de ciudadanía, contienen una contradicción inherente porque dependen de la evolución de los mercados capitalistas. El derecho a la propiedad privada, como uno de los elementos para la organización de los derechos civiles y políticos, ha sido en la práctica una de las limitaciones de la ciudadanía plena en América Latina (Roberts 1996). En este contexto regional, las

inequidades económicas determinaron las formas en las que se podía acceder a los derechos sociales (Dagnino 2003). Por lo tanto, existe una brecha entre los derechos formales y las prácticas cotidianas, en las que los grupos con poder económico tienen todos los privilegios y muy pocas responsabilidades. Esto es evidente cuando se compara la organización de las ciudades latinoamericanas con la representación política en los espacios políticos formales.

En el contexto latinoamericano, la exclusión y la discriminación, legitimadas por el Estado, no solo han tenido una dimensión económica (de clase) sino también una dimensión étnica y racial. Más allá de las tensiones generadas por los asuntos de clase, la historia colonial y republicana latinoamericana ha sido clave en la organización de las luchas sociales (Condarco 1982; Thomson 2006). Para Rivera (1993), el proyecto colonial tuvo un efecto estructurador en las diferentes facetas históricas del Estado y en la forma en que se ha definido el derecho a tener derechos. En este sentido, “la ciudadanía es un ‘paquete cultural’ que excluye a quienes no están encuadrados en los modelos occidentales” (Rivera 1993: 106). Este paquete cultural se basa en el legítimo “ejercicio del poder a través de estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la exclusión de ciertos grupos sociales” (McEwan 2005: 972). Quijano (2000) se refiere a esto como la “colonialidad del poder”, que ha trascendido las diferentes formas de organización estatal, incluyendo los procesos de democratización. Estos dos procesos —económico y cultural— confluyen en la forma en que el Estado, como principal proveedor de derechos ciudadanos, ha construido las prácticas y las instituciones sobre las cuales se forjan los derechos de ciudadanía. En este sentido, el Estado dirige un proceso de ciudadanización definiendo los “términos públicos de la formación, expresión y movilización de identidad nacional política” (Yashar 2005: 5). Pero como lo indica Rivera, este proceso de ciudadanización en el contexto boliviano ha servido para reproducir y reforzar las jerarquías sociales establecidas durante la Colonia, articulando etnia-raza y clase en las reiteraciones de los horizontes de ciudadanía.

La ciudadanización no logró transformar, realmente, las conformaciones de casta en conformaciones de clase, pues entre ambos horizontes se produjo una articulación colonial-civilizatoria que permitió la precaria introyección coactiva del horizonte cultural de la ciudadanía en el corazón y en el cuerpo de los trabajadores indio-mestizos. [...] La ciudadanización minera no alcanzó, por lo tanto, a homogeneizar culturalmente al conjun-

to de la población trabajadora en un único molde ciudadano, mestizo, racional y productivo. Por el contrario, reprodujo sutiles subordinaciones y discriminaciones internas entre los diversos eslabones de esta cadena de colores raciales y culturales, y entre ellos y el mundo rural-indio circundante (Rivera 1993: 75).

Estas construcciones históricas de ciudadanía tuvieron su última reestructuración con la implementación del proyecto neoliberal (Kohl 2000). Los procesos de ese proyecto, en sus generaciones de repliegue y despliegue del Estado, tuvieron importantes consecuencias en la promoción de una particular noción de ciudadanía (Peck y Tickell 2002). Este “doble movimiento” tiene una primera etapa en la que se critica y subordina el papel del Estado a favor del mercado, para después abrir espacio al discurso de gobernabilidad. Este discurso promueve una mayor participación de la ciudadanía y la importancia de los derechos humanos, aunque los fundamentos históricos y económicos que habían marginado y excluido a la gran mayoría se mantienen intactos (Hindess 2002). Uno de los efectos de estos procesos de reestructuración “bajo la inspiración neoliberal, [es que] la ciudadanía ha sido entendida y promovida como la simple integración del individuo al mercado” (Dagnino 2003: 212). En otras palabras, los derechos de ciudadanía se ejercen en la medida en que las personas puedan participar efectivamente en el mercado. Esos intentos de transformar la concepción de ciudadanía —lo que Schild (1998) llama “ciudadanía de mercado” y Hindess (2002) “ciudadanía neoliberal”— tienen sus expresiones más explícitas en las ciudades.

Ciudad y ciudadanía

En la ciudad se plasman los procesos históricos de construcción de ciudadanía. Castells presenta un punto de partida para el análisis de las ciudades. Según el autor, las ciudades

son productos históricos, no solo en su materialidad física, sino también en sus significados culturales, el papel que juegan en la organización de la sociedad, y las vidas de los residentes. La dimensión básica en la transformación urbana es de debate conflictivo entre clases y actores sociales sobre el significado de la ciudad, el significado de espacios en la organización de estructuras sociales, y el contenido, jerarquía y destino de las ciudades en relación a la estructura social (Castells 1983: 302).

La lectura de ciudades como “productos históricos” en los que se debaten significados de la ciudad y los derechos a ella es un punto de partida fundamental para analizar cómo se materializan los procesos de discriminación y exclusión en las urbes y cómo se articulan las luchas por pertenecer a los espacios urbanos. Castells sugiere que los procesos históricos crean privilegios y exclusiones que se expresan en el espacio y en los conflictos que se derivan de estas inequidades. Estas últimas producen a su vez la rearticulación de las identidades políticas que convergen en los espacios urbanos —de exclusión—⁵ y que alimentan la lucha por el derecho a la ciudad. ¿Cómo se establecen esos derechos? ¿Qué formas de institucionalidad los legitiman? Y más importante aún: ¿quiénes luchan por los derechos a la ciudad y cómo? En parte, mi argumento sostiene que es justamente a través de estos procesos históricos y de la forma en que se manifiestan y se materializan en el espacio como se establecen, legitiman y naturalizan los espacios de privilegio y exclusión; es allí donde se forman y se consolidan los espacios políticos locales, ya sea de demanda, de construcción o de protección de ciudadanía.

La construcción histórica de espacios urbanos en América Latina, y particularmente en los Andes, responde a los sistemas de producción, extracción o comercialización colonial, que requerían concentración de población en espacios determinados en los que se plasmaban y reforzaban las jerarquías sociales⁶. Esto hacía que se formaran ciudades duales en las que bajo un mismo régimen político se mantenía una tensa convivencia de espacios privilegiados y de espacios de desamparo⁷. En este sentido, la noción de dualidad se manejaba principalmente en el plano discursivo, ya que existía una íntima interacción e interpelación entre los múltiples espacios urbanos y sus periferias agrícolas/rurales⁸. Paralelamente, la concentración de población suponía diferentes formas de vivir y de convivir en y con la ciudad, y diversas formas de establecer y reproducir relaciones de poder plasmadas en el espacio urbano. Estos procesos

5 Lo que es muy diferente a afirmar que estos territorios sean simples contenedores de identidades. Para una crítica de esta visión de espacios, véase Harvey (1997, 2009).

6 Esto es evidente en las primeras ordenanzas de planificación urbana que recibió Pedrarias Dávila en 1513 (Crouch, Garr y Mundigo 1982). Cabe resaltar que las ciudades de los imperios Inca y Azteca reflejaban esta dualidad (Von Hagen y Morris 1998 y Soustelle 1996).

7 Cuando me refiero a las ciudades de la Colonia como “duales”, es importante resaltarlo, no pretendo simplificar la complejidad de los procesos y del espacio a una simple dicotomía. Pero para los propósitos de este ensayo, esta noción de dualidad basta para resaltar la íntima interacción de procesos y espacios de exclusión.

8 Harvey (2009), construyendo sobre el trabajo de Lefebvre (1991), se refiere a “espacios relacionales” para describir cómo múltiples espacios internalizan procesos históricos.

han sido trascendentales para la organización y construcción de las ciudades latinoamericanas.

Las ciudades siguen siendo un espacio estratégico para el desarrollo de ciudadanía. Y no todas las ciudades son estratégicas. Pero con sus concentraciones de lo no-local, lo extraño, lo mezclado y lo público, las ciudades resaltan con más claridad los tumultos de la ciudadanía. Sus muchedumbres catalizan procesos que decisivamente expanden o erosionan las reglas, significados y prácticas de la ciudadanía (Holston y Appadurai 1999: 188).

El papel catalizador de la ciudad —sus calles y muchedumbres— es significativo cuando se trata de definir y desafiar los términos públicos de la ciudadanía política y de la organización colectiva. A partir de los procesos históricos se debate y se lucha por los “significados culturales” de ciudadanía y sus implicaciones materiales.

Espacios urbanos, identidades políticas y ciudadanía

Los movimientos sociales expresan las luchas por el “derecho a tener derechos” (Álvarez, Dagnino y Escobar 1998). Las identidades políticas adquieren forma en el contexto de los procesos históricos que informan y conforman la construcción de sujetos y espacios. Hale define las identidades políticas como “las sensibilidades y acciones colectivas que provienen de una localidad particular de la sociedad, retando directamente las categorías universalistas que tienden a subsumir, borrar, o suprimir estas particularidades” (1997: 568). En este sentido, los procesos de reestructuración neoliberal son vividos y enfrentados localmente, mientras que simultáneamente informan la construcción de espacios que les permiten generar visiones y acciones posibles sobre el futuro. Estas identidades políticas, alimentadas en la localidad en las prácticas cotidianas, revelan cómo se vive y cómo se convive, cómo se negocian conflictos y cómo, al momento de interpretar estas prácticas, se integran las historias y las memorias. Pero también en los momentos de crisis y conflicto salen a la superficie las prácticas cotidianas, opacadas por los espacios políticos formales, para retar la naturalidad y legitimidad del orden político en el que están inmersas (Tapia 2001).

Si Hale (1997) analiza cómo estos procesos son vividos y enfrentados a partir de las construcciones de las identidades políticas locales, Appadurai (2002) determina cómo se proyectan hacia el futuro, y define estos horizontes políticos como “los límites externos

de la aspiración y la inspiración dentro de los cuales se alimentan planes concretos, estrategias y esperanzas entre los marginados" (Appadurai 2002: 30). Estos horizontes políticos se expresan en los discursos y en las acciones localizadas que intentan construir alternativas a partir de lo cotidiano y lo concreto de la localidad, y surgen para enfrentar el actual orden político. Los sujetos que viven en las márgenes sociales y urbanas se enfrentan a las estrategias políticas y discursivas del proyecto neoliberal gracias a estos horizontes políticos.

Mediados por las identidades políticas que surgen de las historias y de la memoria colectiva, la construcción de horizontes políticos tiene un efecto particular en la noción de ciudadanía y particularmente en la construcción de una ciudadanía política callejera. La lucha por los derechos de ciudadanía tiene raíces históricas y territoriales en las que se organizan prácticas desde las márgenes sociales. En este contexto, "el concepto de ciudadanía se refiere a las prácticas conflictivas conectadas con el poder que reflejan quién puede decir qué en el proceso de identificación de los problemas en una comunidad [ciudad o país] y las formas en que éstos serán enfrentados" (Jelin 2003: 314). Justamente a partir de la lucha de "quién puede decir qué", y quién tiene el "derecho a tener derechos", se forjan las acciones colectivas que luchan por

la construcción de una nueva noción de ciudadanía que ha llegado a ser vista como [algo] más allá de la adquisición de derechos legales, requiriendo la constitución de sujetos sociales activos que identifican lo que consideran son sus derechos y luchan por su reconocimiento (Dagnino 2003: 211).

Holston (1998) propone el concepto de "ciudadanía insurgente" como una estrategia para entrelazar las construcciones históricas de ciudadanía con los procesos de organización de ciudades. Este concepto tiene una estrecha relación con las ideas de "esfera pública" y "horizontes políticos", que revelan cómo "los espacios de ciudadanía insurgente constituyen nuevas formas de lo social que todavía no han sido liquidadas ni absorbidas por las viejas" formas de apropiación de la ciudad, "ya que manifiestan posibles alternativas para el futuro" (Holston 1998: 158). Estas posibles alternativas y el Estado, como único interlocutor en la construcción de ciudadanía, tienen una tensa relación; la apropiación colectiva de historias, memorias y espacios surge para retar este "paquete cultural".

Estas formas insurgentes se encuentran en la organización de movilizaciones populares y prácticas cotidianas que, en formas diferentes, empoderan, parodian, descarrilan o subvierten las agendas estatales. Ellas se encuentran en las luchas sobre el significado de ser miembro de un Estado moderno. [...] La ciudadanía cambia a medida que nuevos miembros surgen para avanzar sus demandas y expandir su universo [de derechos], y cómo simultáneamente surgen nuevas formas de segregación y violencia para hacer frente a estos avances, erosionándolos. Estos espacios de ciudadanía insurgente se encuentran en la intersección de estos procesos de expansión y erosión (Holston 1998: 47).

En este contexto, el concepto de ciudadanía política callejera aparece como la apropiación de espacios públicos, de historias y memorias colectivas con el propósito de fomentar y validar la articulación de las identidades políticas locales. En estos espacios callejeros, la muchedumbre de la ciudad se encuentra para retar y reconstruir el “paquete cultural” de la ciudadanía y desenmascarar el orden político. Es aquí donde se expande el universo de las posibilidades y se promocionan ciudadanías insurgentes; donde se debate el significado, el contenido y el destino de la ciudad y de las políticas que la definen.

Ciudadanía política callejera

En una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a caer, Jerónimo cuestionaba la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Con un lenguaje accesible para el creciente número de oyentes, sostenía que esa ley no reconocía plenamente a los pueblos indígenas, sus territorios y su forma de hacer política. La crítica estaba dirigida a la reproducción de la democracia liberal, que delega la responsabilidad de representación y profundiza la ruptura con los esquemas de democracia directa que marca la organización de las comunidades indígenas (Patzi 2004)⁹. Tampoco se reconocía a los alteños que habían derramado su sangre durante las jornadas de octubre del 2003:

9 Es paradójico que el mismo Vicepresidente que negoció la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente haya advertido que ésta no reproduzca “las estructuras políticas y culturales de exclusión que instauraron las técnicas liberales y partidarias de representación. Los constituyentes [...] deben ser elegidos de manera directa por representación de las grandes organizaciones sociales, pues ésta es la manera en que el pueblo existe como sujeto político y éstos son los hábitos deliberativos mediante los cuales la población mayoritaria toma decisión sobre la vida en común” (García Linera 2004: 72).

esto va a ser igual que el referéndum¹⁰: una mamada. Mientras nosotros, los aymaras, no ejerzamos el poder de verdad [político y económico], los q'aras siempre se aprovecharán (Jerónimo, 23 de marzo del 2006).

Este discurso desató una serie respuestas del cuantioso público, que apoyaban o refutaban el argumento o presentaban nuevos puntos de discusión. Eran variadas las posiciones frente al discurso: unos sostenían que había que apoyar el proceso de cambio (y a Evo) que recién estaba comenzando, otros decían que había que crear una asamblea paralela que respondiera a los intereses de los marginados; y otros argüían airados que la Asamblea Constituyente era un insulto a los alteños, pues ellos no habían luchado en las jornadas de octubre por la Asamblea sino por la nacionalización de los hidrocarburos. Al cabo de más de tres horas, ninguno de los oradores había logrado fijar una línea de pensamiento dominante. No obstante, los discursos y debates tuvieron un fruto importante: los participantes, activos y pasivos, contaban con mayores elementos de juicio para tomar posiciones políticas y sentirse partícipes de un proceso político. Esto, en una ciudad que nació de la marginalización social y de la exclusión política —con una población predominantemente indígena que nunca ha gozado de los derechos plenos de ciudadanía— es sumamente importante.

Esta escena se repite a diario. Discursos y debates políticos en espacios públicos, la gente escucha, propone lecturas sobre el pasado, opina sobre el presente y sueña con el futuro. La definición de ciudadanía de Marshall (1964) se refiere no solo a derechos y responsabilidades, sino también a la forma en que estos procesos son contruidos. Según la visión clásica, la ciudadanía es algo que surge desde el Estado: éste faculta los beneficios y establece las responsabilidades. Pero, en el contexto de ciudadanía política callejera, el Estado no necesariamente es el centro en el que cotidianamente se construye la ciudadanía: ésta se legitima por el reconocimiento activo del otro y nace en las calles y aceras del caos de La Ceja, donde día a día se siembran ideales y horizontes políticos.

La articulación de estos procesos expresa las dinámicas políticas, económicas y sociales que han formado la ciudad de El Alto. La convergencia de varias vertientes de identidad, en respuesta al proyecto

10 Aquí se refiere al referéndum de julio del 2004, promovido por Carlos Mesa para definir la utilización de los hidrocarburos. El referéndum surgió como respuesta a las demandas de nacionalización de octubre del 2003, pero terminó siendo un simulacro político con pocos resultados palpables para la población (Bautista 2006).

neoliberal, ha propiciado en El Alto un sentido de lucha muy particular (Arbona 2007). La precaria situación económica en términos de los niveles de pobreza y de infraestructura básica en esta ciudad, combinadas con las historias y las memorias de discriminación y lucha de los mineros e indígenas, es factor clave para la conformación de identidades políticas contestatarias. Éstas toman forma y se articulan en las juntas vecinales y en una gran diversidad de sindicatos —desde trabajadores asalariados hasta lustrabotas. En este contexto, los espacios de discurso y debate adquieren una particular importancia. En estos espacios se articula el discurso de las historias y memorias de marginalización y exclusión con la construcción activa de horizontes políticos.

Es justamente en estos espacios callejeros donde se conjuncionan múltiples espacios de vivencia cotidiana que articulan las historias y memorias de lucha y construcción de ciudad. En estos espacios se encuentran varias generaciones de mineros (con sus discursos de lucha proletaria) con los campesinos/indígenas (y sus discursos de reivindicación de la cosmovisión andina). Es en estos momentos de encuentro callejero donde se forman horizontes políticos y se tejen reconocimientos entre mineros y campesinos/indígenas en la construcción de una pertenencia al territorio que los une. Por tanto, esta articulación de múltiples localidades (campamento minero, comunidad rural, barrio marginado) no solo alimenta las especificidades de cada grupo en El Alto y sus territorios de origen, sino que también alimenta una forma de percibir y concebir la política (y ciudadanía) alteña.

Los veteranos de estos espacios no tienen claro cuándo ni cómo comenzaron a reunirse. Lo que sí tienen claro es que han incidido en la conciencia política de El Alto. Lo que ellos han hecho es sacar a la superficie, a la vista de todos, los procesos que muchos viven cotidiana y colectivamente. En otras palabras, se construyen puentes donde los alteños se encuentran, se reconocen en las múltiples formas en las que son producto de la articulación histórica y pueden imaginar posibilidades para un cambio político.

Estos encuentros han tenido consecuencias concretas. Varios de los discursantes coincidieron en que fue en ese espacio que se gestó la toma y la quema de la Alcaldía de El Alto en febrero del 2003. Los primeros recuerdos de estos encuentros de debate tuvieron lugar cuando el proyecto neoliberal entraba en su etapa más cruda.

No sé exactamente cuándo comenzó a formarse estos círculos o quién fue el primero que discursó (sic). Yo llevo aquí como unos ocho años. Antes, cuando estaba Goni [Gonzalo Sánchez

de Lozada] o [Hugo] Banzer, venía harta gente. Esto se llenaba de gente buscando insumos o información sobre lo que estaban haciendo [en el gobierno] y qué podíamos hacer. Yo diría que aquí se comenzó a cocer lo que explotó en octubre [2003] (entrevista con Álex, 11 de mayo del 2006).

Este espacio aglutinaba un gran número de personas unidas por el rechazo a las políticas neoliberales. Se encontraban para aprender sobre las implicaciones de estas políticas y para buscar formas de organizarse en contra de ellas. Esta búsqueda de lo “que se podía hacer” no era otra cosa que la construcción activa de “horizontes políticos”. Desde este espacio de debate en el que se encontraban múltiples historias y memorias, los participantes regresaban a sus zonas donde las reflexiones son apropiadas y re-articuladas reflejando el contexto específico de la zona. Estas formas de articulación saldrían a flote en la organización de redes barriales durante las jornadas de octubre del 2003 (Arbona 2006).

Los espacios de discusión y debate en La Ceja han servido de punto de encuentro para los residentes de El Alto: allí exponían sus historias, sus memorias, sus criterios sobre los eventos políticos del momento y formulaban propuestas hacia el futuro. En fin, en ese lugar se construyeron visiones de ciudadanía y se sembraron semillas para las movilizaciones que dieron como resultado la elección del primer presidente indígena. Como lo señala uno de los protagonistas de estos espacios, su función va mucho más allá del espacio y momento específicos.

Acá vienen a discutir temas coyunturales, a presentar líneas de análisis y acción. Otros vienen a escuchar y regresan a sus zonas donde difunden los temas. En fin, este espacio es una escuela donde nos formamos ideológicamente y discutimos las situaciones y las coyunturas, donde formamos línea política (entrevista con Álex, 3 de mayo del 2006).

El aprendizaje y la difusión son cruciales. Las personas que pasan, escuchan o participan retornan a sus zonas habiéndose apropiado de los planteamientos de estos discursos. Lo que ocurre en este espacio de La Ceja tiene una resonancia en las zonas de El Alto y en las provincias. Esta resonancia es un aspecto crucial en la organización de horizontes políticos y nociones de ciudadanía y en la articulación de múltiples espacios (rurales, agrarios, mineros) con sus correspondientes historias y memorias de asentamiento y lucha. Es en este

sentido que los discursos en este espacio surgen de las vivencias cotidianas de los alteños y simultáneamente son recogidos en ellas.

Cabe esperar que los temas, las dinámicas y la opinión pública sobre los asuntos nacionales difieran, pero el espacio de La Ceja se conecta con el resto de la ciudad y del país gracias a esos horizontes políticos contruidos y compartidos. Ésta es una de las formas en que opera el “subsuelo político” en El Alto; aunque invisible a las estructuras políticas formales, es la fuente de la fuerza política latente de esta ciudad (Tapia 2001).

Nosotros somos una fuerza política anónima de El Alto. Nadie [en el gobierno] nos conoce. Pero los vecinos de todo El Alto vienen por acá a escucharnos y ellos sí nos conocen (entrevista con Jerónimo, 22 de mayo del 2006).

Estos discursos y debates representan una forma callejera de construir ciudadanía desde las márgenes sociales que no necesariamente depende de (aunque tampoco niego que exista) un eje central como el Estado para construir ciudadanía. Es justamente en la calle donde se puede concebir no solo la formulación de una ciudadanía que depende totalmente del Estado, sino también de las vivencias cotidianas, las historias y las memorias localizadas. Esta construcción de ciudadanía sirve de insumo para la proyección de un horizonte político. En este sentido, la ciudadanía política callejera refleja un proceso de reconstrucción del “paquete cultural” mediante las prácticas cotidianas. Los temas de actualidad nacional son discutidos y debatidos a partir de la denuncia de las injusticias históricas, de la exposición de ideas sobre la coyuntura y de ideales con miras a una sociedad diferente. Es sobre esta plataforma que se organizan los discursos y los debates en La Ceja.

Discursos y perspectivas de coyuntura

Si bien los discursos y los debates en La Ceja cubren una amplia gama de temas, un tema surgía reiteradamente en la coyuntura posterior a la elección de Evo Morales: las implicaciones y el sentido de “ser indio”. Los temas de clase y ciudadanía se desglosan a partir de ese principio: “ser indio aymara”. El relato público de las historias y memorias de exclusión y humillación convoca a la mayoría de los transeúntes, y ese reconocimiento público no solo sirve para reflexionar sobre las injusticias históricas, sino que también funciona como mecanismo de politización de las identidades. En otras palabras, le da

un contenido político contemporáneo a las denuncias históricas que de este modo alimentan el horizonte político.

En una ocasión, la discusión se centró en la situación de los indígenas del altiplano, en el hecho de que ellos tienen cada vez menos tierras y, por el contrario, unas cuantas familias concentran la mayor parte de las tierras productivas en el oriente boliviano¹¹. En el debate estaba latente la historia colonial, cuando los “extranjeros” usurparon los territorios sobre los que erigieron su sistema de explotación. Este acontecimiento es visto como la raíz del proyecto neoliberal. Ese debate coincidió con la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el consiguiente referendo sobre las autonomías departamentales. Evo Morales, sostenían, se estaba concentrando en apaciguar a las élites terratenientes del oriente, pues los pueblos indígenas y los grupos marginales, que históricamente han apoyado al MAS, habían reducido en gran medida sus presiones sobre el gobierno. La conclusión fue entonces que las luchas, las acciones y las movilizaciones debían continuar, aun cuando “uno de ellos” ejerciera como Presidente de la República.

El debate retomaba una denuncia histórica: algunas élites, blancas y mestizas han cooptado al Estado para arrebatarse a los indígenas uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la tierra y el territorio. Las comunidades indígenas construyen ciudadanía sobre su derecho a la tierra: “es lo que nos ha movilizado desde la Colonia”, afirma uno de los eventuales oradores. Pero aunque en el contexto urbano de El Alto el tema del territorio —comunal— no tiene una preponderancia práctica o directa, los efectos histórico-políticos de la pérdida de tierras comunales se mantienen latentes como memoria de las múltiples formas de vivir en comunidad y de concebir múltiples territorios y temporalidades.

El predominio de una mayoría indígena (81,3%) en la ciudad se convierte en el eje articulador de las luchas por la ciudadanía, y estas luchas tienen manifestaciones concretas en el tema de la tierra, aunque su incidencia en el día a día de los alteños no sea directa. En este sentido, los debates en La Ceja abren dos espacios cruciales: la reivindicación de “lo indio” en el contexto de su formación histórico-política y las múltiples miradas hacia el Estado. Este último punto es de particular relevancia: los alteños se identifican con su nuevo presidente, Evo Morales, pero al mismo tiempo desconfían profundamente del aparato estatal.

11 De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2005), menos de cien familias poseen 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas trabajan en cinco millones de hectáreas.

“Nosotros, los indios aymaras”

La identidad indígena aparece constantemente en los discursos: “nosotros, los indios aymaras”. La reivindicación de la identidad es formulada en términos históricos y políticos. La construcción del “nosotros” responde a que una generación tras otra han sido explotadas y humilladas por un Estado que no los representa y con el que no se identifican. El “ellos”, por su parte, no solo designa a blancos y mestizos, sino también a la clase social que ha controlado el Estado y los recursos naturales, y a los “indios” que los han apoyado. “Hasta ahora, no somos bolivianos”, sostenía uno de los oradores (febrero del 2006). Los indígenas no sienten que tienen los mismos derechos civiles, políticos y sociales que las minorías blancas y mestizas, aunque esos derechos estaban expresados en la anterior Constitución Política del país. Los indígenas todavía no se sienten ciudadanos.

La memoria histórica de cómo los pueblos indígenas han permanecido al margen de las esferas políticas formales se la expresa públicamente. Esa expresión pública permitió que las estructuras formales fueran retadas abierta y masivamente por los procesos históricos contestatarios a partir del año 2000, comenzando con la “guerra del agua” en Cochabamba (Assies, 2003). Estas movilizaciones tuvieron su apogeo entre septiembre y octubre del 2003, y mayo y junio del 2005, y fueron cruciales para posibilitar la elección del primer presidente indígena. Todo esto tuvo y tiene una relación directa con los discursos y los debates en La Ceja, en particular con las demandas históricas y los posicionamientos políticos que de éstas se derivaron. Un ejemplo de ello es la identificación con el actual Presidente, pero al mismo tiempo la desconfianza en el aparato estatal. Uno de los oradores expresa esta tensión el día después de la firma del Decreto Supremo 28701, mediante el cual se “nacionalizaban los hidrocarburos”:

Apoyamos a nuestro hermano Evo. Él había prometido la nacionalización, y cumplió. Esto viene de la sangre que derramaron nuestros hermanos en la guerra del gas. Pero todavía hay que mantenernos vigilantes (Carlos, 2 de mayo del 2006).

“Nuestro hermano Evo”, enfrentado al tono de desconfianza de “hay que mantenernos vigilantes”, es emblemático de un proceso de cambio matizado por las memorias de exclusión y discriminación.

Por un lado, se expresa la identificación con el Presidente y la confianza en él. Al fin y al cabo comparte sus historias y sus memorias de exclusión, de discriminación; por lo tanto, merece su respeto. Pero por otro lado es evidente la desconfianza y hasta cierto punto el desprecio hacia el aparato estatal. En esta tensión entre la identificación con el poder político y el distanciamiento con el Estado se plasma el horizonte político y se construye una ciudadanía política callejera.

“Ahora nos toca”

La histórica elección de Evo Morales marca la esperanza y la promesa de una transformación sustancial a favor de las mayorías. Los discursos de entonces en La Ceja expresaban el orgullo de la comunidad por la elección de Evo, por el hecho de entenderla como el resultado de sus luchas y de las de sus antepasados. Prueba de esto es una parte de su discurso de inauguración en el Congreso:

Quiero decirles que todavía hay resabios de esa gente que es enemiga de los pueblos indígenas. Pero queremos vivir en igualdad de condiciones con ellos y por eso estamos acá para cambiar nuestra historia. Este movimiento indígena originario no es concesión de nadie, nadie nos ha regalado nada. Es el resultado de la conciencia de nuestro pueblo. [...] Estamos acá para decir basta. De la resistencia de 500 años pasamos a la toma del poder por otros 500 años. Indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, con la opresión a la que hemos sido sometidos como aymaras, quechuas o guaraníes (Evo Morales, 22 de enero del 2006).

La promesa de romper con 500 años de historia alude a la influencia de las luchas callejeras, de las movilizaciones históricas. Seis meses después, las palabras de Evo Morales tuvieron eco en La Ceja.

Por 500 años esos *q'aras*¹² han gobernado y ahora nos toca a nosotros. Ya sabemos cómo son ellos, mucho discurso y poca acción. Así son nomás [...] Pero también hay aymaras que

12 El término *q'ara* significa “pelado”, y alude a los blancos y mestizos. Pero como lo indica el testimonio, trasciende el color de la piel: alude también a cierta complicidad con el Estado y las estructuras de poder.

son *q'aras*, no es solo una cosa del color de la piel. Son los *llunk'us*¹³ que copian las formas que ellos hablan y no hacen. Tenemos que irnos formando y preparando ideológicamente para mantener la hegemonía. Ahora nos toca por 500 años (orador, 5 de junio del 2006).

La tensión con respecto al aparato estatal, como lo señala el discursante, se dirige al grupo social que históricamente ha controlado el Estado. Los *q'aras* son vistos como quienes han coartado la ciudadanía de los pueblos indígenas. El discurso indigenista en La Ceja articula la memoria histórica colonial y las estructuras estatales contemporáneas, y muestra con cierta claridad los horizontes políticos. La apropiación de la calle con el fin de sacar a la superficie las historias y las memorias de marginalización y exclusión ha sido el mecanismo de construcción del horizonte político sobre el cual se lucha y se enfrenta al Estado. En el proceso de construcción de este horizonte político están los alteños, que en sus encuentros cuestionan abiertamente el “paquete cultural” que ha definido la “ciudadanización”.

Aunque ese horizonte político fue abierto gracias a la elección de Evo Morales, también reconocen sus límites: “controlamos el gobierno pero todavía no tenemos el poder” (Carlos, 5 de junio del 2006). Aun con la victoria electoral de Evo Morales, todavía no se han revertido 500 años de “colonialidad del poder”. Las estructuras de poder se han reproducido mediante los mecanismos de “ciudadanización”, y éstos han sido utilizados por el Estado para hacer invisibles a los sectores de la población que no se ajustan al esquema de nación que se quiere construir. En este sentido, los reclamos que surgen de las identidades indígenas urbanizadas en este espacio de discurso y debate representan un desafío no solo para las élites que han controlado el aparato estatal, sino también para los mismos residentes de El Alto.

Necesitamos prepararnos. Sabemos cómo marchar, cómo pelearnos con los pacos [policías] y milicos [militares]. También sabemos cómo derramar nuestra sangre pero todavía no sabemos cómo ser políticos. No vamos a tener el poder así nomás. Hay que luchar políticamente, hay que prepararnos. No es solo salir a las calles (Álex, 5 de junio del 2006).

13 Un *llunk'u* es un servidor del patrón, designa al indígena que trabaja a favor del poder político y que reproduce la “colonialidad del poder”.

Los procesos de ciudadanización y de lucha por los derechos que los acompañan son continuos, fluidos y dinámicos. Álex lo dice: “No es solo salir a las calles”. En este sentido, se reconoce los límites de este tipo de espacios y las acciones que ocurren en éste, por lo que la ciudadanía política callejera es parte de un proceso de aprendizaje y lucha. Del primero, porque contribuye a la creación de una esfera pública en la que se reconoce la memoria colectiva, se retan los discursos hegemónicos y se construyen horizontes políticos. De la segunda, porque la ciudadanía política callejera marca una forma de lucha en la que se definen espacios, significados y fronteras de acción. Por tanto, se reconoce que el proceso de construcción de ciudadanía política callejera no necesariamente consta de un producto final que derrocará a las formas tradicionales de construir ciudadanía, sino más bien se constituye en un proceso de organización de espacios donde se establecen algunas condiciones para retar (o repensar activamente) la “matriz civilizatoria”.

Conclusiones

En ciertos espacios de la ciudad de El Alto, como el descrito en este ensayo, se construye activamente una ciudadanía política callejera que en momentos críticos ha llegado a desafiar la construcción liberal de ciudadanía. La creación de un espacio de discusión y debate en La Ceja ha sido clave en este proceso. A partir de la apropiación de un espacio público se crearon las condiciones para la conformación de una base de discursos políticos sobre los cuales se construye un horizonte político y se reta la “matriz civilizatoria”. Estos discursos se nutren de la mirada colectiva de múltiples tiempos (pasado y futuro) y espacios (campamento minero, comunidad campesina/indígena, barrio urbano). Por un lado, las miradas hacia el pasado crean espacios de reconocimiento de historias y memorias: puntos de encuentro entre los participantes, alimento de la memoria colectiva y definición de identidades políticas, estableciendo una posición en el presente y proyectando miradas al futuro. Éstas se convierten en sueños y aspiraciones sobre el tipo de ciudad y de país que se quiere. Por otro lado, los múltiples espacios articulan visiones concretas de lo que y como podría ser ese futuro.

Otro tema importante son las formas de definición de la relación dialéctica que aquí surge entre espacios y procesos históricos. En otras palabras, las luchas por los derechos de ciudadanía —y todo lo que esto implica en el contexto boliviano —en el espacio público han incidido en la construcción de El Alto y en la organización de

sus habitantes. Las múltiples identidades políticas —y cómo éstas articulan múltiples tiempos y espacios— que confluyen en El Alto han convertido a este espacio en determinante para el desarrollo de estas luchas y para la incorporación en la noción de ciudadanía de elementos que van más allá del Estado. El papel de este espacio y la forma cómo se articulan en él identidades y horizontes políticos cobra adicional importancia: en el contexto actual, en el que se presenta un gobierno de los movimientos sociales, espacios como éste tienen el potencial de articular apoyos y críticas constructivas (o destructivas) al actual proceso de cambio. Como lo menciona Alex, el detalle está en cómo los participantes de estos espacios se proyectan hacia escenarios políticos más amplios cuando la capacidad de aprender y hacer propuestas políticas surja de esta cotidianidad.

Bibliografía

- Albó, Xavier, Godofredo Sandoval y Tomás Greaves (1983) *Chukiyawu: la cara aymara de La Paz. Cabalgando entre dos Mundos*, CIPCA, La Paz.
- Albó, Xavier (2006) “El Alto, la vorágine de una ciudad única” en *Journal of Latin American Anthropology*, N° 11, 329–350.
- Alvarez, Sonia, Evelina Dagnino, Arturo Escobar (1998) “Introduction: The Cultural and the Political in Latin American Social Movements” en S. Alvarez, E. Dagnino y A. Escobar (compiladores), *Cultures of Politics - Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*, Westview Press, Boulder.
- Appadurai, Arjun (2002) “Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics” en *Public Culture*, N° 14, 21–47.
- Arbona, Juan Manuel (2009) “Apuntes sobre la historia de un ‘espacio vacío’: El Alto en la región metropolitana de La Paz” en *Khana. Revista de la Ciudad de La Paz*, N° 51, 101–109.
- (2007) “Neo-liberal Ruptures: Local Political Entities and Neighborhood Networks in El Alto, Bolivia” en *GeoForum*, N° 38, 127–137.
- (2006) “Fracasos y rupturas neoliberales: El Alto-octubre 2003” en N. Robbins (compilador), *Conflictos Políticos y Movimientos Sociales en Bolivia*, Plural, La Paz, 47–60.
- (2003) *Ver y hacer política en El Alto: capacidades políticas y actividades económicas*, Documentos de trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La Paz.
- Assies, William (2003) “David versus Goliath in Cochabamba: water rights, neoliberalism, and the revival of social protest in Bolivia” en *Latin American Perspectives*, N° 30, 14–36.

- Auza, Verónica (2004) *Memoria testimonial de la "Guerra del Gas"*, Caritas, La Paz.
- Babb, Florence (1999) "'Managua is Nicaragua'. The Making of a Neoliberal City" en *City and Society*, N° 11, 27-48.
- Bautista, Rafael (2006) *Octubre: el Lado Oscuro de la Luna*, Tercera Piel, La Paz.
- Castells, Manuel (1983) *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*, University of California Press, Berkeley.
- Condarco, Ramiro (1982) *Zarate 'El Temible' Willka: Historia de la rebelión indígena de 1899 en la República de Bolivia*, s.e., La Paz.
- Crabtree, John (2005) *Perfiles de la protesta: Política y movimientos sociales en Bolivia*, PIEB, La Paz.
- Crouch, Dora, Daniel Garr y Axel Mundigo (1982) *Spanish City Planning in North America*, MIT Press, Cambridge.
- Dagnino, Evelina (2003) "Citizenship in Latin America: An Introduction" en *Latin American Perspectives*, N° 30, 211-225.
- García Canclini, Néstor (1990) *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la Modernidad*, CONACULTA, México D.F.
- García Linera, Álvaro (2004) "La crisis de Estado y las sublevaciones indígena-plebeyas" en L. Tapia, A. García y R. Prada (compiladores), *Memorias de Octubre*, Muela del Diablo, La Paz, 27-86.
- (2001) "Sindicato, multitud y comunidad: movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia" en A. García, R. Gutiérrez, R. Prada, F. Quispe, y L. Tapia. (compiladores), *Tiempos de Rebelión*, Muela del Diablo, La Paz, 7-79.
- Gómez, Luis (2004) *El Alto de Pie: Una insurrección aymara en Bolivia*, Comuna, La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2001) *El Alto: Indicadores Sociodemográficos*, INE, La Paz.
- Hale, Charles (1997) "Cultural Politics of Identity in Latin America" en *Annual Review of Anthropology*, N° 26, 567-590.
- Harris, Olivia y Xavier Albó (1984) *Monteras y guardatojos: campesinos y mineros en el Norte de Potosí*, CIPCA, La Paz.
- Harvey, David (1997) "Social process and spatial form" en N. Jewson y S. McGregor (compiladores), *Transforming Cities: Contested Governance and New Spatial Divisions*, Routledge, Londres, 19-27.
- (2009) *Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom*, Columbia University Press, Nueva York.
- Hindess, Barry (2002) "Neo-liberal citizenship" en *Citizenship Studies*, N° 6, 127-143.

- Holston, James (1998) "Spaces of insurgent citizenship" en L. Sandercock (compilador) *Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning History*, University of California Press, Berkeley, 37-56.
- Holston, James y Arjun Appadurai (1999) "Cities and Citizenship" en J. Holston (compilador), *Cities and Citizenship*, Duke University Press, Durham.
- Hylton, Forrest y Sinclair Thomson (2005) "The checkered rainbow" en *New Left Review*, N° 35, 41-64.
- Jelin, Elizabeth (2003) "Citizenship and alterity" en *Latin American Perspectives*, N° 30, 309-325.
- Kohl, Benjamin (2000) "Restructuring citizenship in Bolivia: El Plan de Todos" en *International Journal of Urban and Regional Research*, N° 27, 337-351.
- Kohl, Benjamin y Linda Farthing (2007) *El bumerán boliviano: hegemonía neoliberal y resistencia social*, Plural, La Paz.
- Lefebvre, Henri (1995) *Writing on Cities*, Blackwell, Londres.
- (1991) *The Production of Space*, Blackwell, Londres.
- Mamani, Pablo (2005) *Microgobiernos barriales: Levantamiento de la ciudad de El Alto (Octubre 2003)*, CADES, La Paz.
- Marshall, T. H. (1964) *Class, Citizenship, and Social Development*, Doubleday, Nueva York.
- McEwan, Cheryl (2005) "New spaces of citizenship? Rethinking gendered participation and empowerment in South Africa" en *Political Geography*, N° 24, 969-991.
- Mitchell, Don (2003) *The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space*, The Guildford Press, Nueva York.
- Patzi, Félix (2004) *Sistema comunal: Una propuesta alternativa al sistema liberal*, Centro de Estudios Alternativos, La Paz.
- Peck, Jamie y Adam Tickell (2002) "Neoliberalising space" en *Antipode*, N° 34, 380-404.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2005) *Informe sobre desarrollo humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
- Quijano, Aníbal (2000) "Colonialidad del poder y clasificación social" en *Journal of World-Systems Research*, N° 6, 342-386.
- Radcliffe, Sarah y Sallie Westwood (1996) *Remaking the Nation: Place, Identity and Politics in Latin America*, Routledge, Londres.
- Reinaga, Fausto (1971) *La Tesis India*, PIB, La Paz.
- (1969) *La Revolución India*, PIB, La Paz.

- Rivera, Silvia (1993) "La raíz: colonizadores y colonizados" en Xavier Albó y Raúl Barrios (compiladores), *Violencias Encubiertas en Bolivia* CIPCA, La Paz, 27-139.
- Roberts, Bryan (1996) "The social context of citizenship in Latin America" en *International Journal of Urban and Regional Research*, N° 20, 38-65.
- Sandoval, Godofredo y M. Fernanda Sostres (1989) *La Ciudad Prometida: Pobladores y organizaciones sociales en El Alto*, ILDIS, La Paz.
- Schild, Veronica (1998) "Market citizenship and the 'new democracies': The ambiguous legacies of contemporary Chilean women's movements" en *Social Politics*, N° 5, 232-249.
- Soustelle, Jacques (1996) "Daily life of the Aztecs on the eve of the Spanish conquest" en G. Joseph y M. Szuchman (compiladores), *I Saw a City Invincible: Urban Portraits of Latin America*, Scholarly Resources, Nueva York, 35-47.
- Stefanoni, Pablo y Herve Do Alto (2006) *Evo Morales, de la Coca al Palacio: una oportunidad para la izquierda indígena*, Malatesta, Buenos Aires.
- Tapia, Luis (2001) "Subsuelo político" en A. García, R. Gutiérrez, R. Prada y L. Tapia (compiladores), *Pluriverso: Teoría política boliviana*, Muela del Diablo, La Paz, 111-146.
- Tapia, Luis; Alvaro García Linera y Raúl Prada (2004), *Memorias de Octubre*, Muela del Diablo, La Paz.
- Thomson, Sinclair (2006) *Cuando solo reinasen los indios: la política aymara en la era de la insurgencia*, Muela del Diablo, La Paz.
- Von Hagen, Adriana y Craig Morris (1998) *The Cities of the Ancient Andes*, Thames and Hudson, Nueva York.
- Yashar, Deborah (2005) *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Post-liberal Challenge*, Cambridge University Press, Cambridge.

Cuarta parte

Recomendaciones para políticas públicas

La transformación de Medellín como laboratorio urbano para la ciudad boliviana

Experiencias y desafíos para Santa Cruz de la Sierra

Francisco Alejandro Vásquez Rodríguez

Focalizar los esfuerzos de la transformación social mediante lo urbano ha sido la consigna en Medellín, en zonas con una deuda social histórica por parte del Estado y en donde la violencia ha sido señor y ley por décadas. Las intervenciones urbanas han mostrado ser una herramienta viable para superar esos problemas sociales, y el cambio de piel (de imagen) un incentivo para los habitantes de dichos sectores en cuanto a participar activamente a la hora de hacer ciudad. En ese contexto, se utiliza el concepto de que Medellín puede ser entendido como un Laboratorio Urbano para Santa Cruz de la Sierra, en tanto que su modelo de intervención en la ciudad permeado por el enfoque del urbanismo social puede aportar lecciones aprendidas y experiencias urbanas innovadoras a la ciudad boliviana, para ponerlas al servicio de investigadores y funcionarios públicos con interés en asuntos urbanos en el contexto cruceño.

Si se observa la producción académica en torno al estudio de las ciudades en Bolivia, la situación es preocupante, ya que son muy escasos los análisis sobre las principales problemáticas en las urbes, al igual que las investigaciones respecto a cómo darles solución según la compleja realidad social del país. Tal situación, no solo atenta contra la producción de conocimiento en un campo más que dinámico y que sin duda requiere una constante actualización, sino también, respecto a la imposibilidad de que los agentes sociales puedan conocer las intervenciones socio-espaciales que se requieren, y hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos en materia de políticas públicas urbano-territoriales respecto al futuro de las ciudades bolivianas.

Se plantea que el urbanismo ocupa un segundo plano a la hora de estudiar las ciudades, lo cual mucho tiene que ver con la supremacía de una Bolivia rural que deja náufragos a los temas urbanos en medio del

océano rural boliviano. Aspecto bastante particular, puesto que por lo menos en la región latinoamericana la situación es diametralmente distinta. Es decir, lo común en dicho continente es la predominancia de lo urbano —donde es la ruralidad la que subyace ante un urbanismo hegemónico y avasallador en muchos casos— por lo que son las ciudades las que determinan el curso de la población, siendo lo rural cada vez menos importante y en una transformación sin freno hacia una urbanización que sigue avanzando en búsqueda de nuevos espacios. Pero en Bolivia hay todavía una importante referencia a la tierra rural, producto del alto porcentaje de población indígena y campesina que históricamente ha existido, aun cuando en la actualidad se desenvuelvan en contextos urbanos.

La ciudad boliviana¹, por tanto, muestra otros procesos de ocupación, otra manera de cómo la urbanización ha ido ganando terreno, sin olvidar que el país sigue siendo principalmente rural, por más que se habiten espacios urbanos y se ocupe el entorno de la ciudad configurando importantes espacios periurbanos. Es decir, se trata de reconocer que en Bolivia hay un número considerable de campesinos e indígenas de entorno metropolitano; dicho de otra forma, las principales aglomeraciones urbanas presentan procesos de acelerada expansión sustentadas en gran medida sobre territorios rurales que cada vez más cobijan imaginarios urbanos para sus habitantes, inmigrantes que mantienen una fuerte referencia a lo rural pero que están habitando espacios periurbanos. De ahí el denominativo de población rural metropolitana.

Al respecto, Prado Salmón (2008a) plantea que en este momento “nadie sabe a ciencia cierta lo que está sucediendo en nuestras extensas zonas periurbanas. Esos cientos de miles de ciudadanos están consolidando nuevos procesos urbanos que no pueden acomodarse en los moldes de la “marginalidad” tradicional. Sin duda está cercano el momento en el que todos estos “nuevos ciudadanos” irrumpirán en el escenario político regional y nacional, y lo harán con la fuerza con que lo han hecho los indígenas y campesinos. Sin duda no estamos preparados para entender el fenómeno que se viene, al que seguimos ignorando deliberadamente”. Por tanto, pareciera ser prioritario entender la situación actual de los espacios de entorno metropolitano en Bolivia, situados de lleno en territorios “ajenos” a la ciudad pero necesariamente relacionados con ella.

En el fondo, existe una referencia a lo rural como forma de vida en torno a la ciudad boliviana en la que predomina una población

1 Nos referimos a la ciudad boliviana como una tipología, entendiendo que existen profundas diferencias entre las metrópolis, las ciudades intermedias y las pequeñas. Para este ensayo, la ciudad boliviana se refiere a las tres principales aglomeraciones urbanas: La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

campesina e indígena metropolitana, la cual transita entre una forma de vida rural y un habitar urbano en constante contradicción y, lo que es más preocupante, que ocupa territorios ajenos o espacios periurbanos al margen de la planeación y de la presencia del Estado. En ese sentido, cobra vigencia el planteamiento de que “las ciudades bolivianas tienen el sello de la supervivencia que le imprimen los sectores populares y campesinos, que poco o nada esperan de la acción estatal ya que aprendieron a ‘solucionar por cuenta propia’ sus necesidades de trabajo, alimentación y vivienda y en general el conjunto de contradicciones que la estructura económica y socio-política genera” (Rivera 1986: 117).

Sin duda que las problemáticas urbanas que experimentan las ciudades bolivianas no se resuelven exclusivamente mediante una planificación socio-espacial. Pero ante un atraso en materia de políticas y normativa urbano-territorial, las dificultades que se avecinan para los entes encargados de planificar y gestionar la ciudad y su entorno no son menores. En este sentido, la urbanización más que un problema puede ser vista como una fuente de soluciones, al ser puesta a consideración de la población para mejorar las condiciones de vida de las masas periurbanas que colonizan y habitan el entorno de las urbes bolivianas.

Pero no puede dejarse al azar las transformaciones socio-espaciales que conllevan procesos de urbanización, por lo que se reconoce el importante papel que tiene una Planeación Urbano-Regional que pueda interrogar tales dinámicas. La adecuada comprensión de los fenómenos urbanos y regionales es un requisito indispensable para fundamentar y orientar las prácticas de intervención planificada sobre el territorio y su permanente cambio. Por tanto, debe utilizarse para indagar las exigencias actuales y futuras de la ciudad boliviana y el entorno metropolitano que la cobija.

Tal enfoque se convierte en el punto de partida del presente ensayo, en tanto se busca estudiar una de las principales áreas metropolitanas de Bolivia respecto a los principales desafíos y problemáticas que debe afrontar, siendo la planeación el prisma escogido para ello, por considerarse altamente pertinente a la hora de estudiar aspectos que primero deben hacerse visibles para su entendimiento, para luego anticipar las acciones a seguir en materia de gestión territorial tanto de la ciudad como de la extensa corona periurbana que la rodea. Pero también puede considerarse a la Planeación Urbano-Regional como punto de llegada de este ejercicio investigativo, ya que se busca indagar en acciones futuras que sean viables y pertinentes para el entendimiento y abordaje de las transformaciones que están ocurriendo en la ciudad boliviana, y cómo se puede aprender de la

experiencia llevada a cabo en Medellín respecto a una serie de intervenciones socio-espaciales orientadas por un modelo de planeación.

Dicha búsqueda comparativa necesariamente se plantea como un complemento al incipiente desarrollo de los estudios urbano-regionales en Bolivia, tratando de encontrar alternativas viables a la planeación y gestión territorial hasta ahora practicadas. De esta forma se busca hacer frente a la que desde nuestro punto de vista es la principal problemática, que reside en que *lo urbano no tiene quien le escriba en Bolivia*, sintetizando en esta frase el reducido número de estudios aplicados y el desconocimiento del complejo escenario urbano-regional que se avecina y que pensamos aún no se ha dimensionado.

Por tanto, la comparación ofrece la posibilidad de observar otros contextos y experiencias llevadas a cabo en realidades urbanas similares. Se trata de que la planeación y gestión urbana boliviana obtenga otros insumos para que pueda reorientar y examinar el desarrollo de sus principales ciudades mediante una realidad urbana particular que se propone observar, como es el caso de Medellín y la fuente de ideas y proyectos novedosos que ha desarrollado en materia urbana. Es decir, se emprende la tarea de explorar en la experiencia del modelo de intervención socio-espacial de dicha ciudad colombiana, con el fin de aportar a la discusión sobre el accionar futuro en materia de planeación y gestión de las principales ciudades bolivianas, tomando como caso específico a Santa Cruz de la Sierra.

Santa Cruz es una de las tres metrópolis de Bolivia con un desarrollo económico acelerado y una marcada segregación social que cobija un sector informal importante. Entre sus principales problemas urbanos se encuentra que los espacios públicos han dejado de ser lugares de encuentro, existe una creciente privatización de la ciudad y la planeación urbana no otorga consistencia a una competitividad que se trata de imponer desde los grupos dominantes. En Medellín la situación no era muy distinta, siendo una ciudad invadida por desplazados por la guerra que se apropiaron informalmente en espacios no aptos para los asentamientos humanos, generando una serie de problemáticas urbanas como insuficiencia en la dotación de servicios públicos domiciliarios, déficit de espacio público y de encuentro ciudadano, pobreza y marginalidad de la población inmigrante (principalmente de origen rural), y la ocupación de espacios periurbanos como única alternativa de acceso a la tierra.

Sin embargo, la diferencia radica en que Medellín optó por una estrategia basada en novedosos e importantes aportes en materia de desarrollo social a través de lo urbano, con intervenciones integrales

en territorios históricamente excluidos, con graves procesos de deterioro físico y social, con altos niveles de pobreza y bajos indicadores de desarrollo humano, en los cuales se están produciendo profundas transformaciones urbanas. Entre las principales intervenciones pueden mencionarse los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) y el urbanismo social como motores de “cambio” en la producción de ciudad.

Sobre esta base surge la idea de que Medellín bien puede funcionar como un laboratorio urbano (como una realidad en la cual se experimentan propuestas urbanas en forma colectiva y colaborativa) para Santa Cruz. La pregunta guía del artículo gira en torno a: ¿Cómo intervenir en territorios urbanos y periurbanos en transformación de Santa Cruz, mediante la experiencia y lecciones aprendidas de Medellín como laboratorio urbano, para abordar sus problemáticas de producción de ciudad con una visión de futuro mediante una estrategia de urbanismo social?

Para dar respuesta a esa pregunta, el escrito se divide en tres partes, siendo la primera de ellas la idea de que Medellín bien puede entenderse como un laboratorio urbano para la ciudad de Santa Cruz, en cuanto a su experiencia en materia de planeación y gestión urbana en torno a una transformación de lo social mediante lo urbano, y cómo esto puede orientar las acciones a seguir en una de las principales ciudades bolivianas. En segundo lugar, se identifican problemáticas comunes a ambas ciudades, extrayendo las principales lecciones aprendidas en Medellín en cuanto a la aplicación de un novedoso modelo de intervención socio-espacial, y cómo éste podría replicarse en la ciudad cruceña. Finalmente, algunas consideraciones finales que denotan que el camino que recién comienza y que sin duda se requiere de muchos otros esfuerzos investigativos para poder conocer y gestionar adecuadamente la ciudad boliviana, pero aprovechando la experiencia acumulada en otros rincones de Latinoamérica.

La transformación de Medellín desde lo urbano

Se discute la transformación social experimentada por Medellín en los últimos cinco años la cual, según nuestro punto de vista, emerge de la paradoja de sacarse el estigma de haber sido la ciudad más violenta del planeta, y de la pretensión de convertirse en una ciudad de clase mundial, o al menos competitiva tal como se tiende a ello en la actualidad. En el caso de Medellín, esto ha implicado un profundo proceso de transformación social, con el propósito de mostrarse como una ciudad segura, atractiva turísticamente y viable para las inversiones extranjeras.

Tanto es así que hoy por hoy hay una frase hecha entre los habitantes de Medellín, que plantea que “Medellín pasó del miedo a la esperanza” es difundida ampliamente por quienes lideraron políticamente la ciudad entre los años 2004 y 2007, en una administración municipal a la que se le atribuye haber iniciado un complejo proceso de conciliación y negociación de diversos procesos sociales que convergieron en la transformación de la ciudad.

En ese sentido, el ex-alcalde Sergio Fajardo sintetiza el porqué era necesario ese proceso transformador: “Durante muchos años en Medellín construimos rejas que nos separaron. Paredes invisibles que dividieron la ciudad, convirtiéndola en fragmentos, en pequeños guetos en los que solo nos relacionábamos con aquellos parecidos a nosotros, solo conocíamos espacios reducidos, porque la violencia, el miedo, la desconfianza, nos impidieron movernos libremente. Necesitábamos entonces una concepción que atendiera nuestros dos problemas fundamentales: la violencia y las desigualdades sociales.” (Fajardo 2007: 148).

Para ello se recurrió a una serie de programas y proyectos transformadores, pero sin duda la apuesta se hizo en torno a una fuerte inversión en educación para la población, plasmada en el modelo denominado “Medellín la más educada” que, en un concepto amplio de educación, agrupa una serie de intervenciones estatales destinadas a producir cambios sustanciales al disminuir la violencia y generar oportunidades para el conocimiento y el desarrollo de los habitantes de esa ciudad. Pero también fue muy importante un potente proceso de renovación urbana enmarcado en “el cambio de piel de la ciudad”, a través de intervenciones físicas en la ciudad enmarcadas en un concepto de urbanismo sostenible y en miras de la regeneración del tejido social de las comunidades intervenidas.

El punto central entonces es cómo pasó Medellín de ser una de las ciudades más violentas del planeta a convertirse en una ciudad ejemplo no solo en Latinoamérica sino también para otros lugares del planeta. Todavía es apresurado brindar respuestas acabadas y contundentes, pero sin duda que la segunda urbe colombiana se atrevió a dar un paso adelante en cuanto a implementar propuestas acordes a los planteamientos y requerimientos urbanísticos actuales, en donde según Borja (2003), las políticas urbanas deben buscar compromisos positivos mediante una intervención transformadora permanente sobre unas realidades territoriales múltiples, es decir, está la necesidad de hacer ciudad sobre la ciudad.

Un concepto que bien puede ayudarnos a entender tal concepción del urbanismo lo encontramos en la idea de que se trata de entender

a lo urbano como “una labor, un trabajo de lo social sobre sí, como la sociedad urbana manos a la obra, haciéndose y luego deshaciéndose una y otra vez” (Delgado 1997: 11), por lo que se diferencia de la ciudad como hecho físico, como una realidad que está allí. Es decir, “a diferencia de lo que sucede con la ciudad, lo urbano no es un espacio que pueda ser morado. La ciudad tiene habitantes, lo urbano no... Lo urbano está constituido por usuarios. Es más, lo urbano es la apoteosis misma del valor de uso, lo que no deja de ser remarcable en una sociedad que subraya tan enfáticamente el valor de cambio” (Delgado 1997: 12).

En el caso de Medellín, la apuesta ha sido centrarse en el valor de cambio en aquellos sectores sujetos de planeación urbana y en la línea de la cara competitiva de la ciudad, principalmente ubicados en el valle que cobija a Medellín, el Valle de Aburrá. Y el valor de uso se ha fortalecido en aquellos sectores deprimidos y formados en la marginalidad mediante invasiones en las laderas montañosas, es ahí donde se han focalizado los esfuerzos de la transformación, porque es en esas zonas donde se encuentra la mayoría de la población en condiciones de segregación e inequidad socio-espacial. Focalizar los esfuerzos de la transformación mediante lo urbano ha sido la consigna entonces, ya que en Medellín el proceso de urbanización no fue planificado desde la institucionalidad con competencia en la materia, sino más bien respondió a un crecimiento desordenado y marginal, generando fragmentación espacial dada las condiciones físicas en que se ubican los asentamientos —en zonas de alto riesgo— y la exclusión social debido a la precaria presencia del Estado y la violencia como señor y ley por varios años. Las intervenciones urbanas han mostrado ser una herramienta viable para superar esos problemas sociales, y el cambio de piel (de imagen) un incentivo para los habitantes de dichos sectores en cuanto a participar activamente para su inclusión en la ciudad.

El más importante aprendizaje sobre el cambio social ocurrido en Medellín a nuestro parecer, es que una ciudadanía activa no implica por sí misma una transformación social. Se trata entonces de promover una participación efectiva pero apelando al fortalecimiento de una cultura política en tono a lo urbano y, de esta forma, la transformación es posible, en tanto el espacio urbano es el resultado de diversas decisiones políticas sobre la ciudad y su futuro.

Es así que si lo que se quiere es un verdadero cambio social y la transformación de la sociedad en una ciudad, “es fundamental la participación y el compromiso de toda la ciudadanía, ya que la

transformación de la ciudad implica no solo la definición de unos propósitos comunes fundamentales que orienten las prioridades de la actuación y la inversión, sino también el cambio en la cultura política y la forma como se ha hecho la gestión pública” (Restrepo 2007: 4).

Acá es donde entra en juego el concepto de cultura ciudadana, como complemento al de cultura política, al renovarlo con nuevas interpretaciones sobre el papel que juegan los ciudadanos en la construcción social de la ciudad. Para el caso de Medellín, implica definir cuál es el objeto legítimo de preocupación de una política pública mediante la cual se pretende mejorar un asunto de interés público para el beneficio de la sociedad que habita esa ciudad (CEHAP 2004). En ese sentido, se mira cómo en un corto periodo de tiempo —unos cinco años— Medellín a través de ser “la más educada” y “solidaria y competitiva”, ambos *slogan* referentes de la administración municipal plasmados en los últimos planes de desarrollo, ha pasado “del miedo a la esperanza” mediante un enfoque principalmente social, pero que se hace visible para todos, en proyectos estratégicos urbanos focalizados en la deuda social histórica con los sectores más marginales y deprimidos.

Según Restrepo (2007), para llegar a este punto fue esencial el proceso de construcción de un proyecto político que partió, desde su origen, del compromiso de ciudadanos y ciudadanas cansados de la manera cómo se manejaba la ciudad de Medellín. Para desarrollar un proyecto como ése, la participación ciudadana es un componente esencial, ya que se requiere movilizar a los ciudadanos de distintos sectores sociales y políticos, y convocarlos a ser parte de esa transformación.

La transformación social de Medellín, como hemos visto, aludió también a una serie de imaginarios en torno a la ciudad que, con un amplio despliegue comunicacional, ofrecieron los primeros pasos hacia el cambio, en tanto que de esa forma invitaban a toda la ciudadanía a ser partícipe de tan grande desafío como el de cambiar la imagen de la ciudad, tan estigmatizada por la violencia y el narcotráfico. Como estrategia comunicacional, los imaginarios inundaron la ciudad y encontraron acogida en la mayoría ciudadana; éstos resultaron efectivos dada su concordancia con el emergente interés por abordar un conjunto de fenómenos que, según Ortiz (2007), también tienen que ver con la cultura política: los “imaginarios”, las “mentalidades” y las “representaciones sociales” que distintos grupos conforman acerca de la realidad en general, y acerca de la vida política en particular.

Pero un problema no menor que puede suscitarse, corresponde a un pensamiento monotemático en torno a los imaginarios urbanos, es decir, lo que pasa cuando se depositan todas las esperanzas y

estrategias en un único imaginario que domina la escena de acción estatal y que poco a poco impregna a la sociedad. En el caso de Medellín, por ejemplo, esto ha ocurrido paulatinamente en donde se ha ido instalando un macro-imaginario en torno a la transformación de la ciudad, ganando cada vez más adeptos y obteniendo un papel protagonista no solo en la planeación urbana sino que se presenta como producto estrella de los últimos gobiernos municipales.

En ese sentido, debemos interrogar críticamente la intención de comprender una ciudad a través de un solo imaginario, sobre todo porque no se puede pretender reducir la complejidad que supone una ciudad latinoamericana como la de Medellín a un gran imaginario urbano. Resulta necesario desde ámbitos investigativos reflexionar y preguntar si es que estos macro-imaginarios instalados comunicacionalmente realmente han sido apropiados por los habitantes de las ciudades y si contienen o no a otros de menor alcance y que emanan de diversos grupos sociales y no solo desde altas esferas del poder (sectores dominantes). Porque la transformación de Medellín es más que interesante como un conjunto de experiencias obtenidas de la aplicación de novedosos instrumentos de intervención socio-espacial, la cual sin duda puede ser aprovechada por otras ciudades, pero aún falta tiempo e investigaciones que demuestren el real impacto y alcance de dicha transformación.

Eso sí, sea la transformación de Medellín una realidad o un imaginario impuesto desde quienes ejercen el liderazgo político de la ciudad, lo que se ha sacado en limpio es sumamente provechoso, nos referimos al aprendizaje que supone haber entendido que la transformación de la ciudad debe empezar por modificar radicalmente y sustancialmente el fondo y la forma en que se abordan los asuntos públicos de la ciudad; es decir, cómo se involucra a la ciudadanía desde el principio y en todo momento y, lo más importante, cómo se convoca y se hace partícipe a todos los sectores políticos, todos remando para el mismo lado.

El laboratorio urbano de Medellín: lecciones aprendidas al servicio de Santa Cruz de la Sierra

El telón de fondo que se propone es presentar una exploración comparativa para encontrar enfoques investigativos convergentes sobre la Ciudad Latinoamericana, en este caso, entre Medellín y su complejo proceso de transformación social desde lo urbano, y Santa Cruz de la Sierra, con sus disímiles problemáticas que inevitablemente tiene

que afrontar en pos de una buena calidad de vida de sus habitantes, de todos ellos, y así pasar de ser una ciudad dual —con una parte de la ciudad competitiva, moderna y cosmopolita y la otra parte al margen de ella siendo solo una espectadora de tal pujanza— a una ciudad incluyente y pensada para todos los cruceños bajo parámetros de cohesión social y equidad territorial.

En ese propósito, se utiliza el concepto de que paulatinamente Medellín se ha ido configurando como un “laboratorio urbano” para otras urbes latinoamericanas, en donde la producción de conocimiento académico va en sintonía con las intervenciones socio-espaciales que emanan del aparato estatal. Es decir, se plantea que a medida que se realizan transformaciones sociales en base a proyectos urbanos en dicha ciudad colombiana, emergen una serie de reflexiones, análisis e investigaciones que se preguntan por la pertinencia y las implicaciones de dichas iniciativas a la hora de producir ciudad. Es así como el urbanismo social, el Metrocable, los PUI y los parques bibliotecas —por mencionar los más importantes— aparte de surgir desde la administración pública como enfoques o proyectos emblemáticos de la ciudad, también son sujeto de estudios para mejorar su comprensión y las relaciones que establecen con el territorio en el que se enmarca cada uno de ellos.

El sistema de Metrocable se trata de un tipo de transporte masivo mediante cable aéreo, que recorre una ladera en la zona nororiental de la ciudad. Al estar integrado al sistema metro, contribuye enormemente a la eficiencia del transporte para los habitantes de la zona. Según Hernández (2006), el Metrocable se ha convertido en un elemento integrador de la ciudad de Medellín y ha logrado mejorar sustancialmente la movilidad urbana de los habitantes de la zona nororiental, otorgándoles grandes beneficios en ahorro de tiempo y dinero. Además, alrededor de las estaciones se generaron renovaciones y recuperaciones de espacios públicos en plazoletas, miradores, parques y zonas verdes, que buscan promover la convivencia, la recreación y el encuentro comunitario. Sin embargo, cabe destacar que aunque inicialmente se diseñó como un proyecto de movilidad urbana dentro del Plan de Desarrollo de la Ciudad, finalmente se ejecutó como parte del enfoque de urbanismo social, y de ahí las transformaciones asociadas al entorno del proyecto. Se han construido nuevos espacios denominados parques biblioteca ubicados en las zonas con más bajo índice de desarrollo humano, los cuales funcionan para promover el encuentro ciudadano y el desarrollo de la comunidad en los territorios en que éstos se emplazan. Actualmente, conforman una red de 34 parques en toda el área Metropolitana del Valle de Aburrá, de la cual es parte la ciudad de Medellín.

Pero antes de entrar en materia de cada una de esas intervenciones socio-espaciales llevadas a cabo en dicha ciudad colombiana, y con el objetivo de comparar esa experiencia con Santa Cruz, en primer lugar se discutirá el concepto de laboratorio urbano y sus posibilidades, bondades y aplicabilidad para estudiar la ciudad y obtener experiencias de interés y lecciones aprendidas que puedan replicarse en otros contextos urbanos. En segundo lugar, se presentan dos importantes ejes del modelo de transformación de Medellín como laboratorio urbano, nos referimos al enfoque del urbanismo social y a una herramienta específica de intervención socio-espacial que emana de él, como son los Planes Urbano Integrales, en cuanto a sus principales características y ámbitos de acción. Finalmente, se discuten lecciones aprendidas de ambos ejes para el caso de Santa Cruz de la sierra, buscando así ponerlos al servicio de investigadores y funcionarios públicos con interés en asuntos urbanos de esa ciudad boliviana.

El laboratorio urbano de Medellín, ¿de qué estamos hablando?

El laboratorio urbano se puede entender como un marco de referencia crítico para estudiar permanentemente los fenómenos socio-espaciales que inciden en la construcción de los territorios en la ciudad latinoamericana, pero con la particularidad de que lleva la investigación a la acción en el mismo territorio, convirtiéndose en una realidad socio-espacial en la cual se comparten ideas, conceptos y reflexiones innovadoras sobre lo urbano.

Eso sí, creemos pertinente superar la concepción clásica del concepto, porque nada más alejado de la relativa simplicidad matemático-química de un laboratorio —tal como se entiende en el mundo científico— que la complejidad de un territorio y la humanidad que lo construye. La idea del laboratorio, según Martínez (2002), tiene la virtud de expresar la espiral que sucede entre conocimiento y acción, y como metáfora ayuda a superar la hegemonía del principio de objetividad clásica en la investigación, según el cual el investigador social debe estudiar completamente desde fuera el fenómeno observado. Es decir, en el centro de la idea está la posibilidad de pensar procesos urbanos participativos y transformadores mediante el ensayo y el error, pero con la posibilidad de experimentar y reconstruir constantemente las hipótesis de trabajo.

En síntesis, un laboratorio urbano como el de Medellín puede entenderse como una plataforma o marco de trabajo que facilita el aprendizaje

en materia de planeación de otras ciudades con problemáticas similares, convirtiéndose en un modelo genérico, incompleto y configurable, al cual podemos añadirle las últimas piezas para construir un modelo concreto y territorializado según las particulares condiciones de la ciudad que lo piensa aplicar o usar como modelo de gestión urbana.

Su mayor potencialidad radica en que permite examinar y reflexionar críticamente respecto a las principales intervenciones y políticas urbanas realizadas en Medellín en los últimos cinco años, para poner esa experiencia al servicio de quienes piensan y planifican la ciudad. Esto las convierte en desafíos para la gestión institucional respecto a cuáles serían las transformaciones socio-espaciales que se requieren para un desarrollo urbano sostenible, pero con un modelo participativo, democratizador y constructor de cultura política y ciudadana en torno a los asuntos públicos inmiscuidos en las problemáticas urbanas.

Entre los aportes que encontramos al hablar de un laboratorio urbano está la idea de que corresponde a un sistema meso-territorial de generación de información y conocimiento sobre la ciudad, para un examen crítico de las políticas urbano-territoriales que operan en Medellín en su proceso transformador. Asimismo, interroga sistemáticamente sobre los procesos de planificación e intervención territorial y urbana que emanan del Estado. Por último, focaliza los asuntos de interés para aquellas ciudades que quieran aprovechar la experiencia y gestión innovadora del modelo de transformación de Medellín, es decir, que busquen focalizar las principales lecciones aprendidas para una planificación y gestión urbana de segunda generación.

Es un aspecto no menor el hecho de que países como Japón o Corea del Sur hayan mostrado interés en el modelo, así como Perú, Ecuador, Venezuela, México y Brasil, que fijaron su atención en aspectos o proyectos específicos de intervención. Las razones para este suscitado interés por la ciudad colombiana giran inevitablemente en el hecho de que colocan al ser humano en el centro del discurso y de la acción, y se hacen cargo de los sectores más excluidos de la ciudad, con los menores índices de calidad de vida y un menoscabado desarrollo humano. Todo esto, además de una serie de proyectos estratégicos y arquitectónicos que no solo le han cambiado la cara a la ciudad, sino también han contribuido a una recomposición del tejido social. Como modelo de desarrollo, Medellín le ha mostrado al mundo que mediante eficaces intervenciones socio-espaciales se genera una mayor equidad e inclusión social.

El ex alcalde Luis Pérez, en el Plan de Desarrollo de Medellín 2001-2003, expresó que “En vista de que los mecanismos de control legal

son débiles y el control moral se ha deteriorado gravemente, la cultura ciudadana se erige como una estrategia pedagógica de gobierno, cuya finalidad es vivir mejor. Es una forma intangible de reconstruir el tejido social de los seres humanos que forman la ciudad” (CEHAP 2004). En ese sentido, el urbanismo social y los proyectos asociados a dicho enfoque apuntan a fortalecer la cultura ciudadana y a integrar a los sectores menos favorecidos y más marginados de Medellín. Todo esto con el propósito de ayudar a la construcción de una ciudadanía que sea organizada, autónoma y cohesionada (social y territorialmente), capaz de resolver las diferencias y de solucionar pacíficamente sus conflictos, es decir, se trata de recomponer el tejido social.

Urbanismo social

El punto de partida más adecuado para explicar el concepto de urbanismo social incubado en Medellín, lo proporciona uno de los artífices de su concepción en tanto que lideró el proceso como alcalde de la ciudad en el periodo 2004-2007. Nos referimos a Sergio Fajardo, quien nos afirma que el “Urbanismo Social es oportunidades, inclusión social, construcción colectiva. Significa que estamos derrumbando las paredes que por tantos años nos separaron y que hoy podemos reencontrarnos y hacer una ciudad para todos. Además, estas obras, ubicadas en los lugares que lo requieren por sus menores índices de calidad de vida, son una clara apuesta política: construimos lo mejor para los más humildes” (Fajardo 2007: 148).

Avanzando en la puesta en escena del concepto, también es importante la concepción del líder en la administración de Fajardo respecto al urbanismo social como enfoque y eje del modelo Medellín de buen gobierno, nos referimos a Alejandro Echeverri², quién plantea que el foco era centrarse en la ciudad marginal por ser la más pobre, violenta e insegura, por lo que se requería de una visión integral para la transformación física y social de la ciudad. Por esto, se recurrió al concepto de urbanismo social. Destaca que hay tres temas importantes en torno al concepto: primero, llevar la planeación a la acción mediante proyectos concretos, es decir, “planear haciendo”, procurando llevar la acción al territorio; en segundo lugar, la gestión social y la comunicación pública, ya que sin la participación de las

2 Decimos que fue el líder del concepto, dado que se desempeñó como gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), organismo adscrito a la Alcaldía de Medellín pero con autonomía administrativa y financiera. A la EDU se le encargó poner en acción en el territorio el concepto de urbanismo social y diseñar y ejecutar los PUI.

comunidades involucradas no es posible una transformación urbana, es decir, caminar con la gente durante todo el proceso de intervención, y, en tercer lugar, una gestión física integral de calidad y con los mejores diseños (Alcaldía de Medellín 2008a).

Siguiendo con la línea institucional como argumento explicativo del concepto de urbanismo social, podemos señalar que en el plan de desarrollo vigente de la ciudad de Medellín (periodo 2008-2011) se lo considera como uno de los cinco enfoques utilizados para guiar y fundamentar las acciones a seguir en términos de gestión y planeación de la ciudad mediante un modelo de urbanismo sostenible y participativo. El Plan define como modelo de intervención del territorio el enfoque de urbanismo social, el cual comprende simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria. Se plantea que, como enfoque, ha propiciado en Medellín la inclusión de amplias zonas de la ciudad hasta ahora marginadas del desarrollo y ha dignificado los espacios y lugares que habitan los más pobres.

Estas zonas corresponden a territorios que cobijan a sociedades profundamente desiguales y con una deuda social histórica. Por ello, la apuesta ha sido conciliar transformaciones físicas con programas que apunten al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estos sectores más marginales. En ese sentido, según datos de la Secretaría de Educación y Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, el presupuesto invertido en el sector Educación al año 2006, representa el 40% del total del presupuesto de inversión del Municipio, siendo la mayor inversión en infraestructura educativa en la ciudad, llegando a ser un hecho histórico. Como estrategia, el Plan privilegia la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad, las más vulnerables desde el punto de vista social, ambiental y político, donde se evidencian los menores índices de desarrollo humano y calidad de vida (Alcaldía de Medellín 2008b).

Desde otro enfoque, que va más allá de lo institucional y oficial, podemos señalar que el urbanismo social puede entenderse como “la inserción del espacio físico dentro del social y un diseño que integra las concepciones metodológicas fundamentales en un intento que parte del propio sujeto afectado, a su vez sujeto de la transformación” (Salas, 2000). Como parte del modelo de transformación de la ciudad, es un eje central, ya que abarca el componente de intervención socio-espacial, el cual ha sido aplicado en forma ejemplar en Medellín, porque ha servido para reducir drásticamente la violencia y la inseguridad en la ciudad, al tiempo que ha impulsado la creación de

empleos, el incremento de calidad de vida y está devolviendo a los ciudadanos el orgullo de vivir ahí. Por tanto, el urbanismo social de Medellín ha demostrado ser un enfoque viable y efectivo que muestra que transformar una ciudad es posible, y la ciudad colombiana puede ser un ejemplo emblemático del cambio exitoso para otras ciudades latinoamericanas y del mundo.

Otra de las consideraciones de interés es que un modelo de ciudad como el implementado en Medellín para que sea sostenible debe necesariamente apuntar al pago de una deuda social histórica con sectores de la ciudad que por tanto tiempo estuvieron desamparados en materia estatal, sin una real intervención de éste en cuanto a la solución de sus problemáticas. Según Padilla (2009), la política urbana, orientada hacia un urbanismo comprometido con las mayorías más pobres, ha demostrado, en el caso de Medellín, que es la mejor inversión que pueden hacer los gobiernos locales, tanto en términos sociales como de rentabilidad política. Medellín se ha transformado en un lapso de tiempo muy corto en una ciudad integrada para todos sus habitantes.

Para la muestra, bien viene al caso lo que ha pasado con la operación del Metrocable, en donde además de integrar a las zonas en que éste opera al funcionamiento de ciudad en términos de movilidad, también ha dado mucho más que eso, en tanto ha podido devolver la dignidad en el trayecto que recorre, además de ir paulatinamente humanizando y dinamizando el territorio que envuelve. Es decir, su operación ha logrado que los territorios y habitantes inmiscuidos lo visualicen como un referente identitario y como un orgullo de la población que lo utiliza o vive dentro de su área de influencia.

Pero a pesar de las interesantes definiciones o enfoques que encontramos, se sostiene que el urbanismo social es todavía un concepto en construcción, dado que aún no se encuentra literatura teórica y empírica que lo avale, y menos una producción académica e investigativa que lo respalde, evalúe, critique y problematice. Emerge la idea de que el urbanismo social es aún un enfoque incapaz de atribuirse la transformación de una ciudad, y que a la vez está lejos de ser un concepto, en el sentido del purismo académico, siendo a lo sumo una buena idea en busca de un autor. Pero también se plantea que como enfoque innovador, requiere una reflexión de sustento, para evitar “reinventar la rueda” o “descubrir el agua tibia” y para evitar presentar a este tipo de urbanismo como un viejo vino en una nueva botella. En el fondo, este urbanismo social debe ser interrogado y, sobre todo, requiere investigaciones sobre los reales cambios significativos que ha propiciado, porque, como toda buena

idea, si no se renueva ni se fundamenta en acciones concretas, corre el riesgo de desvirtuarse y ser sujeta de uso y abuso. En este caso, tal como se presenta como un enfoque innovador y potente para la transformación de una ciudad, podría considerarse como un simple y frío maquillaje urbano que no soluciona los problemas estructurales de la ciudad ni mucho menos.

Finalmente, convendría resaltar que, a pesar de la insistencia de que el urbanismo social está lejos todavía de ser un concepto para la sociedad, es una oportunidad para que la academia y los investigadores profundicen en él y desarrollen la interesante e innovadora idea de que pone los instrumentos y recursos del urbanismo al servicio del ser humano, y que en Medellín ha resultado ser un enfoque novedoso y viable, ya que “hoy la ciudad ha encontrado en este proceso de transformación urbana el espacio para el encuentro ciudadano y en éstos el mejor incentivo para reconstruirse como sociedad”³.

Planes Urbanos Integrales (PUI)

Apelando nuevamente a planteamientos de Alejandro Echeverri, como líder del equipo que diseñó e implementó los Planes Urbanos Integrales (PUI) como herramientas del urbanismo social, los PUI tienen tres componentes principales: el primero de ellos es el institucional, que se refiere a la coordinación transversal de las diferentes políticas y programas de la Alcaldía en un territorio estratégico en particular; en segundo lugar, la participación comunitaria, respecto a una relación de retroalimentación y construcción del proyecto con la comunidad y, por último, se lidera el proyecto con la transformación física, que tiene que ver con cambiar el entorno en forma integral, es decir, espacio público, medio ambiente, vivienda y movilidad; junto a una arquitectura que promueva un sentido de pertenencia de la comunidad al lugar que habitan (Alcaldía de Medellín 2008a).

El punto de partida de las intervenciones urbanas integrales se basó en “la decisión política de invertir recursos, como nunca se había hecho, en las zonas más pobres, con un modelo de gestión que rompió el convencional esquema desarticulado de administración pública. El mismo que en el transcurso de los años desencadenó una deuda social histórica que teníamos que empezar a pagar, apostándole a disminuir la desigualdad y a establecer la equidad como principio básico de desarrollo, con

3 Idea elaborada por el ex-Gerente de la EDU, disponible en <http://www.edu.gov.co/blog.php?id=10>

una sostenibilidad enmarcada en los planes de desarrollo local. Así, nacieron los Proyectos Urbanos Integrales, PUI” (Fajardo 2007: 172).

En ese sentido, el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín 2008-2011, define a los PUI como estrategia principal y metodológica de urbanismo social y participativo, buscando con el concurso de la comunidad, el mejoramiento y redesarrollo de la vivienda y hábitat popular ya existente con acciones que permitan el fortalecimiento del tejido social, cultural y económico de las comunidades allí residentes (Alcaldía de Medellín 2008b).

En síntesis, el PUI es un tipo de intervención urbana que concentra todos sus recursos en un solo territorio con el ánimo de focalizar los esfuerzos en pos de una transformación integral de las comunidades, tanto en lo social como en lo físico. Está diseñado para abordar las zonas más marginadas y deprimidas de la ciudad, y para ser replicado como modelo de intervención en otros sectores que lo requieran (Hernández 2008).

Entre las principales problemáticas que originaron la idea de intervenciones integrales en la ciudad, encontramos una débil presencia histórica del Estado y con intervenciones deficientes, densificación de la zona, la histórica mala planeación y desordenamiento territorial, un déficit de espacio público y fragmentación socio-espacial producto de una movilidad peatonal discontinua, todo esto sumado a condiciones físicas adversas producto de la topografía del terreno que habitan las comunidades más pobres (Alcaldía de Medellín 2006).

Por tanto, el desafío de las intervenciones integrales requiere mucho más que buenas intenciones, un plan urbano de calidad y el diseño e implementación de proyectos estratégicos para el mejoramiento urbano y la inclusión social. Según Padilla (2009), todo esto ha sido posible gracias a una gestión pública con ideas claras, capacidad técnica, libre de ataduras partidistas y principalmente por una gestión social fundamentada en la participación de la comunidad, organizada por un equipo de profesionales y líderes comprometidos.

Hasta la fecha se han desarrollado tres PUI en Medellín, el de la zona Nororiental, el de Moravia⁴ y el de la Comuna 13⁵. La experiencia

4 Moravia es un sector de la ciudad asentado en un antiguo botadero de basuras que paulatinamente fue ocupado ilegalmente, abarca una extensión de 0,43 kilómetros cuadrados y cuenta con una población actual cercana a los 40 mil habitantes. El índice de espacio público, en 2004, era de 0,42 metros cuadrados por habitante.

5 La Comuna 13, la tercera zona con menor Índice de Desarrollo Humano de Medellín. El PUI busca promover un cambio para esta comuna, y pase de ser un foco de violencia a ser un milagro social de recuperación de la convivencia y de encuentro de oportunidades para el desarrollo.

acumulada en estas tres intervenciones, junto al alto impacto y éxito que han tenido, ha llevado a la Alcaldía a proyectar su reproducción en otros sectores de la ciudad enmarcados en el plan de desarrollo vigente; nos referimos a los PUI de la zona Noroccidental, Centro-oriental, y a continuación, al de la Comuna 13, y al propósito de dejar estructurados otros dos para que puedan ejecutarse de aquí al año 2015. Ésos serían el PUI de Altavista y la Iguaná.

Sin embargo, en términos del presente ejercicio comparativo con Santa Cruz, nos basaremos en el PUI de la Nororiental, por ser el primero en ser implementado y, por tanto, del que se dispone más antecedentes de sus impactos, lecciones aprendidas e información documentada. Dicho Proyecto Urbano Integral, pionero y piloto en la ciudad, se realizó en la zona Nororiental de Medellín, específicamente para las comunas⁶ 1 y 2, abarcando barrios que se formaron de manera informal y sin planificación, como efecto de desplazamientos rurales e inclusive urbanos, provocados por la violencia y la falta de oportunidades. El proyecto tiene una extensión territorial de 158 hectáreas donde habitan aproximadamente 170 mil personas (Alcaldía de Medellín 2006).

Lecciones aprendidas y desafíos para Santa Cruz de la Sierra: De la teoría a la acción en el territorio cruceño

Se propone discutir en torno a lo que pensamos son las mayores problemáticas urbanas de la ciudad de Santa Cruz, para lo cual se definen y agrupan en distintas categorías, y a cada una de ellas se le relaciona con los aportes y lecciones aprendidas de la aplicación del PUI de la zona Nororiental en Medellín, como modelo que pudiera ser replicable en la ciudad boliviana. De esa forma, se pretende poner un horizonte de acción para los encargados de la planificación y gestión de lo urbano en esa ciudad, encontrando en el PUI una herramienta de interés y viable para la solución de las disímiles problemáticas que se avencinan producto de la gran corona periurbana que paulatinamente se consolida en la metrópolis cruceña.

1) Santa Cruz es una ciudad dual

Santa Cruz de la Sierra es sin duda una ciudad dual, así como Medellín lo era y con su transformación lo es cada vez menos. La dualidad remite al planteamiento de Coraggio (1994), respecto a

6 La organización territorial de Medellín se estructura en 16 comunas urbanas que a la vez contienen 249 barrios y 5 corregimientos que corresponden a las zonas rurales de la ciudad.

que la ciudad con que llegamos al fin del siglo ha perdido su rumbo, quedando dividida entre una plataforma moderna e integrada al mercado mundial y un resto de la ciudad inorgánico, descapitalizado y plagado de problemas sociales. La ciudad boliviana está en medio de esa encrucijada, siendo, según Prado Zanini (2008), una ciudad contradictoria en la que coexisten una parte moderna —y su imagen de modernidad, riqueza y oportunidades— y una corona periurbana que presiona para ser tomada en cuenta. Tal planteamiento muestra las dos caras de Santa Cruz, aspecto reafirmado al considerar que, detrás de su imagen exitosa de ciudad próspera y globalizada, nos encontramos con una realidad distinta en la que el bienestar no ha sido capaz de llegar a la mayoría de las personas, concentrando la riqueza y profundizando la pobreza y la segregación (CEDURE 2007).

No es casual que el primer PUI se desarrollara en la zona nororiental de Medellín, conocida como la zona más violenta de la ciudad a principios de la década de los noventa, e históricamente la menos desarrollada, con barrios que crecieron de manera informal, sin planificación y como efecto de desplazamientos rurales e inclusive urbanos, provocados por la violencia y la falta de oportunidades. De hecho, según Fajardo (2007), las condiciones de la zona nororiental eran deficientes, con los índices más bajos de calidad en educación, mayor desempleo y subempleo, carencia significativa de espacios públicos, viviendas precarias y de alto riesgo y mayores tasas de homicidios. Allí convergieron todas las líneas de inversión, con aportes de las secretarías de la Alcaldía, es decir, en educación, emprendimiento, presupuesto participativo, salud, vivienda, seguridad y convivencia, deporte y recreación, medio ambiente, cultura ciudadana, paz y convivencia.

De esta forma, se atendía a la Medellín pobre y marginal, y se le daba la posibilidad de sentirse parte de la ciudad, con oportunidades y proyectos que impactaran la calidad de vida de la población, además de hacerla partícipe de la construcción de la ciudad. Aunque Medellín sigue siendo una ciudad dual, con experiencias como el PUI y el enfoque del urbanismo social, la brecha es cada vez menor, por lo menos en equidad y segregación socio-espacial. Un ejemplo importante es lo que ha pasado con el Plan Parcial de Mejoramiento Integral de Moravia, el cual ha sido desarrollado en uno de los sectores más deprimidos de la ciudad, que incluso llegó a erigirse sobre el antiguo basurero de la ciudad. El plan, como tal, busca mejorar la apropiación y respeto democrático de lo público; asimismo ha posibilitado la reubicación de familias en viviendas de interés social y ha fijado pautas de responsabilidad social de toda la ciudad con dicho territorio.

2) La emergencia de la segregación socio-espacial en la ciudad cruceña

En Santa Cruz empiezan a manifestarse procesos como la fragmentación y segregación físico-espacial de la ciudad. Fenómeno nuevo que trasciende las tradicionales diferencias sociales de la ciudad, para hablar ya de una marcada separación física de los habitantes (Prado Zanini 2008). Entre las implicaciones de esa segregación en la ciudad, encontramos la migración, la deficiente distribución de la riqueza y el derroche de las élites que atentan contra la identidad cultural de los cruceños tradicionales, todo lo cual ha llevado a una paulatina disgregación social, violencia e inseguridad ciudadana (CEDURE 2007).

Es importante destacar que el PUI de la zona Nororiental partió de un enfoque donde lo particular de cada comuna, barrio y zona intervenida es la oportunidad de aportar a la construcción colectiva de ciudad, en contrapunto a la lectura de la ciudad hecha desde la fragmentación y la ruptura, tal como se venía haciendo en las anteriores administraciones municipales. Es decir, se plantea entonces la necesidad de proponer un modelo de ciudad que trabaje con la complejidad urbana que supone las heterogeneidades de población, zonas y comunas.

Por tanto, el enfoque del urbanismo social y la herramienta del PUI le sirvieron a Medellín para pensar y construir la ciudad desde una perspectiva inclusiva y participativa, pero también desde sus características socio-territoriales, procurando instalar un proyecto colectivo de ciudad que detecte y localice las desigualdades territoriales e investigue las particularidades locales, a fin de actuar diferenciadamente sobre cada territorio de la urbe colombiana.

3) Déficit de espacio público para los habitantes periurbanos de Santa Cruz

La oferta de espacios de encuentro en la ciudad es absolutamente deficiente en los distritos periurbanos, con un marcado descuido y deterioro de los pocos que existen. Tampoco existen actividades gratuitas regulares y sostenidas que contribuyan a la apropiación del espacio público y a la construcción de ciudad (Prado Zanini 2008). Entre las principales problemáticas en torno al espacio público de Santa Cruz, se encuentran el déficit y degradación de las áreas verdes y de los equipamientos socio-culturales de uso público, una mermada cultura ecológica, contaminación visual, un deficiente mantenimiento de parques y plazas, y un déficit de paraderos de buses (Red Hábitat 2007). Y contribuye a los problemas los impactos de los migrantes asentados en sectores poco consolidados y con altos niveles de pobreza.

El espacio público está descuidado y sucio, desnudando una gestión pública de la ciudad deficiente (CEDURE 2007).

El PUI de la zona Nororiental propició un sentido de pertenencia de la comunidad con el proyecto, además de una presencia coordinada de la administración municipal, generando espacios públicos de calidad para el encuentro y la convivencia de los habitantes. Se apeló a la generación de espacio público con diseños arquitectónicos que permitieran recuperar la confianza en las zonas y en la ciudad, y encontrar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad.

Se hizo especial énfasis en el déficit de espacio público y discontinuidad en la movilidad peatonal, ya que tienen efectos directos en los barrios, atentando contra la integración comunitaria y la inseguridad peatonal. Las cifras⁷ muestran que se generaron más de 125.000 m² de espacio público, pasando de 0,65 m²/habitante a 1,48 m²/habitante. Y en cuanto a la movilidad, se implementaron 3.235 metros lineales en paseos urbanos o peatonales, junto a un corredor interbarrial peatonal de 343 metros lineales, con conexión a través de puentes peatonales que unen distintos barrios. Además se crearon 20 parques públicos y 4 adecuaciones que les permitieron a 16 barrios de las comunas 1 y 2, tener espacios para el encuentro ciudadano.

4) Violencia y abandono estatal como las dos caras de la misma moneda

La ciudad de Santa Cruz ha visto empeorar su calidad de vida en materia de criminalidad, colocándose por encima de ciudades como La Paz y Cochabamba (Blanes 2006). En ese sentido, el tejido social de la ciudad se descompone y profundiza cada vez más la delincuencia y violencia en la ciudad. Y lo que es peor, la presencia estatal es muy escasa y absolutamente insuficiente (Prado Zanini 2008).

En ese sentido, si lo que se quiere es hacer presencia estatal de verdad, no solo hay que conocer el territorio, también hay que preguntarle a quienes sufren los problemas cuáles son sus reales necesidades. Eso fue lo que hizo el equipo del PUI, en donde el mayor aprendizaje que se obtuvo fue el desarrollo, diseño e implementación de una metodología que surge de la necesidad de encontrar una nueva forma de intervención en la ciudad. La metodología, que comprende desde el diagnóstico y contextualización de las zonas de intervención, hasta el acompañamiento a la comunidad en la apropiación de los espacios y la continuidad de las organizaciones sociales que

7 Cifras proporcionadas por el Laboratorio Medellín, disponibles en www.laboratoriomedellin.com

sirvieron de plataforma para la realización del proyecto, es la mayor recomendación que se puede hacer a quien quiera implementar un modelo integral de intervención urbana (Alcaldía de Medellín 2006).

Así, se puede intervenir un territorio, se hace presencia estatal de verdad y se puede disminuir en forma considerable la violencia y el accionar de los “señores de lo ilegal” que dominan sectores de nuestras ciudades, amparados por un Estado ausente.

5) Hacia una planificación urbana con ciudadanía para hacer ciudad en Santa Cruz

Para solucionar las problemáticas de la ciudad de Santa Cruz no basta con una planificación espacial, ya que la construcción de la ciudad no es solo la planificación y edificación de su infraestructura urbana, sino sobre todo la construcción de ciudadanía y tejido urbano (Prado Zanini 2008). Por tanto, no hay que olvidar que la ciudad es su gente, en donde según CEDURE (2007), se tejen dos procesos paralelos de construcción, el de la parte física de la ciudad y el de ciudadanos como agentes activos del cambio en las condiciones de vida en la ciudad. Hecho no menor cuando en Santa Cruz se pasó de una planificación urbana descentralizada y con amplia participación de la sociedad civil, a una instancia municipalizada sin peso e importancia.

Pero además, sus funcionarios creen que “ya no se debe planificar sino ejecutar”, es decir, atribuyen a la planificación y no a su deficiente gestión los problemas que a esta altura son evidentes, producto de un modelo que no hace frente a las nuevas necesidades, sin referencia a una planificación estratégica y que no establece canales de comunicación con la sociedad civil (Prado Salmón 2008b).

En ese sentido, el principal logro del PUI fue desarrollar una metodología que sirve como modelo eficaz de intervención urbana, pero enfocada en lo social. Para ello, utiliza un mecanismo de participación incluyente que no solo ayuda a que los proyectos se validen por la gente para los que fueron pensados, sino que fortalece a los individuos que deciden pertenecer a ellos, capacitándolos para la organización social, la gestión, la ejecución y, en la mayoría de los casos, descubriendo nuevos líderes capaces de jalonar procesos sociales que en definitiva terminan restableciendo el tejido social (Alcaldía de Medellín 2006).

El PUI es exitoso, porque es innovador, ya que emplea los principios de la gestión pública coordinada y de manera responsable establece canales de comunicación, participación y decisión con la comunidad. Hasta el año 2007, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social y Planeación del Municipio de Medellín, se han ejecutado más

de 2.724 proyectos ejecutados por más de 192 mil millones de pesos, los cuales han sido formulados de manera participativa con aprobación de los Consejos Consultivos Comunales. Esto ha ampliado considerablemente la participación ciudadana en materia de planeación, mediante la utilización de mecanismos de presupuesto participativo. Además, coloca todas herramientas del desarrollo en un espacio determinado y estimula las competencias y capacidades del ser humano con programas y proyectos infraestructurales, humanos y técnicos.

Consideraciones finales

Este escrito no requiere “conclusiones”, sino prolongaciones y superaciones que finalmente lo conviertan en punto de llegada. Hablando con toda propiedad, el recorrido por estas páginas representa una breve mirada sobre con lo que ya contamos en la experiencia de Medellín y su transformación social desde lo urbano, para poder así aventurarse con mayor ímpetu hacia la odisea de lo que queda por recorrer en otras ciudades latinoamericanas, como es el caso de las urbes bolivianas. Es decir, inaugurando recorridos, señalando encrucijadas y descubriendo tierras fértiles podría describirse poéticamente el desafío que movió esta reflexión. El desafío consistió en explorar mundos de devenires en torno a las transformaciones de los territorios urbanos de Medellín y ponerlos a disposición de Santa Cruz de la Sierra mediante un marco de trabajo tipo laboratorio como el que ofrece la ciudad colombiana. Por ello este escrito no tiene conclusiones, aunque hay ciertas consideraciones a tener en cuenta en este proceso de aprender-haciendo ciudad.

En primer lugar, cabe destacar que para los términos de esta exploración, siempre se tuvo la premisa de aventurarse a lo desconocido, en tratar de ampliar la mirada de los estudios urbanos sobre los fenómenos que interroga, con el fin de construir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas que, aparte de construir conocimiento territorial, puedan develar la pertinencia de lo que se está interrogando sobre la ciudad, si se está a la altura de las circunstancias y de las complejas problemáticas urbanas. Lo que se buscó es indagar e investigar sobre la transformación de territorios urbanos de Medellín, pero intentando extraer las principales lecciones aprendidas y experiencias de interés que puedan servirles a los desafíos de Santa Cruz de la Sierra a la hora de planificar estratégicamente la ciudad.

En segundo término, para entender los beneficios de investigar y entender a la ciudad latinoamericana como un *laboratorio urbano*, se

requiere de casos de estudio que implementen tal estrategia investigativa como aproximación y ruta metodológica para el estudio de la ciudad y las transformaciones que la envuelven. Es en lo empírico que esta propuesta podrá ser interrogada y reconstruida, y es ahí que puede examinarse su capacidad de generar valor, es decir, construir relaciones simbióticas en las que todos los participantes salen ganando. Pero como propuesta conceptual, justamente lo que se busca es dar el puntapié inicial y proponer un esqueleto, una columna vertebral de la cual sostenerse, es decir, hacer una apuesta metodológica (una hipótesis) que sustente la idea de investigar colaborativamente en una espiral de reflexión-acción sobre las transformaciones que ocurren permanentemente en la ciudad latinoamericana, cada vez más llena de pliegues e intersticios que hay que abordar y comprender. Ésta sería una primera aproximación al caso boliviano, que sin duda requiere más acercamientos y la necesaria retroalimentación para seguir encontrando convergencias y para explorar comparativamente problemáticas de ciudad comunes entre el caso de Medellín y las metrópolis de Bolivia.

En tercer lugar, decir que como trabajo tipo exploratorio el interés se centró en descubrir nuevas líneas de acción en términos investigativos y de la planificación urbana, en tratar de ver lo que está oculto cuando se examinan transformaciones que inevitablemente se dilucidan en lo físico, en lo palpable, pero que deja por fuera una serie de aspectos intangibles inmiscuidos en tales transformaciones, y que pueden dar cuenta de la ciudad latinoamericana “imaginada” por quienes la tienen en el centro de sus preocupaciones o en su acción cotidiana.

Finalmente, esperamos sinceramente que este escrito contribuya en algo a una reflexión sistemática sobre las urbes bolivianas, tan necesaria por cierto, para que no solo se promueva la búsqueda de conocimiento respecto a lo urbano en las esferas académicas, sino también se propague entre los funcionarios municipales la necesidad de investigar las complejas problemáticas que ocurren en las ciudades que administran, gestionan y planifican.

Bibliografía

- Alcaldía de Medellín (2008a) *Medellín: Transformación de una ciudad*, BID, Medellín.
- Alcaldía de Medellín (2008b) *Medellín es solidaria y competitiva: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011*, Gaceta Oficial N°3261 año XV.

- Alcaldía de Medellín (2006) “Proyecto Urbano Integral Nororiental. Medellín” en http://edu.gov.co/pdf/sistematizacion_metodologia_PUI_web.pdf (consultado el 12 de mayo de 2009)
- Blanes, José (2006) “Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional” en *Revista eure*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. XXXII, N° 95, Santiago de Chile, pp. 21-36.
- Borja, Jordi (2003) *La ciudad conquistada*, Alianza Editorial, Madrid.
- CEDURE (2007) *Santa Cruz y su gente. Una visión crítica de su evolución y sus principales tendencias*, Imprenta ABC, Santa cruz de la Sierra.
- CEHAP (2004) *Lineamientos conceptuales y estratégicos para la formulación de una política en cultura ciudadana y educación en cultura ciudadana para la ciudad de Medellín*, Alcaldía de Medellín, Medellín.
- Coraggio, José Luis (1994) *Economía Urbana: la perspectiva popular*, Instituto Frónesis, Quito.
- Delgado, Manuel (1997) “La ciudad no es lo urbano: Hacia una antropología de lo inestable” en *CEHAP: Ensayos sobre Hábitat y Cultura*, Universidad Nacional de Colombia, N°1, Medellín, pp. 5-18.
- Fajardo, Sergio (2007) *Medellín: Del miedo a la esperanza*, Alcaldía de Medellín, Medellín.
- Hernández, César (2008) “Programa Urbano Integral-Nororiental” en Alberto Gutiérrez y Liliana Sánchez (editores), *Planeación, ambiente y territorio: Actualidad, retos y perspectivas*, Universidad de Antioquia, Medellín.
- Martínez, Manuel (2002) “Laberintos y laboratorios de participación urbana: Una aventura de investigación social comparativa y dialéctica” en *Revista Scripta Nova*, Universidad de Barcelona, Vol. VI N° 130, 1 de diciembre de 2002. Disponible en <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-130.htm>
- Ortiz, William (2007) *Cultura política y ciudadanía*, UNAULA, Bogotá.
- Padilla, Sergio (2009) “Temas de sustentabilidad en el urbanismo contemporáneo. Conclusiones del SUI” en *Revista Digital Universitaria*, UNAM, Volumen 10 N° 7, en <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num7/art39/int39-3.htm>
- Prado Salmón, Fernando (2008a) “El descuidado tema urbano en la Bolivia de hoy” en *Tinkazos* v.11 n.25, La Paz.
- Prado Salmón, Fernando (2008b) “El olvidado desarrollo urbano desde una perspectiva institucional y de gestión” en *Tinkazos*, vol.11, no.25, p.33-48.
- Prado Zanini, Isabella (2008) “Sectores periurbanos en la Santa Cruz dual” en *Tinkazos*, vol.11, no.25, p.79-86.
- Red Hábitat (2007) “Desarrollo Urbano Sostenible en Bolivia” en http://www.misereor.org/fileadmin/user_upload/misereor_org/spanisch/Desarrollo-urbano.pdf (consultado 07 julio de 2009)

- Restrepo, Clara Inés (2007) “El Presupuesto Participativo y la transformación de Medellín” en *Mercatec*, Institución Universitaria Esumer, N° 43, Medellín, pp. 4-15.
- Rivera, Alberto (1986) “Municipio y problemas urbanos en Bolivia” en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM, Vol. 48, No. 4, Oct.-Dec 1986, pp. 109-121, en <http://www.jstor.org/stable/3540392> (consultado 30 de septiembre de 2009)
- Salas, Adalberto (2000) “Proyecto de transformación sociocultural y urbanística en la comunidad Novoa (Cuba)” en: <http://hábitat.aq.upm.es/bpal/onu00/bp613.html> (consultado 07 de abril de 2009).

La continuidad urbano rural y el uso de suelo urbano en Tarija

Verónica Aranda Montecinos

Introducción

En Bolivia, la problemática urbana posee particularidades que van acentuándose en la medida en que nos introducimos a los diferentes escenarios urbanos en el país. En particular, podemos ver capitales de departamento que ya sufren las consecuencias de profundos procesos de conurbación y metropolización. Por otro lado, fuera del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), vemos ciudades en crecimiento y procesos de expansión sin planificación en un dinámico juego entre la apropiación de espacios, migración y pobreza.

En los últimos años, hemos sido testigos de la necesidad en el país de encarar procesos de planificación urbana. Aunque muchos han sido los tipos de planificación que se han llevado adelante, lastimosamente en los procesos de planificación física, hasta ahora, se trabaja en el área rural separadamente del área urbana. No se ha realizado un análisis lo suficientemente profundo sobre la *continuidad urbano-rural* en la planificación. La descripción de un primer acercamiento a esta continuidad dentro de una experiencia de planificación es el objeto del presente trabajo. El artículo describe las experiencias desarrolladas en el departamento de Tarija como parte del proceso de Ordenamiento Territorial plasmadas en el primer Plan Departamental aprobado en el 2006. Del documento mencionado, parte el planteamiento de la incorporación del *uso de suelo urbano* como una nueva categoría de análisis obligatorio en los planes de alcance regional. Esta categoría ha inducido a que planificadores trabajen en la articulación urbano-rural desde una perspectiva no solo espacial, sino social, económica y político institucional.

Actualmente, en los procesos de planificación y en la implementación de los mismos existe una tendencia generalizada a profundizar la brecha entre el área rural y urbana en el país, a pesar de la necesidad de conocer las relaciones urbano-rurales y los mecanismos que deberían desarrollarse a fin de acortar esta brecha. El problema de la planificación física y estratégica está dado por la ausencia de una planificación integral que incluya la articulación de lo urbano con lo rural en las propuestas de desarrollo. Esta situación se agrava cuando se considera, además, la complementariedad de lo estratégico con lo físico y todas las escalas de la planificación (municipal, regional y departamental).

El objetivo de este trabajo, entonces, es mostrar la importancia de incluir la categoría de *uso de suelo urbano* en los planes de ordenamiento territorial municipal y departamental. Argumentamos que esta categoría es una herramienta para considerar la problemática y el potencial de las áreas urbanas en el diseño de las estrategias de desarrollo, siendo el urbano un escenario de suma importancia en toda la dinámica social económica y política. Este objetivo se plantea desde la experiencia de la elaboración del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT) de Tarija. En este PDOT, se incorporaron variables nuevas de análisis, como la del uso del suelo urbano, que nos permite analizar la debilidad de la relación urbano-rural en un contexto departamental y municipal. Los resultados del proceso, que detallamos a continuación después de describir los procesos de planificación, permiten orientar objetivamente acciones posteriores en otro tipo de procesos. Es decir, el resultado debiera ser la articulación de ambas zonas para trabajar hacia su relación menos fracturada tanto en el aspecto social como en el económico.

Antecedentes

A diferencia de la configuración espacial de otros departamentos de Bolivia, en Tarija se ha dado un interesante sistema de ciudades que muestran una distribución de la población menos centralizada en una sola capital. Gracias a la expectativa suscitada en torno al aprovechamiento de los recursos hidrocarburiíferos, estas pequeñas ciudades se han convertido en centros de atracción de migrantes que desarrollan diversas actividades. En algunos casos, esta dinámica ha acentuado el rol de ciudades fronterizas como Yacuiba, Bermejo y Villa Montes. A pesar de que las actividades económicas

y político administrativas tienen una fuerte tendencia centralizadora hacia la capital del departamento (la ciudad de Tarija), la estructura territorial tarijeña no obedece a un típico centralismo regional. Esto se debe, en parte, a la fisiografía misma de la región que a través de las unidades de planificación del departamento permite la definición de las potencialidades y limitantes de cada una de las denominadas “unidades territoriales” (figura 1).

El departamento de Tarija se divide en cuatro zonas fisiográficas: la zona alta, el valle central, el subandino y la llanura chaqueña. En la zona alta se tienen paisajes de montaña y fuertes pendientes. El valle central está formado predominantemente por pie de monte, planicies y colinas. El subandino se caracteriza por serranías combinadas con valles y la llanura chaqueña tiene una topografía predominantemente plana. Los suelos presentan una gran variabilidad de características morfológicas junto a varios tipos de clima, determinados por la orografía, la altitud sobre el nivel del mar y la orientación de las pendientes, identificándose cuatro tipos climáticos: árido, semiárido, subhúmedo y húmedo.

Tarija tiene 37.623 km² de superficie que representan el 3,4% del territorio nacional; una población de 391.226 habitantes que representa el 4,7% de la población nacional y una densidad poblacional mayor al promedio del país con 10,4 hab/km² (INE 2001). Política-mente se divide en seis provincias y once secciones municipales. La distribución de la población se representa en la figura 2.

A través de los gobiernos locales, se ha buscado fomentar la transferencia de recursos económicos y administrativos a los niveles provinciales desde la Prefectura. Esto deja entrever un acercamiento con los gobiernos municipales de las once secciones y tiene relevancia particular por el hecho de que representa un primer intento para que la inversión pública atienda las necesidades de las diversas regiones del departamento dirigiéndola hacia la productividad y el desarrollo humano integral. En todos estos esfuerzos, ha sido importante el rol que ha jugado la Prefectura del Departamento como la institución más grande y con una capacidad económica amplia que en contrapartida debe atender las múltiples necesidades de un departamento postergado en todos los ámbitos, que si bien posee una estructuración de centros definida ésta no cuenta con la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo ni local ni regional. Todos estos aspectos conducen a profundizar el análisis en temas como el de la presente investigación pero con la seguridad de que aún hay mucho por descubrir y proponer.

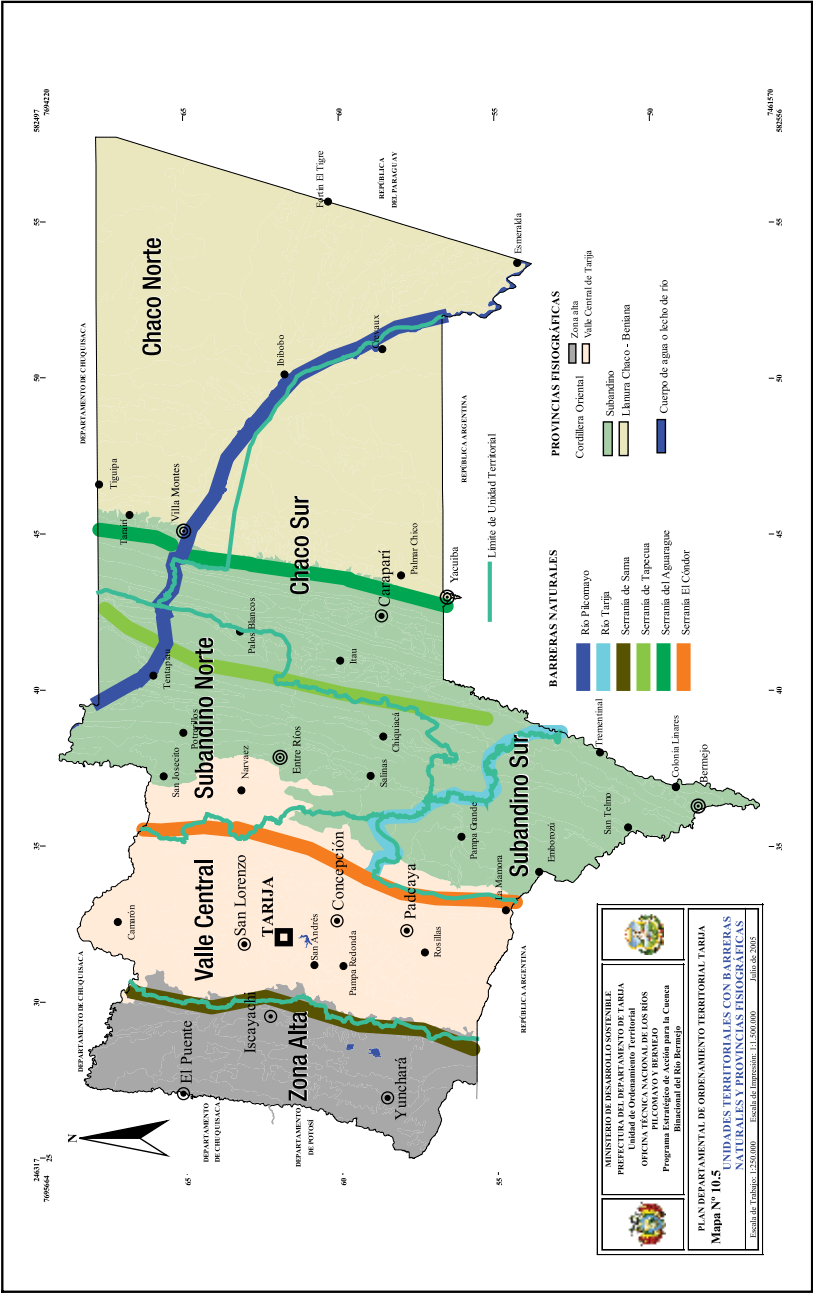


Figura 1: Unidades territoriales
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

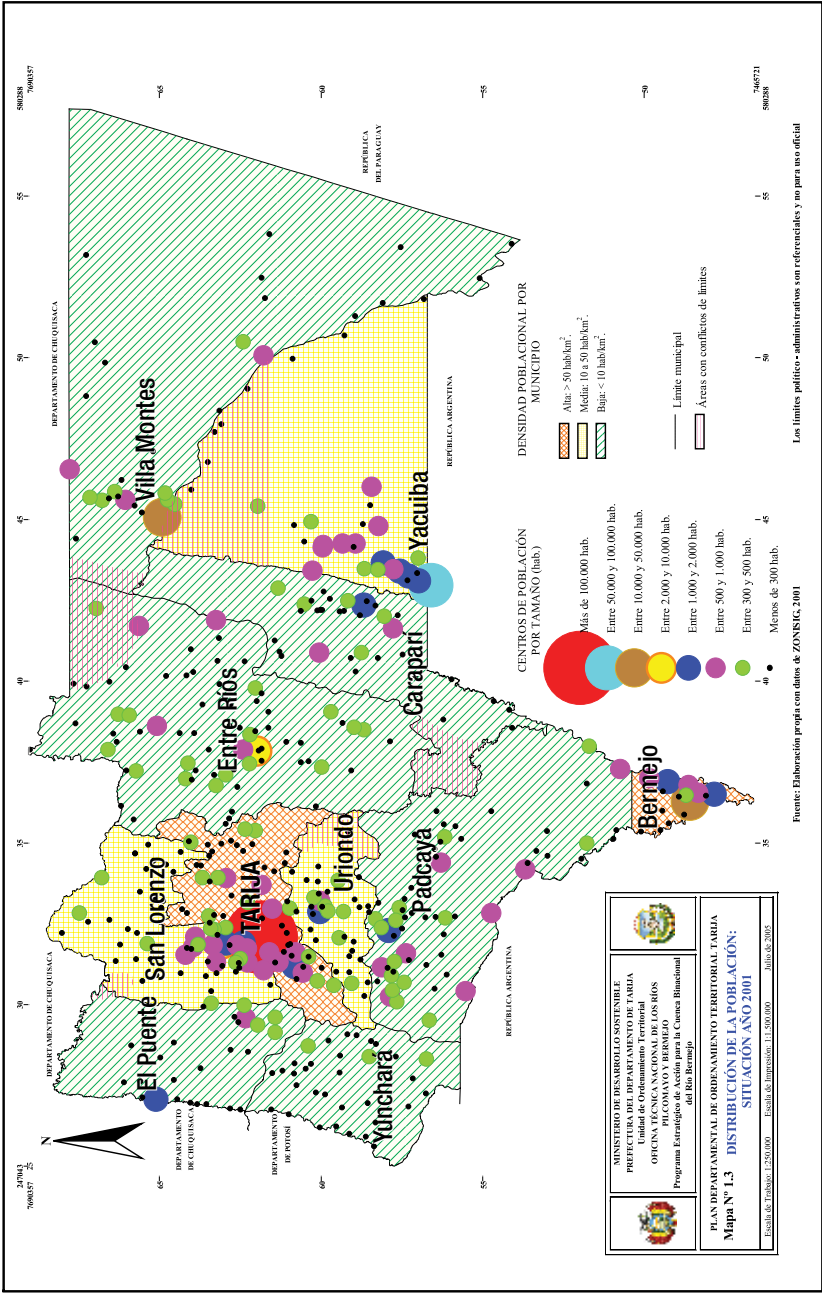


Figura 2: Distribución de población
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

En el departamento de Tarija, además de la inversión, se han realizado grandes esfuerzos en procesos de planificación de escala departamental y sectorial logrando una articulación objetiva de éstos con el Plan Departamental de Desarrollo, el PDOT y el plan nacional. Estos ejercicios en los últimos tres años nos permiten hablar de proyectos estratégicos que son fruto de procesos de planificación que buscan reducir la brecha urbano-rural, que a su vez se han propuesto alcanzar mayores índices en desarrollo humano y económico en la constante búsqueda de la inclusión y la equidad. En este contexto, será interesante reflexionar sobre el marco normativo de los procesos de ordenamiento territorial y de la planificación urbana íntimamente relacionada a sistemas de catastro urbano y rural y a procesos de saneamiento de propiedad que en Tarija como en el resto del país carecen de integralidad, continuidad y complementariedad.

El proceso de planificación física en el departamento de Tarija

El proceso de planificación física tiene origen a fines de la década de los noventa con la formulación de la zonificación agroecológica y socioeconómica del departamento. Al concluir esta zonificación, da paso inmediatamente a la elaboración de Plan de Uso de Suelo (PLUS) aprobado el año 2002 mediante el Decreto Supremo 26732. Éste a su vez permite la formulación del segundo componente del ordenamiento territorial, el Plan de Ocupación del Territorio. En este último proceso, se realiza un primer análisis de la relevancia de la dinámica urbana en crecimiento acelerado y los resultados del mismo.

Lo anterior deriva en una pregunta ineludible: ¿por qué el uso de suelo urbano no ha sido considerado a tiempo de realizar la normativa del PLUS en 2002? Si bien no hay respuestas precisas, una causa probable es el hecho de que la zonificación tenía como objetivo la categorización del recurso suelo en función a sus características geomorfológicas para fines de desarrollo económico. En este sentido, se pensaba exclusivamente en el área rural y en las actividades de tipo productivo, por ser allí donde se hace el aprovechamiento de recurso. Se buscaba así dar una clara orientación respecto a las potencialidades y limitantes de la región en términos productivos.

Esto evidencia cómo las áreas urbanas son aisladas de planteamientos de desarrollo, quedando fuera del pensamiento estratégico de planificación. A menudo, no se hace relevancia a su rol en las dinámicas económicas que interactúan en ella. Dentro del enfoque de

desarrollo local, está el hecho de que en las áreas urbanas se dan los procesos de transformación de materias primas como una condición para lograr niveles de competitividad territorial. Sin embargo, por el hecho de no manejar las estrategias de forma integral, las políticas diseñadas no son de impacto en los procesos productivos o de intercambio. Eso resta posibilidades al logro de los objetivos, pues las estrategias están pensando o solo en la generación de materia prima o solo en la transformación, hecho recurrente que conlleva a la continua dispersión de recursos que hacen simplemente a la postergación de nuestras regiones.

El proceso de planificación está relegado a las áreas urbanas, considerándolas áreas marginales en el territorio, lo que impide la visualización de escenarios propicios para el desarrollo concertado. La brecha ha sido consolidada en el imaginario de los actores donde no se reconoce el rol y la importancia de los asentamientos humanos. Se ha institucionalizado una visión según la cual la dinámica urbana corresponde a un segundo plano en contextos departamentales, regionales y municipales y que la problemática urbana es un hecho aislado de estos contextos territoriales. Esto se evidencia en la falta de planificación urbana a nivel departamental, carencia que veremos que la categoría de *uso de suelo urbano* busca remediar.

En las planificaciones más recientes en Tarija, de cara al diseño de estrategias de desarrollo para el departamento, se concluyó que éste requiere de una estrategia integral donde era importante incorporar lo referido a la dinámica urbana. Por esta razón, se desarrolló un capítulo exclusivo de análisis y propuesta en el documento final del PDOT dedicado a la problemática urbana. La propuesta plantea lineamientos urbanos que debieran ser considerados en el momento de la formulación de planes municipales y urbanos de ordenamiento territorial, a fin de orientar correctamente la posterior planificación y de diseño urbano de las cuatro ciudades del departamento, las mismas que se desarrollan en contextos diferentes y bajo diferentes roles (Tarija, Bermejo, Yacuiba y Villa Montes).

En estos procesos, la voluntad política de las autoridades en los diferentes niveles territoriales ha dado importancia y espacios al proceso de planificación en lo que corresponde a la planificación física, estratégica y participativa. Cabe mencionar que en la gestión 2006, Tarija era el único departamento en Bolivia que contaba con Planes Departamentales de Uso de Suelo, de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Económico aprobados. El trabajo interrelacionado entre los planes facilita la alineación a la visión de desarrollo,

induciendo además al nivel municipal a profundizar sus procesos de planificación.

Alianzas entre los niveles departamentales y municipales se han fomentado, en parte, por las dinámicas no-centralizadas del departamento. Estas dinámicas giran en torno al reconocimiento de las limitaciones y debilidades del sector económico y de la necesidad de aprovechar la ubicación estratégica del departamento y orientar la mirada hacia las “ciudades fronterizas”. La creciente migración hacia el departamento y el rápido crecimiento de las manchas urbanas también han impulsado la ejecución colaborada entre prefectura y municipalidades de proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de los tarijeños. Se ha trabajado en conjunto bajo el esquema de la concurrencia que esta orientación requiere de un enfoque de escala urbana o rural con impacto regional que no busca otra cosa que la reducción de la brecha entre el campo y la ciudad.

Con estas iniciativas institucionales y la experiencia en el proceso de planificación de la Prefectura, el departamento de Tarija se convierte en el pionero de la planificación física del país al contar con 10 de 11 planes municipales de ordenamiento territorial y, junto a éstos, 7 planes urbanos y 2 lineamientos en el caso de los centros en transición rural -urbano.

A partir de la incorporación del suelo urbano como una variable en la planificación territorial destacando las fortalezas y debilidades del mismo en un proceso nuevo donde se interrelaciona lo urbano con lo rural aún hay mucho camino por recorrer desde consolidar el proceso hasta normarlo en búsqueda de hacerlo perfectible pero a la vez flexible en el entendido de que cada región, cada centro, cada unidad de planificación tiene una razón de ser y un rol que cumplir y al mismo tiempo que se constituye en una pieza fundamental del “todo” del cual somos parte; donde el territorio, “nuestro territorio” es el escenario de la planificación integral que permita acercar a dos contextos diferentes pero dependientes y complementarios como el urbano y el rural.

El suelo urbano desde la perspectiva regional

Cuando se formulaba la estrategia del plan de ocupación para el PDOT 2006-2025, se advirtió de la problemática que genera el crecimiento de las manchas urbanas sobre suelo con potencial productivo. Este hecho implica la sistemática alteración en las unidades productivas por pérdida de suelo con potencial para actividades productivas, sean agrícolas, forestales u otros de gran importancia para

lograr la competitividad. Pero esta situación condujo a discutir sobre la relevancia de analizar la problemática urbana a escala departamental, sobre todo, considerando que en lo referido a competencias la prefectura no tiene ninguna. Sin embargo, el debate continuó en el sentido de la importancia de solucionar problemas ambientales y el planteamiento de proyectos estratégicos que dependen de la dinámica urbana, el proceso de saneamiento de tierras y otros.

Hasta hoy día, la problemática urbana en el país se suele analizar en el contexto de su radio urbano y raramente de éste hacia fuera. Este enfoque es especialmente evidente en los análisis de las ciudades capitales. En el caso del departamento de Tarija, sin embargo, no se puede hablar de una ciudad simplemente; en el año 2004 ya existían cuatro ciudades de gran importancia a nivel departamental y nacional.

Otro aspecto importante por el cual se definió trabajar el componente urbano fue el hecho de que además de existir cuatro centros de tipo urbano consolidados, se identificó la existencia de centros secundarios y terciarios a escala departamental como centros en proceso de transición de rural a urbano. Por esta razón, en la propuesta de estructuración se propone por ejemplo consolidar a Entre Ríos capital de la provincia O'Connor como la quinta ciudad del departamento y como este caso algunos más que serán revisados más adelante (figura 3).

Estas razones indujeron a realizar un análisis de la problemática urbana como una variable importante en la dinámica socioeconómica del Departamento. Es decir, a medida que se iba profundizando el análisis de la problemática departamental y a medida en que se introducía el planteamiento de la estrategia, no pudo dejarse de lado el componente urbano por el acelerado proceso de urbanización.

Fue inevitable entrar en detalle al análisis y se tomó la decisión de trabajar en el componente urbano al nivel de lineamientos como se mencionó en párrafos anteriores. La meta de este trabajo fue generar una propuesta integral que considere, entre otros factores, el impacto ambiental generado por la ausencia de adecuados sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos fruto de actividades domésticas comerciales e industriales ubicadas en el área urbana. Otro aspecto importante fue el hecho de orientar estrategias de desarrollo económico localizadas en áreas urbanas como parte del proceso de transformación y comercialización en las llamadas cadenas o complejos productivos. En éstas, fundamentalmente se propone crear las condiciones para la industrialización de materias primas, las mismas que debieran localizarse en las áreas urbanas y que requieren, además, de alianzas estratégicas entre públicos y privados.

Por lo antes expuesto se puede asegurar que el uso de suelo urbano en un proceso de planificación regional se convierte no solo en una variable referente de análisis sino que se consolida como un componente estratégico para el planteamiento de cualquier modelo de desarrollo económico. En el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental de Tarija, el uso de suelo urbano es el componente que advierte sobre la necesidad de orientar los procesos de expansión de las manchas urbanas con el fin de *preservar* las áreas con potencial productivo. Es en estas áreas que instituciones como la Prefectura realizan inversiones para mejorar las condiciones de producción. Al ser éstas invadidas por asentamientos, el efecto es negativo desde el punto de vista de la inversión y de la disminución de las posibilidades de desarrollar al sector agrícola.

Los asentamientos a los que se hace referencia son fruto de la improvisación y la autoconstrucción. Como en el resto del país, al principio son asentamientos informales que paulatinamente se “legalizan”. Al atender mejor la planificación urbana a las realidades demográficas y necesidades de las poblaciones informalmente asentadas, se podría mejor planificar el ordenamiento del territorio urbano y periurbano y así minimizar los efectos negativos en la dinámica económica regional. En el presente trabajo no se desea mostrar simplemente la gran necesidad de reorientar procesos de ordenamiento municipal y/o urbano o de redundar sobre lo importante de hacer planificación urbana. Más bien, se desea mostrar cómo un trabajo de escala regional depende absolutamente de todos los factores que interactúan en determinado territorio.

Para este efecto, primero interesa tener claro el alcance de un Plan de Uso de Suelo (PLUS) considerando que el uso de suelo urbano en el contexto regional tarijeño se convierte en una nueva categoría de uso real que se suma a las categorías de uso identificadas en el primer PLUS departamental y que a su vez contienen subcategorías. Éstas son:

- A. Tierras de uso agropecuario intensivo
- B. Tierras de uso agropecuario extensivo
- C. Tierras de uso agrosilvopastoril
- D. Tierras de uso forestal
- E. Tierras de protección con uso restringido
- F. Áreas protegidas
- G. Suelo urbano

Con el reconocimiento de la necesidad de incorporar la continuidad urbano-rural en la planificación territorial, el inciso G se incorpora como una categoría de uso de suelo dentro de la propuesta del plan de ocupación. Esta categoría tiene varios propósitos. El principal es inducir hacia los procesos de planificación urbana. Bajo esta meta, se busca prevenir la excesiva expansión de las manchas urbanas consolidando las tendencias de ciudades lineales que se extienden adyacentes a las principales vías de comunicación. En el caso de las ciudades tarijeñas, todas se están desarrollando en función a la estructura vial de la red fundamental generando más de un conflicto. A la vez, la planificación urbana debe promover la densificación de las manchas urbanas, considerando que las densidades de las mismas son bajas para el tamaño del radio urbano aprobado.

Otros propósitos de la incorporación de la categoría de *suelo urbano* en la planificación territorial son: trabajar en el mejoramiento y ampliación de los sistemas de servicio básicos y en las redes de servicios sociales e infraestructura vial para lograr la integración urbano-rural; prevenir y mitigar los impactos de una constante contaminación originada por diferentes factores, principalmente por el hecho de no contar con adecuados sistemas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos; orientar con criterios de redes la ubicación de los diferentes equipamientos que demanda el crecimiento de las ciudades pero que a su vez estos tienen impactos sobre las áreas rurales por la envergadura que tienen; y fortalecer y complementar la relación urbana-rural bajo criterios de redes sociales integrales.

Por todo lo antes expuesto, el suelo urbano en la perspectiva regional se convierte en un referente importante para optimizar el uso de suelo en general, bajo dos puntos de vista: el de preservar y el de normar. Además, dirige la planificación hacia la articulación e integración de los asentamientos humanos al Departamento. En vez de dar pie a asentamientos relegados, se buscaría articular áreas rurales con urbanas mediante el fortalecimiento a los centros jerarquizados en relación a sus áreas de influencia propuesta en el Plan de Ocupación del Territorio. En este aspecto, el componente urbano podría consolidar su rol articulador en la unidad territorial a la que pertenecen ampliando su área de influencia hacia el área rural.

El suelo urbano, en el documento de propuesta, se convierte en orientador a escala departamental. A escala municipal, es una norma por lo que se definen subcategorías al interior de este uso, lo que se detalla en la figura 4.

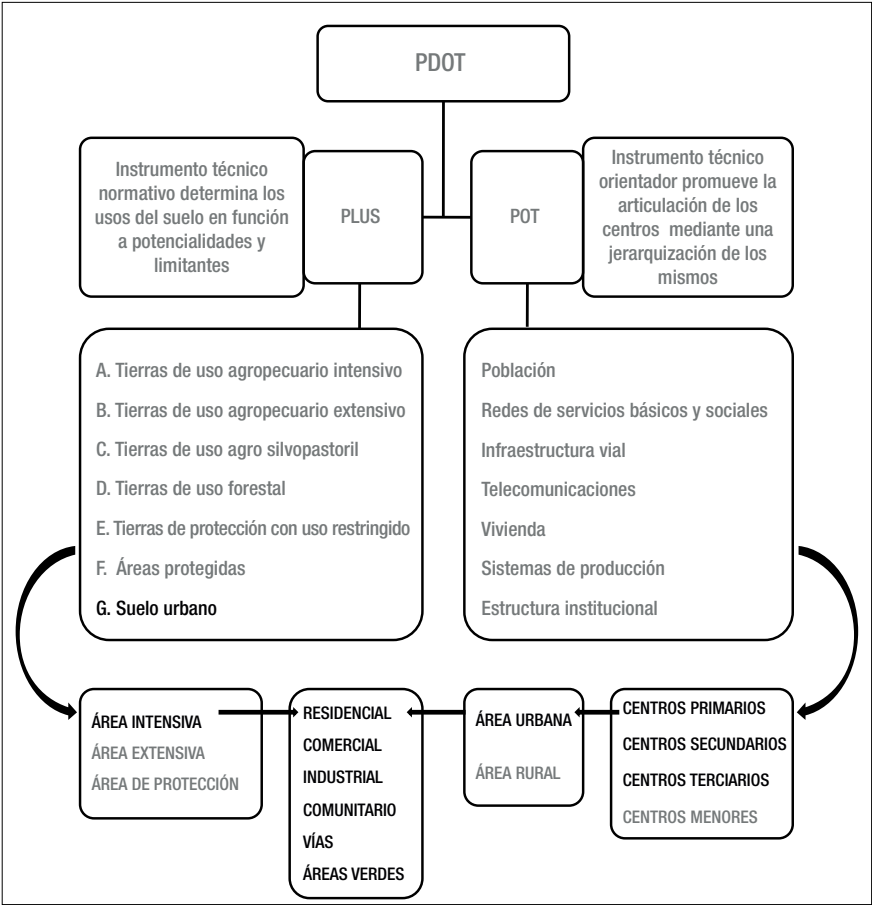


Figura 4: Categorías y sub-categorías PLUS

Fuente: PDOT Tarija y guías de O.T.

Elaboración: Propia VAM 2009

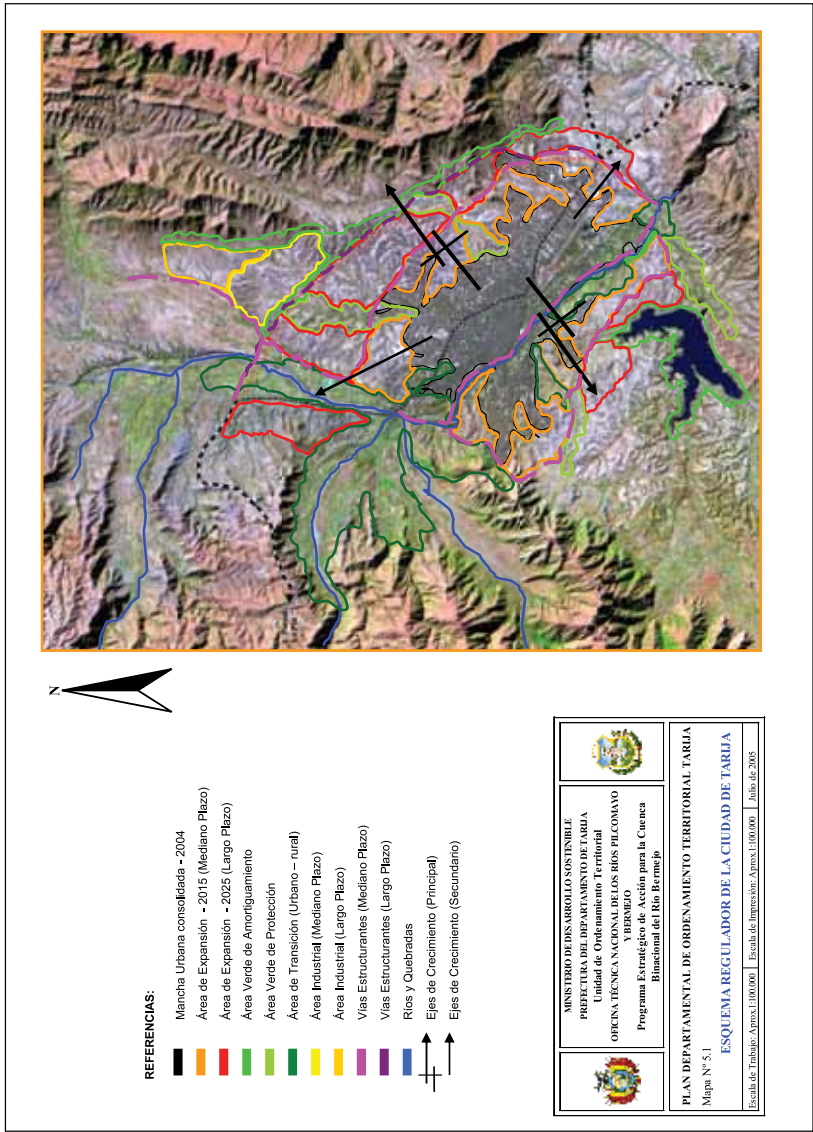
La categorización propuesta debe convertirse en una norma que además asigna porcentajes a cada una de ellas al interior del radio urbano. Será de acuerdo al rol de cada uno de los centros urbanos tomando en cuenta la construcción colectiva a la que nos conduce la metodología de planificación traducida en la “visión y la ciudad que deseamos”.

A continuación se mencionan los aspectos adicionales a los que la propuesta arribó, considerando que la problemática urbana departamental es coincidente, pero no implica que se debe enfrentar bajo las mismas estrategias. Es así que toma fuerza la idea de generar simplemente lineamientos que serán enriquecidos desde la óptica local desagregando las variables de acuerdo a las necesidades de cada una de las ciudades. Las variables de propuesta se expresan en el cuadro 1.

Cuadro 1: Variables de propuesta

Densidad poblacional	Analiza la diferencia de densidad en cada ciudad y la tendencia de crecimiento; en consecuencia se propone la densificación. Se recomienda planificar la expansión de las áreas urbanas en función la información de riesgo y vulnerabilidad, la dotación de servicios, la preservación de suelos aptos para la producción agrícola y otros.
Uso de suelo	Se refiere a la distribución de los diferentes usos de suelo dentro de la mancha urbana en una relación porcentual, que variará en función a las proyecciones de crecimiento de la población.
Estructura vial	Articula las diferentes zonas dentro del área urbana y el área urbana con su entorno; la estructura responde a una jerarquización, de acuerdo al tipo de infraestructura y a la función que cumple cada vía dentro de la estructura.
Áreas para equipamiento	Es el hecho arquitectónico cuyo objeto es satisfacer las necesidades complementarias a la actividad residencial, está distribuido en la mancha urbana. (educación, salud, recreación, comercio, culto, sociocultural y gestión) y su dimensionamiento se calcula en función a la cantidad de población beneficiaria. Se define la necesidad de tener un equipamiento por unidad de planificación en relación a la población de esta unidad y su relacionamiento con otras unidades de planificación y sus respectivas áreas de influencia.
Áreas de riesgo y vulnerabilidad	Son áreas que representan algún tipo de problema en su configuración física (laderas, fallas geológicas, riberas naturales, áreas erosionadas y otras) y que deben tomarse en cuenta como parte de las tareas de prevención de desastres naturales.
Contaminación ambiental urbana	Ésta se genera por las actividades socio-productivas de y en las áreas urbanas que afectan a la salud pública y al medio ambiente.
Ejes de crecimiento	Se analiza las tendencias de crecimiento de cada ciudad y se recomienda la reorientación de crecimiento por cada una considerando además la propuesta de densificación.

En las figuras 5 a 8, se presentan los esquemas reguladores presentados en el PDOT 2006-2025, que muestran gráficamente el análisis antes expuesto. Estos esquemas reguladores se constituyen como el lineamiento para trabajar a otra escala de mayor detalle que debe plantear como objetivo la formulación de normativa de urbanización y de construcción.



Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

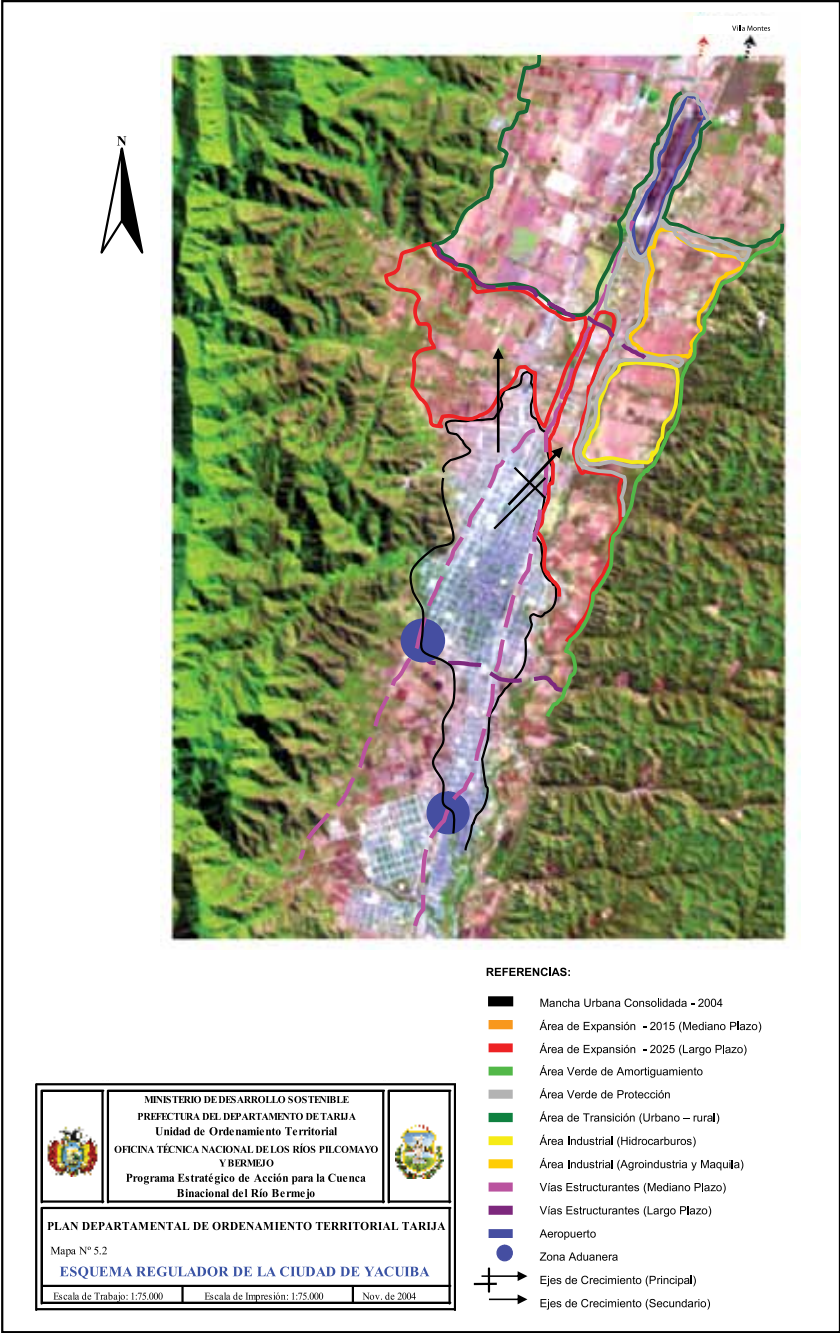


Figura 6: Esquemas reguladores presentados en el PDOT 2006-2025
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

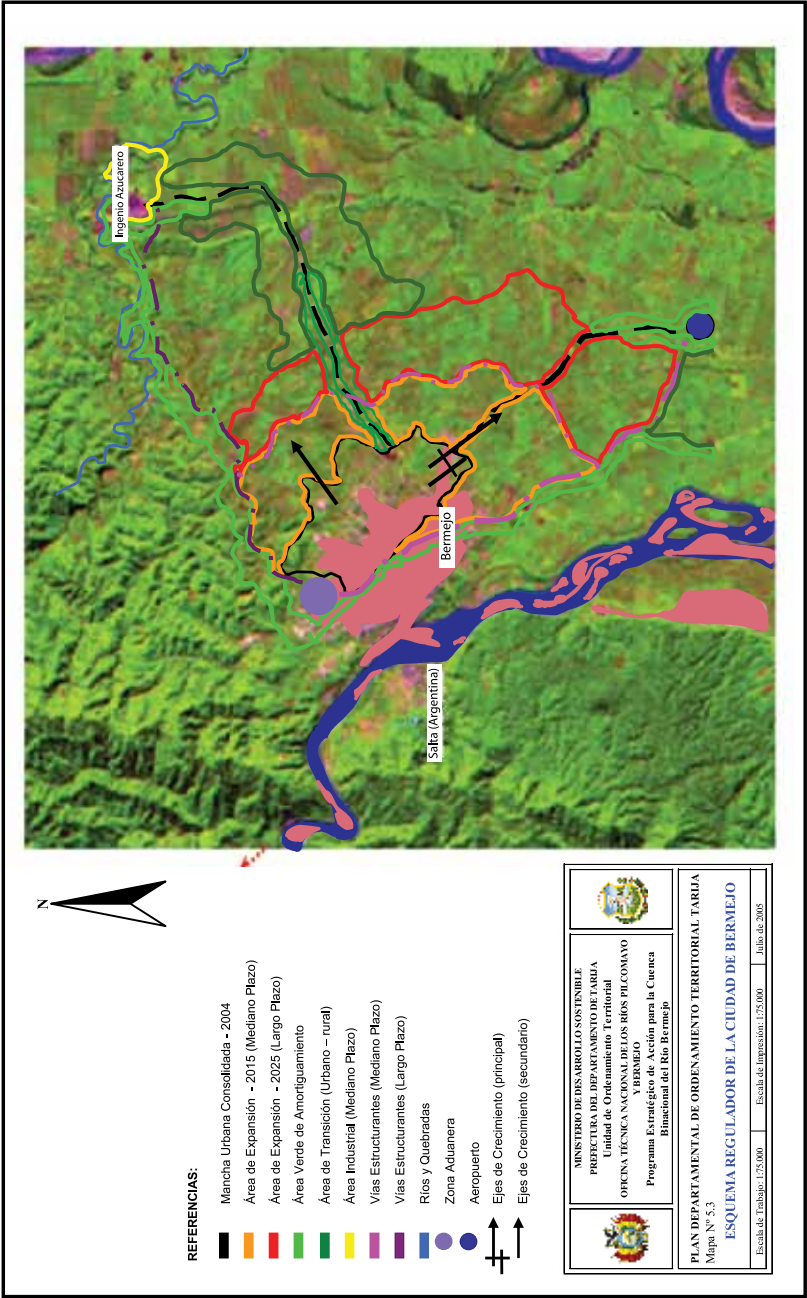


Figura 7: Esquemas reguladores presentados en el PDOT 2006-2025
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

El planteamiento de los esquemas reguladores nos permite visualizar la propuesta de la *continuidad urbano-rural* objeto del presente trabajo, mediante la definición de un área de transición urbano rural que se ubica en el límite del radio urbano en áreas donde la tendencia de crecimiento ha sido identificada. Si bien la tendencia será persistente, lo que se recomienda desde la óptica de la planificación regional es que se proceda a la elaboración de la normativa para las áreas de transición para reorientar en alguna manera el asentamiento urbano informal. La competencia es municipal; por lo tanto, esta tarea actualmente se encuentra en manos de los gobiernos municipales. Éstos deben considerar obligatoriamente la normativa del PLUS departamental, siendo éste un mecanismo objetivo para hablar de la implementación de planes y de alineación en relación al PLUS en dos escalas.

Para concluir este acápite, no se debe olvidar que el logro de objetivos planteados desde la óptica de la inclusión social y económica nos obliga a pensar en territorios articulados entre sí, que brinden iguales condiciones para su población en relación al acceso a servicios básicos, sociales, condiciones de producción y otros, además de mecanismos político institucionales que permitan la participación dinámica de la población. Por esta razón, la articulación de espacios urbano-rurales desde la perspectiva departamental está planteada como una relación de complementación e integración en la cual ambos deben interactuar. La continuidad urbana-rural no es simplemente una orientación para preservar el recurso suelo con potencial productivo, se la plantea para el fortalecimiento de las redes sociales que nos van a permitir visualizar a mediano plazo redes sociales y físicas de y para la integración socioeconómica. La consigna va en contra de las grandes extensiones territoriales desarticuladas de la dinámica económica al interior del departamento; se busca un departamento integrado (figura 9).

La brecha entre lo urbano y lo rural es el escenario actual y tangible de la inequidad y la exclusión. Para transformar este escenario es necesario y urgente pensar en el diseño de instrumentos orientados hacia la inclusión social y económica, la integración y desarrollo territorial, la construcción de redes sociales y mayor cohesión entre los diferentes espacios, ámbitos y escalas departamentales.

Resultados del proceso

Los resultados del proceso se deben plantear desde dos ópticas diferenciadas, desde un enfoque en los resultados del proceso de planificación y desde los resultados del proceso de implementación. En

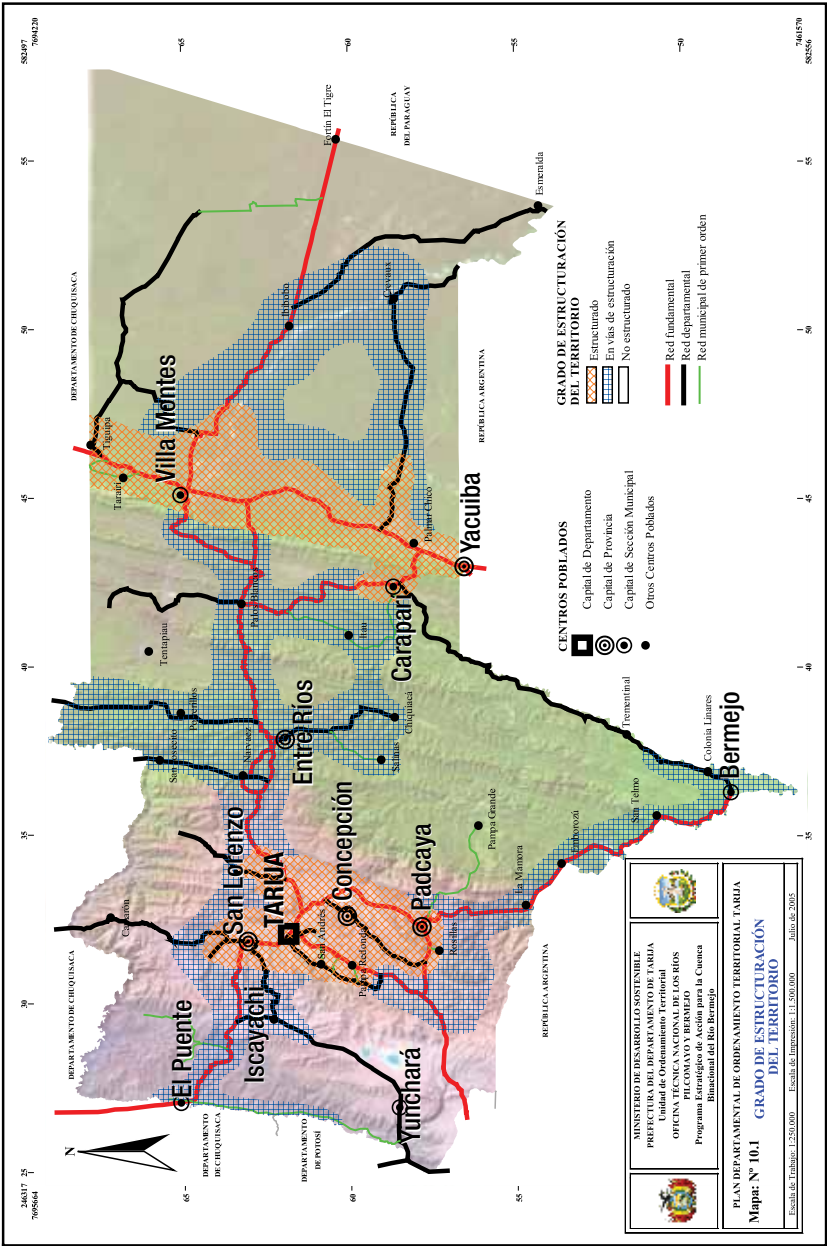


Figura 9: Estructuración del territorio
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible

cuanto al primero, se ve que en el proceso de planificación se ha logrado introducir nuevos conceptos a la estrategia del desarrollo como aporte complementario a la normatividad del ordenamiento territorial emitida por el ministerio cabeza de sector. También se ha logrado establecer procesos de planificación física en tres niveles: departamental, municipal y urbano. Diez de los once municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial municipal y urbano, aunque no todos tienen una propuesta alineada al PDOT.

De la planificación física articulada a la estratégica y a la participativa surge el ajuste al PDDES 2010-2015 del departamento de Tarija con una propuesta regionalizada que involucra a las áreas urbanas como agente dinamizador de la dinámica económica. Finalmente, de los procesos de planificación física surgen proyectos estratégicos y concurrentes a escala urbana con algunos municipios del Departamento; por ejemplo, los parques industriales.

En cuanto a los resultados del proceso de implementación, el PDOT en Tarija se destaca por no quedar, como a menudo se quedan los documentos de planificación, en los anaqueles de las oficinas de planificación. En Tarija, el componente urbano del PDOT ha generado frutos como:

- La unidad de ordenamiento territorial emite certificación de uso de suelo de acuerdo al PLUS y en coordinación con el INRA.
- Proyectos estratégicos como los parques industriales están respaldados en una política departamental que actualmente es desarrollada en un marco de estrecha coordinación con los gobiernos municipales de Villa Montes, Yacuiba, Entre Ríos y Tarija.
- La ubicación de los parques industriales se define en función a los lineamientos del PDOT y de los planes urbanos que son base para la definición de áreas industriales a escala urbana bajo competencia municipal.
- Planes sectoriales como el Plan Productivo Departamental con Inclusión Económica toma como base al PDOT en sus dos componentes. La estrategia se apoya en el potencial identificado y la normatividad del PLUS, pero recoge insumos como los lineamientos urbanos y la estructura de centros para la ubicación de equipamiento para la transformación de la materia prima.
- Planes de turismo y salud trabajan propuestas estratégicas de escala departamental en función al PDOT incorporando

criterios urbanos para el fortalecimiento de las redes de servicios en ambos sectores.

- Plan comunidades de primera profundiza la estructura de centros en el área rural tomando como base la propuesta del PDOT categorizando a las más de 600 comunidades en tres tipologías, donde la tipología “C”, asentamientos humanos de transición, ya propone redes de servicios básicos de acuerdo con los lineamientos urbanos del PDOT.
- La actual infraestructura vial del departamento responde a lo recomendado desde el PDOT donde se propone una articulación orientada a la integración de los centros urbanos del departamento para lo que se construye infraestructura a escala urbana, vecinal, municipal, departamental y fundamental.

Todo lo antes mencionado permite consolidar una estructura de centros (asentamientos humanos) de tipo urbano y rural en el entendido de que éstos son complementarios entre sí.

La experiencia detallada en este trabajo permite hablar de aspectos positivos y negativos del proceso de planificación urbana a nivel departamental, a fin de reflexionar sobre lo que falta por hacer y corregir lo que se ha logrado hasta ahora y así poder encarar nuevos retos. Uno de los aspectos positivos es la gama de diferentes criterios provenientes del equipo multidisciplinario que trabaja en los planes cualquiera sea la escala. Este trabajo multidisciplinario ha permitido realizar un profundo análisis territorial, fortaleciendo la visión y la justificación técnica de la propuesta frente a la demanda de los actores sociales. Esto, a su vez, ha facilitado la coordinación entre distintos actores. De la experiencia, sin embargo, se ha visto que tal coordinación requiere de mecanismos normativos, por ejemplo, para proyectos concurrentes.

Independientemente de la escala, el proceso multidisciplinario de análisis integral es un trabajo que permite la lectura clara de una realidad físico-territorial, socio-económica y político-institucional. Muchas veces, tal lectura queda poco concertada, lo cual es el determinante del porqué de una planificación sin implementación. Asimismo, solo se puede hablar de propuestas integrales cuando se incluye el componente urbano articulado al rural como una condición inexcusable. Es imposible, entonces, pensar en el diseño de estrategias de desarrollo de forma aislada al proceso del ordenamiento territorial.

La institucionalización de los procesos es fundamental. Para ello, contar con recursos humanos que manejan con solvencia criterios y metodologías de ordenamiento territorial en las diferentes escalas es un

requerimiento urgente a ser atendido por las diferentes instituciones públicas encargadas del desarrollo. Uno de los propósitos de este artículo es despertar inquietudes e intereses en el área de la planificación urbana desde el nivel académico. Sugiere la importancia de la formación de recursos humanos capaces de encarar estrategias sobre la forma de hacer gestión de desarrollo local estudiando el *suelo urbano* como una variable ineludible de analizar en cualquier proceso de planificación.

Conclusiones

Para los profesionales especialistas que trabajaron en el PDOT 2006-2025, ha sido importante diferenciar un proceso de ordenamiento territorial *municipal* del *urbano*. Esto es especialmente importante por el hecho de que en general los municipios en Bolivia no son exclusivamente urbanos. Todos, en mayor o menor proporción, poseen, además áreas urbanas y rurales. Por este criterio es que llama la atención el hecho de haber emitido Guías de OT para municipios predominantemente urbanos, induciendo a éstos a trabajar solo en áreas urbanas a pesar de la presencia visible del área rural en los mismos.

Es importante conocer el criterio del equipo respecto al ordenamiento territorio frente al de planificación urbana; para muchos profesionales puede ser lo mismo. Sin embargo, en el planteamiento del componente urbano del PDOT queda claro que el ordenamiento urbano es la base fundamental para la planificación de una mancha urbana sobre la cual y a escala de mayor detalle recién se podrá generar normativa específica para la construcción y la urbanización. El ordenamiento urbano tiene como objetivo el asignar los diferentes usos de suelo al interior de la mancha urbana sobre la cual se planteará la estrategia de desarrollo donde es fundamental la complementación con la planificación al nivel de barrios, distritos y macrodistritos cuando corresponda y el posterior diseño urbano para cada uno de ellos.

El ordenamiento urbano contribuye al análisis regional y municipal y permite advertir procesos de conurbación y/o metropolización para normarlos y orientarlos de forma que se reorienten procesos de asentamientos no planificados u otro tipo de intervención del territorio. El derecho propietario y el saneamiento en áreas urbanas y rurales es importante considerando que el catastro se convierte en un instrumento fundamental para trabajar en proceso de planificación. ¿Cuándo normaremos los sistemas de catastro?, ¿Cuándo existirán sistemas de catastro urbano y rural completos y sistemáticamente actualizados? ¿Cuándo contaremos con una ley de urbanismo y ordenamiento territorial?

La intención de la investigación ha sido mostrar la importancia del uso de suelo urbano y cómo éste puede aportar en un proceso de planificación territorial. El no reconocerlo solo agudiza la crisis existente, pues son las áreas urbanas los nodos de las dinámicas económicas, sociales, políticas y administrativas. Hasta ahora, las ciudades no han estado cumpliendo su rol de integradoras ni al interior de ellas, menos con su entorno y sus áreas de influencia. En síntesis, la importancia de la categoría en la planificación territorial del uso de suelo urbano radica en que es un instrumento de análisis para el reconocimiento y construcción de la continuidad urbano-rural en la planificación. Además, brinda orientación a la inversión de corto y mediano plazo y de la integración de ciudades con roles y dinámicas consolidadas y claramente diferenciadas que hoy por hoy hacen de ellas la razón de ser de éstas en el contexto departamental.

La experiencia de Tarija muestra que no solo se trata de elaborar documentos normativos. El desafío, más bien, es crear relaciones productivas y equitativas e institucionalizar las mismas. Para esto, hace falta despertar interés en lo que se refiere al estudio de la realidad y la dinámica urbana desde una óptica multidisciplinaria y multidimensional sobre el suelo urbano y sus relaciones con el entorno físico, económico, social e institucional. Traducidas en acciones, permiten visualizar resultados de integración, articulación y coordinación. Con este trabajo se espera poder ayudar a fomentar ese interés como objetivo de fondo, considerando que la inclusión de la categoría del suelo urbano en la planificación permite apoyar la articulación de ambas regiones tanto en el aspecto social como en el económico. Asimismo, la categoría de suelo urbano se consolida en un instrumento para la articulación de dos contextos —lo urbano y lo rural— que permitirán lograr resultados de inclusión social y económica.

Bibliografía

- Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (2010) *Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social* (PDDES 2010-2015), GADT, Tarija.
- Instituto Nacional de Estadística (2001) *Censo Nacional de Población y Vivienda*, INE, La Paz.
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Prefectura del departamento de Tarija (2006) *Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Tarija 2006-2025*, MDS, Prefectura del Departamento de Tarija, Tarija.
- República de Bolivia (2002) *Decreto Supremo 26732 - Plan de uso de suelos*, en <http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=1510>

Autores

Acción Andina-Bolivia

El Equipo de Investigación sobre Migración y Desarrollo de Acción Andina-Bolivia fue conformado en 2007 en colaboración con el Centro Vicente Cañas (CVC) en Cochabamba. Integrado por Theo Roncken (coordinador), Yeshid Serrudo, Redner Céspedes, Cristina Cielo y Oscar Alquizalet. El equipo buscó precisar el impacto de la migración internacional en la presencia o no de elementos que generen condiciones para el desarrollo comunitario. Profundizaron la investigación en el marco de la Convocatoria “Impacto Económico y Efectos Socio-culturales de la Migración Transnacional en Bolivia” del PIEB. Correo electrónico: info@accionandina.org.

Amonah Achi

Socióloga originaria de Costa de Marfil, África y de Francia, licenciada en Ciencias Políticas (IEP Rennes, Francia), con Maestría de Investigación en Ciencias Sociales (EHESS, Francia) y Maestría en Asistencia Humanitaria Internacional (Universidad de Aix-en-Provence). Trabajó en la Fundación Pro Hábitat en Cochabamba y Save the Children UK en Costa de Marfil y como investigadora independiente con el PIEB, el CEPLAG y el Centro AGUA sobre diversas problemáticas, principalmente: el trabajo de los niños en la economía rural y urbana; el suelo, el agua y la vivienda en los barrios marginales. Correo electrónico: aamonah@gmail.com.

Nelson Antequera Durán (editor)

Maestro en Antropología y doctorante del programa de Posgrado en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM, México). Ha realizado investigaciones sobre el tema de educación indígena en México, interculturalidad, estudios urbanos y autonomías indígenas. Ha publicado sobre estos temas *Multiculturalismo e interculturalidad. Política y práctica de la educación indígena en México* (UAEM, 2010, México) y *Territorios Urbanos* (Plural, CEDIB, La Paz), además de contribuciones en libros y revistas. Fundador y editor de la revista *VillaLibre: Cuadernos de estudios sociales urbanos*, publicada por el CEDIB (Cochabamba). Prepara su tesis de doctorado sobre la constitución de autonomías indígenas en las tierras altas y el sistema político de las comunidades originarias, el caso del ayllu Kirkyawi (Cochabamba). Correo electrónico: nelsonantequera@yahoo.com

Verónica Aranda Montecinos

Boliviana de origen, es licenciada en Arquitectura y Urbanismo (UMSA, La Paz) y maestrante de Asentamientos Humanos (UMSS, Cochabamba). Cuenta con un diplomado en Gestión Pública y Planificación (UMJMS y Escuela de Gobierno, Tarija) y fue becaria de JICA en planificación urbana. Es jefe de la unidad de planificación y ordenamiento territorial de la Gobernación del Departamento de Tarija. Ha trabajado en el análisis y en proyectos sobre el ordenamiento territorial, el sistema de catastro, servicios básicos e infraestructura social y en el desarrollo local y económico. Correo electrónico: arandavero@gmail.com.

Juan Manuel Arbona

Nació en Puerto Rico, trabaja en Bolivia desde 1994. Obtuvo su doctorado en Economía Política Urbana (Cornell University, EEUU) y actualmente es docente titular y director de la carrera de Estudios Urbanos en Bryn Mawr College (EE.UU.). Su actual trabajo examina la organización de espacios políticos locales en la ciudad de El Alto y las influencias de migrantes de campamentos mineros y comunidades indígenas/campesinas. También está escribiendo sobre la 'historia larga' de El Alto y cómo (o si) esta larga historia de ayllus y haciendas influye en la conformación de espacios políticos locales. Correo electrónico: jarbona@brynmawr.edu.

Cristina Cielo (editora)

Es investigadora social, con doctorado en Sociología (Universidad de California Berkeley, EE.UU.) especializada en la sociología urbana y política. Sus investigaciones giran en torno a los temas de la marginalidad urbana, políticas e instituciones públicas y conceptos y prácticas del desarrollo. Ha realizado investigaciones y proyectos con el Centro Filipino de Periodismo de Investigación, el Consejo de Organizaciones Civiles de Veracruz, México y el Centro Vicente Cañas en Cochabamba. Actualmente trabaja en el marco del programa Sawyer de la Facultad de Humanidades, Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica). Correo electrónico: mccielo@gmail.com.

Charles Dolph

Licenciado en antropología (Kenyon College, EEUU), y trabajó en Bolivia entre 2003 y 2005 como voluntario del Cuerpo de Paz estadounidense. Sus investigaciones se enfocan en procesos de urbanización y migración, la producción del espacio social, la antropología del trabajo, y movimientos sociales y el Estado en América Latina. Actualmente

es estudiante de maestría (George Mason University, EEUU) y realiza su tesis sobre migrantes bolivianos en Buenos Aires, Argentina.

Bruno Fornillo

Investigador argentino con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina). Obtuvo su licenciatura en Historia (Universidad de Buenos Aires, Argentina) y tiene maestría en la Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM). Actualmente está doctorando en Ciencias Sociales (UBA) y en Geopolítica (Paris VIII, Francia). Correo electrónico: bmfornillo@gmail.com.

J. Fernando Galindo

De origen boliviano, es investigador social para el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Recibió su doctorado en Sociología Rural por la Universidad de Missouri-Columbia. Es profesor de sociología educativa de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) e investigador del CIPCA donde investiga el impacto de la interculturalidad en el desarrollo rural sostenible en Bolivia. Correo electrónico: fgalindo@cipca.org.bo.

Víctor Hugo Perales Miranda

Investigador peruano, Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima), licenciado en Sociología (UMSA, La Paz), Magíster en Gestión Integral de Recursos Hídricos (UMSS, Cochabamba) y doctorante en Antropología Social en la Universitat de Barcelona (España). Trabajó los temas de conflictos en la gestión de los recursos naturales en comunidades rurales de Bolivia, en particular los ejes de género e interculturalidad en la gestión del agua y cuencas. Correo electrónico: victorhugo76@gmail.com.

Kaylen Jorgensen

Doctorante de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Queensland (Brisbane, Australia). Licenciada en Periodismo (Universidad de Tejas Austin, EE.UU.) y ha trabajado en comunicación y en temas de género y desarrollo participativo en África, Australia y los Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen aspectos de identidad, pertenencia, tierra, territorio y movilidad. Actualmente trabaja en la elaboración de su tesis basada en investigaciones en zonas periurbanas de Cochabamba. Correo electrónico: kaylen6@gmail.com.

Javier Nuñez-Villalba

Geógrafo boliviano con licenciatura (UMSA, La Paz) y Maestría en Geografía (Universidad de Alcalá de Henares, España). Las líneas de interés que sigue son: el ordenamiento territorial, las herramientas de la geografía y la vulnerabilidad urbana. Fue becario de la Fundación Carolina y del IFEA (Lima). Ejerció como consultor en Ordenamiento Territorial del Municipio de La Paz e investigador adjunto en el Instituto Francés para la Investigación y el Desarrollo (IRD). Es investigador y coordinador de la Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales del Instituto de Investigaciones Geográficas (UMSA). Correo electrónico: jnunezvillalba@gmail.com.

Isabel Scarborough

Antropóloga boliviana-americana, licenciada en Antropología (Bryn Mawr College, EEUU), doctorando en Antropología Sociocultural (Universidad de Illinois Urbana-Champaign, EEUU). Sus intereses incluyen temas de género en el desarrollo internacional, prácticas culturales e identitarias, la antropología de mercados y la ciudadanía cultural y política. Ha colaborado con la Asociación de Estudios Bolivianos, donde fue miembro del directorio y co-editora del boletín de la asociación. Actualmente está concluyendo su tesis doctoral con una beca de la División de Postgrado de la Universidad de Illinois. Correo electrónico: scarboro@illinois.edu.

Francisco Alejandro Vásquez Rodríguez

Nacido en Chile, es Ingeniero en Recursos Naturales (Universidad de Chile) con Maestría en Estudios Urbano-Regionales (Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín). Fue becario del ICETEX para estudios de postgrado en Colombia. Ha realizado investigaciones, desarrollado consultorías y publicado artículos y ponencias sobre el Ordenamiento Territorial Urbano y Rural, Planificación Territorial Participativa y Gestión Ambiental Estratégica. Correo electrónico: fvasquezro@gmail.com.

Alberto A. Zalles

Sociólogo e investigador independiente, especialista en análisis socio-político de América Latina. Boliviano por nacimiento, licenciado en Filosofía (UCB, Cochabamba), obtuvo su maestría en Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador). Últimamente ha publicado sobre el nacionalismo y la democracia en Bolivia, la Asamblea Constituyente boliviana, el proyecto autonomista de Santa Cruz y las tendencias

políticas a nivel latinoamericano. Actualmente es profesor de Español en Bélgica (Collège Saint François d'Assise, Ans-Liège). Correo electrónico: zallescueto@hotmail.com.

